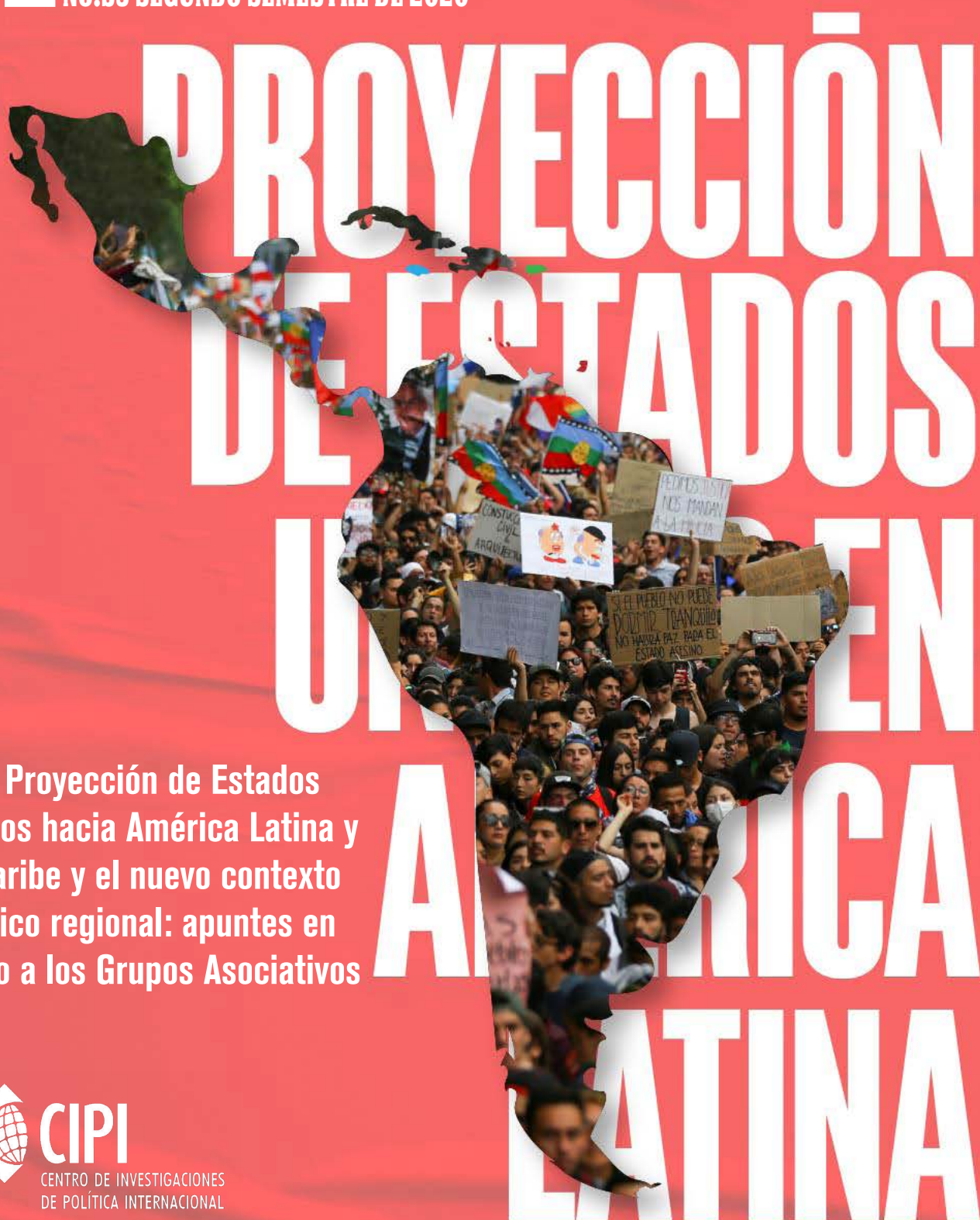


cuadernos de
**Nuestra
américa**
NO.53 SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



P4. Proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y el nuevo contexto político regional: apuntes en torno a los Grupos Asociativos



El Centro de Investigaciones de Política Internacional es una institución de carácter académico adscrita al Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), fundada el 25 de noviembre de 2010.

Cuenta con más de 40 investigadores-profesores y mantiene estrechas relaciones de intercambio y colaboración científica con centros de investigación, universidades y organizaciones académicas de Cuba y otros países.

El CIPI tiene la misión de contribuir a la actualización periódica de la planeación estratégica y la ejecución de la política exterior cubana, mediante la realización de investigaciones y estudios, a mediano y largo plazo, en el campo de la política internacional y las relaciones internacionales.

Las direcciones principales del trabajo de la institución son la investigación científica, la elaboración de Escenarios de Política Internacional, la organización de eventos y las publicaciones.



cuadernos de **Nuestra américa**

*Es una publicación semestral editada
por el Centro de Investigaciones de
Política Internacional (CIPI).*

DISEÑO DE PORTADA:

Ricardo Valdivia Matos



CONSEJO EDITORIAL

Dr. C. Adalberto Augusto Ronda Varona (Presidente)
Dr. C. Ruvislei González Sáez (CIPI)
Dra. C. Olga Rosa González Martín (CEHSEU)
Dr. C. Fidel Vascó González (SEAP)
MSc. Pável Alemán Benítez (CIPI)
MSc. Juan Ángel Cordero Martínez (CIPI)
MSc. Claudia Marín Suárez (CIPI)
Dr. C. Ernesto Molina Molina (ISRI)
Dr. C. Juan Sánchez Monroe (ISRI)

CONSEJO ASESOR:

Dr. C. Julio Cesar Gambina (Argentina)
Dra. C. Ana Esther Ceceña (México)
Dra. C. Esther Aguilera Morató (ANEC)
Lic. Lourdes María Regueiro Bello (CIPI)
Dr. C. Alberto Prieto Rozos (UH)
Dr. C. Darío Salina Figueredo (México)
Dr. C. Jorge Hernandez Martínez (CEHSEU)

COORDINADOR:

MSc. Luis Alfredo Feito Corratgé (CIPI)

REDACCIÓN:

Iliana Ricardo Lorenzo (CIPI)

DISEÑO Y COMPOSICIÓN:

Ricardo Valdivia Matos (CIPI)

DIRECCIÓN:

3ra. Ave., N0.1805 entre 18 y 20, Miramar, Playa,
Zona postal 13, La Habana, Cuba.
Teléfonos: 7206 3098, 7202 6442 ext. 119
E-mail: revcuaderamerica@cipi.cu
Sitio web: www.cipi.cu

**Se autoriza la reproducción total o parcial de los
artículos siempre que se indique la procedencia**



Índice

- 8** Proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y el nuevo contexto político regional: apuntes en torno a los Grupos Asociativos
Por MSc. Claudia Marín Suárez
-

- Economía y COVID-19 en el ciclo político de Estados Unidos:
continuidad y cambio después del 20 de enero 2021
Por Dr. C. Luis René Fernández Tabío

23

- 36** La Sombra Larga: 2020. El Coronavirus y América Latina
Por MSc. Pável Alemán Benítez
-

- La puerta brasileña del proyecto Bannon en Latinoamérica
Por Dra. C. Sunamis Fabelo Concepción

50

- 65** Bolivia: Notas sobre el contexto sociopolítico, el Golpe de Estado y la Crisis
Por MSc Orietta E. Hernández Bermúdez
-

- Quiebres y reacomodos en la política exterior de Estados Unidos
hacia América Latina en el ciclo político-electoral 2020
Por Dr. C. Luis René Fernández Tabío y Dr. C. Hassan Pérez Casabona

76

- 88** La migración centroamericana. Ángulos de un problema
Por Lic. Leyla Carrillo Ramírez
-

- Ideología fascista, sistema político y cultura en los Estados
Unidos: el espacio y los límites
Dr. C. Jorge Hernández Martínez

105

- 119** Crisis del trabajo y formación del sujeto político progresista
Por Nils Castro

Presentación

La publicación del primer número digital de *Cuadernos de Nuestra América*, es parte de un modesto homenaje del pueblo cubano al aniversario 63 del triunfo de la Revolución Cubana, en medio del cerco criminal, despiadado y violatorio de las leyes internacionales por el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos de América, y de los impactos de la Pandemia COVID-19, que no han logrado impedir la resistencia, la victoria y la proyección real de futuro de la Patria pequeña de José Martí.

En esta entrega, se ha dado prioridad a la estrategia de los EE.UU. para recuperar espacios en América Latina en complicidad con la derecha de la región, en un contexto marcado por la interrelación existente entre el comportamiento de la economía estadounidense, la COVID-19, los acontecimientos y resultados del ciclo electoral presidencial en el país vecino del Norte.

Se incluyen, además la explicación de los grupos asociativos en el contexto político regional de Nuestra América, la importancia del ascenso de las fuerzas populistas de derecha a nivel internacional; el análisis de las causas reales del golpe cívico militar policial en Bolivia, la situación de la migración centroamericana y necesidad histórica de la formación del sujeto político progresista en Nuestra América, entre otros temas.

En el primer trabajo “Proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y el nuevo contexto político regional: apuntes en torno a los Grupos Asociativos”, de Claudia Marín Suárez, se trata del reajuste en la proyección de EE.UU. hacia América Latina y el Caribe como reacción a la presencia china y los cambios experimentados en el panorama regional de los grupos asociativos como resultado de la modificación en la correlación de fuerzas políticas.

Por su parte, Luis René Fernández Tabio, en su artículo “Economía y COVID-19 en el ciclo político de Estados Unidos: continuidad y cambio después del 20 de enero 2021”, aborda la interrelación existente entre el comportamiento de la economía estadounidense, la COVID-19 y otros retos en el ciclo político electoral para la continuidad y cambio de la política de Estados Unidos después del 20 de enero de 2021. Fernández Tabio sostiene que los efectos de la crisis en EE.UU. son trascendentes debido al carácter mundial de la pandemia y la interconexión internacional de los sectores financieros, productivos y de servicios. Asegura el autor que con independencia de la inclinación política que resulte dominante de las elecciones, sea un reacomodo reformista democrático, o una profundización de la continuidad divisiva y destructiva de Donald Trump, habrá que enfrentar el contexto de las múltiples crisis internas y desafíos internacionales.



En su interesante estudio “La Sombra Larga: 2020, El Coronavirus y América Latina”, Pável Alemán Benítez considera que la economía mundial se encontraba en una crisis reforzada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la República Popular China, pero la paralización de la vida cotidiana y la disminución del transporte ante la rápida expansión del coronavirus, no solo agravó la crisis económica existente, también impactó profundamente en los hábitos que trascienden a la política. Según el autor su efecto ha sido multiplicado en la periferia global, complejizándose el contexto latinoamericano, que ya tenía agravada su conflictividad social y política desde 2019.

A continuación aparece “La puerta brasileña del proyecto Bannon en Latinoamérica” de Sunamis Fabelo Concepción. La autora aporta una mirada al contexto latinoamericano tomando como referencia las relaciones que se establecen entre el Brasil de Jair Bolsonaro, la ruta de Steve Bannon y el ascenso de las fuerzas populistas de derecha a nivel internacional. Presta particular atención al análisis del populismo de derecha como estilo comunicacional, tomando en consideración los principales elementos que se combinan en el proyecto aglutinador de las derechas mundiales. Asimismo, al papel de las iglesias evangélicas en las condiciones de Brasil.

“Bolivia: notas sobre el contexto sociopolítico, el Golpe de Estado y la Crisis”, es el título de la propuesta de Orietta E. Hernández Bermúdez. En su trabajo la investigadora expone sus consideraciones sobre lo que califica como el experimento más completo y exitoso de la estrategia de Estados Unidos en complicidad con las fuerzas de derecha de la región para recuperar espacios y recomponer su hegemonía. Según la autora, en el artículo se analizan las verdaderas causas del golpe cívico militar policial y sus principales actores.

Luis René Fernández Tabio y Hassan Pérez Casabona incluyen el estudio “Quiebres y reacomodos en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en el ciclo político-electoral 2020”. Los autores analizan que en el año 2020 el ciclo electoral presidencial tuvo lugar en medio de múltiples crisis agudizadas por las políticas de Donald Trump y de manera especial por la pandemia provocada por la COVID-19. Se fundamenta que la combinación de estos factores acrecentó las contradicciones inherentes a dicho sistema político y la incertidumbre sobre su futuro, en medio de una fase de declinación relativa del poder de los EE.UU. Atendiendo a ello realizaron una primera aproximación sobre los escenarios de la política exterior de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe, considerando los elementos de continuidad y cambios en los próximos cuatro años.

En orden consecutivo Leyla Carrillo Ramírez, apunta a otro tema de actualidad titulado “La migración centroamericana. Ángulos de un problema”. La

investigadora se propuso ofrecer respuestas a importantes interrogantes sobre el tema. En el trabajo se plantean las dificultades actuales que afrontan los centroamericanos para que fructifique un cambio inmediato de la situación colonial, neocolonial y neoliberal que integra la agenda de los ejecutores estadounidenses, en competencia electoralista. Incluye entre otros componentes asociados del problema, los impactos de la migración centroamericana, a México como emisor y receptor transitorio de la migración y la política migratoria de los Estados Unidos.

“Ideología fascista, sistema político y cultura en los Estados Unidos: el espacio y los límites”, Jorge Hernández Martínez reflexiona sobre las características y potencialidades de la ideología fascista en la sociedad norteamericana, propósito realizado desde determinadas consideraciones teóricas y de referencias históricas como él afirma. El profesor Hernández Martínez plantea su ejercicio de investigación a partir de las elecciones de 2020. Indaga en las manifestaciones retrospectivas y recientes de una tendencia que ha adquirido fuerza en los Estados Unidos y en particular en el proceso de decadencia de la cultura política presente en el imperialismo contemporáneo.

El último artículo de este primer número de *Cuadernos de Nuestra América* se titula “Crisis del trabajo y formación del sujeto político progresista”. Su autor es Nils Castro Herrera, conocido estudioso de las fuerzas políticas y sociales de América Latina y el Caribe. Se asume que nuestra región se encuentra al comienzo de una sucesión de rupturas, disyuntivas y cambios cuyo desenlace va a depender de las fuerzas en disputa y ello ocurre cuando la pandemia aceleró las consecuencias de la crisis general —económica, ambiental, política, cultural y moral—, que ya emergió desde antes de la COVID-19, por lo que en el presente se profundiza. El profesor evalúa que cuando la pandemia sea controlada la situación habrá evolucionado, pero se mantendrá la urgente necesidad del cambio para la existencia humana. Sin embargo, la constelación de demandas no tienen solución con el predominio de la hegemonía neoliberal y su misma recetas económica y sociales. Para el autor la solución del desastre social impone con urgencia la formación del sujeto político progresista para el cambio real.

Cuadernos de Nuestra América aspira a que la presente edición sea de interés y utilidad para nuestros lectores.

Consejo Editorial



Proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe y el nuevo contexto político regional: apuntes en torno a los Grupos Asociativos

US projection towards Latin America and the Caribbean and the new regional political context: notes regarding the associative groups

MSc. CLAUDIA MARÍN SUÁREZ

Centro de Investigaciones de Política Internacional
(Cuba)

e-mail: claudia@cipi.cu

Numero de ORCID: 0000-0001-6747-8058

RESUMEN:

Durante los últimos cinco años, América Latina y el Caribe ha sido testigo de dos procesos casi simultáneos que han marcado un cambio en el escenario regional: el giro a la derecha de los gobiernos latinoamericanos y un reajuste de la proyección estadounidense hacia la región. Como consecuencia, tiene lugar un peligroso alineamiento político en torno a posiciones muy conservadoras entre los liderazgos regionales y el gobierno estadounidense. El artículo aborda el reajuste en la proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, con énfasis en lo que respecta a la construcción de una propuesta económica para la región, como parte de su disputa geopolítica con China, y en los cambios experimentados en el panorama regional de los grupos asociativos como resultado del cambio en la correlación de fuerzas políticas.

Palabras clave: integración regional; política exterior de Estados Unidos; América Latina y el Caribe; Estados Unidos.

Abstract:

During the last five years, Latin America and the Caribbean has witnessed two simultaneous processes: a shift to the right of Latin American governments and an adjustment of the US projection towards the region. As a consequence, a dangerous political alignment takes place between regional leaderships and the US government around conservative positions. The article addresses the readjustment in the projection of the United States towards Latin America and the Caribbean, with emphasis on the construction of an economic proposal for the region, as part of its geopolitical dispute with China, and the changes in the regional landscape of associative groups as a result of the new configuration of political forces.

Key words: regional integration; US foreign policy; Latin America and the Caribbean; United States.

INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe viene de una etapa caracterizada por la confluencia de gobiernos —agrupados bajo el laxo término del ‘progresismo’— que alcanzaron avances en la construcción de una institucionalidad que privilegiaba las dinámicas regionales y la creación de consensos en torno a posiciones de autonomía. A partir de 2015, si bien ya venían revelándose señales previas de deterioro, tiene lugar un viraje en el contexto político regional con la llegada al gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que casi coincide en el tiempo con la elección de Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos.

Durante los últimos cinco años, América Latina y el Caribe ha sido testigo de dos procesos casi simultáneos que han marcado un cambio cualitativo en el escenario regional: el giro a la derecha de los gobiernos latinoamericanos y un reajuste de la proyección estadounidense hacia la región. Como consecuencia, tiene lugar un peligroso alineamiento político en torno a posiciones muy conservadoras entre los liderazgos regionales y los intereses del gobierno estadounidense.

En el entorno de los grupos asociativos de la región ello se refleja en la convergencia entre las prioridades de inserción internacional de los gobiernos latinoamericanos —impulsores de procesos de privatización y apertura económica como parte de programas neoliberales agresivos— y el reordenamiento de las prioridades de la proyección externa de Estados Unidos, que busca un reposicionamiento económico en su tradicional espacio de influencia como respuesta al incremento de la presencia china en América Latina y el Caribe.

Desde el punto de vista político, están dadas las condiciones para la intensificación de la campaña de aislamiento a gobiernos contrarios a sus intereses como Venezuela, Cuba y Nicaragua —sin mencionar la participación de Estados Unidos, algunos gobiernos de la región y la OEA en el reciente golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia.

En ese contexto, pierde relevancia la integración en la agenda regional ante la jerarquización de las relaciones externas y la subordinación al capital transnacional por encima de las dinámicas regionales. Al mismo tiempo, se busca borrar la institucionalidad creada bajo el ‘progresismo’ bajo la cual se consensuaron posiciones de soberanía regional y se cuestionó la hegemonía estadounidense en el continente.

En ese marco, el artículo aborda el reajuste en la proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, con énfasis en lo que respecta a la construcción de una propuesta económica para la región, como reacción a la presencia china. En segundo lugar, se concentra en los cambios experimentados en el panorama regional de los grupos asociativos como resultado del cambio en la correlación de fuerzas políticas.

LA PROYECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE DONALD J. TRUMP

Si bien la región latinoamericana y caribeña ha sido tradicionalmente un tema central en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos —incluso cuando muchos analistas no la consideraban dentro de las grandes prioridades reconocidas en los documentos rectores—, es cierto que la administración de Donald J. Trump ha reaccionado de manera explícita ante la percepción de que sus intereses en ese espacio son amenazados por otros actores globales.

El reajuste de la política estadounidense hacia la región debe asumirse como parte de una disputa geopolítica entre global players —Estados Unidos, China y Rusia, aunque no exclusivamente—, vinculada con el posicionamiento de esos actores en el espacio económico, político, diplomático y militar latinoamericano y caribeño. Al mismo tiempo, responde a la intención de eliminar cualquier vestigio del ‘progresismo’ que marcó el panorama político latinoamericano en años anteriores y subvertir los gobiernos

que cuestionan más abiertamente su hegemonía. En años recientes China ha irrumpido con fuerza en el escenario económico y geopolítico latinoamericano. El gigante asiático se ha consolidado como socio económico de primer orden, convirtiéndose en una de las principales contrapartes comerciales de los países de la región, y en la primera de buena parte de ellos.

Igualmente, ha fungido como prestamista de la región, ofreciendo importantes volúmenes de recursos financieros (Tabla 1), principalmente en países que vivieron procesos de cambio bajo la conducción de los llamados gobiernos ‘progresistas’.

TABLA 1. Préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Ex-Im Bank) a países de América Latina y el Caribe 2005-2019 (millones de dólares estadounidenses)

Año	Cantidad de préstamos	Monto
2019	4	1 100
2018	3	2 100
2017	7	6 200
2016	10	10 600
2015	14	21 500
2014	7	13 000
2013	10	14 000
2012	8	7 000
2011	6	7 900
2010	11	35 600
2009	8	12 700
2008	1	356
2007	4	4 800
2005	1	30
Total	94	136 886

FUENTE: Gallagher y Myers (2020)

a saber: Venezuela (62 200 millones de dólares), Brasil (28 900 millones de dólares), Ecuador (18 400 millones de dólares) y Argentina (17 100 millones de dólares) (Gallagher y Myers, 2020).

La inversión china en América Latina y el Caribe, por su parte, se ha expandido notablemente, en especial hacia Brasil, Argentina, Perú, Chile y México.¹ Según el Monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe de la Red ALC-China, las operaciones inversión extranjera directa (IED) de China en la región alcanzaron los 101 429 millones de dólares en el período 2010-2018, lo que da cuenta de un incremento del 500% en comparación con la década anterior (Dussel, 2019).

Las operaciones de este tipo han tenido una alta participación de empresas públicas, con fuerte presencia en sectores asociados a las materias primas, aunque esta tendencia parece haber comenzado a cambiar a partir de una mayor diversificación sectorial de las inversiones chinas.

En 2013, el gobierno chino lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), abanderada como el megaproyecto global chino de inversión, orientada esencialmente a infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos, etcétera. En 2017, el proyecto, que cubría fundamentalmente las zonas de Asia y Europa, se extendió a América Latina y el Caribe y, por los montos de inversión que puede movilizar, ha despertado el interés tanto de gobiernos como de actores económicos latinoamericanos. Hasta el momento ya son 19 países de la región los que se han sumado a la iniciativa BRI,² y podrían sumarse otros en el futuro. Buena parte ellos se ubican en Centroamérica y Caribe.

Unido a ello, el gobierno chino ha desplegado una fuerte ofensiva diplomática en Centroamérica

¹Entre 2010 y 2018, China invirtió 44 327 millones de dólares en Brasil, 12 510 en Argentina, 11 066 en Perú, 8 772 en Chile y 5 554 en México. Cálculos propios sobre la base de Dussel (2019).

²Panamá, Trinidad y Tobago, Surinam, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Guyana, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Granada, El Salvador, Chile, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Barbados, Jamaica y Perú.

y Caribe, donde se concentra la mayor parte de los países que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Para China, el consecuente reconocimiento al principio de ‘una sola China’ es un tema fundamental de su agenda de política exterior. En efecto, varios países de ese espacio han adherido esa posición y establecido recientemente relaciones diplomáticas con el país asiático.

En términos generales, la relación entre China y América Latina y el Caribe ha evolucionado de una basada en transacciones comerciales por acceso a *commodities* a otra más profunda asentada en bases geopolíticas y geoestratégicas, en múltiples dimensiones y haciendo uso de una mayor variedad de instrumentos. El gobierno chino ha dejado claro que la relación con los países de la región se sustenta en intereses compartidos y no en afinidades políticas.

Ante la percepción de amenaza a sus intereses —tanto de acceso a recursos como a infraestructuras críticas— reconocida ya desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017,³ en su tradicional espacio de influencia, la respuesta estadounidense no se ha hecho esperar. Esta se inserta en un marco general de competencia entre potencias globales que abarca un espectro más amplio de ámbitos.

Desde el punto de vista económico, la aprobación de la BUILD Act (Ley para la Mejor Utilización de las Inversiones Orientadas al Desarrollo, en español) en 2018, plantea un cambio hacia una mayor utilización de la inversión al desarrollo como instrumento de la proyección externa de Estados Unidos. Con este instrumento jurídico se crea una estructura institucional —la Corporación de Financiamiento al Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus

siglas en inglés)— para la canalización de recursos de capital privado destinados financiar proyectos de inversión. Para ello operará fondos de otras organizaciones como la USAID y la OPIC (*Overseas Private Investment Company*), doblando el límite de capital de esta última (ahora 60 000 millones de dólares) y ampliando el tiempo de autorización del financiamiento y la cantidad de instrumentos a su disposición.

Ha sido reconocido explícitamente por centros de pensamiento vinculados al Congreso estadounidense, como el Congressional Research Service (CRS), que la BUILD Act constituye una respuesta a la BRI y al incremento de la influencia de China en los países subdesarrollados (Congressional Research Service, 2019). En efecto, sin mencionarlo directamente, en el propio texto de la ley se puede leer entre líneas la intencionalidad de competir con China en el mundo subdesarrollado, especialmente en países de ingreso bajo y medio bajo, cuando se plantea como uno de sus propósitos: “proveer a los países una alternativa robusta a las inversiones estatales de gobiernos autoritarios y competidores estratégicos de Estados Unidos usando las mejores prácticas con respecto a la transparencia y las garantías sociales y ambientales, y que tenga en cuenta la sostenibilidad de la deuda de las contrapartes” (*BUILD Act*, 2018).

Los temas allí planteados coinciden con las principales críticas que se erigen desde Estados Unidos a las inversiones chinas en el mundo, y en particular en América Latina y el Caribe. Las empresas chinas son acusadas de corrupción, irrespeto a los derechos laborales, incumplimiento de las normas ambientales y de estimular la deuda

³Desde la propia Estrategia de Seguridad Nacional, elaborada en 2017, en lo concerniente al hemisferio occidental, se deja claro que la presencia económica de China y militar de Rusia, así como el apoyo de ambos gobiernos a lo que consideran ‘dictaduras’ de Cuba y Venezuela, eran percibidas como amenazas a la hegemonía estadounidense e, incluso, a la soberanía de los estados ‘democráticos’ de la región. Igualmente, se plantean como líneas de acción prioritarias para la región: el “aislamiento de gobiernos que se nieguen a actuar como socios responsables en el impulso a la paz y seguridad hemisférica”, la modernización de los tratados de libre comercio, la exigencia de reciprocidad en las relaciones económicas, el apoyo a los esfuerzos locales por la ‘profesionalización’ de las fuerzas policiales y a las reformas judiciales en la región (White House, 2017).

de los países receptores. Sin embargo, no son las empresas estadounidenses, al menos no la región latinoamericana y caribeña, precisamente las más rigurosas en el cumplimiento de altos estándares en ninguno de esos temas.

Aunque la principal prioridad de la institución se concentra en África, a América Latina y el Caribe corresponde alrededor de un cuarto del portafolio de inversiones activo de la entidad. En la actualidad, la DFC tiene 16 proyectos activos de alcance regional en América Latina y el Caribe, que involucran —entre financiamiento de proyectos y de fondos de inversión— más de 655 millones de dólares. Las principales áreas a las que están orientados los proyectos son: agricultura, acceso a financiamiento y microfinanciamiento, salud, energías renovables, educación, construcción residencial, sector automotriz, micro y pequeña empresa, tecnologías verdes, procesamiento agrícola, sector inmobiliario e hipotecario y servicios financieros (DFC, 2019).

A nivel de países, la institución actúa en 19 países a través de 140 proyectos, que involucran recursos por más de 9 000 millones de dólares (Tabla 2). De ellos, sólo en Centroamérica y Caribe hay 2 387,2 millones de dólares (DFC, 2019), dos áreas focalizadas donde otros actores —regionales y globales, como Venezuela y China— tienen influencia. Los proyectos aprobados durante 2019 se concentran en: energías fósiles y renovables, estímulo a la pequeña empresa, microfinanciamiento e infraestructura de transporte.

En marzo de 2020, la Junta Directiva de la DFC aprobó el primer paquete de financiamiento tras el lanzamiento de la institución, por un valor de 881 millones de dólares, que se suman a los proyectos que la OPIC tenía activos hasta ese momento. La participación de América Latina y el

Caribe en ese grupo de proyectos es notable y está vinculada a (DFC, 2020):

- Un proyecto global para África, el Indo-Pacífico y América Latina para el acceso a fuentes de agua limpia y saneamiento, por 100 millones de dólares, con énfasis en las mujeres.
- Un proyecto para la conservación marina en las costas de Kenya y Santa Lucía, por 350 millones de dólares en total.
- Un proyecto para promover la inversión privada en el mercado de energía en México, por 250 millones de dólares.

Uno de los objetivos declarados de la transición de la OPIC a la DFC es lograr una mayor sintonía entre las prioridades de política exterior de la actual administración estadounidense y el financiamiento a proyectos de desarrollo, en coordinación con otras agencias e instituciones gubernamentales como la USAID. En el informe de coordinación entre la USAID y la OPIC para el tránsito hacia la nueva entidad creada por la BUILD Act, se identifican un grupo de grandes proyectos que apoyará la DFC y a través de los cuales avanzará las prioridades de la administración Trump. Entre ellos se señala la iniciativa América Crece (Green y Bohigian, 2019).

América Crece, aunque venía desarrollándose desde 2018, fue lanzada oficialmente el 17 de diciembre de 2019 con el objetivo de impulsar la inversión privada en infraestructura en América Latina y el Caribe en los sectores de energía, aeropuertos, puertos, carreteras, telecomunicaciones y redes digitales, entre otros.⁴ América Crece se presenta como una amplia sombrilla para que el capital privado se posicione en la región como método de contención de China, al tiempo que plataforma de articulación/alineación de los programas de infraestructura de energía y otros sectores de los organismos y agencias del gobierno de Estados Unidos,⁵ en torno a los mismos objetivos estratégicos.

⁴El gobierno estadounidense amplió el espectro de áreas de infraestructura, pues originalmente estaba previsto abarcar sólo temas de energía.

⁵Departamento de Estado, del Tesoro, de Comercio, Energía y a la USAID, la Agencia de Comercio y Desarrollo (UST-DA) y la DFC.

TABLA 2. Proyectos activos de la DFC en América Latina y el Caribe por países (millones de dólares estadounidenses, datos al 31 de diciembre de 2019)

País	Cantidad de proyectos	Monto
México	29	830,5
El Salvador	8	566,0
Guatemala	5	441,5
Honduras	8	323,0
Nicaragua	8	149,8
Costa Rica	9	198,3
Panamá	11	318,6
Jamaica	7	246,9
Haití	3	27,6
Rep. Dominicana	2	15,5
Barbados	1	100,0
Colombia	10	1 078,0
Ecuador	4	290,2
Perú	6	372,8
Brasil	7	1083,8
Bolivia	1	606,3
Paraguay	5	314,3
Chile	8	1 136,4
Argentina	8	1 193,1
Total	140	9 292,6

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de DFC (2019)

Los esfuerzos para lograr que los países de la región atraigan capital extranjero para inversión en infraestructura incluyen la asistencia para ‘mejorar’ los marcos regulatorios y las estructuras de compras gubernamentales locales, lo cual implicará seguramente cambios institucionales y normativos que conduzcan a una mayor liberalización económica y financiera. Este es un tema de vital importancia, pues, de hecho, en varios países de peso —Brasil y México, por ejemplo— se han desarrollado procesos de apertura en el sector energético que ha despertado los apetitos del capital transnacional, y en especial de las compañías petroleras estadounidenses.

Aunque hasta el momento se han incorporado, a través de la firma de memorandos de entendimiento, algunos países —Panamá, Chile, Argentina, Jamaica, Colombia y El Salvador— y es probable que otros se sumen posteriormente, la iniciativa está abierta a todo el continente excepto Venezuela, Cuba y Nicaragua por ser considerados gobiernos ‘contrarios’ a los ‘valores democráticos’. Nótese que entre los miembros se encuentran varios países que también participan en la iniciativa china BRI.

Con todo ello, se puede distinguir como rasgo de la proyección de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe —en el marco de una mayor relevancia de la inversión como instrumento de

financiamiento al desarrollo—, un marcado interés por la inversión en energía e infraestructura,⁶ especialmente en países donde China ha logrado mayor presencia como inversionista, así como en Centroamérica y Caribe, subregiones donde la competencia estratégica se ha tornado muy visible.

Paralelamente, la política de Estados Unidos hacia la región plantea un endurecimiento de los términos de negociación a favor de lograr ventajas absolutas, un rasgo que se aplica en términos generales a la política comercial de la administración Trump.

Ya desde la Plataforma del Partido Republicano para las elecciones de 2016 se advertía de la exigencia de reciprocidad comercial y el uso de mecanismos de presión para lograr condiciones más ventajosas en las negociaciones internacionales.⁷ Este ha sido el argumento utilizado para la retirada de ese país de los mega-acuerdos globales en curso al momento de asumir el gobierno la administración Trump.

En la región, este rasgo se ha materializado en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que pudiera convertirse en la base para renegociar otros acuerdos alegando la necesidad de lograr mayores ventajas para Estados Unidos. En definitiva, lo negociado con México y Canadá bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) introduce nuevos aspectos en el ámbito laboral, energético y otros sectores estratégicos como hidrocarburos y telecomunicaciones, que buscan una mayor apertura y ventajas para Estados Unidos.

De esta manera, impone condiciones más estrictas en cuanto a reglas de origen,⁸ exigencias salariales en el sector automotriz que sólo pueden

asumir las empresas estadounidenses de la industria automotriz —buscando que efectivamente se radiquen en territorio de Estados Unidos—, así como el requerimiento de informar a los socios del acuerdo la intención de firmar un acuerdo comercial con países que no sean economías de mercado. Este último condicionamiento, refrendado en el artículo 32 del T-MEC, además de bloquear un posible acercamiento entre México y China, sienta un importante precedente de cara a posibles (re) negociaciones con otros países de la región.

Más aún, el uso de sanciones comerciales, financieras y de otra índole, se ha vuelto una práctica sistemática durante la administración Trump. Más allá de las medidas coercitivas unilaterales de alto impacto a Cuba —por casi 60 años— y Venezuela bajo la dirección de un equipo asesor altamente reaccionario y conservador, la amenaza del uso de sanciones también ha sido utilizada como método de presión a otros gobiernos para imponer condicionamientos en otras materias, por ejemplo, en el tema migratorio. Un caso ilustrativo fue el condicionamiento a México en 2019 para que aceptara asumir la función de ‘tercer país seguro’ frente a la migración proveniente de Centroamérica, bajo la amenaza de imposición de aranceles al comercio exterior, aspecto al que la economía mexicana es altamente sensible por la estrechez de los vínculos y la dependencia económica respecto a la potencia del norte.

Este, entre otros ejemplos, ha sido reflejo de un cambio mucho más amplio en la forma de llevar adelante la política exterior estadounidense. Del uso del multilateralismo que caracterizó la política de la administración Obama, la actual administración ha transitado bruscamente a la aplicación

⁶Los proyectos de inversión financiados por el gobierno de Estados Unidos, que quedan bajo la sombrilla de América Crece, rebasan los mencionados en este artículo. Pueden citarse también, por ejemplo, los proyectos bajo el auspicio de la USTDA, que involucran grandes emprendimientos de infraestructura, con énfasis también en Centroamérica y Caribe.

⁷Igualmente, dicho documento proyectaba la ya concretada política de aislamiento a países con gobiernos considerados ‘dictatoriales’ como Cuba y Venezuela, así como el enfrentamiento comercial con China (Republican National Convention, 2016).

⁸Se elevaron las reglas de origen exigidas para la industria automotriz de 62,5% a 75%.

del unilateralismo. Más aún, el multilateralismo ha sido cuestionado de manera sostenida, no sólo al retirarse de los mega-acuerdos globales sino también del acuerdo nuclear con Irán, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, de la UNESCO, entre otros.

En el ámbito político, el gobierno estadounidense ha ejercido presiones a países de la región para asumir posturas de condena a gobiernos soberanos como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia (frente al golpe de Estado contra el presidente Evo Morales), así como para erosionar los mecanismos regionales de cooperación y concertación impulsados desde los gobiernos 'progresistas'. En tal caso destacan los reiterados intentos de forzar posiciones caribeñas contra el gobierno venezolano, que fueron parcialmente efectivas al romper por primera vez el consenso de la CARICOM en política exterior en el marco de la OEA en el tema de Venezuela.

A lo anterior se suman los métodos e instrumentos de intervención económica, política, ideológica, cultural y militar que Estados Unidos ha empleado tradicionalmente sobre los países latinoamericanos y caribeños. Estos actúan a través de una densa red multidimensional que ha penetrado en las estructuras institucionales, económicas, militares y de la llamada 'sociedad civil', entre otras, que reproduce los patrones de subordinación. Ello permite al gobierno estadounidense hacer uso de un amplio espectro de medios para lograr sus objetivos hacia la región, en un contexto de reivindicación de la Doctrina Monroe y de un mayor alineamiento político con los gobiernos de la región.

EL NUEVO CONTEXTO POLÍTICO REGIONAL VISTO DESDE LA ÓPTICA DE LA AUTONOMÍA DE LOS GRUPOS ASOCIATIVOS

Tras un período donde confluyeron varios liderazgos 'progresistas' y de izquierda que, desde un abanico de intensidades variado, introdujeron reformas orientadas a una redistribución más equitativa de la riqueza y adoptaron posiciones de relativa autonomía frente a Estados Unidos y

otras potencias externas —también con diferentes grados de profundidad—, América Latina ha sido testigo de un proceso de derechización de la correlación de fuerzas política a nivel regional.

La derecha llega al gobierno tras los golpes legislativos contra Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, y por la vía electoral en Argentina (Mauricio Macri), Chile (Sebastián Piñera), Ecuador (Lenín Moreno) y El Salvador (Nayib Bukele), al tiempo que se consolida en Colombia, Perú, Centroamérica y también Brasil —en este último, con la elección de Jair Bolsonaro. Recientemente, se instaura en Bolivia mediante un golpe de Estado contra el gobierno del MAS liderado por Evo Morales y en Uruguay con la victoria electoral de Luis A. Lacalle.

Mientras, en México y Argentina —ambos por la vía de las elecciones— aparecen gobiernos de una orientación diferente a la de sus predecesores, pero más moderados que los líderes de izquierda que dominaron el panorama político en el período anterior. Aunque estos gobiernos matizan el escenario político regional, no dejan de insertarse en una correlación de fuerzas mayoritariamente de derecha y tienen prioridades domésticas acuciantes que marcarán el foco fundamental de sus respectivas gestiones y no le permitirán involucrarse en una confrontación más directa con el gobierno estadounidense. En ese sentido, no son esperables de estos gobiernos las posiciones de autonomía que asumió el liderazgo progresista precedente en política exterior.

Han proliferado, dentro del grupo de derecha, posiciones de derecha extrema, ideológicamente conservadoras, pero todos estos gobiernos tienen en común la aplicación de programas neoliberales de privatización y desnacionalización de recursos, sectores estratégicos y servicios públicos, la liberalización financiera, la reducción de presupuestos para gasto social —en el caso de Brasil establecido como norma jurídica por el marco de 20 años—, y el cuestionamiento —bastante abierto en algunos casos— de derechos y conquistas

sociales y laborales de larga data. En consecuencia, privilegian una forma de inserción internacional de apertura externa, que refuerza la subordinación al capital transnacional y el alineamiento de posiciones con Estados Unidos.

En la agenda regional, el tránsito de un escenario político a otro completamente diferente, también ha impuesto cambios. El predominio de un panorama político que favorecía la búsqueda de mayores grados de autonomía —siempre relativa— frente a potencias externas como Estados Unidos y la Unión Europea, y una retórica gubernamental que jerarquizaba las dinámicas intrarregionales —sin que ello significara ni la renuncia ni un cambio profundo en relación con la inserción en el mercado extrarregional ni a la relación con actores globales—, condujo a la conformación de una etapa nueva hasta ese momento en la integración.

En ese período —en convivencia con los esquemas tradicionales de integración y los acuerdos de libre comercio— surgieron grupos asociativos regionales sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En su seno se adoptaron posiciones en favor de la soberanía regional, en la medida en que la heterogeneidad de intereses al interior de estos mecanismos lo permitió. Aun así, los países más alineados con las posiciones de Estados Unidos no encontraron espacio para hacer oposición a las nuevas propuestas (Regueiro, 2014).

La creación de estos mecanismos trajo aparejada la ampliación de la agenda de la integración que, hasta ese momento, se había concentrado esencialmente en temas de índole económico-comercial. Comenzaron así a plantearse temas mucho más

abarcadores como también lo fue el alcance de los proyectos a los que daban cobertura. Los nuevos grupos asociativos pusieron el foco en la concertación política y la cooperación, y la inclusión de temas como la inversión en infraestructura, la integración energética, la lucha contra la pobreza y las relaciones monetario-financieras —por sólo citar algunos—, dotó a la integración de nuevos contenidos.

La llegada al gobierno de Mauricio Macri en Argentina en 2015 marca el viraje en el escenario político regional y la entrada en una nueva etapa de retroceso desde el punto de vista de la integración autónoma, aunque ya se proyectaban algunas señales anteriores en esa propia dirección, relacionadas con la estabilidad política de los países y también con las posiciones de actores económicos domésticos.

En el contexto actual, persiste la fragmentación de propuestas asociativas de diferente naturaleza, aunque se han diluido los otrora ejes de la integración⁹ para instaurarse un consenso bastante generalizado alrededor de la propuesta liberal y de los mercados globales como objetivo prioritario de asociación externa. De manera general, pueden identificarse algunos rasgos que marcan el cambio en el panorama de los grupos asociativos latinoamericanos y caribeños:

- Pérdida de espacio y relevancia de la integración en la agenda regional, lo cual está estrechamente vinculado al propio cambio en la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe y en las prioridades de inserción internacional predominantes.

- Reestructuración y refuncionalización de los espacios asociativos existentes, orientada al retorno a una visión liberal economicista y tecnocrática de la integración.

- Desarticulación de la institucionalidad creada bajo la órbita del 'progresismo', en especial de las

⁹En un momento de mayor polarización se configuraron ejes articuladores en torno a los cuales se nucleaban los grupos asociativos regionales: primero, las propuestas de Venezuela, Brasil y Estados Unidos; luego, los ejes Atlántico, con una visión más autónoma de la integración, y Pacífico, con un enfoque liberal y subordinado.

instituciones que cuestionaron de forma más contundente el papel de las instituciones panamericanas.

- Creación de estructuras *ad hoc*, sobre la base de afinidades políticas —en este caso de derecha—, que canalizan temas puntuales donde no existe un consenso regional que permita adoptar declaraciones en foros más amplios, en especial en lo relativo al tema Venezuela.

- Recuperación de la centralidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) como marco para dirimir las cuestiones del debate político del continente.

En esta nueva etapa, esquemas asociativos como el MERCOSUR que, bajo los gobiernos de izquierda, asumieron nuevos temas, más allá de los propios de la integración comercial (integración social, productiva, tratamiento de asimetrías, concertación política, entre otros), han atravesado procesos de refuncionalización que los traen de vuelta a su anterior estatus. Con la llegada de la derecha a los dos socios más importantes, Argentina y Brasil, y la consecuente reorientación de su política de inserción internacional, en el bloque avanza hacia una reformulación orientada a lograr un mayor nivel de apertura comercial y la flexibilización de la normativa para las negociaciones externas.

De hecho, como parte de este debate se ponen bajo cuestionamiento los niveles de protección comercial, el alcance de las metas de integración del bloque,¹⁰ y la Decisión 32 del Consejo del Mercado Común (CMC) del año 2000, que impone la necesidad de negociación en bloque de cualquier acuerdo comercial con terceros. Respecto a esta última, varias negociaciones externas han exacerbado las demandas de flexibilización: la dilatada negociación con la Unión Europea —finalmente

cristalizada en la firma del acuerdo en junio de 2019— y el interés de algunos países (particularmente, Uruguay) de negociar un acuerdo de libre comercio con China han sido los más relevantes.

Este ha sido un proceso progresivo, que venía gestándose incluso desde fines del período anterior, y está relacionado con las demandas de importantes sectores económicos internos, en especial los brasileros, que se ubican en una fase de internacionalización del capital que demanda una expansión más allá de los mercados regionales. Ya desde 2015, en el marco de las reuniones del Consejo del Mercado Común se decide instruir al Grupo del Mercado Común para elaborar un “Plan de Acción para el Fortalecimiento de un MERCOSUR Comercial y Económico” (Consejo del Mercado Común, 2015), haciendo explícita la intención de acotar las áreas la actuación del bloque.

En un informe elaborado por el Sector de Integración y Comercio del BID-INTAL, se plantean tres escenarios posibles para el futuro del MERCOSUR. Estos se ubican en un espectro que va desde la denuncia del acuerdo por parte de los estados parte hasta la renegociación de la normativa interna, pasando por flexibilización significativa de la política comercial, que incluiría la reforma del AEC y la derogación de la Dec. 32/200 del CMC (Rozemberg *et al.*, 2019).

Incluso, en la búsqueda de relaciones más abiertas en el ámbito de los mercados globales —con énfasis en el mercado estadounidense—, desde la cancillería brasiler se ha reconocido abiertamente la baja prioridad del MERCOSUR para la política exterior de ese país. En efecto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Paulo Guedes, planteó que ni Argentina ni el MERCOSUR serían una prioridad para la política exterior del

¹⁰La meta original del bloque fue establecer un Mercado Común, lo que implicaba consolidar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos (fuerza de trabajo y capital) a su interior, además de una política comercial común sobre la base de un Arancel Externo Común (AEC). En la práctica, sólo se logró alcanzar una unión aduanera imperfecta, que ha sido cuestionada por el alto nivel de los aranceles frente a tercero —que responde a la estructura arancelaria de Brasil en los años 90— y las múltiples perforaciones del AEC.

gobierno de Bolsonaro, que en su lugar buscaría abrirse al mundo (Barrucho y Carmo, 2018).

Por su parte, en el caso de UNASUR, ha tenido lugar un desmontaje acelerado, que deja ver la intencionalidad de eliminar cualquier posibilidad de que en el futuro —ante un nuevo cambio en la correlación política regional— pueda rearticularse la institución que cuestionó de manera más contundente la hegemonía estadounidense y el papel de la OEA.

En su seno se gestaron iniciativas verdaderamente innovadoras que sometían a escrutinio el *statu quo* de la subordinación regional: la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), la propuesta (no concretada finalmente) de cambios en la arquitectura financiera regional a partir de la creación del Banco del Sur, el intento de gestión soberana de los recursos estratégicos de la región, y la concertación política y gestión de crisis sin la intervención de otros actores ajenos al ámbito suramericano. UNASUR asumió roles que tradicionalmente eran competencia de la OEA.

La situación actual del organismo es de inoperancia y casi desaparición, a partir de la salida definitiva de Brasil y, recientemente, Uruguay, la suspensión indefinida de la participación de Argentina, Colombia, Paraguay, Chile y Perú y la salida de Ecuador y Bolivia en 2019. El gobierno de facto de Bolivia, luego del golpe militar de 2019, anunció su salida del organismo, pero en el momento de elaboración de este artículo, hay un debate interno entre el ejecutivo y el legislativo —con mayoría del MAS— sobre la legitimidad de una decisión que no ha sido aprobada en este órgano.

Como plantean Ugarteche y Negrete, la retirada en masa de la organización está relacionada, por un lado, con los mecanismos de presión del gobierno de Estados Unidos en la región y, por otro, con la divergencia política entre los gobiernos suramericanos. La primera ola masiva de retirada del organismo tiene lugar justo después de la Cumbre de las Américas de Lima de 2018, y los seis miembros involucrados coinciden con los que participan en

el Grupo de Lima y avanzan la campaña de aislamiento a Venezuela de la mano del gobierno estadounidense (Ugarteche y Negrete, 2018).

El Grupo de Lima fue creado en 2017 como instancia *ad hoc* para el abordaje del tema venezolano, en un marco de mayor consenso que el espacio hemisférico —al no poder articular consensos en el marco de la OEA. Con la participación de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, este se ha convertido —no sin contradicciones internas— en el bastión de la política de hostilidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, impulsando y reconociendo la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, como grupo asociativo existen dudas sobre su organicidad y capacidad propositiva más allá de ese objetivo concreto, y de la afinidad ideológica de sus miembros, elemento que se erigía desde la derecha como crítica a los propios mecanismos de concertación y cooperación creados bajo el liderazgo de los gobiernos ‘progresistas’.

Espacio aparte requiere la revitalización de la OEA —impulsada como objetivo desde Estados Unidos e introducida como parte de su legislación bajo la administración Obama. El mecanismo hemisférico, impulsado por la cuestionada iniciativa de su Secretario General Luis Almagro, ha recuperado su centralidad en el debate hemisférico sobre asuntos medulares.

En ese ámbito, ante el involucramiento de la OEA y su Secretaría General en todo tipo de violaciones a la soberanía nacional de países del continente —los casos más destacados son las posiciones contra Cuba, contra Venezuela y la participación decisiva en el golpe de Estado en Bolivia—, los países caribeños han sido determinantes, por la cantidad de votos que concentran. Sin embargo, en el tema Venezuela —hoy devenido parteaguas de las posiciones políticas del continente—, el tradicional consenso de CARICOM en temas de política exterior fue fragmentado a tenor de las presiones del gobierno de Estados

Unidos y de cambios en el signo político en algunos países. No obstante, las posiciones de agresión al gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela han sido concertadas en el Grupo de Lima por falta de consenso, y países como México —en virtud de su política tradicional de no intervención en asuntos internos de los estados— han pedido cuentas ante la OEA sobre las acciones impulsadas por Almagro.

La OEA está hoy inmersa en un debate interno de cara al proceso electoral de la figura del Secretario General, donde la principal contienda se libra entre la reelección del propio Luis Almagro y la postulación de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Sin esperar grandes cambios de una organización creada como mecanismo de intervención y subordinación, una victoria de María Fernanda Espinosa sería, al menos, un cambio simbólico de cara a la agresividad con que se ha comportado el actual secretario. No obstante, a pocos días de las elecciones no está definido cuál podría ser el escenario que prevalezca.

En el caso de la CELAC —el mecanismo de diálogo político y concertación más amplio de la región sin la participación de actores extrarregionales—, se percibe, como resultado del cambio en la correlación de fuerzas regional, una sensible pérdida de dinamismo en comparación con el período previo. Esta se expresa en las reiteradas dificultades para concretar las reuniones del grupo y el bajo nivel de representación de las figuras que asisten, así como en la evasión de contenidos de mayor relevancia y sensibilidad en la agenda de la organización, con el objetivo de lograr niveles de consenso que no comprometan la continuidad del mecanismo.

En ese sentido, habría que destacar la reciente instalación de México en la Presidencia Pro Tempore (PPT) de CELAC. En un esfuerzo por reanimar el mecanismo de concertación, el gobierno mexicano presentó una propuesta de 14 áreas de trabajo a desarrollar bajo su PPT en 2020. Esta incluye temas vinculados a: cooperación aeroespacial y aeronáutica, gestión integral de riesgos

por desastres, ciencia y tecnología, encuentro de rectores, compras consolidadas en común, monitoreo sobre resistencia a los antimicrobianos, metodología de lucha contra la corrupción, relación con China, agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas, concertación política y construcción de posiciones conjuntas, gestión sustentable de los recursos oceánicos y acción turística común, entre otros (Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2020).

Un aspecto relevante de la agenda temática de la CELAC es la mantención de la tendencia a evadir los temas más polémicos y cruciales de la política regional, lo que, dado el escaso margen para el consenso que permite el actual contexto regional, parece responder también a una estrategia de supervivencia de la organización.

De los temas presentados, la relación con China parece tener alguna capacidad de articulación dentro del mecanismo, de manera que preserve el interés de los socios para participar en el Foro CELAC-China. Sin embargo, es poco probable que la CELAC se convierta en canalizador de la relación con China por dos razones fundamentales: la limitada capacidad del organismo para gestionar esos recursos y el bajo interés de los gobiernos de la región para confrontar a Estados Unidos en un tema tan sensible como la presencia china en la región, incluso cuando no puedan prescindir de esa relación. Ello ratificaría la tendencia que ha venido prevaleciendo hasta el momento de canalización bilateral de la relación económica.

En cuanto al ALBA-TCP —mecanismo que concentró la propuesta del núcleo duro de la izquierda regional—, la situación política y económica interna de Venezuela y el ataque a que está siendo sometida a partir de las duras sanciones impuestas por Estados Unidos, así como por el propio cambio de signo político de los gobiernos de Ecuador y Bolivia (a partir del golpe de Estado) y otros países caribeños, mantiene a la entidad en un marco de operación muy limitado.

Sus funciones en la actualidad se limitan casi exclusivamente a la alianza política entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, con muy pocas posibilidades de asegurar la operatividad de Petrocaribe, mecanismo de suministro energético en la zona caribeña, donde también coexisten aspiraciones e intereses estratégicos de otros actores como Estados Unidos y China. Incluso desde antes, el organismo había renunciado implícitamente a su dimensión económica, cuyo diseño original fue revolucionario y novedoso en el plano de la construcción de relaciones de interdependencia. El suministro de fuentes de energía a los países del Caribe también se vio afectado desde años atrás como resultado de la caída de la producción petrolera del país andino.

Hoy el panorama político regional se ve matizado por el ascenso a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, dos países con un peso político y económico no despreciable en la región. Sin embargo, en términos de dinamización de procesos de asociación menos subordinados, ambos presentan limitaciones para proyectar sus liderazgos a nivel regional.

En el caso de México, la dependencia respecto a Estados Unidos determina su alta vulnerabilidad ante presiones económicas de ese gobierno. Las prioridades del actual gobierno mexicano ponen el foco en desafíos domésticos de gran magnitud (corrupción, tema migratorio, etc.), lo que previsiblemente no le permitirá concentrar la atención en una relación con América Latina y el Caribe que está por construir. La política exterior mexicana bajo el gobierno de AMLO ha mostrado pragmatismo para evitar confrontaciones con Estados Unidos, sin renunciar a la tradición de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

En el de Argentina, las alianzas que permitieron la victoria electoral al justicialismo, avizoraban un programa de gobierno más moderado que el de Cristina Fernández, si bien marcó un

giro importante en el escenario político del país y significó una brecha en la tendencia derechista de la región. Igualmente, las prioridades domésticas concentran la atención del gobierno de Alberto Fernández, que tendrá que moderar los efectos sociales de un proceso de reforma neoliberal impuesto por su predecesor y renegociar el pago de la ingente deuda externa del país.

CONSIDERACIONES FINALES

América Latina y el Caribe está siendo el escenario de un cambio sustancial en el panorama político. El viraje político a la derecha de los principales gobiernos del continente se une a un reajuste de la proyección de Estados Unidos hacia la región ante la percepción de amenazas que ha despertado la mayor influencia de actores globales como China y Rusia.

En materia económica se refleja en un mayor énfasis desde el gobierno estadounidense en la inversión en infraestructura y energía en la región, sobre la base del lanzamiento de una propuesta regional como América Crece. Con la aprobación de la BUILD Act se otorga un mayor peso a la inversión como instrumento de la política exterior de ese país, en un marco de competencia estratégica y disputa geopolítica con China.

Ante este escenario, los gobiernos latinoamericanos tendrán que debatirse en la disyuntiva entre la alineación con Estados Unidos —incluyendo los recursos que destina a los proyectos de infraestructura— y el interés de sectores económicos importantes en sostener la relación con China, actor que ha ganado peso no sólo como socio comercial sino también como prestamista e inversionista, y que comienza a desplegar una política exterior en mayor variedad de dimensiones en la región.

Desde el punto de vista político, hay un alineamiento en torno a posiciones conservadoras entre los gobiernos de la región y la proyección de la actual administración estadounidense. Lo anterior tiene un reflejo importante en las dinámicas de los grupos asociativos que, ante un cambio en la

estrategia de inserción internacional de los países, buscan una mayor apertura y liberalización de las relaciones externas como parte de su programa neoliberal y hacen que la integración pierda relevancia en la agenda regional. También se ha traducido en la creación de mecanismos *ad hoc* para avanzar campañas de aislamiento a gobiernos soberanos que hacen un ejercicio más contundente de soberanía y son considerados contrarios a la visión de 'democracia' que se defiende desde el norte y a sus intereses de subordinación.

De otro lado, el consenso alrededor de posiciones de derecha permite tomar acciones para barrer con la institucionalidad creada bajo el 'progresismo' —proceso que también tiene lugar al interior de los países—, a través del desmembramiento y desarticulación de las instituciones regionales que cuestionaron más en su momento la hegemonía estadounidense y desde las que se asumieron posturas que reivindicaban la soberanía regional.

La elección de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina imprime un matiz en ese contexto político rechazado. Sin embargo, surgen dudas en cuanto a su capacidad de relanzar los procesos asociativos regionales desde una perspectiva de mayor autonomía. La correlación regional de fuerzas no es propicia para la construcción de alianzas fuertes en esa dirección, a

menos que ocurran otros cambios políticos en países de peso regional como Brasil. Además, ambos gobiernos deberán concentrar esfuerzos en resolver problemas domésticos de gran magnitud.

En ese contexto, se ha hecho evidente la vulnerabilidad de las instituciones de concertación y cooperación —ámbitos en los que se lograron avances en la etapa anterior— a los cambios de signo político de los gobiernos, lo que trae a colación las carencias de los grupos asociativos en la construcción de una base material que los dotara de mayor sostenibilidad.

La construcción de relaciones de interdependencia como base de los procesos de integración y la creación de sinergias y formas de complementariedad económica alcanzan una significación mayor en términos de contrarrestar la alta vulnerabilidad no sólo a los cambios en las voluntades políticas de los gobiernos, sino también en la búsqueda de mayor estabilidad económica. Son esenciales en la intención de blindarse ante *shocks* externos de términos de intercambio (relación entre los precios de importación y exportación) y de los flujos financieros externos, dos variables a las cuales las economías latinoamericanas son altamente sensibles. Cualquier emprendimiento futuro que pretenda ser duradero y sostenible deberá tener en cuenta esta lección.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrucho, L. y M. Carmo (2018): *O Mercosul, criticado por Paulo Guedes, ainda é importante para Brasil?* BBC News Brasil, 20 de octubre, disponible en <http://www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-46039085>, recuperado el 15 de marzo de 2020.
- BUILD Act: 115th Congress, S. 2463 Estados Unidos de América, 27 de junio de 2018, disponible en <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2463/text>, recuperado el 1ro. de diciembre de 2019.
- Consejo del Mercado Común (2015): *Plan de Acción para el Fortalecimiento del MERCOSUR Comercial y Económico*, Dec. No. 56/15, 20 de diciembre.
- DFC (2019): *Active DFC Projects-Map View*, 31 de diciembre, disponible en <https://www3.opic.gov/ActiveProjects-Map/Default.aspx#>, recuperado el 13 de marzo de 2020.
- DFC (2020): *DFC Approves Nearly \$900 Million for Global Development Projects*, 12 de marzo, disponible en <https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-approves-nearly-900-million-global-development-projects>, recuperado el 13 de marzo de 2020.

- Dussel, E. (2019): *Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe 2018*, Red ALC-China, disponible en https://www.redalc-china.org/monitor/images/pdfs/menuprincipal/DusselPeters_MonitorOFDI_2019_Esp.pdf, recuperado el 20 de enero de 2020.
- Gallagher, K. y M. Myers (2020): *China-Latin America Finance Database*, Inter-American Dialogue, disponible en https://www.thedialogue.org/map_list/, recuperado el 27 de febrero de 2020.
- Green, M. y D. Bohigian (2019): *USAID-OPIC Coordination Report*, 31 de julio, disponible en https://www.dfc.gov/sites/default/files/2019-10/CoordinationReport_Shelby_7_31_19.pdf, recuperado el 13 de marzo de 2020.
- Regueiro, L. (2014): La Alianza del Pacífico: un pilar del apuntalamiento del liderazgo global de los Estados Unidos, *Revista de Estudios Estratégicos*, No. 01, primer semestre, CIPI, pp.149-176, ISSN 2313-2698.
- Republican National Convention (2016): *Republican Platform 2016*, Cleveland.
- Rozemberg, R.; R. Campos; R. Gayá; A. Makuc y G. Svarzman (2019): *Informe MERCOSUR: hacia un cambio necesario*, BID-INTAL, Nota Técnica No. IDB-TN-1675, junio, disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_MERCOSUR_tiempos_de_cambio_es_es.pdf, recuperado el 15 de marzo de 2020.
- Secretaría de Relaciones Exteriores de México (2020): *Propuesta de áreas de trabajo para la PPT 2020 de la CELAC*, disponible en <https://ppt-celac.org/plan-de-trabajo>, recuperado el 13 de marzo de 2020.
- Ugarteche, O. y A. Negrete (2018): ¿Qué le pasó a la UNASUR?, *América Latina en Movimiento*, 23 de mayo, disponible en <http://www.alainet.org/es/articulo/193050>, recuperado el 15 de marzo de 2020.
- White House (2017): *National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., disponible en <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, recuperado el 8 de marzo de 2020.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- Coats, D. (2019): *Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Statement for the Record*, Senate Select Committee on Intelligence, 29 de enero, disponible en <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf>, recuperado el: 7 de marzo de 2020.
- Congressional Research Service (2019): *BUILD Act: Frequently Asked Questions About the New U.S. International Development Finance Corporation*, R45461, 15 de enero, disponible en <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45461/4>, reuperado el 3 de diciembre de 2019.
- González, R. (2019): *América Latina y el Caribe frente a dos grandes proyectos: La iniciativa china de 'la Franja y la Ruta' y la iniciativa estadounidense 'América Crece'*, disponible en <http://www.cipi.cu/articuloamerica-latina-y-el-caribe-frente-dos-grandes-proyectos-la-iniciativa-china-de-la-franja-y>, recuperado el 20 de febrero de 2020.
- Marín, C. (2017): "Integración regional de América Latina y el Caribe en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos", en M. Crahan y S. Castro (ed.): *Cuba-Estados Unidos: la normalización y sus desafíos*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, pp. 138-163.
- Regueiro, L. (2019): "América Latina y el Caribe, región en disputa: Estados Unidos versus China", *Revista de Estudios Estratégicos*, No. 07, primer semestre, CIPI, pp. 51-86, ISSN 2313-2698.
- Runde, D. (2018): *Modernizing Development Finance*, Statement before the Senate Committee on Foreign Relations, CSIS, 10 de mayo, disponible en https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051018_Runde_Testimony.pdf, recuperado el 4 de diciembre de 2019.
- Runde, D. y R. Bandura (2018): *The BUILD Act Has Passed: What's Next?*, CSIS, disponible en <https://www.csis.org/analysis/build-act-has-passed-whats-next>, recuperado el 4 de diciembre de 2019.



Economía y COVID-19 en el ciclo político de Estados Unidos: continuidad y cambio después del 20 de enero 2021

United States Economy and COVID-19 in the Political Cycle: Continuity and Change After January 20th 2021

Dr. C. LUIS RENÉ FERNÁNDEZ TABÍO

Profesor Titular. Doctor en Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI)

Universidad de La Habana

e-mail: luis.fernandez@ciei.uh.cu

Número ORCID: 0000-0003-3535-2789

RESUMEN:

El artículo explora la interrelación existente entre el comportamiento de la economía estadounidense, la COVID-19 y otros retos en el ciclo político electoral para la continuidad y cambio de la política de Estados Unidos después del 20 de enero de 2021. Esta crisis económica se presenta como resultado del nuevo coronavirus, pero sus raíces están en las contradicciones y desequilibrios propios del capitalismo, agravadas por las políticas aplicadas por la administración de Donald Trump. Los efectos de la crisis en Estados Unidos son trascendentes debido al carácter mundial de la pandemia, y la interconexión internacional de los sectores financieros, productivos y de servicios. Con independencia de la inclinación política que resulte dominante de las elecciones, sea un reacomodo reformista demócrata, o una profundización de la continuidad divisiva y destructiva de Donald Trump, habrá que enfrentar el contexto de las múltiples crisis internas y desafíos internacionales. Estas condiciones determinan la tendencia predominante a la continuidad debido la comunidad de intereses y objetivos de los partidos de la clase dominante, aunque con diferentes discursos políticos, estrategias y énfasis en el empleo de los instrumentos de poder para lograrlos en los próximos cuatro años. **Palabras clave:** Crisis económica. Pandemia. Mantenimiento del poder. Ruptura política.

Abstract:

The article explores the interrelationship between the behavior of the US economy, COVID-19 and other challenges in the political cycle for the continuity and change of US policy after January 20, 2021. This economic crisis occurs as a result of the new coronavirus but its roots lie in the contradictions and imbalances of capitalism, aggravated by the policies applied by the Donald Trump administration. The effects of the crisis in the United States are transcendent due to the global nature of the pandemic, and the international interconnection of financial, productive and service sectors. Regardless of the dominant political tilt of the election, be it a Democratic reformist rearrangement, or a deepening of Donald Trump's divisive and destructive continuity, the context of multiple internal crises and the international challenges that will have to be faced. These conditions determine the predominant trend towards continuity, although with different results, due to the community of interests and objectives of the parties of the ruling class, but different political discourses, strategies and emphasis on the use of the instruments of power to achieve them in the next four years.

Key words: Economic crisis. Pandemic. Keep on power. Political Brake. Introducción

INTRODUCCIÓN

La economía de Estados Unidos cumplió en 2019 diez años de expansión desde la Gran crisis financiera y económica 2007-2009. Hasta ese momento, la crisis de 2008 era la más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930. Entre 2009 e inicios de 2020, los índices de desempleo descendieron por debajo de lo que podría considerarse pleno empleo, y el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de forma sostenida, aunque con variaciones por trimestres y regiones. La recuperación económica ya venía ocurriendo durante el gobierno de Barack Obama, por lo que en rigor no es atribuible a la administración Trump.

Sin embargo, hasta enero de 2020, la realidad económica era un factor muy favorable para las aspiraciones de reelección de Donald Trump en noviembre, unas de sus mejores cartas de triunfo. Está bien establecido que las condiciones económicas cuando están definidas —expansión robusta o recesión— en el año electoral, son determinantes para las elecciones presidenciales. En 1992 la frase, “es la economía estúpido” se convirtió en un mensaje decisivo para la victoria de William Clinton, dado que la economía estadounidense estaba todavía bajo los efectos de la crisis económica. Los electores aprecian la situación familiar y personal, reflejada en sus ingresos, empleo y bienestar económico y la atribuyen mayormente al presidente en ese momento.

Pero ese no es el único factor, otras variables en situaciones difusas y sumamente complejas como en las actuales, pueden influir en los resultados electorales. Entre ellas están las percepciones sobre la realidad, que son manipuladas por los medios de comunicación y las figuras políticas principales, como el presidente y otros funcionarios de la administración. La propaganda y las mentiras logran inclinar la balanza a favor o en contra del ocupante de la Casa Blanca. Conflictos internacionales como guerras, intervenciones u otros problemas internacionales, pueden repercutir circunstancialmente en los resultados electorales.

Una expresión actual de esa maniobra es considerar a la COVID-19 como una agresión de una potencia extranjera, en este caso China. Trump ha tratado de presentar esta acusación sin mucho fundamento, el Secretario de Estado Mike Pompeo ha insistido en el tema, pero en una elección tan reñida, cualquier adición o substracción por pequeña que sea puede cambiar el resultado en el sistema político electoral en que las mayorías nacionales no determinan al ganador, sino los votos electorales obtenidos con frecuencia por mínúsculas ventajas en estados en disputas para alcanzar 270 o más de esos votos indirectos. Otras acciones en política exterior están entre las posibilidades del presidente que busca la reelección, sean para distraer la atención de un perjudicial asunto interno, y sumar apoyo de los grupos de intereses especiales, o para presentar algún supuesto resultado, aunque la realidad no lo acompañe. Entre estas movidas se realizan maniobras provocadoras y despliegues militares, acciones y amenazas contra otros países, usando pretextos como la defensa de la libertad, o los derechos humanos, flujos migratorios dañinos para la seguridad de Estados Unidos, defender la libertad de navegación, o enfrentamiento al narcotráfico, que puedan alentar simpatías políticas internas de algunos grupos.

Es interesante que el lema de Trump sea *America First*, cuando esa referencia a Estados Unidos primero debiera ser la oligarquía financiera primero. Al tratar de estimular el crecimiento económico, este gobierno lo ha hecho mediante una inclinación regresiva en la reducción de impuestos, para favorecer al capital, no a los trabajadores o las capas medias, aunque distribuya algunas migajas para estos últimos. Las capas medias, un sector muy importante y simbólico en el entramado económico, social, político e ideológico de Estados Unidos, se han visto afectadas desde el inicio de la llamada contrarrevolución conservadora en la década de 1980, sufriendo una declinación de sus condiciones de vida. Este proceso de aumento

de las diferencias socioeconómicas en la sociedad estadounidense no es nuevo, pero su agudización ha venido alcanzando niveles muy pronunciados durante el trumpismo y la actual crisis lo ha empeorado.

El desafío reelectoral de Trump se complicó debido a la entrada de la COVID-19 y la mala conducción a su enfrentamiento con el estallido de una gran crisis. La caída de la economía alcanzó su peor momento en el segundo trimestre del año, cuando el Producto Interno Bruto descendió un 30% y el desempleo aumentó a 14,7% en abril. Los pronósticos de recuperación son inciertos a pesar de alguna mejoría en el tercer trimestre del año sin que se alcanzara la recuperación total. Una parte de esa mejoría se debe a los enormes paquetes de estímulo del orden de los billones de dólares. Sin disponer de los datos oficiales, la crisis económica debe agudizarse a final del año debido a los rebrotes del virus y ello complejiza enormemente el escenario electoral y las perspectivas políticas, económicas y sociales a partir de 2021. Con un desastroso control de la pandemia no puede lograrse una salida de la crisis económica (Siegel Van Dam, 2020).

Un notable economista estadounidense, Jeffrey Sachs ha catalogado a la administración de Donald Trump de catastrófica y responsable por los más de doscientos mil fallecimientos que ha dejado. Sachs afirma al respecto: “la única forma de tener una economía viable es controlar la epidemia. El problema es cómo ser efectivo en controlar la epidemia y llevar la transmisión de la enfermedad a niveles muy bajos.” A partir de su experiencia, Sachs no duda en afirmar que “Trump es el peor líder político” que ha conocido en toda su vida (Chotner, 2020).

Es decir, el reto que atraviesa Estados Unidos en medio del ciclo político electoral, y la pandemia del nuevo coronavirus ha servido como catalizador a una crisis económica iniciada entre marzo y abril, profundizada en el segundo trimestre de 2020 y que evidencia nuevas dificultades en el

último trimestre del año debido a un nuevo incremento de los casos del nuevo coronavirus y el número de fallecidos al tiempo que se agota el paquete de estímulo fiscal, no renovado por las pugnas políticas interna en la recta final de las elecciones.

El período político que se iniciará el 20 de enero de 2021 estará marcado por la necesidad de enfrentar múltiples retos, crisis económica y pandemia que afecta de manera importante y desigual al resto del mundo y sobre todo a Europa, región significativa para los intercambios económicos y financieros de Estados Unidos.

Los intentos de relanzar la economía sin controlar la epidemia, han demostrado ser un camino peligroso para la vida e inefectivo. El rebrote del virus es un freno decisivo para sectores de la economía como los servicios, sin los cuales la recuperación no es posible. En ausencia de tratamientos y vacunas efectivas, que no se prevé estén disponibles hasta mediados de 2021, estas crisis y retos que ha enfrentado Estados Unidos en el ciclo político electoral estarán presentes en los próximos años.

La politización sufrida por el enfrentamiento a la COVID-19, la división de la sociedad y su clase política, el quiebre del sistema bipartidista, reforzada por las falsas aseveraciones de Trump sobre la gravedad de la enfermedad, tratamientos no probados científicamente y rechazo al distanciamiento físico y uso de mascarillas, dificultará la solución del problema, aun si Trump no es reelegido. Se ha extendido en una parte importante de la población el rechazo a la vacunación, lo que supone un obstáculo adicional para frenar la diseminación de la enfermedad.

Otros expertos desde distintos campos de la ciencia, advierten sobre las nuevas circunstancias en que funcionarán las sociedades y las relaciones económicas después restablecerse su funcionamiento. Se espera haya una redefinición de las fuentes de los suministros, procurando las más cercanas y seguras. Se pronostica el aumento de

la automatización, la robótica y la inteligencia artificial y las formas de trabajo a distancia. Los servicios, suministros y transferencias monetarias mediante redes se incrementarán, reduciendo adicionalmente las fuentes de empleo. La ocupación de la fuerza de trabajo será modificada, tanto por los cambios en el comportamiento social de los individuos, como por las estrategias de los gobiernos y las empresas para reducir las vulnerabilidades expuestas por la pandemia y la crisis.

Las siguientes páginas, sin conocer los resultados de estas convulsas elecciones, en medio de la avalancha de opiniones, proyecciones y criterios, buscan explorar algunos aspectos de la interrelación entre la crisis económica en Estados Unidos, la epidemia de la COVID-19, y sus consecuencias políticas más allá de 2020. Se tratará de discernir los elementos de continuidad y los posibles cambios o variaciones de políticas que se tendrá a partir del 20 de enero de 2021 según se produzca la victoria de Joe Biden, o la reelección de Donald Trump sin particularizar las políticas respectivas por regiones y países. Son reflexiones y valoraciones de carácter muy preliminar por el todavía escaso desarrollo de estos acontecimientos, no conocerse el desenlace de la contienda electoral, en medio de un ciclo político poco convencional y con elevadísimo grado de variabilidad y complejidad.

Las encuestas en el abigarrado sistema electoral estadounidense, a definirse en un poco más de la decena de estados identificados como campo de batalla para el logro de al menos 270 votos electorales favorecen al candidato demócrata, pero no puede excluirse las opciones de Trump a otros cuatro años en la Casa Blanca aunque sea menos probable. El resultado no será irrelevante por lo que representa el afianzamiento de las políticas destructivas y divisivas de Donald Trump, o un restablecimiento de cierto retorno a las tendencias precedentes de más multilateralismo y empleo del poder blando y menos confrontación para buscar la recuperación parcial del liderazgo

e imagen de Estados Unidos en el mundo. Aunque haya elementos generales de continuidad, ya no estamos en los tiempos que pueda tenerse una llamada gran estrategia o estrategia general que pauté la tendencia de la política exterior. Las divisiones dentro de la clase política estadounidense no lo hace posible y por ello hay distintas proyecciones dentro de ese marco general de la política exterior respecto a regiones y países según sea uno u otro el gobierno que se tenga en el período 2021-2024, que no se desarrollarán aquí.

CRISIS ECONÓMICA DE 2020, ANTECEDENTES Y CONDICIONES AGRAVANTES

Entre los principales antecedentes de la crisis económica de 2020 está la contrarrevolución conservadora marcada por la victoria electoral de Ronald Reagan al frente de una coalición política en 1980. El paquete de políticas económicas conocido como reaganomía, rechazó el consenso liberal keynesiano que le precedió y ha venido desmontando progresivamente el llamado orden liberal de posguerra, que Estados Unidos. Se apoyó en la liberalización a ultranza del comercio y apertura a los movimientos de capital, acompañada por la desregulación financiera para revertir la caída de la cuota de ganancia mediante la creciente especulación financiera y la explotación de fuerza de trabajo barata internacional. El impulso a la globalización económica dado por estas políticas fue la base de los acuerdos de libre comercio que avanzaron Estados Unidos a partir de la década de 1990 como modo de darle estabilidad y un marco institucional y regulatorio a esas políticas.

En Estados Unidos, el consenso económico conservador a favor de la globalización fue bipartidista, con mínimos ajustes durante los dos períodos presidenciales de los demócratas William Clinton (1993-2001) y Barack Obama (2009-2017). El paquete de políticas incluía la desregulación financiera y las reformas impositivas de carácter regresivo bajo el supuesto derrame o goteo de la llamada economía de la oferta (*supply side*

economy). Todas estas políticas económicas aplicadas por décadas con pocas variaciones tenían como objetivo el incremento de la explotación de la fuerza de trabajo e incrementar la cuota de ganancia de las grandes corporaciones, bancos y empresas transnacionales. A lo largo de los años estas medidas económicas no solamente transformaron la economía internacional sino el tejido socioeconómico interno de Estados Unidos. Las mismas empeoraron la desigualdad, cuyas consecuencias repercutieron en la propia economía de Estados Unidos y en las industrias manufactureras y en la fuerza de trabajo ocupada en las mismas, generando el rechazo conservador nacionalista, que acompaña la llegada a la presidencia de Donald Trump en 2017.

A finales de 2019, e incluso enero de 2020, sin reconocer la repercusión que tendría la COVID-19 todavía,—a pesar del avance rápido de la epidemia en China y las advertencias de la Organización Mundial de la Salud— existían factores favorables y desfavorables para la economía estadounidense. Las condiciones para el estallido de la crisis económica y financiera estaban latentes, y habría estallado de un modo u otro. El gobierno de Estados Unidos impulsó la economía mediante una enérgica política monetaria y fiscal expansiva en medio del ciclo político electoral, incluyendo inusuales presiones sobre el banco central y el presidente de la Reserva Federal para que mantuviera bajas las tasas de interés.

Las crisis económicas cíclicas son inevitables en las economías capitalistas, aunque no es posible prever su ocurrencia. La duración de la fase expansiva puede estimarse a partir de conocer los resultados precedentes. Una expansión en Estados Unidos por diez años es notable —la anterior ocurrió en la década de 1990—, y cabría esperar que el estallido de la próxima recesión no demoraría mucho más a juzgar por el comportamiento histórico registrado minuciosamente por el Buró Nacional de Investigaciones Económicas [*National Bureau of Economic Research*] (NBER, 2020). En 2019 se

cumplieron diez años de Gran Recesión y crisis financiera de 2007 a 2009.

Antes de la aparición de la COVID-19, existían factores favorables a una crisis económica y otros que la retardaban, pero no aliviaban las contradicciones sino todo lo contrario. Un elevado y creciente déficit fiscal, ocasionado por incremento de gastos —entre ellos los militares— y reducción de impuestos (para mayor beneficio del sector financiero y las grandes corporaciones) con el consiguiente aumento de la deuda pública a niveles alucinantes. Las políticas desreguladoras contribuían a la creación de burbujas financieras y la guerra comercial con China generó un ambiente comercial negativo, que afectó las relaciones con ese país pero no redujo el déficit comercial estadounidense total. Estados Unidos no redujo el monto de sus inversiones sino que modificó la distribución geográfica de las mismas. Evidentemente, tratándose de las relaciones entre las dos mayores economías del mundo, cualquier conflicto económico entre ellas tiene una repercusión mundial. Estos desequilibrios y las políticas conservadoras de fuerza, al emplear deliberadamente los instrumentos económicos de poder con fines políticos, crearon resquebrajamientos en la economía mundial, falta de confianza en el multilateralismo, y aumentaron los riesgos de una crisis.

Asimismo, el empleo masivo de medidas económicas coercitivas unilaterales para lograr fines políticos, a tono con enfoques geoeconómicos para los más disímiles propósitos (Blackwill & Harris, 2016: 200), como controlar los flujos migratorios desde Centroamérica, subvertir gobiernos con fines geopolíticos, incrementaron las tensiones en las relaciones internacionales y dañaron los negocios. El creciente empleo de los instrumentos económicos de poder levanta serias dudas sobre la capacidad de liderazgo político estadounidense. Este problema se ha extendido sobre su propio sistema de alianzas, incluyendo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y las relaciones de Estados Unidos incluso con sus

más cercanos aliados, como la Unión Europea y Canadá (Rapp-Hooper, 2020). Las condiciones de la globalización económica y financiera, y la preponderancia que todavía tiene el dólar como dinero mundial a pesar de su gradual declinación relativa, le ofrece al gobierno de Estados Unidos la capacidad de coerción política mediante instrumentos económicos, con el propósito favorecer su sistema de dominación y la correlación internacional y regional de fuerzas (Navarro, 2018).

A favor de la economía en este escenario se podía mencionar el avance parcial en negociaciones comerciales con China en un primer momento, aunque posteriormente se incrementaron las tensiones y esta parece ser la tendencia dominante, y el haber alcanzado una renegociación ventajosa para Estados Unidos con Canadá y México para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ahora se conoce como Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Otro elemento favorable a la economía estadounidense se deriva la llamada revolución de los hidrocarburos de esquistos. Aunque estas técnicas de explotación del petróleo y el gas son muy destructivas para el medio ambiente, transformaron a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo mundial y se llegó a convertir en exportador neto. La transformación de la matriz energética estadounidense ha tenido no solamente implicaciones comerciales, sino también geopolíticas (Blackwill & O'Sullivan, 2014: 104).

Un eventual gobierno demócrata encabezado por Biden debería enfrentar los problemas medio ambientales y sus consecuencias para el cambio climático aunque no pueda esperarse modificaciones radicales en la matriz energética durante su gobierno. Este sería una de las esferas más sensibles, por la importancia que tiene el sector energético de los hidrocarburos, tanto desde el punto de vista económico como político. La política de Trump ha tenido consecuencias negativas sobre el medio ambiente al concentrarse en la explotación

de fuentes de hidrocarburo y ha frenado el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas energéticos avanzados.

Las modificaciones en los flujos internacionales de hidrocarburos han tenido repercusiones en la geo-económica y la geopolítica mundial, y las mismas están en juego en la presente crisis. Países considerados adversarios por Estados Unidos como Rusia, Irán y Venezuela son muy dependiente de los ingresos por la exportación de petróleo. La caída de los precios del petróleo por la enorme disminución de la demanda mundial, afecta la explotación del petróleo de esquisto dado su mayor costo de explotación. Por esta razón, se espera la reducción en un 50% de estas producciones en Estados Unidos respecto a 2019, y así retorna a la condición de importador neto de crudo a partir del tercer trimestre de 2020 con repercusiones para el próximo ciclo político 2020-2024 (EIA, 2020).

EVOLUCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS Y DEUDA PÚBLICA

Las principales proyecciones del comportamiento de la economía de Estados Unidos a finales de 2019 y principios de 2020 consideraban se continuaría el crecimiento y los relativamente reducidos niveles de desempleo (por debajo del 5 %). Estos indicadores encubrían la baja utilización de la fuerza de trabajo de un poco más de 63 % de la población mayor de 16 años. De hecho, los pronósticos en marzo del 2020, estimaban de modo muy optimista que la disminución del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese año sería de apenas 0,1 %, como parte de la afectación debido a la caída de la economía China principalmente (OECD, 2020: 2).

Ya en el mes de abril las evaluaciones aportadas por el FMI consideraron que la crisis económica del 2020, como resultado de haberse declarado como pandemia la COVID-19, se catalogaba como la peor desde la famosa Gran Depresión de la década de 1930. Estados Unidos comenzó a percibir las

primeras afectaciones entre marzo y abril de modo muy acelerado. En abril más de 20 millones de trabajadores habían solicitado beneficios por desempleo, lo que supone una tasa de desempleo de alrededor del 15 % (Casselman, 2020). Solamente hasta ese momento se podía afirmar que se trataba de una recesión gigantesca, cualquiera fuera su evolución posterior. No podía descartarse aunque podía superar a la Gran Depresión de la década de 1930, considerando que para algunos analistas en 2019 no habían quedado resueltos los desequilibrios originados por la Gran Crisis 2007-2009 (Chesnais, 2020). La Oficina de Estadística Laboral del gobierno estadounidense estimó el desempleo de abril en 20,5 millones de desempleados y 14,7 % (Bureau of Labor Statistic, 2020).

La actual crisis sin contar con datos que permitan un balance final sin duda supera a la entonces llamada Gran crisis de 2008, según algunos cálculos preliminares en casi tres veces. Se espera que la debacle del PIB estadounidense sea entre 3,5 y 4,8 % de la tasa anualizada —dependiendo de los distintos escenarios. Eso contrasta con la proyección de China, país en que se inició la epidemia a finales de 2019 y se espera tendrá un crecimiento muy pequeño en el entorno del de 1-2 % en 2020, pero crecimiento al fin (*The Economist*, 2020: 76). Estas previsiones partían del supuesto, de que las dificultades no se extendieran hasta el otoño de 2020, o incluso alcanzaran a 2021. Según fuera la eficacia en el enfrentamiento a la COVID-19, la curva de la recuperación asemejaría la letra V, o podían provocarse recaídas, y entonces se parecería a la W, extendiéndose naturalmente los plazos si se presentaban, como ha ocurrido a finales del año 2020, nuevos brotes de la epidemia (Gopinath, 2020). Ya a finales de octubre de 2020 se puede afirmar que las consecuencias de la crisis económica serán trascendentes y eventualmente alcanzará su recuperación en el 2021.

En general las crisis económicas exacerban los problemas socioeconómicos preexistentes y repercuten en los conflictos sociales, políticos e incluso en la identidad política, la región y la

ideología. En un país como Estados Unidos, las diferencias socioeconómicas comprobablemente desfavorables a los afroestadounidenses, y los latinos, se reflejan también en la proporción de infectados por la epidemia de COVID-19 y las muertes asociadas a esta enfermedad. Las políticas conservadoras de esta administración republicana aumentaron las desigualdades históricas.

De esto último se ha responsabilizado a la globalización económica, cuando en los países como Estados Unidos no se aplicaron políticas públicas para compensar los efectos adversos de esos procesos. Joseph Stiglitz señala que la concentración de los ingresos y las riquezas en un grupo cada vez más reducido de personas: “parece que evolucionamos de manera resuelta hacia una economía y una democracia del 1 %, por el 1 % y para el 1 %” (Stiglitz, 2019: 59). La desigualdad no es un problema nuevo de la sociedad estadounidense, pero se ha venido agravando peligrosamente y se agudiza en medio de las crisis. “La desigualdad, la fuerza fundamental e implacable en la vida estadounidense desde finales de la década de 1970, empeoró” (Parker, 2020).

La visión optimista de Trump sobre el control que ejerce sobre la epidemia y las esperanzas de una rápida recuperación son obviamente infundadas y aunque puedan motivar algún apoyo coyuntural no contribuyen en lo más mínimo a reducir las desigualdades sociales. Es cierto que las medidas de distanciamiento físico limitan o cierran los trabajos. Sin embargo, el restablecimiento del trabajo, su productividad y las cadenas de suministros se repondrán de modo lento, debido a que las empresas tratarán de reducir vulnerabilidades con suministradores distantes, sustituyéndolos por los más cercanos, y preferiblemente internos. Ello eleva los costos del factor trabajo y reduce la productividad. El resultado de esta recuperación depende también de las afectaciones sociales y psicológicas de los trabajadores, que pueden sentirse desestimulados, con traumas psicológicos que afecten el proceso de reincorporación. Son seres humanos en relaciones sociales de producción explotadoras, que acaban de

atravesar por una situación muy traumática. Es previsible que tanto la cohesión social como la confianza en el liderazgo del gobierno se verán afectados (Eichengreen, 2020).

Además, la economía mundial en la actualidad es global y lo seguirá siendo, aunque sin duda será objeto de ajustes que limiten y reformulen su alcance y los modos de funcionamiento. Entre los problemas estructurales que la economía estadounidense están los desequilibrios en su sector externo, como el déficit comercial crónico. El empleo indiscriminado de tarifas aduaneras para cualquier asunto de política no propiamente comercial, la guerra comercial con China, tampoco ha contribuido a mejorar la posición del saldo comercial estadounidense como prometió Trump. Las previsiones son a la agudización de este conflicto, porque se ha consolidado en la clase dominante estadounidense el carácter de adversario de China y ello de un modo u otro transcenderá con variantes con uno u otro gobierno.

Estados Unidos mantiene un déficit consistente en el flujo neto de inversiones. Es un país deudor porque su deuda pública es financiada por capital extranjero, lo que hasta ahora es una fortaleza por el atractivo de ser todavía el principal centro financiero del mundo, pero constituye una vulnerabilidad a futuro. No existen razones para que la pandemia y la crisis económica puedan contribuir a mejorar el balance comercial ni financiero.

El déficit fiscal ha tenido un empeoramiento progresivo y en 2019 se gastaron 1 06 mil millones de dólares por encima de los ingresos, lo cual se adiciona a la deuda pública que alcanzó 23,3 mil millones de dólares. Si bien el monto de los ingresos al presupuesto aumentó, el incremento de los gastos fue muy superior comparado con el año precedente.

El presidente Trump ha planteado que el crecimiento económico incrementaría los ingresos y compensaría la reducción impositiva de 2017. Sin embargo, la economía creció 2,9 % en 2018 y se desaceleró a 2,3 % en 2019. El déficit fiscal y la deuda federal continuaron aumentando antes de

la COVID-19 y la crisis económica. Debido a los cuantiosos paquetes de salvamento aprobados se considera conservadoramente que el déficit fiscal se incrementará en 25 % y alcanzará 1,1 billón de dólares (Cox, 2020).

El gobierno entregó multibillonarios paquetes de rescate. Ello acrecentó el fardo de la deuda, que tendrá efectos sobre el bienestar social a largo plazo. De acuerdo con las estimaciones del Comité para un presupuesto federal responsable (Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB), los déficits presupuestarios sumarán más de \$ 3, 8 billones (18,7 % del PIB) este año, y \$ 2,1 billones (9,7 % del PIB) en 2021. Esta institución proyecta que la deuda pública excederá el tamaño de la economía para fines del año fiscal 2020 y eclipsará el récord anterior establecido después de la Segunda Guerra Mundial en 2023 (CRFB, 2020).

Si Biden accede al gobierno se plantea importantes gastos del orden de los 2 a 3 billones de dólares —aproximadamente un 3 % del PIB. Aunque la distribución de los mismos tenga otras prioridades, como mejorar la distribución de los ingresos y el restablecimiento de la infraestructura del país, mediante un incremento de los impuestos a los ricos, debe mantener e incluso aumentarse los desequilibrios fiscales (Biden & Carpenter, 2018).

COVID-19 Y SU SINCRONIZACIÓN MUNDIAL

Las dos crisis económicas y financieras que anteceden a la actual en 2001 y 2008, estuvieron vinculadas al estallido de burbujas financieras y agudización de contradicciones debido a la profundización de políticas desregulatorias y de apertura al mercado (Fernández, 2009). Es decir, las políticas neoliberales y la globalización del capital no son ajenas a las consecuencias negativas para ciertos sectores de la economía estadounidense, pero también por su tamaño tienen fuertes repercusiones dado los mecanismos de transmisión para la economía mundial.

No cabe duda que la extensión interna de la epidemia de la COVID-19 en Estados Unidos, ha

afectado seriamente a su economía, pero su intervinculación global desempeña una función que puede ajustarse, pero difícilmente retrotraerse totalmente. Los datos que se han venido conociendo así lo demuestran. Las medidas de cierre de actividades y el llamado aislamiento social físico, frenan o reducen la actividad económica, pero la recuperación será mucho más lenta y compleja. Las extensas relaciones económicas internas y externas, que en definitiva son relaciones humanas, acompañan la proliferación del mortal virus, y por lo tanto, el restablecimiento de la producción y los servicios en muchos ámbitos tendrá que cambiar para ajustarse a las nuevas circunstancias hasta que se disponga de tratamientos efectivos y vacunas dispuestas para aplicarse a toda la población. Es decir, no habrá recuperación económica en un país aislado por autosuficiente que sea. Es un problema mundial y debe tener solución a ese nivel, o se observaran restablecimientos parciales, por debajo de la etapa anterior al inicio de la crisis.

Un estudio para medir el posible impacto macroeconómico de desastres como la COVID-19, empleando técnicas econométricas, reconoce los efectos destructivos de un supuesto choque por tres meses, que conllevaría una pérdida acumulada de la producción industrial de 12,75 % y 24 millones de empleos durante diez meses. Con aumentos en la incertidumbre y el comportamiento de esta pandemia, sus efectos durarían años (Ludvigson *et al.*, 2020). Sabiendo que hasta el mes de octubre de 2020 la pandemia está lejos de ser controlada, se desarrollan nuevas oleadas de la enfermedad y no existen todavía vacunas efectivas que puedan aplicarse, cabe esperar una extensión de la crisis económica y las otras crisis y riesgos que la acompañan hasta 2021.

Es obvio que un enfoque político que trate de recuperar la confianza internacional en Estados Unidos, reconozca la importancia de la colaboración internacional y el papel de organismos mundiales en materia de salud y medio ambiente, como pareciera ser la inclinación de un gobierno

demócrata encabezado por Joe Biden, sería la mejor opción.

La Reserva Federal ha colocado sus tasas a los más bajos niveles para abaratar el financiamiento, haciéndolo cero o negativo (Pramuk, 2020). La acción combinada de estas medidas sin precedentes de la Fed, sumadas a los paquetes de rescate, busca garantizar que la economía estadounidense tenga fuentes financieras para la recuperación, quedando como una interrogante los efectos de estas políticas sobre los precios, la inflación y los mercados de capital en el período subsiguiente.

Las bolsas de capital parecen por el momento inmune a estos desequilibrios macroeconómicos y crisis en la economía real. Cabe preguntarse si una enorme emisión monetaria como la actual, con enormes déficit y deuda podrá ser asimilada por la economía sin mayores afectaciones financieras. Ello coloca el problema a futuro, en un escenario con elevados desbalances económicos, donde la disputa geopolítica y geoeconómica hace pensar a algunos en una nueva guerra fría, y la declinación de la hegemonía de Estados Unidos puede acelerarse dado los procesos precedentes y las políticas aplicadas hasta ahora.

Con independencia de las diferencias que se apliquen para enfrentar estos desafíos, no se puede desconocer que algunos aspectos de las políticas de Trump han comenzado a convertirse en tendencia política, en medio de discrepancias en cuanto a cómo llevarlos a la práctica. El reajuste a la globalización expresado por el enfoque conservador de Trump de alguna manera representa los intereses de Estados Unidos y encontrará expresiones distintas en un eventual gobierno demócrata. La etapa posterior a esta crítica situación, comparte rasgos comunes que deben influir en las políticas sobre los intercambios, viajes, migraciones y las relaciones productivas y de servicios. Las secuelas de la crisis serán perdurables. Los movimientos de trabajadores serán más regulados y reducidos para disminuir vulnerabilidades y riesgos. En general los controles migratorios serán más estrictos.

Las políticas en Estados Unidos en sentido general tienen una tendencia dominante a la continuidad más que al cambio, y el 2021 no será un momento de ruptura total incluso si vence la opción demócrata.

El gobierno de Biden, dependiendo de si los demócratas logran mantener el control de la Cámara y consiguen mayoría en el Senado, podría hacer perceptible distinciones estratégicas en el discurso político diplomático y un mayor reconocimiento del multilateralismo y el uso de instrumentos blandos en la policía exterior. En la Plataforma demócrata se plantea la importancia para Estados Unidos desde la perspectiva de la seguridad de recomponer las instituciones y alianzas internacionales con su liderazgo en lugar de apartarse de ellas (Democratic Party Platform, 2020:64).

Sin embargo, dado las condiciones críticas de partida y un emergente consenso bipartidista en algunos asuntos, se reforzarán muchas de las tendencias policías que han caracterizado a la administración Trump, aunque de otra forma. Los factores y condiciones en la continuidad de la política exterior de Estados Unidos se deben a prioridades geopolíticas y a la necesidad de cumplir con los intereses y objetivos estratégicos del imperialismo, ajustado a factores y circunstancias actuales de la correlación de fuerzas

CONSIDERACIONES FINALES

El año electoral 2020 en Estados Unidos ha sido complicado adicionalmente por dos crisis entrelazadas: pandemia de la COVID-19 —una auténtica crisis de salud global— que desató la crisis económica más profunda de la economía mundial y de Estados Unidos desde la Gran Depresión. Ambas crisis tienen una relación estrecha y aunque la crisis económica eclosiona por la epidemia, tiene su raíz en problemas sistémicos y estructurales del capitalismo. Estas crisis agudizan las contradicciones estructurales, los retos preexistentes en la sociedad estadounidense en el plano

político, social e ideológico, alcanzando la política sobre identidad, los problemas religiosos y los conflictos raciales. En el caso del imperialismo estadounidense, los problemas no fueron siquiera aliviados en el período de expansión económica, porque no lograron solucionar las contradicciones y desequilibrios de la crisis económica y financiera 2007-2009.

Las contradicciones económicas de Estados Unidos y sus tensiones sociales, e incluso políticas no son atribuibles exclusivamente a la administración de Donald Trump, ni al ajuste conservador y nacionalista de sus políticas, pero las mismas han empeorado por los métodos de dividir, confrontar y estimula el caos para lograr sus objetivos políticos coyunturales. El trumpismo ha favorecido el aumento del déficit fiscal, la deuda pública, la continuidad en la concentración de los ingresos y la riqueza del país en muy pocas manos. Ha dañado el orden internacional de posguerra y puesto en juego importantes alianzas y acuerdos internacionales que dañaron la confianza en el liderazgo mundial de la gran potencia imperialista incluso entre sus principales aliados.

La concentración de la riqueza y los ingresos constituye un problema económico, en la medida que la creciente deuda de los hogares limita la demanda agregada y ello afecta el crecimiento económico. Pero también es un reto para el sistema político estadounidense. Los contagios del virus y los fallecimientos han tenido una desproporcionada representatividad en la población latina y en los afroestadounidenses en medio de la crisis económica y la pérdida de empleos.

La aprobación de cuantiosos paquetes de financiamiento para aliviar los efectos de la crisis económica y sanitaria mediante la expansión monetaria y la reducción de los intereses, alivian la situación coyuntural, pero crean riesgos adicionales para la estabilidad del sistema monetario y financiero, al trasladar estas obligaciones al futuro. Tales medidas anticrisis incrementan las dudas sobre la estabilidad y

sostenibilidad estadounidense como líder económico mundial, y el papel del dólar dentro del sistema monetario y financiero global.

La actual crisis ha puesto en evidencia la necesidad del multilateralismo y la colaboración internacional, pero la política de Trump ha sido contraria a ello. Este rasgo del trumpismo afecta seriamente la confianza en su liderazgo y obstaculiza las posibilidades de una salida exitosa de la crisis que tendrá repercusiones en el desempeño de su economía, los problemas sociales y políticos mucho después del 20 de enero de 2021. Este sería una de las tendencias que se propone recuperar un eventual gobierno de demócrata: el multilateralismo y una recuperación de acuerdos internacionales que se han roto y han deteriorado la confianza en Estados Unidos en temas clave como la colaboración en el enfrentamiento a la pandemia, la proliferación de armas y la preservación del medio ambiente.

El comportamiento de la economía que aparentaba una mejoría ha sido frenado a finales del año 2020 por otro incremento en la epidemia, los casos de contagio y el número de fallecidos. Ello indica que el comienzo del nuevo gobierno, cualquiera sea, tendrá que empezar por enfrentar estos desafíos no resueltos, sin descartar que estalle una crisis financiera. Las crisis que se enfrentan por Estados Unidos son profundas y de gran complejidad. Las rupturas en las cadenas de suministros globales y las relaciones económicas internacionales resultado de la pandemia y la crisis económica global se espera tengan una gran trascendencia y perdurabilidad que podría extenderse más allá de 2021. Factores objetivos y subjetivos sobre el empleo, las formas de trabajo, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial en los procesos productivos y de la vida en general, serán privilegiados en el proceso productivo, los servicios y en la economía internacional.

Las tendencia al conflicto entre potencias como parte de la estrategia de seguridad nacional, la ruptura y renegociación de acuerdos de libre comercio, el rechazo o reformulación de acuerdos multilaterales sobre armas y medio ambiente, perjudican la posición de Estados Unidos en el balance mundial de fuerzas. El énfasis puesto en ambiciones geopolíticas y geoeconómicas, guerras económicas, bloqueos, empleo indiscriminado de los instrumentos económicos de poder y otros medios de subversión, no generan confianza y hacen más difícil el restablecimiento de la economía global y las relaciones internacionales en el escenario posterior al fin de la pandemia y la crisis económica.

Las anteriores tendencias políticas de Estados Unidos de no ser corregidas o reformuladas parcialmente a partir de la llegada al gobierno de los demócratas, deben acelerar el proceso de declinación de su poder relativo frente a las potencias emergentes y el resto del mundo. El liderazgo político estadounidense requiere de una estrategia más balanceada y realista, que pueda ajustarse a las condiciones concretas de la correlación de fuerzas para mantener espacios de colaboración internacional y coordinación de política con sus aliados, e incluso los considerados como potencias adversarias. La visión expresada por el aspirante Biden se corresponde con estos propósitos.

Las desafiantes condiciones de inicio que enfrentará el gobierno estadounidense después del 20 de enero de 2021, considerando las variantes entre la continuidad destructiva unilateral de Trump y la reconstrucción centrista y multilateral demócrata representada por Biden, estará enmarcada por estas múltiples crisis y desafíos trascendentes, que dado el propósito común de demócratas y republicanos fortalecerá la tendencia a la continuidad de política con las variantes apuntadas para el período 2021-2024.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Biden, Joseph R & Michael Carpenter (2018): "Foreign Affairs Issue Launch with Joe Biden", *Foreign Affairs*, January 23, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-01-23/foreign-affairs-issue-launch-joe-biden/>, acceso: 31 de octubre 2020.
- Blackwill, Robert D. & Jennifer M. Harris (2016): *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. A Council on Foreign Relations Book, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge: Massachusetts, 384 pp.
- Blackwill, Robert D. & Meghan L. O'Sullivan (2014): "America's Energy Edge, The Geopolitical Consequences of the Shale Revolution", *Foreign Affairs*, Volume 93, Number 2, March/April, pp. 102-114.
- Bureau of Labor Statistic (2020): "The Employment Situation-April" (U.S. Department of Labor: Washington D.C.), May 8, acceso: 11 de mayo 2020.
- Casselman, Ben (2020): "The Jobs Numbers Will be Terrible. Here's How to Interpret Them", *The New York Times* (New York) May 6th en <https://www.nytimes.com/2020/05/06/business/economy/coronavirus-unemployment-jobs-report.htm>, acceso: 7 de mayo 2020.
- Chesnais, F. (2020): "Situación de la economía mundial al principio de la gran recesión COVID-19: referencias históricas, análisis y gráficos" en *Viento Sur Info*, <https://vientosur.info/spip.php?article15872> acceso 6 de mayo 2020.
- Chotner, Isaac (2020): "Q. & A. Jeffrey Sachs on the Catastrophic American Response to the Coronavirus", *The New Yorker*, April 21, <https://www.newyorker.com/news/q-and-a/jeffrey-sachs-on-the-catastrophic-american-response-to-the-coronavirus>, acceso: 23 de abril 2020.
- Cox, Jeff (2020): "US surges 25% in fiscal 2020 and is \$1,1 trillion over the past year", CNBC, February 12, <https://www.cnbc.com/2020/02/12/us-deficit-swells-25percent-in-fiscal-2020-up-1point1-trillion-over-past-year.html>, acceso: 10 de marzo 2020.
- CRFB, Committee for a Responsible Federal Budget (2020): "New Projection: Debt Will Exceed the Size of the Economy This Year", <http://www.crfb.org/blogs/new-projections-debt-will-exceed-size-economy-year>, acceso: 21 de marzo de 2020.
- Democratic Party Platform (2020): Dirección URL: <https://www.presidency.ucsb.edu/people/other/democratic-party-platforms/>, acceso: 23 de octubre 2020.
- EIA (2020): U.S. Energy Information Administration, "Short Term Energy Outlook" April.
- Eichengreen, Barry (2020): "Donald Trump is Wrong; the Economic Hit of the Coronavirus Will Last For Years". *The Guardian*, April 13, <https://www.theguardian.com/business/2020/apr/13/donald-trump-is-wrong-the-economic-hit-of-the-coronavirus-will-last-for-years>, acceso: 18 de abril de 2020.
- Fernández Tabío, Luis René (2009): *Estados Unidos: la Gran Depresión del siglo XXI*. Crisis Mundial Capitalista, Colección Especial No. 6, La Habana: Editora Política, 38 pp.
- Gopinath, G. (2020): "El Gran Confinamiento: La peor desaceleración económica desde la Gran Depresión", *Diálogo a Fondo*. El blog del FMI sobre temas económicos de América Latina, <https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13190>, https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/us_oil.php/, acceso: 30 de abril de 2020.
- Ludvigson, Sydney C. et al. (2020): "COVID19 and the Macroeconomic Effects of Costly Disaster", *NBER Working Papers*, No. 26987, April, <https://www.nber.org/papers/w26987.pdf>, acceso: 3 de mayo de 2020.
- Navarro, Peter (2018): "Why Economic Security is National Security", The White House, Dec. 10: <https://www.whitehouse.gov/articles/economic-security/national-security/>
- NBER (2020): "US Business Cycles Expansions and Contractions." *The National Bureau of Economic Research*, <https://www.nber.org/cycles.html>, acceso: 25 de marzo de 2020.
- OECD (2020): *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020* (Paris: OECD Publishing), <https://doi.org/10.1787/7969896b-en>. <https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7969896b-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F7969896b-en&mimeType=pdf>, acceso: 5 de abril de 2020.
- Parker, George (2020): "We are Living in a Failed State. The coronavirus didn't break America. It revealed what was already broken", *The Atlantic*, June, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/underlying-conditions/610261/?utm_source=share&utm_campaign=share, acceso: 5 de mayo de 2020.
- Pramuk, Jacob (2020): "Most voters support government taking a bigger role in the economy during the coronavirus crisis, NBC/WSJ poll says", *CNBC*, April 19, <https://www.cnbc.com/2020/04/19/coronavirus-updates-voters-support-government-role-in-economy-nbcwsj-poll-says.html>, acceso: 22 de abril de 2020.

- Rapp-Hooper, M. (2020): "Saving America's Alliances. The United States Still Needs the System That Put It on Top" *Foreign Affairs*, Volume 99, Number 2, March April, pp. 127-140.
- Siegel, Van Dam (2020): "U.S. economy recoups two-thirds of ground lost in first half of year, but there is still far to go." *The Washington Post*. October 29. <https://www.washingtonpost.com/business/2020/10/29/third-quarter-gdp-economy/> Acceso: 1 de noviembre, 2020.
- Stiglitz, Joseph E. (2019): *Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar* (Barcelona: Penguin Random House, Grupo Editorial, S. A. U.).
- The Economist* (2020): 2-8 de mayo, Volumen 435, número 9192, Londres.

OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- Piketty, Thomas (2014): *Capital in the Twenty- First Century*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Suárez-Cao, Julieta (2013): "Estados Unidos: crisis económica, reelección presidencial y polarización política", *Revista de Ciencia Política*, 33(1), pp.185-205. (Santiago), <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2013000100009>
- Zoellick, Robert B. (2020): "Biden 's Domestic Priorities Should Guide His Foreign Policy. The United States Needs a Plan that Starts at Home but Looks Abroad", *Foreign Affairs*, September 8, <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-america/2020-09-08/bidens-domestic-priorities-should-guide-his-foreign-policy/>, acceso: 31 de octubre 2020.



La Sombra Larga: 2020, El Coronavirus y América Latina

The Long Shadow: 2020, The Coronavirus and Latin America

MSc. PÁVEL ALEMÁN BENÍTEZ

Investigador Auxiliar, CIPI

e-mail:pavel@cipi.cu

Numero ORCID:0000-0002-0715-228

RESUMEN:

El contagio del coronavirus SARS-CoV2 comenzó hace casi un año cuando se identificó este virus en la ciudad china de Wuhan. A diferencia de siglos anteriores, en que las enfermedades contagiosas se transformaron en epidemias devastadoras pero asincrónicas en su presencia a escala global, por los límites que las distancias y las barreras geográficas imponían, la interconexión global permitió su rápida progresión. La economía mundial se encontraba en una crisis reforzada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la República Popular China. Pero la paralización de la vida cotidiana y la disminución del transporte ante la rápida expansión del coronavirus, no sólo agravó la crisis económica preexistente, sino que ha impactado profundamente en nuestros hábitos que trascienden a la política. El efecto ha sido multiplicado en la periferia global y en particular en América Latina que se volvió el epicentro de la pandemia. Y esto ha complejizado el contexto latinoamericano, que ya tenía agravada su conflictividad social y política desde finales de 2019. **Palabras clave:** Coronavirus, América Latina, crisis económica, políticas públicas, política.

Abstract:

The spread of the SARS-CoV2 coronavirus began almost a year ago when this virus was identified in the Chinese city of Wuhan. Unlike previous centuries, when contagious diseases became devastating epidemics but asynchronous in their presence on a global scale, due to the limits imposed by distances and geographical barriers, global interconnection allowed for their rapid progression. The world economy was in a crisis reinforced by trade tensions between the United States and the People's Republic of China. But the paralysis of daily life and the decrease in transportation due to the rapid expansion of the coronavirus, not only aggravated the pre-existing economic crisis, but has deeply impacted our habits that transcend politics. The effect has been multiplied in the global periphery and particularly in Latin America which became the epicenter of the pandemic. And this has made the Latin American context more complex, which had already aggravated its social and political conflict since the end of 2019.

Key words: Coronavirus, Latin America, economic crisis, public policies, politics.

INICIOS DE PARTIDA: LAS MALAS NOTICIAS

El año 2020 va a ser recordado tristemente en la historia de la civilización. Por siglos muchas enfermedades contagiosas adquirieron notoriedad por su mortalidad y la incapacidad de poder brindar un tratamiento efectivo para su cura. La evolución humana, de su conocimiento, capacidades científicas y tecnológicas, así como de sus sistemas sanitarios han provisto tratamiento para muchas de ellas, al punto que algunas suelen encontrarse sólo en las referencias históricas o en los libros de Medicina. Muchas hipótesis, algunas de ellas derivadas de la paranoia y de ciertas teorías de la conspiración acreditaron el origen del coronavirus SARS-CoV2 a la combinación de segmentos de ARN viral para el desarrollo de armas biológicas. La mayor parte de los científicos que han opinado sobre el tema han negado tales suposiciones.

Sin embargo, hay otras cuestiones más tangibles. Antes de que comenzara a propagarse en Wuhan a finales de 2019, América Latina como región pasaba por un momento complejo respecto a la economía global. Y no pocos países tuvieron significativos procesos de movilización social que tenían entre algunas similitudes la protesta contra los efectos de la aplicación de políticas económicas neoliberales. Entre otras, destaca la reducción del gasto público en los servicios de salud, una parte de los cuales es privado.

Siendo honestos, ninguna sociedad estaba preparada para lidiar con la propagación y agresividad de una pandemia como la de este coronavirus. Ni siquiera todos asumieron la misma actitud. Algunos países como Suecia asumieron la teoría de la inmunidad de rebaño, cuya eficacia está aún en duda al menos en lo concerniente a esta enfermedad. La gran mayoría se vieron ante la necesidad de tomar medidas de aislamiento social y paralización de la vida cotidiana, incluido sectores de la actividad económica (turismo; servicios; transporte público y privado, incluido el transporte aéreo civil y el naval; minería y extrativismo energético; y remesas) cuyos indicadores

parecen señalar la quiebra de muchas empresas y en otros casos la necesaria intervención de los Estados para evitar que desaparezcan.

Otra dimensión menos evidente pero que ya comienza a asomarse como punta de iceberg es la competencia entre institutos de investigación, transnacionales y Estados, no sólo para obtener ingresos con la venta de equipos médicos, accesorios contra el riesgo biológico y vacunas. La competencia entre potencias por disponer a la mayor brevedad de candidatos vacunales (algunos países con más de uno), abre otro campo de batalla en la geopolítica mundial, fundamentalmente entre Estados Unidos, la Federación Rusa y la República Popular China. Incluso una nación como la República Popular Democrática de Corea ha optado por mostrar otra arista: la importancia de cerrar oportunamente y controlar sus fronteras como forma eficaz de impedir la propagación del virus en su territorio. De hecho, la pandemia del SARS-CoV2 debe ser también vista como reflejo de una de las dimensiones de la seguridad humana: la seguridad biológica. Y sin dudas ha de haber sido percibida por sus implicaciones para la salud, la economía y la política como un factor que afecta la seguridad nacional de los Estados.

No obstante, las peculiaridades de esta pandemia no afectan sólo la salud y la economía, no sólo conciernen a las disputas globales, sino que impactan profundamente en la política. América Latina como una región de extrema desigualdad en términos de ingresos y de acceso a los servicios, con un acumulado explosivo de conflictos sociales, cuenta ahora con otro elemento que puede influir en los realineamientos políticos del continente.

MEMORIA A CORTO PLAZO: EL COMPLEJO ENTORNO POLÍTICO LATINOAMERICANO DE FINALES DE 2019

En octubre del pasado año el clima político latinoamericano se estremeció con tres procesos de movilización y protesta social importante. En apariencias estos tres procesos no eran conexos entre

sí, pero reflejaban el rechazo a políticas de ajuste económico, fuera por acumulación o por retorno a su empleo. Nos referimos al poderoso estallido social en Ecuador, Chile y Colombia. Igualmente, la inestabilidad social y la protesta ciudadana también se expresaba en Bolivia tras el golpe que interrumpió el mandato de Evo Morales, tras haber ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y, por si fuera poco, el ya inestable escenario político peruano mostraba señales de una agria disputa entre fuerzas representadas en el Congreso y el presidente que había asumido recomponer la resquebrajada institucionalidad. En los 4 primeros casos, el aparato de coacción y coerción estatal fue duramente empleado para reprimir las manifestaciones, con un saldo importante de vidas y un costo político elevado en términos de legitimidad.

¿Pero cómo se llega a tal estado de cosas?

En el caso de Ecuador, una pésima gestión económica por parte del gobierno de Lenin Moreno, en medio de una situación global de caída de los precios del petróleo, llevó a un paquete de medidas (Decreto Ejecutivo 883) que resultaron demasiado agravantes para una sociedad cuya economía doméstica estaba al límite. Mal debe haberle sentado al pueblo ecuatoriano, la decisión gubernamental de implementar un grupo de medidas coherentes con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2019. De todas ellas las más chocantes eran la eliminación de los subsidios los combustibles, liberando los precios de la gasolina extra y del diésel, lo que derogaba una política de más de cuatro décadas; y la reducción de las vacaciones anuales pagadas de 30 a 15 días, así como la flexibilización de la contratación laboral. Paradójicamente, estas medidas iban acompañadas con las reducciones de impuestos al sector productivo y a ciertas importaciones, con lo cual el Estado perdía parte de su capacidad para aumentar sus ingresos fiscales. 12 días de protestas, 11 muertos, centenares de detenidos, y un uso injustificado y desmedido de

la violencia fue la respuesta estatal antes de derogar el impopular decreto.

Debe aclararse el matiz de corte clasista de estas medidas, pero en particular de la supresión de los subsidios a la gasolina, con la que el Estado dejaba de erogar 1 500 millones de dólares estadounidenses (USD). El diésel es empleado fundamentalmente por el transporte de carga y el transporte público, lo que concentraba 1 170 millones de la cifra anteriormente mencionada. La medida afectaría a los propietarios de vehículos privados en los 330 millones restantes. Como sostiene Pablo Ospina, “el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante” (Ospina Peralta, 2020: 38).

La respuesta del gobierno de Lenin Moreno no se limitó al empleo de los cuerpos de seguridad para reprimir, sino que intentó descalificar a los sectores de la sociedad que mostraban su descontento. No sólo criminalizó la protesta social, sino que intentó crear divisiones entre los manifestantes. “Paralelamente a esta violencia, presente desde el inicio con la proclamación del estado de excepción, el Gobierno intentó dividir a los actores entre la creación de un enemigo interno (los dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana) y los actores legítimos con los cuales se podía dialogar: los transportistas y el movimiento indígena con los cuales la estrategia fue sectorializar las demandas” (Le Quang, Chávez, & Vizuite, 2020: 78). Inculpar a Correa y sus partidarios de ser los responsables de aquellas jornadas de protesta ha tenido como efecto *boomerang* que hoy sean la fuerza política con mayores posibilidades ante las próximas elecciones.

Chile pasó también por un mes de octubre cargado de mucha protesta y violencia estatal, con una prolongación temporal y en sus efectos. De tal manera, el aumento del pasaje en el metro público de Santiago de Chile, fue la gota que colmó la copa

de 30 años de aplicación de políticas neoliberales ‘en democracia’. La sociedad chilena cuestionó a todas las fuerzas políticas (tanto a la derecha de la UDI y Renovación Nacional, como aquellas que han estado en la Concertación) por su responsabilidad en la aplicación de políticas económicas socialmente regresivas bajo el amparo de un sistema jurídico cuyo pilar es la Constitución aprobada en la época de Pinochet. El ataque e incendio a las propias instalaciones del metro de Santiago de Chile no debe ser entendido de manera superficial como un acto de vandalismo, sino como el ataque a una representación del sistema.

La represión desatada por las fuerzas policiales y armadas radicalizó y expandió socialmente la protesta que habían comenzado los estudiantes. El empleo de tácticas para discapacitar visualmente a los manifestantes (más de 300 manifestantes perdieron uno o ambos ojos por disparos de proyectiles) y la violencia sexual, conllevó a la erosión de la aprobación de la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Esto se expresó no sólo en la salida de funcionarios de alto rango, sino en un dilatado proceso de diálogo cuyo resultado final será una nueva Constitución Política. La convulsión social ha alcanzado incluso a cuestionar el rol del sistema político en la conducción del debate sobre la forma en que debe ser conformada la Asamblea Constituyente.

En Colombia, en octubre de 2019, el Centro Democrático, fuerza política que articula el respaldo al gobierno de Iván Duque, había perdido las elecciones regionales en la capital Bogotá, pero también en Cali y Medellín. Esta última es una derrota esencial para el uribismo, que ha perdido terreno ya en varias elecciones regionales en su propia cuna. A los reclamos por los proyectos de pensiones y reforma laboral y tributaria, se unió el tema de la violencia política, ejercida por las fuerzas armadas de forma abiertamente escandalosa.

La masacre de un grupo de menores en un operativo militar contrainsurgente fue el detonador más poderoso para que comenzaran masivas pro-

testas en noviembre de dicho año. En Colombia, uno de los temas de trasfondo en la conflictividad social es el incumplimiento sostenido de las obligaciones del Estado para hacer viable los acuerdos de paz alcanzados con las FARC-EP. A la falta de garantías para la seguridad y la reinserción social de los ex combatientes, se sumó el expansivo control territorial y los desplazamientos humanos que provoca el paramilitarismo y el asesinato o desaparición de líderes sociales. El mayor fracaso es que una facción disidente haya retomado las armas.

En diciembre del propio año, pese a la protesta social el gobierno de Iván Duque empleó a fondo sus articulaciones legislativas para aprobar la llamada Ley de Crecimiento. Esta al igual que otras similares en la región proviene de una matriz económica neoliberal. Como han destacado algunas fuentes, las reducciones tributarias implican “la pérdida de ingresos para el Estado, debido a las numerosas exenciones fiscales que plantea, que pueden suponer una merma de hasta un 6,6% del PIB.” (Rodríguez Pinzón, 2020) Golpeando económicamente a los sectores más desfavorecidos y a la clase media, el gobierno colombiano se quedó ante un escenario de contracción del gasto público y con menor capacidad de solventar políticas públicas que cumplieran su cometido de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

UN VIRUS QUE AGRAVA LA CRISIS PREEXISTENTE

¿Fue una sorpresa la llegada del coronavirus a América Latina? ¿Estaba preparada la región para asumir semejante reto?

En un mundo interconectado globalmente, con una parte importante de su comercio orientado hacia el exterior, era lógico pensar que la pandemia del SARS-CoV2 llegaría rápidamente al territorio latinoamericano. En ocasiones olvidamos que la capacidad de respuesta ante un reto de semejante naturaleza depende en gran medida, no sólo del establecimiento oportuno de políticas públicas de contención y mitigación. El

gasto público orientado a fortalecer los sistemas sanitarios con personal capaz y en las proporciones adecuadas, dotados de la infraestructura necesaria, es parte de las condiciones de posibilidad que definen tanto como la conducta societal ante una pandemia, el menor costo humano posible y la brevedad con la que se amortiguan los efectos de la pandemia.

En los últimos años la economía latinoamericana venía sufriendo una desaceleración progresiva como consecuencia de la crisis económica global, la contracción de las adquisiciones de materias primas por parte de la República Popular China y las incertidumbres derivadas de las tensiones provocadas por la guerra comercial entre ese país y Estados Unidos, así como cierto nivel de desacople entre ambas economías. En otras palabras: un ciclo donde la

balanza comercial se vio fuertemente afectada tanto por la disminución de las exportaciones como de las importaciones de bienes y servicios, aunque hay diferencias por subregiones y países. (Tabla 1)

Una evaluación de la CEPAL observaba un modesto aumento del volumen de las exportaciones entre el primer y el segundo semestres de 2019, antes de la crisis desatada por el coronavirus. Pero este crecimiento “no alcanzaría a contrarrestar la caída de los precios, en tanto que las importaciones se contraerían tanto en volumen como en precio (...) Los envíos de América del Sur experimentarían una contracción muy superior al promedio regional (6,7%) y reducciones tanto de los volúmenes exportados como de los precios. En ello influye el estancamiento económico por el que atraviesa la subregión” (CEPAL, 2019: 73).

TABLA 1. Comparativo del comercio de bienes 2017-2019

América Latina y el Caribe: Evolución del valor del comercio de bienes 2017-2019^a
(en porcentajes)

Región / Subregión / Países	Exportaciones			Importaciones		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
América Latina y el Caribe	11,5	8,3	-2,0	8,0	11,2	-3,0
América Latina	11,6	8,4	-2,1	8,7	11,3	-3,0
América del Sur	13,8	7,6	-6,7	9,7	13,5	-6,9
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	12,7	6,2	-7,7	10,0	14,2	-10,4
Argentina	0,9	5,1	5,9	19,6	-2,5	-18,9
Brasil	17,8	10,0	-5,6	9,9	21,0	-0,5
Paraguay	8,3	3,1	-8,8	17,7	12,2	-8,5
Uruguay	10,1	6,3	4,0	2,4	5,2	-10,4
Venezuela (República Bolivariana de)	5,8	-14,8	-49,9	-21,8	23,6	-60,2
Comunidad Andina	17,3	10,3	-3,9	8,6	11,1	-0,3
Bolivia, E.P.	10,8	9,5	-2,7	9,3	8,5	-2,4
Colombia	15,9	11,8	-4,3	2,3	12,1	2,7
Ecuador	12,6	12,8	3,8	21,7	15,9	0,0
Perú	22,1	8,0	-7,2	10,2	8,1	-3,6
Alianza del Pacífico	11,4	10,0	0,4	8,5	10,9	-0,3
Chile	14,0	9,6	-6,6	10,9	15,1	-5,6
México	-4,2	-1,8	2,8	-1,2	-2,1	0,5
Centroamérica	7,3	2,0	2,6	6,7	5,2	-2,1
Costa Rica	7,0	6,2	3,3	4,3	4,8	-3,0
El Salvador	7,9	1,5	3,5	6,1	12,2	3,3
Guatemala	5,1	-0,2	2,5	8,5	7,3	-0,2
Honduras	9,3	0,3	2,6	7,2	7,7	-5,1
Nicaragua	9,8	0,6	-3,0	3,6	-11,4	-9,6
Panamá (no incluye la Zona Libre Colón)	3,9	3,1	4,3	8,8	4,0	-2,9
Panamá (Zona Libre Colón)	0,3	3,6	-10,0	-0,2	6,1	-7,0

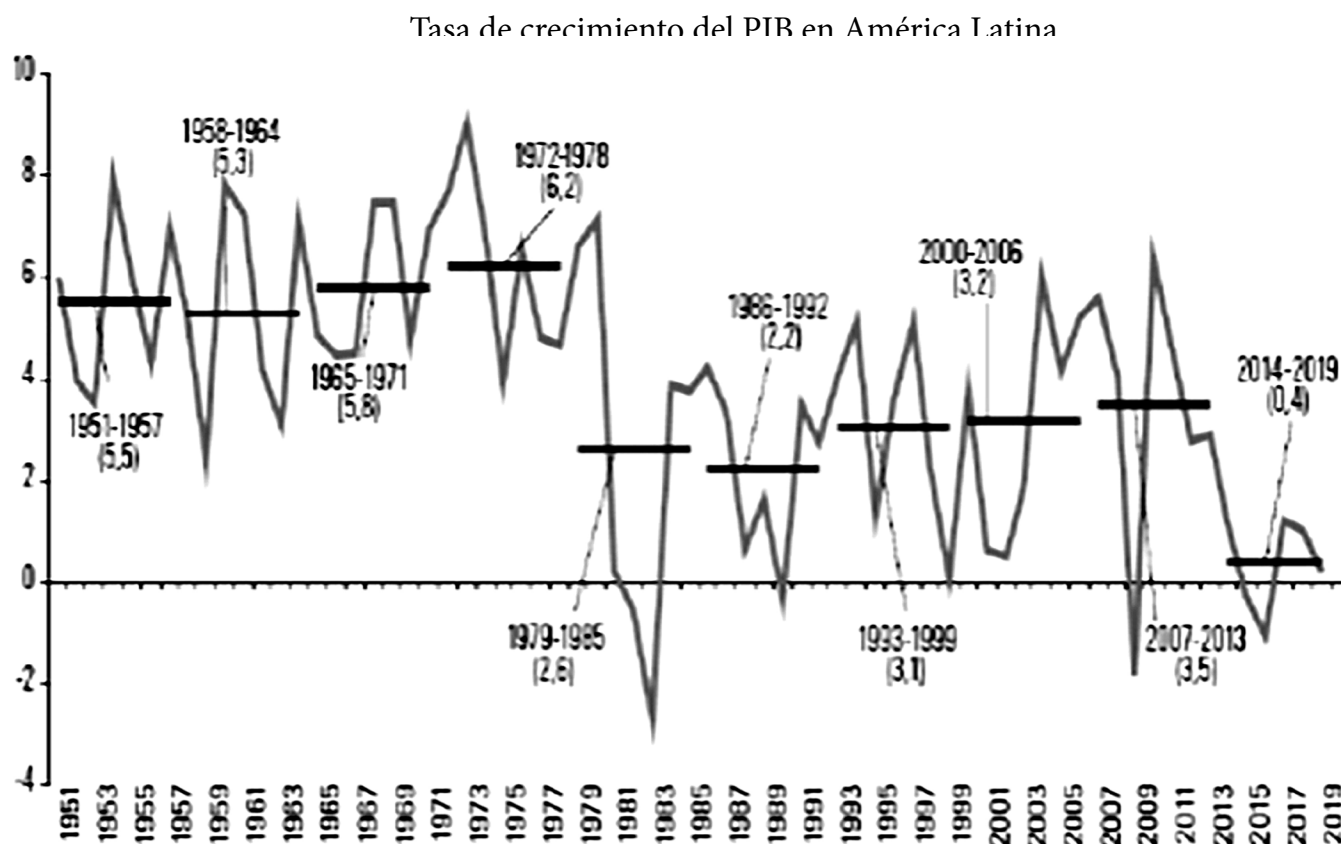
FUENTE: (CEPAL, 2019)

En muchos países de la región la renta nacional está fuertemente asociada a los ingresos externos que provienen de los sectores minero y el vinculado al extractivismo energético. Ambos han resultado muy perjudicados por la abrupta contracción de la demanda a escala global. Quizás el caso del petróleo muestra con toda la crudeza la gravedad del momento. Pese a sucesivos recortes de la oferta, pactados por los países miembros de la OPEP y algunos no miembros pero que son importantes suministradores de crudo al mercado mundial, a duras penas se ha podido estabilizar el mercado. Así que a duras penas se ha logrado estabilizar la cotización en una cota que ronda los 40 dólares estadounidenses por barril. Efectivamente, hasta las capacidades de almacenamiento se encuentran a tope y la mayoría de los productores de petróleo

vinculados a la fracturación hidráulica han tenido que cancelar sus operaciones porque los precios de referencia internacionales limitan la viabilidad económica de esta modalidad de explotación de hidrocarburos no convencionales.

Hay otros elementos relevantes, que nos permiten comprender el momento de debilidad que la economía de la región atravesaba justo antes de la pandemia del coronavirus SARS-CoV2. La tasa de crecimiento del PIB regional es la menor desde principios de los años 50 del pasado siglo. Con ello se combina la elevada deuda pública y el crecimiento de los pagos de la deuda y sus intereses. En la misma forma en que han crecido los pagos de la deuda externa han decrecido los gastos en inversiones y en el sector de la salud pública. (Ver Gráficos 1 y 2) CEPAL

GRÁFICO 1. América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento del PIB real 1951-2019
(En porcentajes)



FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
sobre la base de cifras oficiales

GRÁFICO 2. América Latina (16 países): pago de intereses, gastos de capital y gasto en salud de gobiernos centrales (2010-2019) (En porcentajes del PIB)

FUENTE: CEPAL, 2020: 8-9

llama la atención que en algunos países el nivel de endeudamiento externo respecto al PIB, era un factor preexistente muy desfavorable, con impacto negativo en una etapa de pandemia. El aumento del gasto público (no sólo en términos de incremento del gasto en salud pública) para enfrentar una situación excepcional como la del impacto del SARS-CoV2 en las sociedades latinoamericanas, provocaría un nuevo endeudamiento externo. De ahí que sea importante que las instituciones financieras evalúen la posibilidad de renegociar los adeudos de varios países si quieren evitar su colapso. “Existe gran heterogeneidad entre países, mientras el Paraguay y el Perú tenían niveles de endeudamiento inferiores al 25% del PIB a finales de 2019, otros países presentaban niveles mucho mayores, que alcanzaban el 89,4% en la Argentina, el 75,8% en el Brasil y el 61,3% en Costa Rica. El peso de la deuda no solo es notorio en los gobiernos centrales,

sino también en las empresas públicas no financieras. (...) Una situación especialmente preocupante en materia de la carga del servicio de la deuda se da en los países centroamericanos y caribeños.” (CEPAL, 2020: 8-9)

Al reducirse de manera sensible los ingresos procedentes del comercio exterior, los ingresos fiscales y caer abruptamente de las remesas. (Sayeh, 2020: 16-19) (Ver Gráfico 3), también se redujo el gasto público, incluido el necesario para mantener unos servicios de salud con capacidad para gestionar y mitigar una crisis sanitaria como la provocada por el coronavirus SARS-CoV2. No se trata sólo de la infraestructura y de la tecnología, sino del personal médico y paramédico suficientes, capacitados y protegidos con los requerimientos de orden material necesarios para preservarse así mismo del riesgo biológico. Se incluye también la cantidad de camas hospitalarias asignadas para ingresos, particularmente en las

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y ventiladores para respiración asistida. (Tabla 2-Serie)

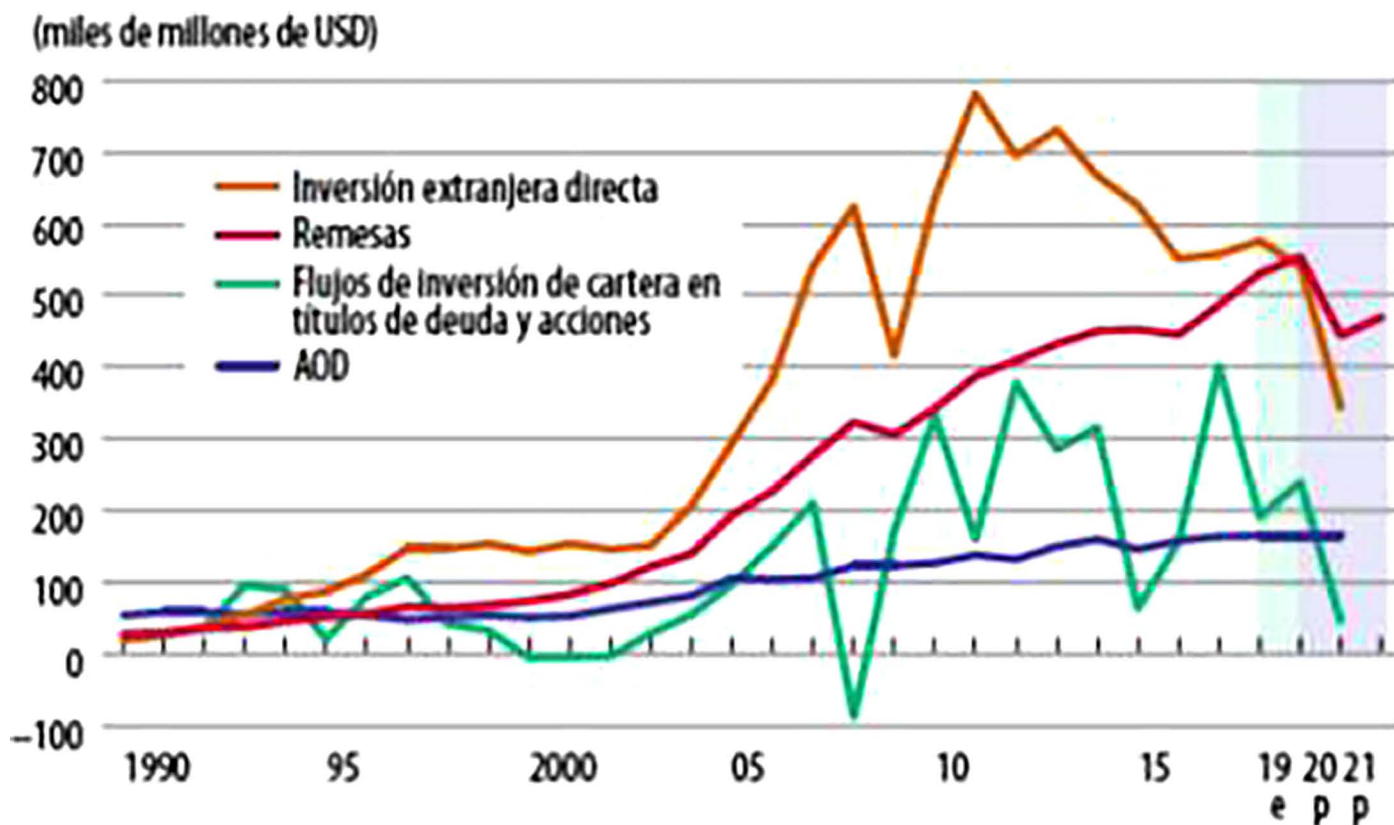
La rápida propagación de la pandemia en una región con una economía y servicios sanitarios debilitados tiene otros correlatos. La incertidumbre que generó la irrupción del SARS-CoV2 encontró disminuida la propia capacidad de respuesta de los gobiernos, que se encontraron en la disyuntiva de paralizar sus economías domésticas para proteger a sus ciudadanos o mantener cierto dinamismo social y económico a costa de la vida de ellos. Se percibe que varios países adoptaron tardíamente medidas de respuesta ante la crisis sanitaria, y luego han aplicado una ambivalencia de cierres parciales o totales y reaperturas sociales, que expresa una tensión entre los imperativos económicos y la salud pública. La pandemia generó El punto de equilibrio ante los imperativos de orden social y económico sería aquel que impida el colapso de los sistemas de salud y de la economía. De hecho, la llamada

“nueva normalidad” nos tendría que hacernos cuestionar qué no queremos conservar de la anterior “normalidad”.

Hay un problema incluso más serio que atañe a la región. Desde hace décadas, pero ciertamente con mucha saña luego de que varios gobiernos progresistas fueron depuestos por vía electoral o ilegítima en los últimos años, los derechos de los trabajadores han sido minimizados. Las políticas neoliberales lograron precarizar e informalizar el trabajo a gran escala, con regresiones en materia de derechos laborales que incluso lesionan derechos adquiridos en el comienzo de la segunda postguerra mundial. En América Latina, cerca del 50 % de los trabajadores pertenecen al sector informal.

Boaventura de Sousa cuestiona el impacto de la cuarentena como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV2 en trabajadores informales. “¿Qué implicará la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los primeros en ser despedidos cada vez que hay una crisis económica?

GRÁFICO 3. Evolución global de la IED, Remesas, Flujos de inversión de cartera en títulos de deuda y acciones, y AOD.



FUENTE: (Sayeh, 2020:18)

(...) La recomendación que hizo la OMS acerca de trabajar en casa y autoaislarse es impracticable, ya que obliga a los trabajadores a elegir entre ganar el pan de cada día o quedarse en casa y pasar hambre. (...) Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas con una clase media en mente, que es una pequeña fracción de la población mundial.” (De Sousa Santos, 2020: 48-49)

Lo cierto es que la acumulación de exclusiones sociales y derechos preteridos, y la reducción del papel del Estado como garante de los derechos sociales, en un proceso de “desciudadanización por mercantilización y desposesión” (Basile, 2020: 31), ha reabierto y profundizado la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos. Las estadísticas que a diario presentan la tasa de contagios y decesos tienen una naturaleza estructural y clasista. Cualquier ser humano es susceptible de contagio, pero el empobreci-

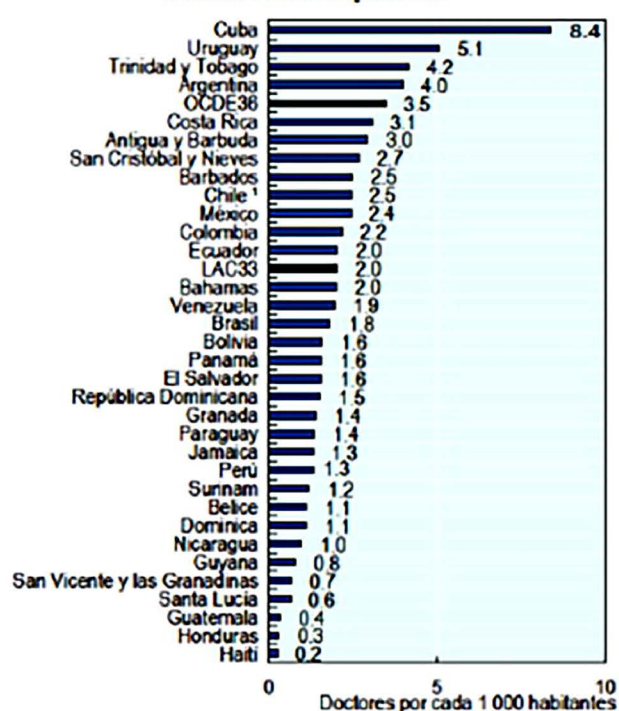
miento y las condiciones de vida al que una parte importante de las sociedades ha sido conducida, aumenta la posibilidad de que la mayoría de los casos se produzcan precisamente entre los sectores con menores ingresos y menores posibilidades de acceder a prestaciones de salud. A mayor asimetría en términos de trabajo, recursos, y atención sanitaria, mayores son los riesgos y las probabilidades de contraer y fallecer por este nuevo coronavirus.

Téngase presente que los indicadores de salud permiten tener una idea de la capacidad que tienen los Estados para satisfacer la prestación de servicios en ese sector. Sin embargo, hay que añadir que hay otros indicadores relacionados con las condiciones cotidianas de vida de los ciudadanos de cada país. Tratándose de una enfermedad contagiosa que ataca la inmunidad de las personas y que lesiona severamente el sistema respiratorio, hay otras cuestiones de índole

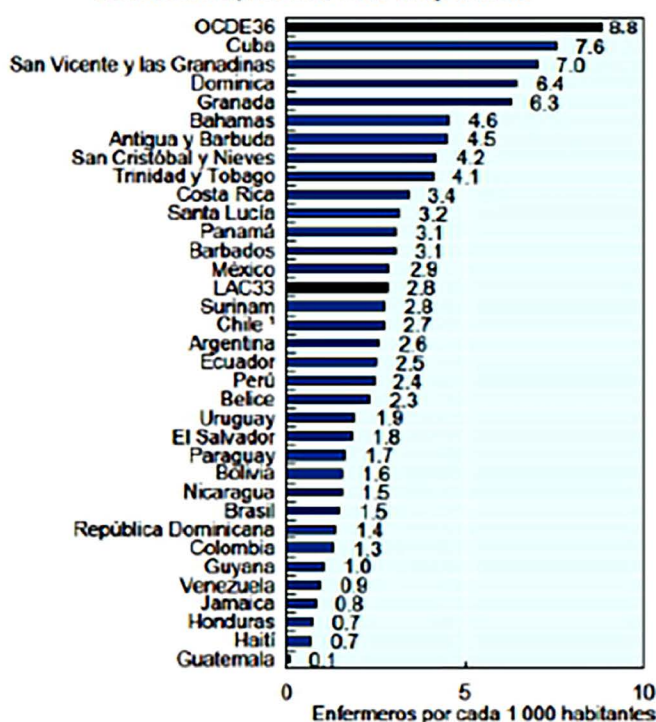
TABLA 2 (PARTE 1) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.

Número de médicos por cada 1.000 habitantes, 2017 o último año disponible

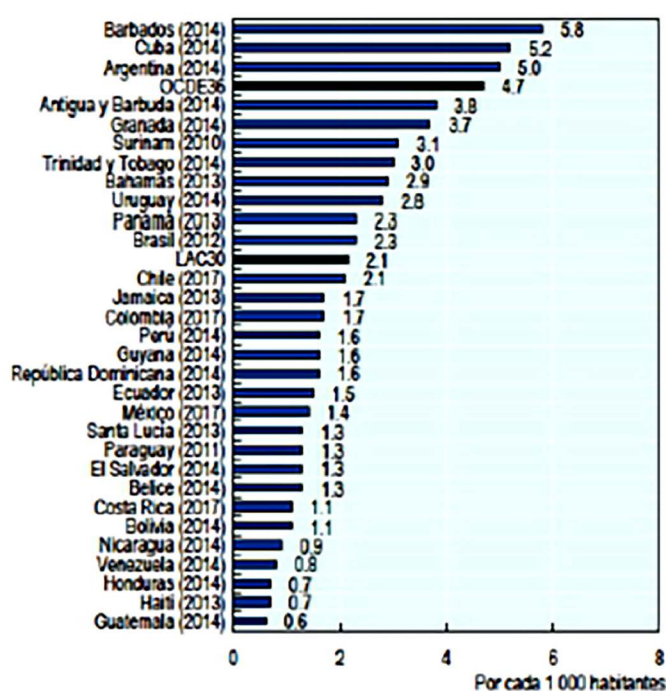


Número de enfermeras/os por cada 1.000 habitantes, último año disponible



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, último año disponible



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

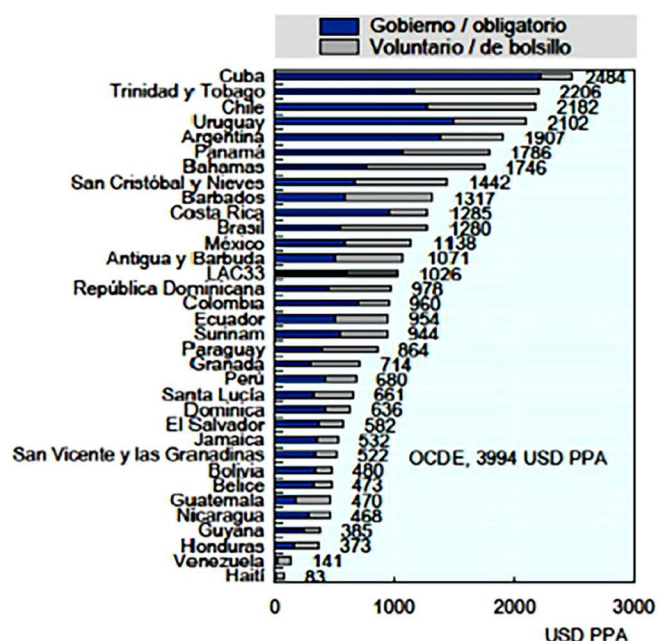
TABLA 2 (PARTE 2) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.

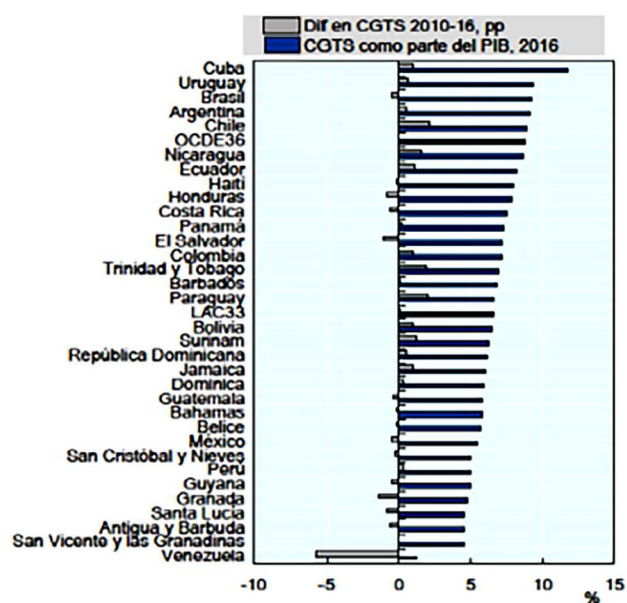
TABLA 2 (PARTE 3) Cantidad de profesionales de la salud y camas hospitalarias por cada 1000 habitantes.

Gasto en salud per cápita y como porcentaje del PIB, en países de América.

Gasto total en salud per cápita, (USD PPA), 2017



Cambio en el gasto total de salud como porcentaje del PIB, 2010-2017



FUENTE: (OECD/The World Bank, 2020: 121,127 y 139)

socio-económicas que tributan a generar un mayor o menor grado de vulnerabilidad. Las condiciones de hacinamiento o no, que están vinculadas al área del espacio habitable, la cantidad de personas que comparten ese espacio y hasta la ventilación (Ver Tabla 3).

EL CORONAVIRUS: ¿(DES) ACELERADOR DE LOS PROCESOS POLÍTICOS?

Para controlar los niveles de contagio, la gran mayoría de los Estados acudieron a declarar estados de excepción, restringiendo con ello la movilidad social, y empleando para ello a las fuerzas policiales e incluso militares. Se comprende que cualquier gobierno ampare la legalidad y legitimidad de sus actuaciones empleando disposiciones que forman parte del marco jurídico de cualquier país y que limitan el ejercicio de determinados derechos constitucionales para preservar la integridad de su sociedad. A fin de cuentas, se trata de preservar el derecho más elemental: el derecho a la vida.

Si bien es cierto que las medidas de excepción permiten ejercer el control social para garantizar el orden y evitar el contagio propio de la pandemia, pueden tener un empleo diferente para el

que fueron concebidas. En plena efervescencia de las movilizaciones de protesta por las condiciones de inequidad social, la aparición de la pandemia del Sars.Cov2 en América Latina interrumpió las dinámicas sociales y funcionó como factor momentáneo de desmovilización grupal.

El extraordinario avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) y su empleo masivo por una buena parte de la humanidad, permite la construcción de redes sociales en espacios virtuales. Como quedó demostrado desde la "Primavera Árabe", y más recientemente en las "revoluciones de color" en Europa del Este y el espacio post-soviético, la definición de las agendas de protestas, así como la coordinación de las mismas, ha sido en buena medida posible en plazos relativamente breves gracias a las TIC's. Algo similar sucede con los movimientos de protesta social latinoamericano, que privado coyunturalmente de ocupar los espacios territoriales, se ha mantenido en un estado de latencia. De hecho, en la misma medida en que por la presión de las economías los gobiernos acceden a derogar total o parcialmente las medidas de confinamiento social, ya comienzan a reaparecer las movilizaciones sociales, particularmente en

TABLA 3. Población latinoamericana y caribeña según cantidad de personas y porcentajes. (2020)

América Latina y Caribe	En cantidad de personas	En porcentaje (%)
Población urbana	503,2 millones	80%
Población sin acceso a Agua potable	223,5 millones	35%
Población en Hacinamiento	S/D	S/D
Población mayor de 65 años	56,6 millones	9%
Población en situación de Pobreza	191 millones	30.80%
Población en situación de Pobreza Extrema	72 millones	11.50%

FUENTE: (Basile: 2020: 26)

Colombia, con duros cuestionamientos hacia el gobierno de Iván Duque y a menguante la influencia política que aún tiene el ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Pero también en Chile la población vuelve a las calles para presionar por el Plebiscito que debe dar paso a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. También en Ecuador ha sido la presión de la movilización popular que resurge (después del catastrófico impacto que tuvo el inicio de la pandemia en Quayaquil), la que en buena medida logró que fuera reconocida la nueva propuesta electoral que agrupa a los partidarios del correísmo. E incluso en Bolivia, donde luego de ganar las elecciones para la presidencia, vicepresidencia y legislativo, el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), dependerá para su consolidación de la movilización popular para defender el voto, en un entorno en el que las fuerzas retrógradas de las Juventudes Cruceñistas y otros grupos afines en intereses regionales o ideológicos pretenden desconocer el resultado.

La percepción social de lo positiva o negativa que haya sido la administración de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV2, en conjunción con el impacto de las crisis económica, social y política (preexistentes y acumuladas en época de pandemia), puede tener una influencia relevante en la nueva reconfiguración de las cuotas de poder en los ámbitos legislativo y ejecutivo en varios países. Incluso en la emergencia de nuevas y vigorosas fuerzas políticas que disputen los espacios públicos y el escenario político. No hay que menospreciar un detalle: buena parte de los costos de estas múltiples crisis se han transferido precisamente a los sectores menos favorecidos, pero también a la clase media. Y esto puede ser un revulsivo poderoso para que las sociedades decidan tener más control de las agendas de políticas públicas.

Una de las cuestiones que ha quedado bajo el escrutinio público es que la aplicación de políticas económicas que reducen el papel del Estado. Las garantías materiales para el ejercicio de los derechos sociales, no pueden ser transferidas a un sec-

tor privado que obra discrecionalmente tomando como horizonte la rentabilidad económica. El haber privatizado buena parte de los servicios de salud al sector privado, pauperizando la prestación de estos servicios en el sector público, ha mostrado una negligencia criminal y una actitud omisa ante desafíos de esta naturaleza. Quizás el caso más notorio es el comportamiento del gobierno de Jair Bolsonaro, que ha llegado incluso a rechazar la adquisición de decenas de millones de dosis de una de las vacunas de origen chino por su supuesta poca fiabilidad.

LA GEOPOLÍTICA DE UNA PANDEMIA

Aunque hay en América Latina una capacidad científica y biotecnológica, que ha estado trabajando para encontrar nuevos métodos de diagnóstico e incluso la obtención de vacunas propias que sirvan como terapia y prevención de la enfermedad, esta no es lo que predomina en el escenario regional. De hecho, al momento de escribir este artículo Cuba es el único país del subcontinente latinoamericano y caribeño que ha inscrito dos candidatos vacunales. Y aunque resultan prometedores y cumplen rigurosamente las fases de prueba para su posterior uso en seres humanos, sus calendarios de prueba le ubican en relativa desventaja temporal frente a los candidatos vacunales de la Federación Rusa, la República Popular China y de la que desarrollan la firma AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

La campaña de desinformación mediática que siguió al anuncio por Vladimir Putin de que Rusia disponía de la vacuna Sputnik V y que esta había avanzado en su fase de ensayos clínicos, fue tan fuerte que las especulaciones llegaron incluso a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de cumplimentar las formalidades necesarias, que incluían la entrega de la información concerniente a sus avances, fue que la Federación Rusa incluyó su primer candidato vacunal en un ensayo que abarcaba decenas de miles de voluntarios de otros países. Parece ser que, pese a las animadver-

siones, tanto China como Rusia serán de los más importantes suministradores de vacunas contra el coronavirus en el mercado latinoamericano, que como unidad subcontinental es el territorio más afectado por el coronavirus.

No obstante, Latinoamérica carece de una estrategia articulada a escala regional para contener y mitigar el impacto del SARS-CoV2. Se pensará que este es un ejercicio de criterio poco pertinente y maximalista. Incluso alguien pudiera pensar que, si la sólida institucionalidad comunitaria europea no ha podido funcionar de manera concertada frente a este reto, sería un sinsentido proponerse hacerlo para América Latina. Pero Latinoamérica tiene la urgencia de hacerlo. Posee la mayor cantidad de contagios y fallecidos en una zona geográfica. Los límites a los recursos nacionales que cada Estado latinoamericano tiene por separado, refuerzan la necesidad de una coordinación de políticas públicas a escala regional. Sólo un enfoque de cooperación e interdependencia, en el marco de los esfuerzos globales para enfrentar la pandemia, es quizás la única opción viable para integrar recursos financieros, científicos y tecnológicos. Aunque la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha colaborado de forma eficaz proveyendo asesoría, se nota la carencia de una institución como la UNASUR, y el estancamiento de la CELAC.

La Unidad de Inteligencia que pertenece al mismo conglomerado de la revista *The Economist*, identifica claramente que la pandemia del SARS-CoV2 se ha convertido en un catalizador de procesos que ya se venían expresando con anterioridad y de forma más sutil. Una parte de ellos tienen que ver con la evolución futura de la economía: crecimiento muy moderado con probables crisis de deuda soberana. Sin embargo, el énfasis estaría en el reforzamiento del rol de la República Popular China como actor global (incluso con áreas de influencia en distintas zonas geográficas) y en

el debilitamiento del liderazgo global de Estados Unidos. (The Economist Intelligence Unit, 2020) El manejo exitoso de la pandemia en su territorio y su oferta de cooperar con otros Estados en materia de insumos médicos, ayuda económica y vacunas, hace que muchos países vean a China como un socio más confiable y asertivo que Estados Unidos, especialmente en la era Trump.

CONCLUSIONES

La pandemia SARS-CoV2 se ha convertido en un catalizador de una crisis múltiple en América Latina. Aun cuando en un futuro no lejano logre ser contenida su expansión y mitigados sus efectos en materia de salud, las repercusiones en materia económica y social serán de larga duración. Quizás sea posible la recuperación de la actividad económica en el corto plazo. Pero esto pasará por una intensa reorganización de la estructura laboral y de la actividad productiva y tendrá efectos muy negativos en el empleo. No será fácil reducir los indicadores de desempleo y pobreza.

En el terreno político, la crisis sanitaria tendrá impactos profundos. Quienes hayan gestionado desastrosamente la crisis provocada por el coronavirus, sin mostrar la diligencia que se espera de un gobierno para proteger a sus ciudadanos de manera eficaz, asumirán un alto costo político. No es descartable que en medio de los cambios que vendrán, varios de los gobiernos que más se destacaron por sus políticas de privatización sean sustituidos en el corto plazo. Tampoco hay que subestimar el enorme reto que tendrán que asumir los gobiernos que tendrán que hacerse cargo del desastre.

El siglo XXI está en un punto de inflexión. Aún no sabemos con certidumbre hacia dónde vamos, ni cuán profundos sean los cambios sociales. Todo parece indicar que la pandemia ha venido a confirmar el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Basile, G. (Marzo 2020): *Coronavirus en América Latina y Caribe: entre la terapia de shock de la enfermología pública y la respuesta de la salud colectiva/salud internacional Sur Sur*. IV Dossier de Salud Internacional Sur Sur. Grupo de Trabajo Salud Internacional CLACSO.
- CEPAL (2019): *Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile: Naciones Unidas, Obtenido de https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/cuadro_perspectivas_comercio_2019.pdf
- CEPAL (2020): *Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*, Santiago de Chile: Editorial de las Naciones Unidas.
- De Sousa Santos, B. (2020): *La cruel pedagogía del virus*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Le Quang, M., N. Chávez & D. Vizuite (2020): "El octubre plebeyo: cronología de doce días de movilización social", en D. A. al & D. Andrade, *Octubre y el derecho a la resistencia: revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- OECD/The World Bank (2020): *Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020*, Paris: OECD Publishing.
- Ospina Peralta, P. (2020): Ecuador contra Lenín Moreno, en B. e. De Sousa, *Ecuador la insurrección de octubre*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Rodríguez Pinzón, E. (Enero de 2020): *Colombia 2020: la movilización social como reflejo y oportunidad del cambio*. Madrid: Fundación Carolina.
- Sayeh, A. (Junio de 2020): Una forma de sustento en peligro. *Finanzas y Desarrollo*, 57(2).
- The Economist Intelligence Unit*. (2020): *Geopolitics after Covid-19: is the pandemic a turning point?*



La puerta brasileña del proyecto Bannon en Latinoamérica

The Brazilian door of the Bannon project in Latin America

DRA. C. SUNAMIS FABELO CONCEPCIÓN

Doctora en Ciencias Históricas. Máster Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales.

Profesora Titular y Licenciada en Filosofía.

Actualmente es Investigadora Auxiliar y Jefa de proyecto de investigación del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI).

Especialista en estudios de comunicación política y euroasiáticos.

e-mil: sunamisfabeloc@yahoo.es

Numero ORCID: 0000 0002 4752 2688

RESUMEN:

Este artículo tiene como objetivo general presentar una mirada al contexto latinoamericano partiendo de las relaciones que se establecen entre el Brasil de Jair Bolsonaro, la ruta de Steve Bannon y el ascenso de las fuerzas populistas de derecha a nivel internacional. Para ello se pone particular atención en el análisis del populismo de derecha como estilo comunicacional, tomando en consideración los principales elementos que se articulan en el proyecto aglutinador de las derechas mundiales, liderado por Steve Bannon. En este contexto, Brasil tiene un lugar importante en la región, por lo que se presentan algunos de los elementos más importantes dentro de los que se destaca el papel de las iglesias evangélicas en este escenario.

Palabras clave: Derecha; Populismo; Estilo Comunicacional; Steve Bannon; Bolsonaro; Iglesia Evangélica.

Abstract:

This article's general objective is to present a look at the Latin American context based on the relations established between Jair Bolsonaro's Brazil, Steve Bannon's route and the rise of right-wing populist forces at the international level. For this, particular attention is paid to the analysis of right-wing populism as a communicational style, taking into consideration the main elements that are articulated in the project that brings together world rights, led by Steve Bannon. In this context, Brazil has an important place in the region, which is why some of the most important elements are presented, highlighting the role of the evangelical churches in this scenario.

Key words: Right; Populism; Communicational Style; Steve Bannon; Bolsonaro; Evangelic church.

INTRODUCCIÓN

La llegada a la casa Blanca de Donald Trump en 2016 reorientó la política norteamericana hacia América Latina y el Caribe, bajo el lema “América First” (América Primero), y con ello el recrudecimiento de la Guerra de Cuarta Generación con el objetivo del cambio de régimen. Desde entonces, fenómenos como el uso de las *fake news*, la manipulación de los datos de internet y en general el uso extendido e intensivo de las TICs para la propagación de símbolos en contra de las fuerzas progresistas se ha intensificado. Actualmente en la región reina la inestabilidad y se han fortalecido las corrientes políticas de derecha, a la vez que se han revertido muchos de los procesos guiados por las izquierdas desde finales del siglo XX. En este escenario el caso de Brasil, con el arribo al poder de Jair Bolsonaro, es particularmente significativo.

Tanto Bolsonaro como Trump comparten un estilo de liderazgo autoritario, exacerbando determinados rasgos de la personalidad y dinámicas de comportamiento muy particulares, con la religión como un elemento central de la política, no solo para ellos sino también para sus seguidores. Al igual que Trump, y los europeos Salvini u Orban, el brasileño se pone en un lugar de representatividad del pueblo frente a lo que identifica como las elites progresistas. Asimismo representa un nuevo tipo de líder con un discurso particularmente antinmigrante y xenófobo. Estos elementos entre otros permiten incluirlo como representante de la nueva y polémica tendencia política, que puede ser identificada, de manera general, aunque no definitiva, como “populismo de extrema derecha o derecha radical”.

Dentro de la multiplicidad de elementos que articulan este fenómeno merece particular atención el análisis del populismo de derecha como estilo comunicacional, teniendo en cuenta que se trata de una dimensión distintiva de este fenómeno, en los nuevos tiempos, elemento diferenciador el cual se convierte en su principal variable de éxito.

Según define Antón-Mellón y Hernández-Carr, se trata de un método o estilo de actuación política que se utiliza para lograr un particular tipo de movilización social, normalmente en situaciones de crisis económica y, sobre todo, de crisis política por procesos de deslegitimación de las elites. Estilo construido con gran presencia de la demagogia, utilizada como palanca para acceder al poder (Sánchez Savín, 2019).

Es importante destacar que esta tendencia no puede homogeneizarse, así como tampoco puede conceptualizarse de manera definitiva, por cuanto se trata de un concepto en disputa que está en plena evolución y que según los escenarios donde se presenta adquiere determinados matices en función de las características históricas y socioculturales según sea el caso. Tanto en Estados Unidos, Europa o América Latina los estudios plantean claras diferencias (y matices regionales e intrarregionales), tanto en su evolución histórica o los factores comunicacionales que la conforman. Esta capacidad de adaptación y metabolización de la realidad circundante es precisamente uno de sus rasgos distintivos.

En cuanto a los elementos que permiten presentar esta tendencia como tal, desde el punto de vista estructural y como parte de su articulación y evolución, es importante tener en cuenta la influencia de la figura de Steve Bannon, mucho más que como un eslabón simbólico que une el desarrollo de este fenómeno entre Estados Unidos, Europa y América Latina, sino como uno de sus principales promotores y articuladores.

Como puede apreciarse este es un tema sumamente complejo, imposible de abarcar en apenas unas páginas, sobre todo porque pertenece al estudio de la historia del presente, muchos de los fenómenos que deben ser analizados están en plena evolución, indefinidos aún, entretejiéndose unos con otro. Es así que, este artículo tiene como objetivo general presentar una mirada al contexto latinoamericano partiendo de las relaciones que se establecen entre el Brasil de Jair Bolsonaro como

parte de la ruta de Steve Bannon por Estados Unidos, América Latina y Caribeña y Europa, en lo que se refiere a su proyecto aglutinador de las derechas mundiales y el ascenso de las fuerzas populistas de derecha a nivel internacional.

APUNTES SOBRE LA RUTA DE STEVE BANNON

Steve Bannon ha sido considerado como un oscuro propagandista del Tea Party y fundador del medio ultraconservador *Breitbart News*, que pasó a ser el cabecilla de la Casa Blanca de Trump (García, 2019).

Sin embargo, es importante apuntar los pasos de Steve Bannon como CEO de una empresa en Hong Kong en la industria del videojuego donde convenció a Goldman Sachs que invirtiera 60 millones de dólares en empresas que daban ataques para conseguir armas más poderosas. El negocio era rentable, pero los gamers se organizaron en foros para acabar con la empresa e imponer la obligación de tener que identificarse para no conseguir oro artificialmente con cuentas falsas. El negocio de Bannon terminó, pero fue cuando conoció la potencialidad de la comunidad gamer de ser politizada. Así que más adelante desde Breitbart contrató a un conocido troll de Internet llamado Milo Yiannopoulos como editor de tecnología que atrajo a legiones de gamers enojados con los políticos para convertirlo en supporters de Trump (Macías, 2020).

La fama mundial como promotor de la ultraderecha le llegó tras asesorar la campaña de Donald Trump y llevarlo a la Casa Blanca convirtiéndose así en su mano derecha durante los primeros meses de su presidencia. Desde entonces alrededor de Bannon ha emergido una fama “siniestra y difusa” que forma parte de su leyenda. “Ser oscuro es bueno”, dijo en una entrevista en Hollywood Reporter. “Dick Cheney. Darth Vader. Satán. Eso es poder” (García, 2019).

Según revelan fuentes consultadas, la ruptura del tándem Bannon-Trump, acabó abruptamente cuando el presidente estadounidense se enfadó

con su ideólogo por unas declaraciones a Michael Wolf en el libro *Fire and Fury* en el que llamaba a Trump “traidor” y “antipatriota” por sus vínculos con Rusia. A ello se suma que Bannon cada vez tenía más protagonismo, así como refiere una portada en la revista *Time* que lo retrataba como el verdadero presidente en la sombra. Finalmente, sus críticas públicamente a la hija de Trump, Ivanka, y a su marido, Jared Kushner, colmaron la copa y Bannon fue expulsado de la Casa Blanca. Este contexto propició que decidiera dar el salto hacia Europa, donde, desde entonces se ha dedicado a asesorar a todo partido de extrema derecha que se le ha acercado a pedir consejo (García, 2019).

Es así que nace *El Movimiento* que encabeza Bannon en el Viejo Continente. Se trata de un proyecto aglutinador de nuevas derechas mundiales, el cual encontró en el escenario político europeo un terreno propicio para cultivar las ideas de la nueva derecha populista, así como el ascenso de fuerzas políticas de corte de derecha radical populista o extrema derecha.

El Movimiento, presupuso convertirse en una especie de internacional de la nueva derecha mundial. El mismo tuvo su sede principal en Bruselas. Su líder ha sabido aprovechar la coyuntura para impulsar la corriente nacional populista con la misma receta basada en envolver de un halo revolucionario las políticas del ala más reaccionaria. Bannon también ha estado mano a mano con el húngaro Victor Orban y el italiano Matteo Salvini, a los que ha reconocido públicamente como los políticos más importantes hoy en Europa, con los que dijo tener una relación excepcional.

La web *Político*, definió *El Movimiento* como el primer club para populistas y euroescépticos. Su socio fundador es Mischaël Modrikamen, líder de una formación belga de segunda fila, el Parti Populaire, abogado, admirador de Trump, que espera que esta plataforma sirva como *think tank* para ayudar a grupos *anti-establishment* por toda Europa. Sus fundadores quieren que sea “un Davos

del populismo”. Por su parte, según explica en una entrevista con Daniel Verdú “es un motor evangelizador” (de la extrema derecha). Según ha declarado Bannon en otras ocasiones, *El Movimiento* es la respuesta exactamente contraria al Open Society Foundation de George Soros, quien es uno de sus chivos expiatorios preferidos, culpado por quienes difunden conspiraciones en internet como el impulsor de la “agenda globalista liberal” (Tori, 2019).

Las derechas han ganado mucho apoyo social a través de nuevos mecanismos comunicativos. El BREXIT y Trump se han perfilado como las dos grandes pruebas fehacientes de la emergencia del populismo de derecha a nivel trasatlántico y a nivel de países cristianos occidentales. Ambas opciones contaron con una oposición feroz de los más respetados medios de comunicación tradicionales y fueron claramente desanimadas y desdeñadas por el resto de medios, y sin embargo consiguieron su objetivo.

El estratega estadounidense, Steve Bannon, ha encontrado en las tecnologías de la informática y las comunicaciones importantes aliados para consumir sus objetivos. Las redes, en particular Facebook, así como Google y WhatsApp, contribuyeron enormemente no sólo a difundir *fake news*, sino a construir un nuevo terreno de debate en el que estas opciones políticas han florecido.

Los vínculos de Bannon con la campaña del Brexit, son evidentes y se relacionan sobre todo con el uso preciso del *big data* para fines electorales lo cual fue una de las claves de su éxito. De hecho, en octubre de 2015 era el vicepresidente de la polémica Cambridge Analytica, la empresa de big data que utilizó sin permiso los datos de millones de usuarios de Facebook para lograr una campaña más influyente entre los votantes indecisos. Robert Mercer, multimillonario estadounidense, fue el patrocinador de Breitbart y su principal valedor ante Trump. Mercer hizo su fortuna codirigiendo Renaissance Technologies, un hedgefund muy exitoso gracias a sus algoritmos, y una parte de su dinero lo

ha invertido en influir políticamente. Prestó apoyo con sus análisis de datos a Farage durante el Brexit, apoyó financieramente y tecnológicamente la campaña de Trump y era dueño de parte de Cambridge Analytica, la empresa del escándalo de la compra de datos a Facebook con el objetivo de manipular la opinión pública (Hernández, 2019).

De manera que Bannon ha aplicado todo ese *know how* a varios partidos europeos de extrema derecha para que esos partidos minoritarios, que habían quedado confinados en una esquina del pasado, como es el caso de Vox en España, resurjan y ocupen un espacio importante en el suelo público.

La campaña de Trump de 2016 como referente permite distinguir unos pasos que comparten todos estos candidatos ultraconservadores que, tenga o no que ver con la asesoría de Bannon, han logrado aumentar su poder estrepitosamente desde la llegada de Trump a la casa Blanca. Al respecto, Bannon en Roma afirmó: "Ninguno de estos partidos me necesita para ganar. Son muy sofisticados. Yo lo que puedo hacer por ellos es lo que hice por Trump, es decir, contarles simplemente que pueden ganar si mantienen su mensaje" (Tori, 2019).

Dentro de las propuestas de este “gurú de la extrema derecha mundial” está que las campañas huyan de los medios tradicionales, a los que recomienda criticar duramente como símbolo del “establishment manipulador”. De tal modo, sus candidatos se centran solo en medios amigos que no hagan preguntas trampa y en el manejo intensivo de redes sociales.

Otro de los ingredientes de la llamada receta Bannon es el desprecio por la verdad. A él se le atribuye la idea de “los hechos alternativos” como eufemismo para las mentiras. Se trata de difundir datos falsos en redes sociales y en discursos sin preocuparse por su veracidad sino por la fuerza emocional que puedan transmitir. Todo vale con tal de crear debates sociales de interés partidista, aunque se basen en datos falsos; y cuanto más escandalicen, más debate generarán.

LAS CONEXIONES DE BANNON CON JAIR BOLSONARO: BRASIL, UNA PUERTA EN AMÉRICA LATINA

En 2019, Steve Bannon comenzó a acercarse a América Latina. Tras la victoria de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, el empresario estadounidense, encontró en el mandatario brasileño a un aliado fundamental para intentar impulsar *El Movimiento* en la región. El estadounidense considera al mandatario brasileño como un hombre clave en su plan de darle un nuevo impulso al populismo de extrema derecha a nivel mundial. Bannon, asegura Cristina Manzano, directora de Esglobal.org, quiere crear una internacional de la ultraderecha, no hay más que ver su papel en el Brasil de Bolsonaro, y la Unión Europea (UE) ha sido el siguiente terreno a conquistar (Hernández, 2019).

Bannon conoció a Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, cuando su padre era aún un diputado con discurso antisistema aspirante a la presidencia de su país. Se reunieron por primera vez en agosto de 2018. Es así que, en diciembre del propio año, se llevó a cabo en Foz de Iguazú una Cumbre Internacional de los sectores conservadores más significativos de la región: “Primera Cumbre Conservadora de las Américas”. Fue organizada por Eduardo Bolsonaro y por la Fundación Índigo de Políticas Públicas, el *think tank* del ahora oficialista Partido Social Liberal. El encuentro pasó de ser una reunión menor de una ultraderecha marginal a una confluencia de actores, aún hoy marginales, pero que ahora cuentan con el respaldo del presidente del país más grande de Sudamérica.

La cumbre contiene desde su mismo nombre una definición ideológica. Pero, además, su logo es una imagen del mundo con el mapa de toda América y lleva los colores de la bandera de Brasil. Una flecha indica en el logo el camino que pretenden marcar: el de la derechización. Todo, según ellos, debe correrse a la derecha. Pero, además, los colores muestran el imaginario de este movimiento: el de un Brasil con un rol activo en la construcción de un frente regional conservador

que, a su vez, funcione como terreno fértil para el crecimiento de los pequeños reductos de extrema derecha y que sea capaz de ampliar la capacidad de influencia de estos exponentes dentro de los gobiernos liberales clásicos (Oliva, 2019).

Su principal objetivo fue aunar a la extrema derecha de América Latina, y organizar un movimiento con el fin de coordinar estrategias. Un hombre clave con gran influencia sobre Bolsonaro es Olavo de Carvalho, el Steve Bannon brasileño, quien señaló que “hay que hacer con la izquierda lo que los conquistadores españoles hicieron con los aztecas” (Luzzani, 2018).

Este primer encuentro —entre cuyos exponentes se contaron desde el candidato a la Presidencia de Chile, el pinochetista José Antonio Kast, hasta el ex-general colombiano Jorge Jerez Cuéllar y el destituido presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Miguel Ángel Martín— dio señas de que el Brasil de Bolsonaro estaría dispuesto a capitanear una nueva vuelta de tuerca en el giro conservador y a ocupar el vacío que no lograron llenar otras figuras más moderadas luego del derrumbe de los gobiernos progresistas y de izquierda en la región. En el encuentro también estuvo presente el ya célebre derechista Álvaro Uribe, ex-presidente de Colombia. “Pedimos a Dios que [Bolsonaro] tenga todo el éxito. Lo necesita Brasil, pero más lo necesita esta América Latina para tener la referencia de un gran gobierno. Hacemos nuestros votos, en esta hora de esperanza, para que ese gobierno le dé un gran ejemplo a nuestra América Latina y caribeña”, declaró Uribe (Oliva, 2019).

Eduardo Bolsonaro ya venía manteniendo contacto, así como con Bannon, con representantes de la bancada del ex presidente colombiano y con John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional de los EE.UU. En Foz declaró que Brasil “podría ser sede de un tribunal para juzgar las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, apoyando de esta manera una idea del opositor cubano, residente en Miami, Orlando Gutiérrez, también asistente a la cumbre (Oliva, 2019).

Entre los participantes de Chile, estuvo así como el ultraconservador excandidato presidencial José Antonio Kast; el abogado e integrante del Consejo para la Transparencia, Francisco Javier Leturia, y el ingeniero civil y director del International Center for Pension Reform, Carlos Gómez. Otros colombianos participantes fueron el general Jorge Jerez Cuéllar, comandante de operaciones contra las FARC y la senadora María Fernanda Cabal Molina. A ellos se sumaron los venezolanos Roderrick Navarro (Rumbo Libertad), y Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, exilado en EE.UU. y el senador paraguayo Fidel Zavala.

De manera que este encuentro puede considerarse un precedente, incipiente pero simbólico de *El Movimiento* en América Latina, al menos es una muestra de intento por organizarse las fuerzas de derecha más conservadora en la región. El hijo del presidente Bolsonaro, sin dudas tiene un lugar destacado en este proyecto. El mismo, es el primer representante en América Latina de *El Movimiento* que encabeza Bannon. Pero para ello resultó esencial la figura de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Un líder como este en el poder, con el respaldo del presidente Donald Trump, constituyó la posibilidad de facto para nuclear a su alrededor fuerzas de igual signo político y avanzar por todo el continente.

Es importante tener en cuenta que, en la estrategia de Bannon, *El Movimiento* resulta una fundación cuya finalidad es difundir las ideas de esa nueva derecha, pero para ello necesita el respaldo de políticos con mayor peso, en aras de aglutinar y legitimar estas fuerzas que han permanecido marginadas. Esta estrategia comenzó a idearse por Bannon en el contexto latinoamericano (aunque entonces no existía *El Movimiento* como tal), y posteriormente fue adaptada a la realidad europea, donde confluyeron toda una serie de factores debido a los cuales ha podido avanzar con mayor rapidez.

Su objetivo inicial en Europa era crear una tupida red de partidos populistas de cara a las elecciones de mayo de 2019 y en cierta medida lo consiguió; tales han sido los resultados de fragmentación política en el Parlamento Europeo, así como en cada uno de los países miembros, poniendo de manifiesto la crisis de los partidos tradicionales, o la incapacidad de los nuevos de reformar y de resolver los problemas reales de la gente, de forma que se siguen descomponiendo los primeros y los electorados se inclinan cada vez más a la ultraderecha. La estrategia para la Unión Europea se basó en que, aunque logren pocos diputados en las elecciones, los euroescépticos tengan un espacio para presionar al resto de las fuerzas. Sobre este fondo, las tesis y los partidos que apoya Bannon pueden acabar teniendo éxito en Europa. No se trata de que vayan a ser mayoría en el Parlamento, ni tampoco de que puedan acceder a grandes cuotas de poder, lo que es muy poco probable, pero sí de que alcancen una influencia sustancial a través de lo que podría denominarse política de fondo activista y desde ahí presionar y desestabilizar, procurando el orden conveniente, a través del caos (Hernández, 2019).

Retomando la llegada de Bolsonaro al poder y la influencia en la misma de Bannon como estratega y Eduardo Bolsonaro como facilitador influyente, debe decirse que de nuevo otra red social, como sucedió en EE.UU., en este caso Whatsapp (propiedad también de Facebook), resultó determinante en la amplia ventaja que obtuvo Bolsonaro en primera vuelta, y en el resultado final de la segunda vuelta, creando todo un ecosistema de *fake news* que se transmitían por el sistema de mensajería, y mediante la microsegmentación y el uso del *big data*, terminaron deconstruyendo la realidad política al mismo tiempo que construían una paralela en el imaginario de la población.

Tanto en Estados Unidos como en Brasil, el mensaje que se iba alentando era similar (con las especificidades propias de cada país): la lucha

contra el *marxismo cultural* y la *ideología de género*, además de un discurso crítico con los medios de comunicación masivos parte del establishment (sean estos CNN o Globo), apelando a los miedos y aspiraciones de los sectores populares.

Es así, que *El Movimiento*, que parecía centrarse especialmente en Europa, comenzó a desembarcar en América Latina a través de Brasil. Según consideran algunos analistas, la idea de Bannon es construir una alianza entre la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, los Estados Unidos de Trump y el Brasil de Bolsonaro. A la que pudiera unirse una Francia presidida por el Frente Nacional que comanda Marine Le Pen.

El hijo de Bolsonaro refiriéndose a su entrada a *El Movimiento*, afirmó estar trabajando para “unir al nacionalismo de sentido común”, al mismo tiempo que dijo estar esperanzado por el “trabajo de Bannon en Europa” para “rechazar el Pacto Mundial sobre Migración”. Esa idea del “sentido común” a la que se refiere Eduardo Bolsonaro, siempre estuvo muy presente en la derecha. Frente a “lo ideológico”, se impone “la realidad” (Fiore, 2019).

Esta lógica discursiva de lucha “contra el comunismo” que parece salida de los años de la Guerra Fría, en realidad esconde un rechazo visceral a la mal llamada “ideología de género”, a los inmigrantes, a los trabajadores, los negros e indígenas, y en defensa a ultranza de la inversión privada y de las reformas fiscal y laboral que insisten en adelantar los gobiernos neoliberales de la región en desmedro de las grandes mayorías.

Al momento de referirse a su doctrina, el diputado oficialista brasileño Fernando Francischini la definió muy bien diciendo que es liberal en la economía, conservador en las costumbres, y poner a la familia por encima de todo. Esto, también, diferencia a la versión latinoamericana de la europea. Ya que extremistas como Marine Le Pen, Matteo Salvini o Viktor Orban se reivindican proteccionistas en lo económico.

Lo que busca Bannon es una especie de globalización e internacionalización del antiglobalismo. En todas sus conferencias suele repetir que su movimiento está unido en la búsqueda de una agenda populista nacionalista para la prosperidad y soberanía de los ciudadanos en todo el mundo. La idea principal es la de atraer a todos aquellos que se han visto “abandonados” o dejados de lado por sus gobiernos, y apelando a los habitantes de ciudades industriales que se han quedado sin trabajo debido a que sus empresas se establecieron en países con menores costos laborales. O a aquellos provenientes de zonas rurales que no pueden competir con los avances tecnológicos de los grandes pools de siembra. Buscando, además, chivos expiatorios y fomentando los grandes miedos colectivos que produce la inmigración a gran escala. Al mismo tiempo, acusando al progresismo de ser ajeno a esta realidad y de estar más preocupado por los problemas de las elites urbanas de clase media y sobre educadas.

Ideológicamente, *El Movimiento* de Bannon presenta un rechazo absolutamente visceral a todo lo relacionado con progresismo y a lo que la extrema derecha considera “marxismo cultural”. Su eje en la región latinoamericana no es tanto la problemática de la inmigración, como sucede en Europa, sino más bien todo lo que tenga que ver con las tendencias del progresismo y la izquierda, y lo que la derecha denomina “ideología de género”: el movimiento feminista y las disidencias sexuales. Centran gran parte de sus ataques contra la comunidad LGBTIQ+ (Fiore, 2019).

En cuanto al ataque a la “ideología de género” por parte de El Movimiento de Bannon y sus aliados vernáculos, hay datos muy concretos y verificables en América Latina que muestran una problemática real que va por otro camino: la desigualdad de derechos (sobre todo laborales), entre hombres y mujeres, por lo tanto, la feminización de la pobreza sigue siendo un

asunto grave que necesita atención por parte de los estados nacionales.¹

Es de vital importancia la estrategia hacia América Latina para imponer el pensamiento único y reorganizar la dependencia regional de las políticas de Washington y de los intereses de las grandes megaempresas transnacionales, para lo cual la derecha fue, paso a paso, desarticulando el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), destruyendo los procesos integradores desarrollados en los últimos tres lustros.

En cuanto al fenómeno de la inmigración hace varios años que es parte de la agenda más o menos central en muchos países de América Latina. Sin embargo, aprovecharse de eso para buscar culpables de todos los males en los inmigrantes, y decir que “se desnaturaliza la cultura local”, como sostiene Bannon junto a los extremistas europeos, no tendría mucho sentido en la región. Mientras que en Europa el debate sobre la nueva influencia cultural de los inmigrantes musulmanes es campo fértil para la entrada de los partidos de extrema derecha, en América Latina se intenta apelar simplemente a los viejos estereotipos racistas. Según datos de la CEPAL, el 73 % de los migrantes que reciben las ciudades de América Latina y el Caribe son de origen interno. El 78 % de los migrantes se dirige a los grandes centros urbanos, reemplazando, de alguna manera, al fenómeno de migración del campo a la ciudad que se dio en las primeras décadas del siglo XX (Fiore, 2019).

Bolsonaro, en su discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas en enero de 2019, afirmó que retiraría a Brasil del Pacto Mundial sobre Migración. A su vez, declaró posteriormente en

su cuenta de *Twitter* que “Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes”, al mismo tiempo que, en consonancia con Trump o Salvini, expresó: “Quien por ventura venga para aquí deberá estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, y también deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura”. La salida del Pacto Migratorio va en la misma línea de las ideas de Bannon a la hora de desconfiar de todo lo que tenga que ver con pactos u organismos multilaterales. Sin embargo, la retórica anti-inmigratoria sería mucho más una cuestión discursiva que un “problema” real para Brasil. Si bien en los últimos años ingresaron al gigante sudamericano unos 160 000 venezolanos, de los 209 millones de habitantes que tiene Brasil, el país presenta tan solo 800 000 inmigrantes. Es decir, el 0,4 % del total, según datos de la Policía Federal (Fiore, 2019).

En cuanto a la influencia de Bannon en otros países de la región, además de los vínculos ya mencionados, establecidos en el encuentro en Iguazú; existieron declaraciones de Bannon, en noviembre de 2018, respecto de que recibió a “populistas de Argentina”. Nunca se supo exactamente quiénes eran, si es que la reunión se produjo realmente. Lo cierto es que, por ahora, ni su figura es demasiado conocida en el país ni un candidato con las características de Bolsonaro o Trump podría llegar a tener mucha inserción electoral. Aunque hace tiempo se habla en el país de “populismo” para referirse al peronismo o al kirchnerismo, no es a esa categoría a la que Bannon se refiere cuando utiliza el término. Si bien, tras la elección del brasileño, la agenda política argentina se fue corriendo aún más hacia la derecha, en un contexto de inflación desmedida y crisis económica sin freno, la antinomia entre globalistas

¹La situación referente a la igualdad salarial entre hombres y mujeres es claramente preocupante. La participación de las mujeres en el mercado laboral es del 49,5 por ciento mientras que la de los hombres es del 71,3%. Según números de la OIT, las mujeres sin empleo registrado ascienden al 9,1 por ciento, es decir 1,4 veces superior a la de los hombres en su misma situación. Informes de la CEPAL y el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestran que “en todos los segmentos ocupacionales” las mujeres reciben ingresos significativamente menores por la misma tarea que los hombres.

y anti-globalistas no parece que vaya a ser parte central del debate público por un tiempo.

Si bien en el resto de los países de América Latina hay partidos de extrema derecha que podrían comulgar con *El Movimiento*, hoy no presentan muchas posibilidades reales de alcanzar el poder. En Chile, el ex diputado José Antonio Kast es un ultraconservador que reivindica la figura de Augusto Pinochet y es conocido por sus declaraciones homofóbicas. Bannon ha hablado con medios chilenos, aunque no ha mencionado contactos con políticos del país. Se ha referido a su idea del “populismo nacionalista” en una entrevista al histórico medio chileno *El Mercurio*. En la misma conversación, el norteamericano reivindicó las políticas económicas de la dictadura pinochetista diciendo que le dieron “una lección” a Reagan y Thatcher, quienes las aplicaron posteriormente. En un país con la historia y la composición social de Chile, la clase de ideas que expone Bannon pueden llegar a tener una inserción considerable en el futuro.

Es preocupante que discursos como el de Bannon, que hasta hace un tiempo parecían totalmente ajenos a la región, comiencen a instalarse. Su puerta de entrada ha sido el Brasil de Bolsonaro, sin embargo, el terreno es propicio teniendo en cuenta como estas ideas ganan oportunidad aprovechándose de la desconfianza con la política tradicional que sostienen las capas medias y altas de la sociedad, pero también de algunos sectores populares y juveniles. Por la enorme importancia tanto económica como geopolítica de Brasil, si el gobierno logra resolver sus principales problemas internos, Jair Bolsonaro y sus hijos pueden llegar a ejercer de eje gravitatorio en la región para la expansión de la ideología de Bannon y sus intereses. La más o menos vaga unidad de conceptos y acción del gobierno brasileño con lo que representan Donald Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia u Orban en Hungría, puede ser capaz de otorgarle un fuerte impulso a *El Movimiento* a nivel mundial.

Bannon es el ideólogo y publicista de un programa restaurador orientado a dinamitar la globalización y permitir a Occidente la recuperación de una centralidad que viene perdiendo desde hace 40 años. La globalización fue funcional a las fracciones más concentradas del capital transnacional, pero se mostró incapaz de diseminar esos beneficios en el mercado interno estadounidense, ni evitar que China se constituyera en la locomotora productiva mundial. Para muchos Bannon es el caballo de Troya de la expresión resentida de ese fracaso. Quizás el más claro exponente comunicacional de una frustración que se viste con retórica y colores belicistas para intentar frenar una multipolaridad en auge, una hibridación cultural imparable y la reconfiguración de las relaciones globales.

IGLESIA EVANGÉLICA Y POLÍTICA LATINOAMERICANA EN LA ESTRATEGIA DE BANNON

En el marco de *El Movimiento* de Bannon en Europa, este fundó la Academia Judeo Cristiana donde pretende forjar la nueva generación de “gladiadores culturales del centro-derecha populista” en un monasterio cartujano cerca de Roma. La Academia del Occidente Judeocristiano, según se llama el proyecto, aspira a ser algo así como una “escuela de gladiadores de la guerra cultural” en el Viejo Continente, en palabras de Bannon. La enseñanza de “los principios judeocristianos” será la base del currículum de la Academia de Bannon, que arrancará con cursos intensivos de dos y cuatro semanas. Su plan es sin embargo crear algo así como un “máster” de nueve meses (a más de 40 000 euros la matrícula) para “gladiadores del centro-derecha populista”, como le gusta decir a su creador. Su objetivo será “identificar y acelerar” a jóvenes talentos en la línea de Marion Maréchal (la sobrina de Marine Le Pen), de Beatrix von Storch (de Alternativa para Alemania) o del canciller Sebastian Kurz (del Partido Popular Austriaco) (*El Mundo*, 2019).

En el caso de América Latina uno de los cambios más notables en las últimas décadas ha sido el

aumento de los miembros de las distintas iglesias evangélicas en detrimento, muchas veces, del número de feligreses de la Iglesia Católica.² En este punto es importante aclarar que, más que hablar de una sola “Iglesia evangélica” en América Latina es mejor hablar de “iglesias evangélicas”³ que, históricamente, han pasado por diferentes movimientos, oleadas, acentos o rostros: protestante, evangelical, pentecostal, neopentecostal, etcétera.

En el libro *Entre Dios y el César: El impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina*, el doctor José Luis Pérez Guadalupe demostró que ello no solo implica un crecimiento numérico, sino también una búsqueda de poder e influencia. Así pues, los evangélicos han dejado atrás sus “templos de cochera” y se han instalado en el Parlamento, las alcaldías y las grandes empresas. De ahí que en los últimos años una nueva evidencia se manifiesta con igual claridad: el ingreso masivo de ciertos líderes evangélicos en el ámbito político partidario, que ubicaría al movimiento evangélico como uno de “los nuevos actores políticos de la región” —a partir de la década de 1980—, aunque con diversas manifestaciones y desigual impacto en cada país.⁴

La creciente influencia política de los evangélicos es un fenómeno latinoamericano; sin embargo, hay notables diferencias que se manifiestan según el país. Así, México cuenta con una población evangélica relativamente pequeña, mientras que en Guatemala y El Salvador los evangélicos cons-

tituyen casi la mitad del total de habitantes. Por su parte, en Argentina y Chile la participación política de los evangélicos se desarrolla en contextos relativamente seculares; entretanto, en Colombia y en el Perú, han estado involucrados en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, es en Brasil donde los evangélicos han alcanzado la mayor organización política (Pérez, 2018).

De ahí que sea esencial la influencia política contemporánea de los evangélicos, con especial énfasis en sus estrategias electorales y en los temas que reivindican, tales como la “agenda moral” y la defensa de los valores familiares tradicionales, estas serían las contrapartes esenciales de la lucha contra el “marxismo cultural” y la “ideología de género”. Se trata de incorporar el trasfondo religioso detrás de esta nueva oleada política de los evangélicos en el continente, o sea, la relectura bíblica sobre un supuesto “proyecto político de nación” que Dios ha diseñado para “su pueblo” (antes Israel, ahora el pueblo cristiano) y que debe culminar con la toma del poder por parte de los “cristianos evangélicos” (Los “evangélicos políticos”). Esta irrupción religiosa y electoral ha sorprendido a los propios partidos políticos, que no apostaban por los evangélicos, ni en cuanto a su importancia numérica ni respecto a sus planteamientos religiosos (morales). En cambio, hoy, todos los partidos quieren ganarse la gracia del voto evangélico o, por lo menos, tener algún pastor en sus filas, con la ingenua idea de que así lograrán la

²El fenómeno de “migración religiosa” en el continente se reduce a una “emigración católica” hacia las iglesias evangélicas lo que confirma que América Latina sigue siendo eminentemente cristiana (un 90% aproximadamente). No obstante, el segundo grupo de mayor crecimiento son los que no manifiestan ninguna afiliación religiosa.

³Los evangélicos comparten con los protestantes una misma base doctrinal, son cristocéntricos y bibliocéntricos, pero su principal característica sociológica es que son “conversionistas”. La evangelización es la esencia de su Iglesia y no se limitan a una pastoral de mantenimiento, sino que son iglesias de misión (*ad intra* y *ad extra*).

⁴Desde mediados del siglo pasado se ha consolidado el paso de un modelo de líder evangélico: misionero-protestante-extranjero a pastor-evangélico-nacional, que ha permitido una mayor participación de los evangélicos en la política local. Este desarrollo ha ganado aún más visibilidad desde la campaña presidencial de 2018 en Costa Rica, en la que el candidato evangélico Fabricio Alvarado llegó a la segunda vuelta de las elecciones. El éxito mediático de Alvarado ha generado numerosos artículos y discusiones sobre el impacto político de los evangélicos en el continente. En la década de 1990, la mayoría de las iglesias evangélicas comenzaron a pasar de la histórica *fuga mundi* a la conquista del mundo; ya no se preguntaban si debían participar en política, sino cómo debían participar.

simpatía de un supuesto “voto confesional”. Asimismo, los candidatos políticos y gobernantes en ejercicio miden cada vez más sus palabras para no herir las susceptibilidades religiosas de ningún tipo y, menos aún, despertar las iras de los fieles cristianos con el “enfoque de género”, el matrimonio igualitario o cualquier otro tema que pudiera generar controversia. De hecho, los discursos religiosos están influyendo en las políticas públicas (Pérez, 2018).

La agenda moral evangélica (provida y familia, y contra el aborto, el matrimonio igualitario y la llamada ideología de género), coincide plenamente con las principales líneas de mensaje en las que se apoya el populismo que promueve Bannon. El uso populista de la religión tiene que ver con la creación de un nuevo consenso: es una herramienta para llamar la atención de una sociedad que siente haber perdido su “norte moral” (Steinmetz-Jenkins, 2019).

En todas las democracias occidentales y durante los últimos treinta años, los partidos y las asociaciones civiles han experimentado un descenso pronunciado en el número de miembros. Muchos fieles de las iglesias tradicionales también han desertado en pos de nuevas comunidades religiosas. Sin embargo, hay muy buenas razones para fundamentar la idea de que gran parte del populismo de hoy es, en cierta medida, una reacción religiosa. Tanto en el tradicionalismo euroasiático de Vladimir Putin como en la democracia cristiana de Orbán, en el judeo cristianismo de Trump, en el pentecostalismo de Bolsonaro, en el catolicismo populista de Salvini y en el nacionalismo hindú de Modi, hay una reacción religiosa a los gobiernos seculares. Como decía el fascista francés Charles Maurras, que no creía en Dios, es “esencial que la gente crea en él”. En medio de los vertiginosos cambios de la globalización, el populismo de “Dios y nación” incorpora al capitalismo el marco religioso tradicional. Los populistas están siguiendo el guión de Steve Bannon —católico—, que afirma que la crisis financiera mundial

fue producto de abandonar la moderación común a las tradiciones religiosas, el destructivo efecto de un secularismo sin Dios (Steinmetz-Jenkins, 2019).

Bannon, a su vez, se inspira en el crítico cultural estadounidense Christopher Lasch, que en ‘El verdadero y único cielo’ (‘The True and Only Heaven’, 1991), sostiene que la sociedad estadounidense ya no se siente “gobernada por un consenso moral”. Para Lasch, el control colectivo ejercido por las normas es secundario a la libre interacción de ideas en el mercado intelectual. El ejemplo más claro, argumenta, es la reducción de la religión a un asunto privado, haberla convertido en una herramienta terapéutica que se usa en caso de necesidad, pero nunca como un credo vívido. “Entre las elites”, escribió, la religión es “útil para bodas y funerales, pero prescindible”. Lo cierto es que, en los cada vez más influyentes populismos de derecha, el uso de la religión, ha propiciado una “repolitización” dirigida contra las fuerzas del mercado y contra los tecnócratas impersonales. Es necesario reconocer la potencia que el lenguaje religioso tiene hoy, así como su capacidad de reformular las normas. En un mundo sin corazón, las tradiciones religiosas aparecen como un refugio y un nuevo centro moral (Steinmetz-Jenkins, 2019).

En entrevista a Frei Betto, el mismo señaló algunos elementos importantes que se destacan a continuación.

El triunfo de Bolsonaro, entre otros factores como el antipetismo, relacionado con los casos de corrupción que efectivamente hubo en el partido, unido a la conspiración para encarcelar a Lula y la manipulación de las redes digitales; tuvo como factor esencial la influencia de las iglesias evangélicas, las únicas que hacen un trabajo de base con el pueblo. En los 13 años de gobierno del Partido del Trabajo (PT) no hizo este trabajo, no hizo la alfabetización política de la gente sencilla, mientras que las iglesias evangélicas sí lo hicieron. El papel de esas iglesias neopentecostales es garantizar que los pobres soporten la pobreza. Entonces

son como un rebaño de corderitos, de ovejitas que aceptan la palabra del pastor como si fuera la palabra de Dios. Es una forma terrible de opresión, de servidumbre voluntaria, pero que tiene mucha fuerza en Brasil, incluso fuerza política. Las iglesias evangélicas tuvieron su peso en la elección de Bolsonaro y tienen una bancada parlamentaria muy fuerte. De la elección de Bolsonaro también es responsable la cobardía del sistema judicial brasileño, porque tendría que haberlo sancionado por las cosas absurdas que ha dicho durante la campaña, como defender la tortura u ofender a los homosexuales y a las mujeres. Pero todo se soportó en la Justicia, sin ninguna sanción. Eso facilitó su proyección.

El crecimiento de las religiones evangélicas en Brasil, tanto en cantidad de fieles como en los espacios de poder político Betto lo atribuye a varios factores. “Primero, los dos pontificados conservadores de la iglesia católica, el de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI, no valorizaron nuestro trabajo en las bases populares con las comunidades eclesiales de base. Al contrario, hubo mucha sospecha, mucha oposición y un cambio de obispos y curas que apoyaban este trabajo, entonces muchos fieles de las comunidades eclesiales de base emigraron a las iglesias evangélicas. Además, no se sentían bien en las misas católicas, que generalmente son muy buenas para las capas medias y altas. Pero tú, fiel, dueña de una empresa, vas a la misa y difícilmente vas a encontrar a un empleado tuyo ahí, o al portero de tu edificio, o al chofer de tu auto. Esa gente va a la iglesia evangélica. La iglesia católica no ha sabido dar apoyo ni valorar. También el clericalismo que hay en la iglesia católica —todo está centrado en la figura del cura— ha dificultado mucho nuestro trabajo. Los curas no viven en las favelas, pero los pastores sí, entonces ese acercamiento conquista a la gente. Otro factor tiene que ver con una mística interna de que “un hermano vota a un hermano”. Es decir, un evangélico, cuando va a votar, tiene que votar a otro evangélico. Por eso Bolsonaro, que es

de tradición católica, se hizo bautizar en la Asamblea de Dios, que es una confesión protestante de carácter pentecostal. Con mucha inteligencia, fue a tratar de convertirse en evangélico para merecer también ese voto.

La teología de la liberación sigue viva ahora en Brasil, después de un largo período de pontificados conservadores que no han valorado esta línea pastoral. Ahora sí se valora, sobre todo porque el papa Francisco está muy identificado con las tesis de la teología de la liberación. Hay un nuevo aliento, la teología de la liberación vuelve a ser muy importante para la fe cristiana, para los movimientos de iglesias, para entender la relación entre la Biblia y la realidad que vivimos, entonces estamos en un nuevo momento de ofensiva en ese sentido. Pero hemos perdido mucho espacio. Ese espacio se perdió en detrimento de las religiones evangélicas. Perdimos espacio en la base, pero no desde el punto de vista teórico, porque seguimos avanzando y tratando nuevos temas, como la ecología, la innovación tecnológica, la astrofísica, una teología feminista muy avanzada, también una teología indígena (Beto, 2018).

Los ataques de Bannon contra el Papa Francisco han sido recurrentes, y han pasado desde *fake news* hasta la organización de una especie de oposición contra el pontífice encontrando apoyos entre políticos ultraderechistas europeos que abandonan el catolicismo y sobre todo critican con dureza la posición del Papa de protección a los refugiados. Así también son de vital importancia en ese sentido, varias figuras en Estados Unidos que comparten una visión ultraconservadora de la Iglesia como el cardenal Raymond Burke, quien, aunque recientemente ha tomado distancia de Bannon, en su momento le fue un importante apoyo en este fin, así como algunos obispos a menudo asociados al Tea Party o a la cadena Fox News.

Es importante aclarar que Bannon es católico, pero de corte escatológico, en el sentido teológico, cuya demonización de los emigrantes mexicanos

y musulmanes opera bajo la visión maniquea de un mundo dividido entre el bien y el mal, donde la beligerancia puede adquirir una justificación teológica. Al respecto, se publicó un artículo de *La Civiltà Cattolica* donde sus autores Antonio Spadaro y Marcelo Figueroa se pronunciaron contra el fundamentalismo evangélico en Estados Unidos por operar una interpretación distorsionada de las Sagradas Escrituras y del Antiguo Testamento por promover la guerra, y desde allí fundamentar posturas sobre el cambio climático, los migrantes y los musulmanes. El artículo centra sus críticas especialmente en la figura de Bannon (Valores religiosos, 2020).

De manera que estas diferencias que le separan con el catolicismo, le acercan en cierta medida al protestantismo, aunque con determinados matices que no pueden definirle en esa categoría pero sí flexibilizan determinadas líneas que le permiten moverse en el amplio espectro religioso de los diferentes escenarios y lograr adaptarlo a su proyecto de aglutinar las derechas. Para ello, en el caso latinoamericano es fundamental identificar las estrategias y políticas de los evangélicos en los distintos escenarios nacionales y aquellos temas que les han permitido consolidarse como una opción electoral exitosa.

En los albores del siglo XXI parece que los renovados evangélicos —ahora con evidente espíritu neopentecostal, con aires de evangelio de la prosperidad (o ideología de la prosperidad), con pretensiones reconstruccionistas y con una creciente llegada a las clases medias y altas— son el nuevo rostro latinoamericano y los nuevos actores sociales y políticos del movimiento evangélico continental.

La gran transformación religiosa latinoamericana en las últimas décadas no ha sido el crecimiento de la increencia o el secularismo como en Europa, sino el paso de un cristianismo católico tradicional a un cristianismo evangélico militante.

En esta línea, debemos recordar que, si bien tenemos actualmente evangélicos de segunda, tercera y cuarta generación, la mayoría de ellos en

América Latina son neoconvertos; es decir, han sido católicos. Ellos decidieron ser evangélicos y por eso tienen un mayor compromiso con su iglesia. En cambio, la mayoría de católicos han nacido católicos y pertenecen a la Iglesia porque así fueron bautizados, formados y educados. Incluso, muchas veces siguen el catolicismo por costumbre, como es el caso de los católicos nominales, tradicionales, culturales, devocionales, sociológicos, etcétera.

Pero, a pesar de un menor compromiso de la mayoría de católicos con su Iglesia, debemos reconocer la existencia de un sustrato católico (o al menos cristiano) en la gran mayoría de nuestras sociedades (en menor dimensión en el Cono Sur). Este sentimiento religioso aflora en situaciones especiales, como la visita del papa Francisco al Perú, por ejemplo, que volcó a las calles a millones de peruanos y que superó por mucho la asistencia a las misas dominicales. Otra manifestación del sustrato cristiano se produjo en Costa Rica cuando se dio a conocer la Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH, que llevó al candidato evangélico Fabricio Alvarado de un 2% de intención de voto a un 25% en solo dos semanas. Esa también sería la razón por la cual los sociólogos no pueden explicar las dimensiones que ha alcanzado la “Marcha por la vida” (de la Iglesia católica) y del colectivo “Con mis hijos no te metas” (de las iglesias evangélicas) que, finalmente, logran unir en una misma manifestación multitudinaria y popular a grupos religiosos que nunca antes se aproximaron a un ecumenismo práctico. Esa también sería la razón por la cual los “evangélicos políticos” prácticamente han desplazado a los “políticos evangélicos” del ámbito electoral y son los que lideran el protagonismo político del creciente movimiento evangélico en América Latina (Pérez, 2018).

En el ámbito político es indudable que la religión está tomando un protagonismo electoral inusitado y que los discursos religiosos están comenzando a determinar políticas públicas. El

nuevo (o renovado) fenómeno de religión y política en América Latina —más que el de Iglesia-Estado— ya no se va a decantar solo entre categorías básicas confesionales como “católico o evangélico”, sino entre las diferentes segmentaciones dentro de cada iglesia.

La inexistencia de un voto confesional en América Latina, sea evangélico o católico, y la subrepresentación política de los evangélicos confirman que no existe una relación directa entre confesionalidad religiosa y opción política (o electoral). Además, vemos que temas como la agenda moral unen y congregan tanto a católicos como a evangélicos en una sola propuesta pública; aunque no sea ni a todos los católicos ni a todos los evangélicos. Y creemos que ese será el camino que tomarán las nuevas tendencias políticas de los grupos religiosos en el continente, segmentadas en un proceso continuo de fusión y fisión y lideradas “anónimamente” por agendas transversales y grupos de presión, más que por partidos políticos o líderes religiosos; aunque la manera de visibilizar políticamente esas propuestas será a través de ellos.

En la práctica, los “evangélicos políticos” han desplazado a los “políticos evangélicos”, y buscan ampliar la militancia religiosa de sus feligreses al ámbito público y convertir su capital religioso en un rentable capital político. La incursión de los “evangélicos políticos” responde más a una nueva lógica de utilización instrumental de la política con fines religiosos que a una histórica utilización de la religión con fines políticos. Cuando se acentúa la agenda moral en la propuesta política, más que de un “voto confesional”, se podría hablar de un “voto valorativo”, que atrae al sector más conservador de los evangélicos y de los católicos.

El único tema que podría aglutinar, coyunturalmente, a la gran mayoría de evangélicos (y también a muchos católicos) es la agenda moral provida y profamilia; aunque no con la misma contundencia en todos los países. Este tema está en total coherencia con la propuesta de Steve Bannon, conectando así el factor religioso católi-

co de Europa con el evangelismo latinoamericano en una misma línea.

CONCLUSIONES

La llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump en 2016, avivó la llama de los populismos en los imaginarios internacionales como modelo alternativo frente a la crisis de la cultura política, institucional y del sistema en general. En ese sentido, resultó un factor esencial la influencia de Steve Bannon, así como su asesoramiento en el Brasil a Jair Bolsonaro en su campaña presidencial y posteriormente su presencia en Europa, fomentando desde Bruselas su objetivo de promover un espíritu nacionalista y su estrategia de aglutinar a estas fuerzas políticas de corte radical-populista, hasta hace tiempo marginadas, y hoy fortalecidas frente a las desgastadas fuerzas tradicionales.

Como se refirió al inicio de este artículo este es un tema muy complejo para ser abordado en tan solo unas páginas. Hay toda una serie de cuestiones sobre las cuales reflexionar: Steve Bannon es solo un hombre, ¿qué representa realmente el “gurú de las derechas mundiales”? La ruta de Steve Bannon es toda una red de análisis: El escándalo de Cambridge Analytica, la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el *Brexit*, entre otros hechos que se entretajan con referencias a “los rusos”, “los chinos”, la amenaza a la democracia liberal, la erosión del orden europeo y muchos otros temas de la geopolítica mundial, que sin dudas permitirían un análisis tan amplio y vivo como prácticamente imposible.

Recientemente el avance de la pandemia de la Covid-19 ha marcado nuevos tópicos en este sentido. Uno de ellos, la identificación del virus como “chino”, “comunista”, lo cual abre un nuevo campo de batalla en la confrontación sino-estadounidense. Todo ello en un ambiente donde la polarización política es cada vez más fuerte y violenta como es el escenario norteamericano que ha caracterizado el proceso electoral de noviembre de 2020.

La coyuntura latinoamericana actual forma parte de un proceso más amplio y complejo donde ha prevalecido el agotamiento de los mensajes del mainstream, ante lo cual surge un contexto oportuno para fuerzas políticas que se muestren abiertamente desmarcadas y diferentes del resto.

Estos nuevos códigos comunicacionales estarán influyendo en el escenario futuro del acontecer político y social latinoamericano. Se trata de actores que se presentan como nuevos o alternativos y llegan cuestionando todo el orden estable-

cido, promulgando y encarando debates que han permanecido dormidos u olvidados, cultivando humillación, miedo y resentimiento. De ahí que sus estilos comunicativos explotan los recursos y contenidos atractivos que tengan a la mano para entrar en el mundo interior de cada una de las personas que conformen potencialmente un electorado mayoritario, moviendo emociones encontradas, frustraciones ocultas y manipulando experiencias tan sublimes como la fe y tan profanas como los estigmas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Betto, Frei (2018): "Las izquierdas latinoamericanas debemos pensar por qué los más pobres ya no nos apoyan tanto", *La Diaria*, en <https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/frei-betto-las-izquierdas-latinoamericanas-debemos-pensar-por-que-los-mas-pobres-ya-no-nos-apoyan-tanto/>
- El Mundo* (2019): La Academia judeocristiana de Steve Bannon, en <https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/22/5ce41a71fdddf2c3a8b461c.html>
- Fiore, Viani Gonzalo (2019): Steve Bannon en América Latina. La puerta de entrada para *El Movimiento* de Steve Bannon en América Latina, Nodal, 26 marzo, 2019, en <https://www.nodal.am/2019/03/la-puerta-de-entrada-para-el-movimiento-de-steve-bannon-en-america-latina-por-gonzalo-fiore-viani-especial-para-nodal/>
- García Aller (2019): Quien es Steve Bannon, *El independiente*. Disponible en <https://www.google.com/amp/s/www.elindependiente.com/politica/2019/03/26/quien-es-steve-bannon/amp/>
- Hernández, Esteban (2019): El inquietante plan Bannon para Europa, *Magazinedigital* en <http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/inquietante-plan-bannon-para-europa>
- Luzzani, Telma (2018): En Brasil, un movimiento se propone "extinguir" la izquierda de Latinoamérica *Sputnik*, en https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201812121084075790-brasil-eduardo-bolsonaro-foz-de-iguazu/
- Macías, Julián (2020): @JulianMaciasT. Disponible en: <https://mobile.twitter.com/julianmacias/status/1326943964788903938>
- Oliva, Ayelén (2019): La Cumbre de los Bolsonaro, *Nueva Sociedad*, enero 2019, en <https://www.nuso.org/articulo/cumbre-conservadora-bolsonaro-derecha-america/>
- Pérez, José Luis (2018): Evangélicos y poder en América latina. ¿Políticos Evangélicos o Evangélicos Políticos? (Formato digital).
- Sánchez Savín, Claudia (2019): Las fuerzas populistas de derecha en la Unión Europea en el período 2008-2018. Factores condicionantes de su fortalecimiento. Tesis en opción al título de Licenciada en Relaciones Internacionales. Instituto de Relaciones Internacionales "Raúl Roa", La Habana, Cuba.
- Steinmetz-Jenkins (2019): Populismo y religión: la santa alianza, en <https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/populismo-y-religi%C3%B3n-la-santa-alianza/ar-AACY8d2>
- Tori, Manuel (2019): *El español. Mundo*. Bannon en su gira europea: "Soy admirador de Vox, un modelo que el resto del mundo copiará", en https://www.lespanol.com/mundo/20190327/bannon-europea-admirador-vox-modelo-resto-copiar/386212426_0.html
- Valores Religiosos (2020): Demoledora crítica a Trump y su fundamentalismo evangélico. Disponible en: <https://valoresreligiosos.com.ar/Noticias/demoledora-critica-a-trump-y-su-fundamentalismo-evangelico-10435>



Bolivia: Notas sobre el contexto sociopolítico, el Golpe de Estado y la Crisis

Bolivia: Notes about the socio-political context, the coup d'etat and the crisis

MSc. ORIETTA E. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Master en Relaciones Internacionales, doctorante en Ciencias Políticas.

Actualmente se desempeña como Investigadora Agregada y Profesora Asistente del

Centro de Investigaciones de Política Internacional

e-mail: orietta82@yahoo.es

Numero ORCID: 0000-0001-5225-3067

RESUMEN:

El golpe de estado del 2019 en Bolivia ha sido el experimento más completo y exitoso de la estrategia de Estados Unidos en complicidad con las fuerzas de derecha de la región para recuperar espacios y recomponer la hegemonía. En este artículo se analizarán las verdaderas causas del golpe cívico militar policial y sus principales actores. Finalmente se examinará el panorama actual del país bajo el gobierno de Jeanine Añez y la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Palabras clave: golpe de estado, derecha, proceso de cambio, pandemia, coronavirus.

Abstract:

The 2019 coup in Bolivia has been the most complete and successful experiment of the United States' strategy in complicity with the right-wing forces in the region to regain space and rebuild hegemony. In this article we will analyze the true causes of the civic coup military police and its main actors. Finally, we will examine the current panorama of the country under the effects of the Añez's government and the pandemic caused by COVID-19

Key words: coup d'etat, right, process of change, pandemic, coronavirus

INTRODUCCIÓN

Los meses de octubre y noviembre del 2019, los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, vivieron días de incertidumbre que se extienden hasta la actualidad. El desconocimiento por parte de la derecha boliviana de los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, cuyo ganador fue por cuarta vez consecutiva Juan Evo Morales Ayma, candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y presidente del país desde diciembre de 2005, en medio de un escenario de creciente desobediencia civil, devino en un Golpe de Estado, consumado el 10 de noviembre.

La acción articulada de la derecha, amplios sectores de la clase media, funcionarios de la embajada de Estados Unidos, los Comités Cívicos, las Fuerzas Armadas, la iglesia evangélica, la Policía, con la complicidad de los medios de comunicación y redes sociales dieron lugar a una cadena de sucesos que en pocos días desestabilizaron al país y cambiaron el escenario político.

La rapidez de los acontecimientos, sorprendió a gran parte del electorado que había confiado su voto al MAS. La inocencia, la ausencia de un plan alternativo, la confianza en la victoria electoral, de los principales dirigentes del proceso, trajeron como consecuencia cierta perplejidad y confusión que les impidió organizarse para enfrentar la oleada de violencia que invadió las calles. Aunque suene paradójico, el gobierno de los movimientos sociales, se desmoronó ante la mirada asombrada y la inacción de los propios movimientos sociales.

Los grupos de choque, armados y pagados por la derecha, camuflados entre los ciudadanos que “salieron a defender la democracia” y a protestar por “el fraude cometido por el partido de gobierno”, quemaron las sedes de Tribunales Electorales departamentales, arremetieron contra los principales dirigentes del MAS y sus familiares, destrozaron sus casas y les amenazaron de muerte. En medio de ese caos, ocurrió el golpe de estado del 2019 en Bolivia, el experimento más completo y exitoso de

la estrategia de Estados Unidos en complicidad con las fuerzas de derecha de la región para recuperar espacios y recomponer la hegemonía.

Los medios de comunicación y redes sociales alineados con la oposición, se emplearon a fondo en divulgar que hubo en Bolivia “una Revolución”, “una protesta social para recuperar la democracia”, “una victoria de la libertad contra la tiranía”, “una transición ante un vacío de poder tras la renuncia del presidente” y otras muchas ideas. Al mismo tiempo, el debate entre académicos y políticos, a nivel internacional, giró en torno a la ocurrencia o no de un golpe de Estado en el país.

De acuerdo con Molina (2019) “La historia boliviana oscila pendularmente: un cambio de elites —una revolución política— se despliega y prepara las condiciones para otro cambio de elites —otra revolución política—, que entonces funciona respecto a la primera como una contrarrevolución”. Por esa razón al referirse a los sucesos de noviembre de 2019 considera necesario que: “...Descartaremos, entonces, el concepto de ‘golpe de Estado’, entendido en su sentido de putsch, ‘blanquismo’ o conspiración externa al proceso político concreto y, por tanto, sin responsables: un producto exclusivo de la voluntad ajena, concepto que absuelve al gobierno de Morales de todo error y que minimiza su desgaste de 14 años en el poder. Nos quedaremos, más bien, con este péndulo revolución-contrarrevolución, como expresión de la fractura social que divide a la sociedad boliviana”

Por su parte, la feminista boliviana Silvia Rivera (2019), aunque confesó sentirse triste con la partida de Evo Morales, aseguró: “Yo no creo en las dos hipótesis que se han manejado. El triunfalismo de que con la caída de Evo hemos recuperado la democracia me parece un exceso, un análisis que se está saliendo de foco ...La segunda hipótesis equivocada, que me parece a mí sumamente peligrosa, es la del golpe de Estado, que simplemente quiere legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno

de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación, legitimarla con la idea del golpe de Estado es criminal, y por lo tanto debe pensarse cómo es que ha empezado esa degradación”.

Otros analistas, fundamentaron ambas posibilidades, partiendo de la idea de que en la actualidad, se ha difuminado la frontera entre las rebeliones y los golpes de Estado. Tal es el caso de Fisher (2019) cuando expresó: “Al parecer, los acontecimientos de Bolivia encajan en el concepto de revolución callejera: los ciudadanos se volcaron a las calles para exigir la renuncia de un dirigente que se negaba a respetar los límites de su poder, y en algún momento involucró a instituciones fuertes de izquierda y de derecha para lograr que eso sucediera. El gobierno sigue estando en manos de civiles electos que han prometido convocar a nuevas elecciones, y Morales sigue libre. También, al parecer, encajaban con el concepto que se tiene de un golpe de Estado, ya que el Ejército exhortó al presidente a renunciar y, en efecto, eso sucedió. Morales mismo calificó su destitución como golpe de Estado”.

Otros autores sostuvieron la hipótesis del golpe de estado, con nuevos elementos que lo diferencian de los tradicionales, pero al fin, un golpe.

Al respecto Moldiz (2020:30) expresó:

”hay al menos tres argumentos fuertes que respaldan la tesis del golpe de Estado en Bolivia: primero, el pedido de renuncia que las Fuerzas Armadas le hicieron al Presidente Evo Morales el 10 de noviembre, segundo el vacío de poder civil durante 48 horas en el que las decisiones de cómo y quién iba a suceder a Evo las tomaron los poderes factuales, y tercero la posesión de Jeanine Añez como presidenta del Estado Plurinacional sin que existiese el quorum reglamentario en ninguna de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En esta misma línea, Malamud (2019) aseguró: “un golpe de estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia, los tres elementos están presentes: el mandato del presidente fue interrumpido, el procedimiento fue inconstitucional (no hubo destitución parlamentaria sino renuncia forzada por una “sugerencia”) y las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace”

Entre tantas y diversas opiniones, a los efectos de este artículo compartimos la tesis que asegura que hubo un golpe de estado en Bolivia. Por esa razón y en función de fundamentar el anterior planteamiento se profundizará en el tema a partir de dos objetivos fundamentales. En un primer momento analizar las verdaderas causas del golpe cívico, militar, policial y sus principales actores. Posteriormente, se examinará el panorama actual del país bajo el mandato del gobierno de facto dirigido por Jeanine Añez en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID 19.¹

Por último, resulta pertinente no perder de vista que lo acontecido en noviembre de 2019 en Bolivia no fue una acción espontánea, improvisada, por el contrario, fue todo un proceso, la suma de acciones de actores internos y externos, donde la importancia geopolítica y geoestratégica del territorio boliviano y los intereses del sector público-privado estadounidense, desempeñaron un papel fundamental (Romano, Lajtman, García-Fernández, Tirado, 2019).

En este sentido, llama la atención que más de un año antes de las elecciones, Stratfor (consultora que realiza investigaciones de inteligencia para el Gobierno estadounidense) plantea, en una serie de informes, un escenario posible (¿deseado? ¿buscado?) de disturbio, inestabilidad y posibles sanciones de EE. UU. frente a una victoria de Evo Morales:

¹Para lograr estos objetivos se llevó a cabo un proceso de compilación y revisión bibliográfica en el que fueron consultados numerosos sitios digitales entre los que se destacan: *Hurgando en el avispero*, *Cubadebate* y *América Latina en Movimiento*. De igual forma tuvimos acceso a varios artículos publicados en las Revistas *Cuba Socialista* y *Humanidad en Red*. Otras fuentes consultadas fueron los periódicos: *El deber*, *La Razón* y *Página Siete*.

“Las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política en Bolivia (...) Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa. Las manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política boliviana. (...) Esa situación podría provocar un breve período de confrontación política posiblemente violenta en todo el país” (Romano, Lajtman, García-Fernández, Tirado, 2019).

La permanencia del MAS y Evo Morales en el gobierno, constituía un obstáculo para la realización de los intereses de las elites nacionales, así como las de Estados Unidos. Las políticas de nacionalización y redistribución durante casi 14 años, frenaron su posibilidad de disponer de los recursos naturales bolivianos como en los tiempos del neoliberalismo. De ahí que todo resulte imprescindible examinar las características del proceso de cambio, para comprender la génesis de los acontecimientos de noviembre de 2019.

EL TRIUNFO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales Ayma resultó ganador de las elecciones generales con el 54% de los votos. Este acontecimiento marcó el momento en que la elite gobernante fue desplazada del gobierno, por el primer presidente indígena en la historia de Bolivia.

El escenario cambió completamente, aumentando el protagonismo del nuevo sujeto político de este proceso: el Movimiento Indígena Originario Campesino (MIOC), que en sustitución de la debilitada clase obrera convirtió todas sus protestas en propuestas pasando de bloque insurgente a bloque en el gobierno y más tarde en el poder. La irrupción del MIOC, responde además al descrédito de los partidos políticos tradicionales, eso

explica la creación del MAS-IPSP, que aun cuando se presentó como partido político en las elecciones conserva un comportamiento *sui generis* muy cercano a la dinámica de los movimientos sociales.

El gobierno de Morales comenzó un proceso de cambio partiendo de la nacionalización de los recursos naturales, redistribuyendo la riqueza en bonos dirigidos a los sectores más vulnerables y necesitados de la población. Logró además la aprobación de una nueva Constitución en el año 2009, que dio paso al nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, dando participación a los pueblos indígenas y originarios, reconociendo la existencia de 36 etnias y estableciendo el respeto a su cultura y cosmovisión.

En adición a ello, Bolivia, el segundo país más pobre en la región se convirtió en el que más creció por seis años consecutivos, exhibiendo una estabilidad económica alabada varias veces por organismos internacionales. La pobreza extrema bajó de 38% a 15,2 %.²

En términos de política exterior, el proceso de cambio se destacó por su actividad en los organismos internacionales en defensa de la soberanía, la integración y la autodeterminación de los pueblos. En este campo uno de sus mayores méritos fue el de romper la subordinación a Estados Unidos, expulsando de su territorio nacional, las principales instituciones estadounidenses, entiéndase el embajador Philip Goldberg, la Drug Enforcement Administration (DEA) y la United States Agency for International Development (USAID).

Sin embargo, la estabilidad política durante los 14 años del gobierno del MAS, se vio afectada por diferentes golpes —y aunque siempre fueron superados por el proceso— algunos fueron erosionando su relación con sectores importantes. Entre ellos podemos destacar el golpe cívico-prefectural que tuvo lugar durante el 2008, a través de acciones violentas sediciosas coordinadas y planificadas, de

²De acuerdo con datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Ministerio de Economía. Bolivia.

toma de instituciones públicas en Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Tras fracasar dicho golpe quedó como saldo positivo la derrota de la derecha boliviana primero militarmente en septiembre de 2008 en Pando y políticamente en enero de 2009 al ser aprobada la Constitución en referéndum con el 61% de los votos. Inconforme con esta situación, la derecha experimentó otra nueva modalidad de golpe —también fallido— protagonizado por el grupo de terroristas extranjeros encabezados por Eduardo Rozsa, mercenario de la guerra serbo-croata, cuyo objetivo era la eliminación física del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Lineras.

Más adelante durante 2011 y 2012, ocurre el golpe a las organizaciones sociales, al no poder derrocar mediante la fuerza al proceso de cambio, se intenta desestabilizar su base social. Esta vez el centro del ataque sería el movimiento indígena originario campesino, al que intentaron dividir causando confusión y enfrentamientos en medio de las marchas en protesta por la construcción de la carretera que atravesaría el territorio del TIPNIS.³ El conflicto tuvo gran cobertura de los medios a nivel internacional y finalmente se resolvió de forma pacífica, aunque sembró contradicciones entre el gobierno y sus bases.

Tras el fracaso de los intentos de golpe anteriores y la contundente victoria de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en octubre de 2014 con el 61% de los votos, se activa un nuevo golpe, basado en una estrategia de desestabilización y construcción masiva de mentiras en los medios de comunicación y redes sociales. A poco tiempo de la celebración del referendo donde el pueblo

expresaría su opinión sobre la candidatura de Evo y Álvaro para un nuevo período presidencial, surge el “Caso Zapata”.⁴ Con una ausencia total de ética y escrúpulos la derecha construyó una historia para dañar el prestigio del presidente.

El plan funcionó y con estrecho margen ganó el No en la consulta popular del 21 de febrero del 2016. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia del proceso de cambio, en tanto permitió que la oposición envalentonada abrazara la causa de “la defensa de la democracia y la voluntad del pueblo ante la tiranía del presidente indígena que quería perpetuarse en el poder

Es en medio de este escenario, tres años después que ocurre el Golpe multidimensional, cuyas verdaderas causas, están conectadas con sucesos anteriores y conflictos no resueltos. En nuestra opinión, las dos principales razones ocultas fueron: la disputa por el control de los recursos naturales de Bolivia y la discriminación racial.

LAS VERDADERAS CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO

En el tablero de la geopolítica mundial los recursos naturales, ocupan una posición importante y son fuentes de conflictos. Por esa razón, todos los países portadores de estas riquezas que implementan proyectos nacionales descolonizadores y soberanos son identificados por Estados Unidos como gobiernos violadores de los derechos humanos que deben ser sustituidos.

Este claramente es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta; distribuida en importantes espacios geográficos como la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, El Pantanal, el Chaco, el Lago Titicaca. Posee además, petróleo,

³El conflicto del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) tuvo lugar en 2011, cuando los indígenas de la zona marcharon en protesta por la construcción de una carretera que atravesaba sus comunidades. La ausencia de una consulta previa por parte del gobierno unido a la manipulación de los movimientos sociales dieron lugar a prolongados días de marcha que tuvieron una gran repercusión a nivel internacional.

⁴Alrededor de 100 días antes de la celebración del referendo del 21 de febrero de 2016, la derecha boliviana, la embajada de Estados Unidos en componenda con los medios de comunicación y redes sociales del país, organizaron el llamado Caso Zapata, con el objetivo de dañar moralmente la figura del presidente Evo Morales.

oro, plata, agua, madera, así como una importante reserva de gas. Destaca entre estas riquezas el Salar de Uyuni, el mayor yacimiento de litio del mundo que alberga el 70% de las reservas del planeta. Estas condiciones sitúan al país en el camino de consolidarse como un importante actor en el mercado mundial del llamado oro blanco.

Los yacimientos en el país andino, se encuentra en su gran mayoría a un poco más de 3 600 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Potosí. Se requiere experticia y una considerable inversión de capital para su explotación, debido a que está mezclado con otros minerales y sometido además a una temporada de tres meses de lluvia cada año.

Con este objetivo la empresa alemana AcysSystems, fue seleccionada para el proyecto de procesamiento de la salmuera residual. Este contrato se convirtió en la justificación del conflicto iniciado por los integrantes del Comité Cívico de Potosí, especialmente su presidente Marcos Pumari, en el mes de octubre del presente año, acusando al gobierno de hacer un contrato con carácter entreguista. Sobre las verdaderas razones del conflicto Evo Morales, en entrevista concedida al periódico *La Razón*, expresó “Las movilizaciones de los Comités Cívicos por supuesta reivindicación de desarrollo departamental eran movilizaciones netamente políticas. En Potosí utilizaron el tema del Litio sin argumentos técnicos ni jurídicos menos de desarrollo...”⁵

La realidad es que el proyecto era 100% de explotación estatal, Yacimientos de Litio bolivianos (YLB) sería el socio mayoritario. Esta empresa le vendería a AcysSystems la salmuera y ellos en territorio boliviano la procesarían para obtener productos de alto nivel que exportarían a Europa. Es decir, los bolivianos obtendrían el saldo de la venta del producto, se crearían nuevos empleos bajo la dirección de un ejecutivo también boliviano, se quedarían con las patentes, transferencia tecnológica y por último los

productos finales tendrían un mercado seguro para su comercialización.

Por otra parte, el permanente crecimiento de la economía boliviana acompañado de la estabilidad política y social durante el gobierno de Evo Morales hacía aún más atractivo el país para la inversión extranjera. Las nuevas relaciones comerciales se producían bajo el control estatal y los principios de soberanía, ofreciendo excelentes resultados. Un ejemplo de ello es la alianza estratégica entre Bolivia y China como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, para llevar a cabo el proyecto del corredor bioceánico. Este país asiático además tiene inversiones en recursos hidráulicos, litio y tecnología. Por su parte Rusia ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en hidrocarburos, litio, así como en la industria alimentaria y la defensa. En el 2016 Gazprom y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un acuerdo sobre la exploración conjunta de fuentes petroleras.

Sin lugar a dudas, la diversificación de las relaciones comerciales bolivianas en especial con Rusia y China, unido a la decisión de la activa participación de las empresas estatales en la explotación de los recursos naturales, contribuyen al quebrantamiento de la hegemonía de Estados Unidos en la región o al menos así lo percibe esta nación, de ahí que sean ellos quienes han financiado y asesorado estas acciones de noviembre del 2019.

De esta forma podemos asegurar que la disputa por los recursos naturales, constituye una de las causas reales del golpe de estado al gobierno de Evo Morales. La otra causa se corresponde con un conflicto que subyace en la sociedad boliviana: la discriminación racial.

Pese a los esfuerzos gubernamentales por eliminar este flagelo de la sociedad, no fue posible su erradicación. El racismo opera en la subjetividad y la representación social de los individuos y es

⁵Entrevista concedida a los periodistas Jorge Delgado y Sergio de la Zerda y publicada en el Suplemento del Periódico *La Razón*: Animal Político el domingo 15 de marzo de 2020.

consecuencia de la colonización interna. El odio y desprecio al indio fue por muchos años una práctica en Bolivia. Desde el ámbito de la política los indígenas eran utilizados por todos los partidos políticos, como masa de votantes y sus demandas inmediatamente después de las elecciones desatendidas.

Durante el golpe, las manifestaciones racistas fueron notables. Al menos dos símbolos de los indígenas y originarios fueron irrespetados: la Whipala que fue quemada en la sede de gobierno y retirada de las insignias de los militares y las mujeres de Pollera que fueron maltratadas en plena calle.

De acuerdo con Tellería (2020: p.38): “no cabe duda que dos de los factores que más ha caracterizado al espíritu colonial de la República, no terminaron con la creación del Estado Plurinacional: el racismo y el orden patriarcal, ser mujer e indígena en Bolivia, no es nada fácil. De ahí que las primeras víctimas del odio fascista encarnado en los grupos violentos que precedieron al golpe fueron mujeres e indígenas”

En este sentido, al menos tres ejemplos ilustran la afirmación anterior: En primer lugar, la agresión física a las mujeres de Pollera en Santa Cruz, con garrotes con clavos. En segundo lugar y en su grado más extremo la situación con la Alcaldesa de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce que fue obligada a caminar descalza, le arrojaron pintura, la ofendieron, humillaron, maltrataron y le cortaron el cabello, solo por ser miembro del MAS-IPSP, por ser mujer, por ser indígena.

El tercer evento de esta naturaleza fue un acto vandálico que tuvo lugar el 6 de noviembre cuando fueron agredidas mujeres, en su gran mayoría indígenas, que marchaban en apoyo al gobierno de Morales. Fueron apedreadas y golpeadas por motociclistas de “la Resistencia Cochala”, que no respetaron siquiera la presencia de sus hijos que cargaban a la espalda.

La derecha y las clases medias tradicionales de piel blanca, pero de raíces notablemente indígenas no le perdonaron a Evo tener que relacionarse

con la clase media emergente de los sectores sociales que anteriormente se sumían en la pobreza. Ese odio racial fue utilizado hábilmente por los autores del golpe, dividiendo al pueblo e incitándolo a la violencia.

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DEL GOLPE?

El sitio web *Behindthe back door*, alrededor de 12 días antes de las elecciones denunció el golpe y reveló la participación y función de cada uno de sus actores. Misteriosamente este sitio desapareció, pero sacó a la luz a los protagonistas que abordaremos a continuación.

Luis Fernando Camacho Vaca es un abogado, empresario y político boliviano que presidió el Comité Cívico de Santa Cruz durante el año 2019. Procede de una de las familias más ricas de Santa Cruz, dueña de la empresa Sergas que capitalizaba el monopolio de conexiones de gas antes de la llegada al gobierno de Evo Morales. Fue vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización considerada el brazo duro del Comité Cívico de Santa Cruz, que participó activamente en el intento separatista de la Media Luna en el 2008 y repitió las agresiones físicas a los indígenas en el 2019 durante el paro cívico de la Ciudad después de las elecciones.

Camacho es miembro de la Logia Caballeros del Oriente y utiliza la fe y el amor a Dios como elemento fundamental de su discurso con características mesiánicas. Se encuentra en la lista de nombres de implicados en los Panamá Papers. Sorpresivamente abandona su responsabilidad frente al Comité Cívico de Santa Cruz para postularse a la presidencia del país, dejando al descubierto su verdadero objetivo y ambición de acaparar el poder.

Otro de los actores principales es Carlos Mesa Gisbert. Este periodista y escritor fue Vicepresidente de Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada y luego de que este escapara a los Estados Unidos en el contexto de la Guerra del Gas en el 2003 asumió la presidencia y renunció en el

2005. Existen pruebas que lo vinculan a hechos de corrupción, se ha demostrado que recibió una gran suma de dinero para postularse como vicepresidente junto con Sánchez de Lozada.

En 2019 se presentó como candidato a presidente y quedó en segundo lugar frente al Partido Comunidad Ciudadana. Su actuación fue clave en el desarrollo de las protestas después de las elecciones. El día 20 de octubre a partir de los resultados parciales anunciados y desconociendo el voto rural que aún no se había contabilizado alentó a sus seguidores a protestar contra el presunto fraude del MAS que le haría ganar en la primera vuelta. Es uno de los principales responsables de la ola de violencia desatada en el país.

Mención aparte merecen las Fuerzas Armadas y la Policía. Este binomio dio la estocada final consumando el golpe cuando el General Williams Kaliman Romero Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, “le sugirió” al presidente Morales renunciar para pacificar el país. La Policía por su parte bajo las órdenes de Vladimir Yuri Calderón Mariscal se replegó y amotinó durante las protestas violentas de la derecha después del 20 de octubre del 2019.

Ambos militares tenían probados estrechos lazos con Estados Unidos, en tanto fueron alumnos de la Escuela de las Américas. Kaliman formó parte del Curso de Comando y Estado Mayor en el 2003 y Calderón Mariscal en 2018, fue Presidente de Agregados Policiales de América Latina en Estados Unidos.

No podemos dejar de mencionar a Jorge Tuto Quiroga quien fuera vicepresidente y luego presidente de Bolivia en el 2001. Fue presidente del Partido de Derecha Acción Democrática Nacionalista. Podemos considerarlo como el responsable de Relaciones Internacionales del Golpe, pues se encargó de hacer giras internacionales tratando de invalidar a Evo Morales como candidato y buscando legitimidad para las acciones de la oposición.

Si nos propusiéramos elaborar una lista con los actores clave del golpe, sin dudas los medios de

comunicación y redes sociales ocuparían uno de los primeros puestos. Su labor desinformativa en alianza con las fuerzas golpistas se centró en negar la existencia de un golpe, imponiendo la idea de transición democrática. Ocultaron además los actos vandálicos y los crímenes del gobierno de facto. Importante destacar el rol de las redes sociales en especial Twitter, en la convocatoria para las movilizaciones de la derecha, así como el hecho de la creación de 100 000 cuentas falsas, de supuestos seguidores de Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.

Construyeron el fantasma del Castro-Chavismo, fomentaron la fobia y el odio a ciudadanos cubanos y venezolanos. Implantaron además una matriz discursiva y comunicacional acusándolos de organizar y financiar grupos irregulares para generar caos. Fueron cómplices de todos los atropellos por parte de las autoridades a los médicos cubanos en tanto divulgaron falsas evidencias sobre la supuesta doble actividad de los médicos como “espías del régimen cubano”. Analistas, presentadores y periodistas alineados con las fuerzas golpistas hablaban sobre la necesidad de impedir que Bolivia se convirtiera en una Cuba o una Venezuela.

Imposible ignorar a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA). “El Ministerio de Colonias” con su vasta experiencia en apoyar golpes de estado y medidas de opresión contra los pueblos, fue un aliado fundamental para las fuerzas golpistas. La publicación de un informe preliminar sobre la auditoria a las elecciones que advertía sobre un fraude, antes de la fecha acordada, fue el catalizador que en pocas horas ayudó a consumar el golpe.

Las Iglesias evangélicas cada vez más vinculadas a la política, también tuvieron activa participación. Estos instrumentos funcionales al imperialismo, reciben financiamiento de los círculos más conservadores, simpatizantes de sus posiciones machistas, patriarcales y xenófobas. En el caso de Bolivia sirvieron además de vehículo para entrar al país el financiamiento para el Golpe.

Como colofón de esta lista de protagonistas del golpe de estado hemos dejado a Jeanine Añez, abogada, presentadora de televisión y senadora por la alianza opositora Unidad Demócrata, que, tras las forzadas renunciadas de Evo Morales, García Lineras, Adriana Salvatierra y el Diputado Borda, se autoproclama presidenta de Bolivia. Cabría preguntarse: ¿por qué Añez, hasta el momento desconocida y con una carrera política en pleno ocaso en tanto su partido no la tuvo en cuenta para formar las listas electorales que se presentaron en octubre? La respuesta correcta a esta interrogante demoró en salir a la luz y llegó a través de la activista feminista y columnista invitada del diario *Página Siete*, María Galindo:

“Jeanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana. Necesitaban a alguien funcional a todos, dispuesto a matar gente por si hubiera alguna revuelta, dispuesto a asumir el cargo con los militares en la calles, alguien que se dejara imponer gabinete de asesinos y asaltantes, necesitaban una persona manejable que funcione como trapo de piso con cuyo nombre limpiar el golpe de estado. Es ahí que suena el nombre de Jeanine Añez una senadora de la periférica de la derecha, que jamás había jugado papel alguno que no sea defender a sus jefes, hacer declaraciones racistas y obedecer. Tuto Quiroga la llama, le manda un avión y Añez acepta siempre y cuando se le pague entre doscientos a trescientos mil dólares por el riesgo de vida que suponía asumir el cargo” (Galindo, 2020).

Con semejante presentación, llega la presidenta autoproclamada, cuyo gobierno cumple al pie de la letra con el refrán popular: del dicho al hecho va un largo trecho. De acuerdo con lo transmitido por los medios de comunicación y lo que ella misma ha manifestado en público, el objetivo de su estancia en la Casa del Pueblo (lo dicho) es llevar a cabo una pacificación del país y convocar a nuevas elecciones en el corto plazo. Sin embargo, cuando miramos a la realidad, es decir a (lo hecho), es bien largo el trecho.

En breve, posesionó un nuevo gabinete, integrado por figuras controvertidas cuyas acciones reforzarían sus verdaderas intenciones de desmontar los logros del proceso de cambio así como en la manera de lo posible proscribir o descabezar al MAS. El método elegido fue la persecución política, el amedrentamiento y el ejercicio de terror y violencia desde el estado. Baste señalar que aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones de pacificación, en otras palabras, dio luz verde a los militares para reprimir al pueblo violentamente.

En menos de un mes ya era responsable de la muerte de alrededor de 30 personas. En su conciencia pesan las masacres de Senkata y Sacaba. Por último, rompe el compromiso de gobernante de transición y anuncia su candidatura a las elecciones generales.

BOLIVIA DESPUÉS DEL GOLPE: LA CRISIS

De manera magistral ha definido la situación actual del país andino en una frase el académico boliviano Rafael Bautista (2020): “No vivimos en un Estado de derecho, sino en “la anomia estatal” que, según la ley del más fuerte, ha convertido a Bolivia en una tierra sin ley ni derecho alguno. Bajo el mandato de la autoproclamada Jeanine Añez y su gabinete las viejas prácticas de corrupción y discriminación han regresado.

El desmontaje de los logros del gobierno del MAS-IPSP ha incluido escandalosos actos de corrupción en las empresas estatales estratégicas. Tal es el caso de Boliviana de Aviación (BOA), cuyo quiebre fue forzado para favorecer a la aerolínea privada AMASZONAS. Por su parte Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha sido saqueada y sus nuevos ejecutivos han sido denunciados por contratos millonarios sin licitación. La empresa estatal de comunicación ENTEL, se vio seriamente afectada, su ex Gerente General Elio Montes Chávez dispuso de sus fondos cual negocio propio. Se ha comprobado que hizo pagos

irregulares a Hoteles 5 estrellas de La Paz, contrató vuelos particulares en avionetas y auspició con sumas millonarias a un corredor de autos. Como colofón de los 82 días que duró su gestión pagó finiquitos descomunales a sus amigos contratados en la empresa y se fugó del país el 13 de febrero en un avión rumbo a Miami.

En medio de tanta corrupción, en el mes de marzo llegó el Coronavirus a Bolivia y fue decretada la cuarentena que vergonzosamente devino en una estafa para el pueblo. El gobierno de facto utilizó como pretexto la necesidad del aislamiento para contener el contagio del virus y justificar su afán de aferrarse al poder, postergando varias veces la fecha de los comicios generales.⁶

Se les pidió a los bolivianos mantenerse en sus casas, prometiendo que en ese tiempo el gobierno terminaría de equipar hospitales, compraría respiradores, instalaría salas de Terapia Intensiva, haría llegar pruebas y reactivos para detectar el Coronavirus, dotaría de laboratorios a los nueve departamentos del país, proporcionaría equipos de bioseguridad para los médicos y enfermeras.

Sin embargo, la realidad fue bien distinta. El gobierno demostró un ineficiente manejo de la crisis, empleando el tiempo y los recursos en negocios turbios. El ejemplo más emblemático fue la compra a sobreprecio de 170 respiradores —que resultaron ser básicos diseñados para ser usados en ambulancias y para terapia intermedia. Este fraude monumental, aún no esclarecido, implicó a altas personalidades del gobierno y significó un daño material al estado de alrededor de tres millones de dólares.

Mientras tanto la situación sanitaria empeora y los contagios aumentan en territorio nacional. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Bolivia es el penúltimo país de la región en cuanto a bajo porcentaje de personas que rebasaron el Coronavirus, con 1 300 recuperados de

más de 11 000 casos positivos declarados hasta el 2 de junio de 2020.⁷

El Estado Plurinacional de Bolivia padece hoy los embates de dos procesos muy peligrosos. Por un lado, el acelerado desmontaje del proceso de cambio por parte del gobierno de facto y por el otro los estragos de la pandemia del Coronavirus, agravados por la ineficiente gestión gubernamental.

“Esta crisis sanitaria ha sido también el argumento para achicar el Estado, a través del cierre de tres Ministerios y algunos viceministerios, pero más que una reducción administrativa, se trata de un ataque a la plurinacionalidad, a la interculturalidad y a la descolonización reconocidas constitucionalmente el año 2009, gracias a las naciones y pueblos indígenas-originarios-campesinos” (Peralta, 2020). Nótese que los Ministerios afectados fueron el Ministerio de Culturas, del cual dependían los viceministerios de interculturalidad y descolonización, así como el Ministerio de Deportes, el de Comunicación y el viceministerio de coordinación con los movimientos sociales que fue convertido en una dirección.

Hoy Bolivia, es un laboratorio de exterminio con un golpe de estado violento, la pandemia instrumentalizada por el estado para eliminar al “enemigo interno” provocando un genocidio indígena, legitimado en un discurso racista con el fin de instaurar un apartheid indígena como en la época de la república colonial (Zapata, 2020).

CONCLUSIONES

El golpe de estado de noviembre de 2019 es una expresión de la disputa entre dos proyectos: el popular indígena originario campesino llevado a cabo por los movimientos sociales y el neoliberal, representado por la derecha boliviana. Bajo el pretexto de la recuperación de la democracia, disímiles actores de la sociedad civil con el apoyo y financiamiento de la embajada de

⁶Las elecciones generales han sido postergadas en varias ocasiones. La última fecha señalada es el 18 de octubre de 2020.

⁷“Bolivia es penúltima en cifra de recuperados de COVID-19 en América” en <https://prensalatina.cu>

Estados Unidos solaparon las verdaderas causas de este acontecimiento: el control de los recursos naturales y la discriminación racial que aun impera en el país.

El gobierno de facto encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, nunca cumplió con sus funciones de gobierno de transición destinado a organizar elecciones en el menor plazo posible. En su lugar se ha encargado de postergar los comicios utilizando como pretexto la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus, mientras

saquea las riquezas del país, desmontando los logros del proceso de cambio al tiempo que sataniza y persigue a los dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo.

El estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en una encrucijada, como consecuencia del reacomodo de las elites nacionales y los intereses de Washington. Al pueblo boliviano le toca apelar al acumulado de los aciertos del gobierno de los más humildes y evitar que se le robe definitivamente la paz, la estabilidad y la soberanía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bautista, Rafael (2020): "Del estado de excepción al estado de rebelión", *Resumen Latinoamericano*, en <https://www.resumenlatinoamericano.org> (15/7/2020).
- Fisher, Max (2019): La crisis en Bolivia ilustra la difusa línea entre golpe de Estado y revuelta, <https://www.nytimes.com/es/2019/11/15/espanol/america-latina/bolivia-golpe-de-estado.html>
- Galindo, María (2020): "Sedición en la Universidad Católica o cómo armaron el golpe los patriarcas" en <https://muywaso.com/sedicion-en-la-universidad-catolica-o-como-armaron-el-golpe-los-patriarcas/> 2020/01/29.
- Malamud, Andrés (2019): ¿Es un golpe de estado lo que ha pasado con Evo Morales en Bolivia? en <https://www.google.com/amp/s/elpais.com/internacional/2019/11/11>.
- Moldiz Mercado, Hugo (2020): "Golpe de Estado en Bolivia, la soledad de Evo Morales" Ocean Sur.
- Peralta Mariñelarena, Rebeca (2020): "Tras el golpe, la pandemia: Bolivia una deriva autoritaria" en <https://www.nodal.am/2020/07/tras-el-golpe-la-pandemia-Bolivia-una-deriva-autoritaria>
- Romano, Silvina; Tamara Lajtmán, Aníbal García Fernández y Arantxa Tirado (2020): EE.UU. y la construcción del Golpe en Bolivia, en <https://www.celag.org/ee-uu-y-la-construccion-del-golpe-en-bolivia/>
- Tellería Escobar, Loreta (2020): "Mujeres en la ruta del golpe en Bolivia; misoginia, neofascismo y persecución", en Revista *Humanidad en Red*, No. 1, marzo de 2020. Red en Defensa de la Humanidad.
- Zapata, Verónica (2020): "Más allá de la elección en Bolivia, de nación clandestina a nación insurgente" en <https://revistapoliticaypoder.com/wp/mas-alla-de-la-eleccion-en-Bolivia-de-nacion-clandestina-a-nacion-insurgente->

OTRAS FUENTES CONSULTADAS

- Delgado, Jorge y Sergio de la Zerda (2020): "Evo: dos llamadas nos salvaron la vida" en <https://www.google.com/amp/s/hurgandoenelavispero1.wordpress.com/2020/03/16>.
- Hernández Bermúdez, Orietta E. (2020): "Otro golpe al Abya Yala: las verdaderas razones del Golpe de Estado en Bolivia". *Revista Cuba Socialista*, enero 2020.
- Kohan, Néstor (2019): Golpe de Estado en Bolivia: debates pendientes y silencios cómplices, <http://espoiler.sociales.uba.ar/2019/11/16/golpe-de-estado-en-bolivia-debates-pendientes-y-silencios-complices/>
- Rivera, Silvia (2019): <https://desinformemonos.org/esta-coyuntura-nos-ha-dejado-una-gran-leccion-contral-el-triunfalismo-silvia-rivera-cusicanqui-desde-bolivia/>



Quiebres y reacomodos en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en el ciclo político-electoral 2020

Breakdowns and rearrangements in United States Foreign Policy toward Latin America in the Political-electoral Cycle 2020

Dr. C. LUIS RENÉ FERNÁNDEZ TABÍO

Doctor en Ciencias Económicas.

Profesor Titular del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana.

e-mail: luis.rene.fernandez@gmail.com

Número ORCID: 0000-0003-3535-2789

Dr. C. HASSAN PÉREZ CASABONA

Doctor en Ciencias Históricas. Profesor Auxiliar del Centro de Estudios

Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana.

Académico Concurrente de la Academia de la Historia de Cuba.

e-mail: hasperezc@cehseu.uh.cu

Número ORCID: 0000-0002-9388-6634

RESUMEN:

En el año 2020 el ciclo electoral presidencial, y en ambas cámaras congresionales, tuvo lugar en medio de múltiples crisis agudizadas por las políticas de Donald Trump, aplicadas en el período 2017-2020, y, de manera especial, por la pandemia provocada por la Covid-19. La combinación de estos y otros factores acrecentó, al mismo tiempo, las contradicciones inherentes a dicho sistema político y la incertidumbre sobre su futuro. Se considera que Estados Unidos está en un momento de ruptura, acentuado en no poca medida a partir de 2016, en medio de una fase de declinación relativa de poder, la cual arrancó, en diversas dimensiones, desde mediados de la década de 1970 del siglo anterior. Dicho proceso puede profundizarse, según los resultados electorales, si Trump es reelegido, o derivar que se restablezcan en parte las tendencias precedentes, ajustadas, si Joe Biden

se instala en la Casa Blanca. La interrelación entre las condiciones actuales de las relaciones regionales, y a nivel global, han experimentado cambios profundos, al igual que los diversos componentes internos de la sociedad. Tanto los factores internos como los externos influyen en la formación de política exterior y son empleados en este análisis para realizar una primera aproximación sobre los escenarios de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región y sus elementos de continuidad y cambio en los próximos cuatro años.

Palabras clave: Continuidad. Cambio. Política exterior. Estados Unidos. América Latina.

Abstract:

In 2020 the presidential electoral cycle, and in both congressional chambers, took place amid multiple crises exacerbated by the Donald Trump's policies, applied in the period 2017-2020, and, especially, by the pandemic caused by the Covid-19. The combination of these and other factors increased, at the same time, the contradictions inherent in this political system and the uncertainty about its future. It is considered that the United States is in a moment of rupture, accentuated in no small measure since 2016, in the middle of a relative phase of power's decline, which began, in various dimensions, from the mid-1970 of the previous century. This process can be deepened, depending on the electoral results, if Trump is reelected, or lead to a partial reestablishment of the previous adjusted trends, if Joe Biden is installed in the White House. The interrelations between the current conditions of regional relations, and at the global level, have undergone profound changes, as have the various internal components of society. Both internal and external factors influence the formation of foreign policy and are used in this analysis to make a first approximation of the scenarios of United States foreign policy towards our region and its elements of continuity and change in the next four years.

Key words: Continuity. Change. Foreign Policy. United States. Latin America. Introducción

INTRODUCCIÓN

La política exterior estadounidense tiene intereses y objetivos permanentes de carácter imperialista, basados en el propósito de mantener su sistema de dominación y explotación. Cualquier ruptura, o debilitamiento de los mismos, conduce al rediseño de políticas en mayor o menor grado. Se reformulan planes y estrategias para reincorporarlos mediante las políticas de subversión y cambio de régimen que consideran favorable a ellos, a partir de las tendencias políticas predominantes en cada período. Por razones geopolíticas el énfasis y la intensidad de la respuesta tiene diferencias de acuerdo con la cercanía geográfica y la identificación de retos que desde su perspectiva tienen los procesos progresistas, nacionalistas, emancipadores y antiimperialistas dirigidos de forma más o menos radical a quebrar esa dominación. México, Cuba, las repúblicas centroamericanas y los países del Caribe han sido priorizados tradicionalmente porque se consideran parte principal de su seguridad nacional (Cockcroft, 2001).

La formación de la política exterior tiene en cuenta, no es ocioso reiterarlo, tanto al gobierno y otras instancias involucradas en el sector externo, como la influencia activa de la sociedad civil al servicio de la clase política, sean presentadas en forma de llamados centros de pensamiento, académicos o asesores políticos dentro del sistema. Hay numerosos marcos conceptuales para abordar las cuestiones relacionadas con la política exterior de Estados Unidos en general o hacia regiones, subregiones o países específicos. Al final se constata una especie de vector resultante, el cual emerge de la actividad exterior concertada, con no pocas grietas en dicho enhebramiento, entre las distintas instancias del gobierno y el entorno social, así como las organizaciones no gubernamentales y el sector de negocios transnacionales.

Sin desconocer la complejidad del proceso de formación de la política exterior de Estados Unidos, en este caso partimos de identificar a la misma como resultado de la función del Estado, y sobre todo del

gobierno y su Ejecutivo (Rodríguez, 2017). El resto de las instituciones y componentes que intervienen se incluyen como parte de otros factores internos expresados principalmente en las posturas de políticos y especialistas que se hacen más visible en el ciclo político electoral a través de informes y artículos en donde aparecen críticas y posturas que pretenden influir en el próximo periodo político.

A lo largo de su historia, la política externa de Estados Unidos ha tenido que ajustarse a sus posibilidades, y a las condiciones del balance internacional de fuerzas dentro de cada etapa (Kissinger, 2004). Debe subrayarse que desde esta perspectiva, aunque existan elementos de continuidad y cambio en la política exterior, ellos son restringidos a modificaciones en el discurso, la forma de presentar la política y los énfasis en unos u otros tipos de instrumentos expresados en planes, programas y estrategias.

Por razones sistémicas del imperialismo, los intereses y objetivos principales del imperialismo no cambian esencialmente, porque todas las variantes se dirigen a preservar y fortalecer o perfeccionar su sistema de dominación y explotación continental. Es decir, se parte del supuesto de que aunque la política exterior de Estados Unidos posee una tendencia a la continuidad, por razones sistémicas y estructurales del imperialismo, dada las condiciones internas de crisis múltiple por la que atraviesa ese país, declinación hegemónica y el desafiante entorno mundial, caracterizado por una crisis económica y pandemia, en el momento actual la política exterior estadounidense hacia Nuestra América representa enormes retos, en cualquiera de los escenarios que resulten de las elecciones estadounidenses después del 20 de enero de 2021 (Aguirre, 2020).

Las distintas corrientes e interpretaciones en la formación de la política han debido considerar los factores objetivos internos y externos, y sus intereses económicos y políticos estratégicos, con prevalencia sobre principios y valores declarados como baluartes de su propia identidad como nación

(Moore, 2004). Las condiciones de la correlación de fuerzas regional y mundial a favor o en contra del sistema imperialista constituyen un enfoque principal en el análisis de la política exterior de Estados Unidos que debe considerarse. La política exterior estadounidense no se realiza en el vacío. Las condiciones internas, sistema y fortalezas o debilidades de los países de la región latinoamericana y caribeña constituyen un aspecto principal en el diseño de la política imperialista, en sus éxitos y sus fracasos.

En este breve artículo se realiza una aproximación de carácter preliminar a las alternativas de política exterior de Estados Unidos en general con énfasis en los casos a los que se le ha prestado mayor atención por considerarse retos a su sistema de dominación continental, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela (National Security Strategy, 2017). Se abordarán también de manera escueta, algunos temas sensibles como las migraciones y otros temas relevantes en las visiones aparentes de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

La presentación en su desarrollo se divide en dos partes donde se abordan las premisas y antecedentes de la situación actual y los factores y condiciones de continuidad y cambio en el escenario bipartidista para el período 2021-2024.

I-PREMISAS Y ANTECEDENTES

El actual ciclo electoral del año 2020 está marcado por múltiples crisis interrelacionadas que complican el escenario político interno y externo y las perspectivas de la política exterior de Estados Unidos en general y hacia la región de América Latina y el Caribe. La COVID-19, sin una respuesta adecuada por el gobierno presidido por Donald Trump, ha agudizado los problemas y desafíos propios del sistema imperialista. La crisis económica catalizada por la pandemia, que de todos modos estallaría, pone en evidencia viejos desafíos raciales, sociales, políticos e incluso en torno a la identidad nacional. El debate en relación con

la identidad política del país, temática en cuestionamiento desde hace décadas, ha llegado a niveles de intensidad inusitados. Estas dificultades alcanzan expresión en una crisis del sistema bipartidista, grave ruptura del consenso al interior de la clase dominante, que ha puesto en entredicho la estabilidad del proceso electoral y su propio desenlace, en el lapso comprendido entre el 3 de noviembre de 2020 y el 20 de enero de 2021. Claras evidencias de corrupción, denuncias de fraude, obstrucción del voto, utilización del dinero de campaña con objetivos de sobornar, entre otras cuestiones, ponen sobre el tapete que se trata de un entorno cada vez más tóxico. La mentira, la manipulación y la violencia han ocupado un lugar importante en el año electoral con pocos antecedentes históricos de tal magnitud y gravedad, no así las propuestas concretas, desde una integralidad de concepciones y enfoques políticos, en cuanto a planes y programas que pudieran confluír, al menos en que se atenuaran dichos flagelos.

Las políticas económicas de Trump han aumentado las diferencias socioeconómicas y profundizado un escenario dual. Por una parte, la economía real de la producción material y los servicios, con millones de trabajadores que han perdido su puesto laboral en medio de esta aguda crisis; y por otro la economía especulativa y parasitaria del gran capital de Wall Street en auge, acumulando ganancias para los millonarios mediante políticas gubernamentales de reducir tasas de interés y desembolsar enormes sumas que acaban abrumadoramente en las manos de los ricos.

La crisis de salud, junto a la crisis económica y las políticas gubernamentales, hacen más acendrada la crisis social que afecta a los más variados sectores, pero en particular, y de forma desproporcionada a los afrodescendientes e hispanos.

A su vez, se intensifica la crisis del sistema bipartidista, así como la falta de consenso dentro de la clase política. Es perceptible, incluso, atisbos en varias direcciones, de ruptura de las bases que dan cuerpo y sustentan a dicho sistema político,

lo cual ha hecho pensar a no pocos en un Estado fallido, calificativo que Estados Unidos endilga a las naciones que se esfuerza en desacreditar (Parker, 2020).

Debe tomarse en cuenta, asimismo, la manera en que la actual administración ha venido manobrando en torno a la composición de la Corte Suprema, como medio político para profundizar las tendencias del conservadurismo y la reacción.

Esta crisis integral en Estados Unidos es la mayor desde la posguerra, y tiene como trasfondo precisamente un año electoral. Aunque ha dado algunas señales de repunte no solo está lejos de terminarse la pandemia, como no deja de propalar Trump, sino que esta se hace más terrible en buena parte del país, a lo que hay que incorporar los riesgos de estallido de otra burbuja financiera, que no puede descartarse.¹ Esta situación de múltiples crisis y problemas sin resolver debe ser uno de los factores clave en los resultados electorales de acuerdo con las percepciones de los votantes (Jervi, 2020).

Las actuales circunstancias críticas renuevan el debate sobre las mejores variantes estratégicas para manejar esta situación en interés de la oligarquía financiera de Estados Unidos, pero las visiones dentro de esa cúpula se encuentran muy divididas. La polémica no comenzó ahora, ni concluirá en este año, debe mantenerse en la búsqueda de un consenso, que parece algo huido en la actualidad, por las agudas discrepancias entre el partido demócrata y republicano, así como al interior de las organizaciones e instituciones principales del sistema político. Todo ello desde la preeminencia que le otorgan dicho sectores a que cualquier reacomodo no comprometa los intereses de seguridad

nacional de Estados Unidos, asumida dicha concepción tanto en el plano doméstico como en su proyección internacional (Rostow, 1993).

La importancia de analizar de manera crítica los planteamientos realizados por estrategias, políticos y expertos en política exterior del imperialismo, en medio de las actuales circunstancias, estriba en que de ellos pueden extraerse algunos rasgos y tendencias de lo que presumiblemente será la estrategia de política exterior en los próximos años.

La declinación del poder relativo de Estados Unidos respecto a potencias emergentes es un problema que se ha abordado de manera intermitente desde finales de la década de 1960 y principios de 1970. El debate sobre el mismo se exagera en condiciones de crisis y grandes desafíos y sigue siendo en el presente un problema principal (Ludes, 2020). A partir del interés nacional, asociado básicamente a las motivaciones económicas y de seguridad nacional, el balance de poder y los retos identificados, se formulan distintas visiones estratégicas, que obviamente no siempre confluyen.

La política del presidente Donald Trump, desde su llegada al gobierno en enero de 2017, rompe en no poca medida con el consenso de política exterior precedente, y marca las condiciones de partida para el próximo período que se iniciará el 20 de enero de 2021. Bajo el lema de “Estados Unidos primero” y un conservadurismo nacionalista reaccionario y populista, ha modificado algunos elementos sustanciales, que habían permanecido tanto con presidentes republicanos como demócratas, desde inicios de la década de 1980 y aún antes pero que ahora han alcanzado mayor trascendencia en medio del nacionalismo conservador (Kagan, 2018).

¹Al momento de concluir este trabajo, 25 de octubre del 2020, el número de casos en Estados Unidos contagiados con la Covid-19, —según las métricas del Coronavirus Resource Center, de la Johns Hopkins University— es de 8 626 537, mientras que la cifra de muertes es 225 197. Las estimaciones de prácticamente todas las entidades especializadas en la materia plantean que, en la jornada electoral del 3 de noviembre del 2020, dicha nación superará los 240 mil fallecidos y que, para el 1ro de enero del 2021, ascenderían a más de 400 mil las víctimas mortales (Coronavirus Resource Center, 2020).

Trump quebró o reformó principios del orden internacional de posguerra, desde alianzas estratégicas, diplomáticas, económicas y militares, hasta los más diversos acuerdos, como los de libre comercio impulsados por Estados Unidos a partir de la década de 1990. Desde esa óptica rechazó importantes acuerdos y tratados internacionales, desestimando a las Naciones Unidas (ONU) y muchas de sus organizaciones. Un hecho de particular connotación adversa, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, fue retirar el apoyo y anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando para ello que dicha entidad favorecía a los intereses de China. Es relevante, de igual manera, su rechazo a los acuerdos de París sobre Cambio Climático y los referidos a la reducción de armas suscritos con Rusia y otros actores globales de primer orden.

La administración de Donald Trump ha restablecido las expresiones imperialistas más brutales hacia los países de América Latina y el Caribe, incluyendo la tristemente célebre Doctrina Monroe, que al menos en el discurso formal de la anterior administración habían sido superadas. El empleo de medios de poder económico, sin desconocer las movilizaciones militares y las amenazas con el empleo de la fuerza, ha sido otro de sus rasgos característicos, sin excluir ninguno de los otros instrumentos del llamado poder blando, para retrotraer los procesos emancipadores, pero con énfasis en las consideradas amenazas a su seguridad nacional y estabilidad regional, debido a su orientación socialista. Los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron colocados como sus prioridades en la campaña de subversión y cambio de régimen. Guerra política, económica, comunicacional, judicial y diplomática, han sido empleadas,

sin olvidar las operaciones violentas y encubiertas, hasta el respaldo velado a acciones terroristas y amenazadoras. En las actuales circunstancias la dinámica de política interna en Estados Unidos y la orientación ideológica disruptiva de su presidente constituyen un factor principal que encuentra expresión en el caso de Cuba.

En este sendero Trump ha añadido nuevos insumos a un accionar sostenido en el tiempo por Estados Unidos, en múltiples campos, adoptando como uno de sus referentes, al menos en lo que respecta a sus posicionamientos nacionalistas, a la figura no menos infausta de Andrew Jackson, uno de los inquilinos decimonónicos en la Casa Blanca (Haass, 2020: 28).²

Una de las principales tendencias en la política exterior de Estados Unidos ha sido la incertidumbre, la volatilidad, el caos, e incluso falta de coherencia en ciertas decisiones de política exterior (Kiel y Elliot, 1997). Estas parecen responder a aspectos de política interna (demandas de la base electoral de Trump) (*Make America Great Again*), más que a una estrategia basada en opiniones de expertos y cuadros experimentados de la burocracia gubernamental, que pone en un segundo plano las consecuencias a más largo plazo desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico (Wright, 2020). Existen algunas evidencias que se está creando una fuerza política bipartidista, tanto demócrata como republicana para tratar de restablecer el funcionamiento del sistema político y si ello se consolida podría explicar la llegada de Joe Biden a la presidencia.

El problema con el enfoque destructivo de un sistema o política existente es que se debe tener un plan integral para su reconstrucción, y ello es

²Aclara este afamado politólogo que: “En algún sentido la aproximación de Trump incorpora elementos de larga data a la política exterior actual de EE.UU. y especialmente republicana —particularmente el nacionalismo unilateralista del presidente Andrew Jackson, el aislacionismo pre y pos II Guerra Mundial de figuras como el senador republicano Robert Taft de Ohio y más recientemente el proteccionismo de los candidatos a la presidencia Pat Buchanan y Ross Perot. Pero lo que distingue a Trump más que cualquier otra cosa es el énfasis que pone en intereses económicos y su estrecho entendimiento de qué son y cómo deben ser alcanzados.”

una de las carencias más graves de la administración republicana (Papenfuss, 2018).³

La idea central para modificar la política exterior de Trump parte de considerar que el orden liberal de libre comercio y movimientos de capital ha tenido consecuencias negativas para grupos de la sociedad estadounidense incrustados en la visión de identidad de la nación. La necesidad de ajustar tanto el orden mundial como los términos de la globalización parece tener trascendencia (Lissner, 2020). Hasta economistas como Joseph Stiglitz se refiere a este problema y sugiere debe ser solucionado por las afectaciones sociales e incluso políticas que representa (Stiglitz, 2012) (Stiglitz, 2017) y (Stiglitz, 2020). Trump ha captado el sentimiento de insatisfacción de una parte de los blancos conservadores de ese país, que se creen perjudicados por la globalización y ello le ha ganado el apoyo de visiones conservadoras que insisten en la “necesidad” de una nueva política exterior (Cohen, 2020).

La política de Trump pone un énfasis en el unilateralismo y ha ocasionado una pérdida aún mayor de prestigio y autoridad internacional a Estados Unidos, respecto al que cada vez más deteriorado pudo haber tenido antes. Este tipo de política con amplio empleo de la coerción y la fuerza no significa que haya renunciado totalmente a mantener alianzas. Los principales instrumentos de su hegemonía desde la posguerra se mantienen. Lo que ha reforzado el componente económico en la política de fuerza, el uso de las sanciones económicas unilaterales e ilegales como expresión de su preferencia por el poder duro y la inclinación hacia las negociaciones bilaterales bajo presión y chantaje (Robinson, 2018). Esta política exterior

y de seguridad más agresiva está respaldada por un significativo aumento en los gastos militares para mantener la supremacía mundial en este campo.

Específicamente en lo que respecta a la formulación de la política de Trump hacia Cuba se conjugan factores específicos que influyen en sus decisiones. El archipiélago no es una prioridad entre otros tantos retos mundiales de gran significación como China, Rusia, Corea, Irán, Siria, Israel, si bien se presenta como un problema para el Hemisferio Occidental con argumentos obsoletos de la guerra fría y el macartismo.

Las tendencias de “guerra fría” y “monroísmo” parecen resurgir en la percepción estadounidense de conflicto con diversos países, y de forma marcada con China, en la disputa por preservar una supremacía que consideran inamovible (Grabendorff, 2018).

Trump, además, enfrentó incontables desafíos en política interna que fracturaron —en una medida nada despreciable, y más allá de cualquier retórica triunfalista de su parte—, su estabilidad. Entre ellos están: división política de la clase dominante y fractura del bipartidismo, falta de consenso entre los funcionarios del propio Ejecutivo, que se expresan en incontables sustituciones, y pugnas con todos los órganos del gobierno. Todo esto llegó potencialmente, si bien no se consumó su destitución, a poner en juego su permanencia en la Casa Blanca, a raíz del proceso de *impeachment* que se le siguió. Estas condiciones han creado un contexto favorable para la influencia de figuras portadoras de políticas extremistas hacia Cuba, las cuales ofrecen respaldo al Presidente ante la avalancha de sus problemas en política interna.

³El renombrado profesor Jeffrey Sachs afirmó lo siguiente respecto a la política de Trump: “[...] las llamadas políticas de Trump no son realmente políticas [...]· Enciende las guerras comerciales y las apaga· las pone en pausa y las enciende de nuevo· en el transcurso de días [...]· Las compañías extranjeras son sancionadas hoy y rescatadas al próximo día [...]· Acuerdos globales y reglas son destruidos [...]· La distorsionada sintaxis de Trump y sus ideas desorganizadas son imposibles de seguir [...]· Trump comete errores primitivos· porque no tiene una idea de cómo funciona la economía mundial.”

II-FACTORES Y CONDICIONES DE CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL ESCENARIO BIPARTIDISTA

Los factores y condiciones inmediatos que determinan el ajuste o continuidad de la política exterior, en este caso hacia América Latina y dentro de esta a sus prioridades obedece principalmente a los de carácter interno, su situación económica, social, ideológica y política, lo que no implica que, en modo alguno, se desconozcan los elementos externos, fundamentalmente aquellos que se insertan dentro de la dinámica geopolítica internacional, con énfasis en el ámbito hemisférico.

Es así que, desde esta perspectiva de análisis, deben considerarse, con todo rigor, las condiciones en los países y subregiones objetos de la política, y la capacidad de influencia imperialista, de subversión, mantenimiento de gobiernos afines y posibilidades de cambio de régimen a favor de su sistema de dominación y explotación. Es decir, debe tenerse en cuenta tanto los problemas internos de Estados Unidos, que participan en la formación de la política, las tendencias políticas dominantes dentro de los sectores de la clase política, como la situación de los países a los que se destina estas políticas y la correlación de fuerzas en el contexto regional y global.

La administración Trump se ha esforzado por disminuir el flujo de entrada de inmigrantes, sobre todo desde el Caribe y América Latina, y en términos prácticos lo ha logrado. Aunque se han presentado otros argumentos de tipo económico y electoral para rechazar la entrada de nuevos flujos migratorios, como pérdida de empleos, criminalidad y otros pretextos, la clave del problema está en el debate sobre identidad política (Fukuyama, 2018). La verdadera motivación se relaciona con las modificaciones que estas entradas, a lo largo del tiempo, han provocado a la composición demográfica de Estados Unidos y la eventual modificación de la identidad nacional tradicional identificada como blanca, anglosajona y protestante (WASP por sus siglas en inglés), a la que se resisten los supremacistas blancos (Huntington,

2004). Las regulaciones que se continuarán aplicando en la etapa de recuperación de esta crisis, por razones epidemiológicas, son consistentes con este enfoque y por ello se espera continuarán aun si llega a la Casa Blanca un presidente demócrata que introduzca modificaciones. Si esto último ocurriese, la victoria del partido azul, dicho proceder se desarrollaría en una menor cuantía y bajo un discurso donde se remarque que se opera de manera opuesta a su predecesor.

Se ha reconocido que no hay recuperación sin salida del confinamiento, pero una apertura adelantada sin mecanismos de control de los contagiados, incluyendo los asintomáticos puede provocar como ya ha sucedido, nuevos máximos en la epidemia que obliguen a restablecer el cierre de la movilidad y los distanciamientos sociales físicos. En lugar de una crisis económica profunda, podría ser una larga depresión económica, sobre todo porque es una pandemia. La solución tiene que ser mundial y la colaboración internacional muy importante, tomando a la ciencia como pilar. No es posible lograrla en un país aislado, en autarquía (Guterres, 2020).

A ello hay que agregar la aguda división política entre demócratas y republicanos, que dificulta desde hace años el funcionamiento del gobierno, pero que en estos últimos años ha empeorado. Existe una desconfianza bastante general sobre el sistema político, y también sobre las elites políticas. Las elecciones de 2016 y el resultado favorable a Donald Trump constituyeron una clara expresión de la gravedad del problema que alcanza niveles muy superiores en 2020.

Los lineamientos de política de los que ha sido portador Trump constituyen también una ruptura con buena parte del liderazgo conservador. El trumpismo se consideró como algo inviable, se subestimó su capacidad de triunfar y la falta de una estrategia estructurada. Demostró la capacidad de imponer sus políticas, aunque fracasó en cumplir muchas de sus promesas. Durante su mandato se ha desplegado una política exterior de confrontación,

unilateralismo extremo, rechazo al multilateralismo y amenaza y empleo de la fuerza con énfasis en los instrumentos económicos de poder, las tarifas aduaneras, las sanciones unilaterales, mejor denominadas como instrumentos económicos de coerción política. Esta administración ha significado una ruptura con el consenso de política exterior de posguerra, abrazado tanto por gobiernos republicanos como demócratas.

Las condiciones de partida, tanto dentro de Estados Unidos con las múltiples crisis como los desafíos y el balance de fuerzas regional y global son comunes y junto a los intereses y objetivos permanentes de la clase política determinan la tendencia a la continuidad de la política exterior como ya se ha expresado.

La política hacia la región, considerando un segundo período con Trump, naturalmente reforzaría las líneas generales de su política hasta ahora hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua y el rechazo a las migraciones, así como continuar la construcción del muro fronterizo, aunque no se puede desconocer se hagan algunos ajustes, sea por el cambio de la correlación regional y los intereses de corto plazo del presidente que como se sabe, no podría optar por seguir en la Casa Blanca.

La victoria electoral arrolladora del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia es mucho más que simbólica. Con independencia que desde Washington, y sus aliados, se tome nota sobre cómo fue posible ello ocurriera, con el consiguiente diseño de nuevas estrategias públicas y privadas para evitar un panorama en las urnas similar en cualquier otro país de la región, es muy probable que la envergadura de lo ocurrido en la tierra andino-amazónica impacte, desde múltiples ópticas, en otras geografías del área. De forma especial, en aquellas que están abocadas a ventilar batallas en las urnas, como es el caso de Chile, en cuanto a la viabilidad de aprobar un nuevo documento constitucional, o de Ecuador, por solo citar algunos ejemplos, que encarará a comienzos del 2021 elecciones presidenciales.

La situación de Cuba a pesar de la pandemia, crisis económica y bloqueo recrudecido hasta alcanzar una guerra económica despiadada no ha frenado el perfeccionamiento del país. Notable prestigio internacional adquiere el éxito en el manejo de la crisis sanitaria, a lo que se suma el despliegue de más de cincuenta brigadas médicas, en alrededor de cuarenta naciones de todo el orbe, como parte del quehacer solidario tradicional antillano. No en balde, cientos de organizaciones y personalidades políticas, gubernamentales, intelectuales y de los más diversos movimientos sociales de todos los continentes, impulsaron la candidatura del Contingente Henry Reeve para que fuera acreedor del Premio Nobel de la Paz, galardón que finalmente recibió el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Venezuela, por su parte, avanza en el restablecimiento de su sistema democrático con las elecciones parlamentarias. La maniobra golpista de instaurar un presidente “virtual” como Juan Guaidó, orquestada desde la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional a comienzos del 2019, se encuentra absolutamente invalidada, en el plano internacional. Ello es una de las muestras fehacientes de la extraordinaria capacidad del proceso bolivariano para resistir y vencer las embestidas imperiales que, con renovadas energías se han cebado contra su pueblo en los últimos años. Hay que tomar en cuenta, además, que no resultaría sorprendente se sigan dando cambios contrarios a la lógica del imperialismo en Chile, Brasil y Colombia, que son países muy importantes como aliados regionales de Estados Unidos.

Sin poder presentar un pronóstico definitivo, no es el propósito de este artículo, un cambio desfavorable en la correlación regional de fuerzas, contraria a la dominación imperialista, no se puede descartar en los próximos años y ello devendría en elemento de enorme peso que gravitaría en la formación de su política.

En cuanto a Joe Biden se requiere hacer algunas advertencias. No es posible un regreso mecánico

a los últimos dos años de Obama, aunque haya sido su vicepresidente, porque, entre muchas variaciones desde entonces, el momento histórico concreto actual está signado por condiciones de naturaleza y esencia extraordinariamente complejas, tanto a escala interna como a nivel foráneo. Ya se conoce por la plataforma demócrata, que menciona el enfoque general sobre Cuba, que se aboga por la idea de regresar en cierto sentido a las políticas de la administración demócrata precedente, si bien sería aventurado vaticinar la inmediatez y ritmo de dicha implementación, más allá de lo declarado en el marco electoral (Democratic Party Platform, 2020).⁴

Creemos se trataría, en verdad, de una política en la que ganarían espacio, temáticas que le permitirían desplegar, con marcado interés mediático, una mayor presión en las socorridas esferas de “derechos humanos”, “libertad” y “democracia”.

En este punto, naturalmente, no habrá ninguna concesión de la parte cubana por ser una intromisión en asuntos internos y una violación en la independencia y soberanía cubana y porque el destino de la Mayor de las Antillas solo se decide por la voluntad de su pueblo (Castro, 2000).⁵ Respecto a Venezuela puede coincidir que Biden aprecia las llamadas sanciones económica unilaterales a ese país como “una de las herramientas de la estrategia”, por lo que se espera una modulación en el empleo de estos instrumentos sin modificar en lo más mínimo sus objetivos (Lissardy, 2020).

Un énfasis por parte de un futuro gobierno de Biden puede ensombrear las relaciones con aliados en temas como el medio ambiente, democracia, corrupción y derechos humanos en Brasil, Colombia y Chile, países con fuertes conflictos internos, oposición y protestas.

CONCLUSIONES

El ciclo político de este año tiene condiciones excepcionales para el diseño de la política exterior de Estados Unidos hacia Nuestra América, con un elevado grado de incertidumbre dada la complejidad del escenario político interno, regional y mundial. Cualquiera sea el presidente tendrá que realizar potenciales ajustes por la interrelación de múltiples crisis: la COVID-19, la crisis económica, la crisis social y política. La reelección de Trump supone una mayor agudización de las contradicciones por su empeño en beneficiar a ciertos sectores del gran capital, sobre todo del sector de los hidrocarburos y al militar.

No es posible la recuperación económica sin control epidemiológico y ello es un desafío que en el escenario más optimista debe ocupar al menos la primera mitad de 2021. La COVID-19 catalizó la crisis económica, pero sus causas están en desequilibrios macroeconómicos, deudas y el balance comercial y financiero negativo, agravados por proteccionismo y guerras económicas, así como una ineficiente gestión social en todos los planos, en lo particular en los campos de la salud, educativo y

⁴En dicho documento se plantea, con respecto a Cuba, que: “Los demócratas también nos moveremos rápido para revertir las políticas de la administración Trump que dañan los intereses nacionales de EE.UU. y afectan al pueblo cubano y sus familias en Estados Unidos, incluyendo los esfuerzos para reducir los viajes y las remesas. En lugar de fortalecer al régimen, nosotros promoveremos los derechos humanos y los intercambios pueblo a pueblo y empoderaremos al pueblo Cubano para que escriba su propio futuro.” Hacia Venezuela, el propio texto, señala cierto ajuste al reconocer que la política de Trump ha fracasado en el empeño de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

⁵Es imposible examinar en breves líneas el pensamiento profundo de Fidel sobre el sistema político estadounidense, incluyendo las cuestiones electorales. Apenas como botón de muestra, en tanto se refiere a una idea que ha operado como brújula desde Cuba, a partir de 1959, vale la pena recordar esta afirmación del año 2000: “Nada nos importa quien pueda ser el próximo jefe de gobierno de la superpotencia que ha impuesto al mundo su sistema de poder hegemónico y dominante. Ninguno de los que aspiran a serlo nos inspira confianza alguna. Es inútil que inviertan innecesario tiempo en declaraciones y promesas contra Cuba [...]. Cualquiera que fuese el nuevo presidente de Estados Unidos, deberá saber que aquí está y estará Cuba con sus ideas, su ejemplo y la indoblegable rebeldía de su pueblo”.

viviendas. No se puede descartar una crisis financiera por el estallido de una burbuja especulativa y mayores tensiones en el sistema financiero por el debilitamiento en la confianza en el dólar estadounidense debido al exorbitante déficit fiscal. Todo esto es resultado, en última instancia, de un modelo de desarrollo capitalista que acentúa las enormes brechas entre los sectores oligárquicos, el 1 %, y el resto de los habitantes.

Los múltiples atolladeros nos permiten reconocer una crisis estructural sistémica del imperialismo, que oscila entre formulas autoritarias y neofascistas de Trump, o tal vez una variante reformista de Biden, que busque una especie de alternativa contemporánea al llamado “Nuevo Trato”.

En esta contienda electoral existe una exacerbada manipulación mediática, mentiras, obstáculos a la participación de los votantes, invitación al fraude y cuestionamiento del voto postal por Donald Trump, corrupción generalizada que augura un desenlace incierto, violento, conflictivo.

La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina está enmarcada en el bipartidismo y estas opciones, sea la continuidad reforzada de las políticas destructivas de Trump, que en ese caso supondría ha recibido un mandato para profundizar su proyecto político conservador, o un intento de recomposición de una política más balanceada, en lo que se sería la eventual presidencia de Biden-Harris, tendrá que restablecer o “re-imaginar”, en cualquier caso, el marco global del llamado Orden Liberal de Posguerra seriamente dañado por la administración Trump.

En estos escenarios no debe esperarse que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca sea un regreso exacto y de inmediato de las políticas de Barack Obama durante los dos últimos años de su segundo periodo, hacia naciones como Cuba. Las múltiples crisis por las que atraviesa Estados Unidos en 2020 son mucho más complejas que la crisis de 2008 y abarca dimensiones internas y externas. La solución de las mismas será la verdadera prioridad de su establecimiento institucional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, Mariano (2020): “The United States and Latin America after 20 January 2021”, *America's Global Role*, Chatham House, Dirección URL: <<https://americas.chathamhouse.org/article/the-united-states-and-latin-america-after-january-20-2021/>> Acceso: 20 de octubre 2020.
- Castro Ruz, Fidel (2000): “Mensaje a la Tribuna Abierta de Manzanillo”, 1ro. de julio, Dirección URL: <<https://www.fidelcastro.cu/es/correspondencia/mensaje-de-fidel-la-tribuna-abierta-de-manzanillo>> Acceso: 17 de octubre de 2020.
- Cockcroft, James D. (2001): *América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país*, Siglo XXI, México.
- Cohen, Raphael S. (2020): “Why the United States Need a New Foreign Policy in 2020”, *The Rand Blog. Rand Corporation*, May 26, Dirección URL: <<https://www.rand.org/blog/2020/05/why-the-united-states-will-need-a-new-foreign-policy.html>> Acceso: 23 de octubre 2020.
- Coronavirus Resource Center (2020): Johns Hopkins University, 25 de octubre, Dirección URL: <<https://coronavirus.jhu.edu>> Acceso: 25 de octubre de 2020.
- Democratic Party Platform* (2020), Dirección URL: <<https://www.presidency.ucsb.edu/people/other/democratic-party-platforms/>> Acceso: 23 de octubre 2020.
- Grabendorff, Wolf (2018): “América Latina en la Era Trump. ¿Una región en disputa entre Estados Unidos y China?” *Nueva Sociedad*, Número 275, Mayo-junio, pp. 47-75, Dirección URL: <https://nuso.org/media/articles/downloads/2.TC_Grabendorff_275.pdf> Acceso: 15 de octubre 2020.
- Fukuyama, Francis (2018): *Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Guterres, Antonio (2020): “Este es el momento para la ciencia y la solidaridad”, Dirección URL: <<https://www.un.org/es/coronavirus/articles/guterres-combatir-infodemia-desinformacion-covid-19>>

Quiebres y reacomodos en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en el ciclo político-electoral 2020

- Haass, Richard (2020): "Present at the Disruption. How Trump Unmade U.S. Foreign Policy", *Foreign Affairs*, September-October, Vol. 99, Number 5, pp. 24-34.
- Huntington, S. P. (2004): *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon and Schuster.
- Jervi, Robert (2020): "Robert Jervis reflects on America's Foreign Policy for January 2021: what to plan for when you're expecting", 15 January, Chatham House, Dirección URL: <<https://americas.chathamhouse.org/article/robert-jervis-reflects-on-americas-foreign-policy-for-january-2021-what-to-plan-for-when-youre-expecting/>> Acceso: 20 de octubre 2020.
- Kagan, R. (2018): "'America First' has Won", *The New York Times*, September 23, p. A27, Dirección URL: <<https://www.nytimes.com/2018/09/23/opinion/trump-foreign-policy-america-first.html/>> Acceso: 28 de junio 2020.
- Kiel, L. D. and Elliott, E. (ed.) (1997): *Chaos Theory in the Social Sciences*, The University of Michigan Press.
- Kissinger, H. (2004): *Crisis: the Anatomy of two major Foreign Policy Crises*, New York: Simon and Schuster.
- Lissardy, Gerardo (2020): "Trump vs. Biden: las dos visiones encontradas sobre América Latina de los dos candidatos a la presidencia de EE.UU." *BBC News/Mundo*, 20 de octubre, Dirección URL: <<https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54611221/>> Acceso: 21 de octubre 2020.
- Lissner, Rebeca y Mira Rapp Hooper (2020): "A Foreign Policy for the Day After Trump. Reimagining-Not restoring the Liberal World Order", *Foreign Affairs*, September 30, Dirección URL: <<https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-09-30/foreign-policy-day-after-trump/>>.
- Ludes, Jime (2020): "What if we talked about Foreign Policy", Pell Center for International Relations & Public Policy, Salve Regina University, October 15. Dirección URL: <<https://pellcenter.org/what-if-we-talked-about-foreign-policy/>> Acceso: 21 de octubre de 2020.
- Moore, Michael (2004): *¿Qué han hecho con mi país?*, Ediciones B, Grupo ZETA, Barcelona.
- National Security Strategy of the United States of America* (2017), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- Papenfuss, Mary (2018): "A Renowned Economist Jeffrey Sachs, Rips Trump as a Gibbering 'Delusional' Threat", *Huffpost*, June 2. Dirección URL: <https://www.huffpost.com/entry/jeffrey-sachs-slams-delusional-psychopathic-trump_n_5b11e510e4b0d5e89e1fc756/> Acceso: 23 de julio 2020.
- Parker, George (2020): "We Are Living in a Failed State", *The Atlantic*, June, <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/06/underlying-conditions/610261/> Acceso: 12 de septiembre de 2020.
- Robinson, L., et al. (2018): *Modern Political Warfare: Current Practices and Possible Responses*. RAND Corporation, Santa Monica, California. Dirección URL: <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1772/RAND_RR1772.pdf> Acceso: 13 de mayo de 2019.
- Rodríguez, Leyde E. (2017): *Un siglo de Teoría de las Relaciones Internacionales*, Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana.
- Rostow, Eugene V. (1993): *Toward Managed Peace. The National Security Interests of the United States, 1759 to the Present*, Yale University Press, New Haven.
- Stiglitz, J. E. (2012): *The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future*, W.W. Norton & Company, New York.
- Stiglitz, J. E. (2017): *Globalization and Its Discontents. Anti Globalization in the Era of Trump*, W.W. Norton & Company, New York.
- Stiglitz, J. E. (2020): *Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar*. [People, power and Profit: progressive Capitalism for an Age of Discontent], Penguin Random House, Grupo Editorial, S. A. U., Barcelona. ISBN ebook: 978-84-306-2316-7.
- Wright, Thomas (2020): "Order from Chaos. Between restoration and change", Brookings. October 1, Dirección URL: <<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/10/01/between-restoration-and-change/>>. Acceso: 12 de octubre de 2020.



La migración centroamericana. Ángulos de un problema

The Centralamerican Migration. Angles of a Problem

LIC. LEYLA CARRILLO RAMÍREZ

Investigadora del CIPI sobre temas europeos y asuntos globales. Miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de la Asociación Cubana de Naciones Unidas.

e-mail: leyla@cipi.cu

RESUMEN:

Los seres humanos son migrantes natos, desde el surgimiento de la especie hasta nuestros días, pero hoy son rechazados en las diversas latitudes de nuestro planeta y se incrementan las medidas restrictivas o punitivas para evitar su afluencia a los principales países receptores.

La problemática migratoria en nuestro continente se presenta diversa, sectorial y contradictoria. Quienes emigran hacia el Norte procuran subsistir y mejorar sus precarias condiciones de vida en medio de la desigualdad y el desorden económico-social imperante. México es un país con dos ángulos migratorios: los nacionales que se trasladan hacia Estados Unidos y los inmigrantes centroamericanos que transitan hacia El Dorado americano. En tanto, el mayor país receptor universal, rechaza, penaliza y militariza sus fronteras.

Palabras clave: migración, rechazo, medidas punitivas, desplazados.

Abstract:

Human beings are born migrants, from the emergence of our species to the present day, but today they are rejected in the different latitudes of our planet and restrictive or punitive measures are increased to avoid their influx to the main receiving countries.

The migratory problem in our continent is diverse, sectorial and contradictory. Those who emigrate to the North try to survive and improve their precarious living conditions amid the prevailing inequality and economic-social disorder. Mexico is a country with two migratory angles: nationals who move to the United States and Central American immigrants who transit to the American El Dorado. Meanwhile, the largest universal host country, rejects, penalizes and militarizes its borders.

Key words: migration, rejection, punitive measures, displaced.

INTRODUCCIÓN

El problema migratorio trasciende las fronteras de todos los continentes, aunque el traslado corresponda a diversas motivaciones, intereses y destinos de los viajeros. Migrar constituye un acto derivado a la existencia y necesidad de supervivencia humanas. Lo más visible es el naufragio o la muerte durante la huida. Sin embargo, son minimizados los efectos políticos, económicos, sociales y humanos para los acogidos o los devueltos y excluidos (Carrillo Ramírez, 2015: 13).

El problema migratorio se ha convertido en uno de los más acuciantes en la agenda internacional, al presentar una dualidad entre los intereses del Norte político-militar (el mayor receptor a escala universal) y el Sur, proveedor de personas que, provenientes de países subdesarrollados e inestables, se trasladan con la intención de mejorar sus condiciones socio-económicas o huir de los conflictos armados y de calamidades ecológicas y sanitarias.

La contradicción entre países receptores y emisores de migrantes y desplazados no se resuelve al corto ni mediano plazos, mientras prevalezcan las desigualdades entre el Norte y el Sur y la inequidad entre ricos y pobres. Centroamérica es una de las regiones con mayores desigualdades sólo erradicables si se aplican políticas públicas que mitiguen las causas provocadoras del éxodo hacia el Norte.

En el continente americano, los emisores se trasladan desde el sur y el centro, en un intento por sobrevivir y mejorar las condiciones elementales, de las que carecen en países colonizados por las metrópolis europeas, neocolonizados por Estados Unidos y las transnacionales y expoliados por los más desarrollados. El artículo sobre la situación migratoria expone las dificultades actuales que afrontan los centroamericanos para que fructifique un cambio inmediato de la situación, la herencia colonial, neocolonial y neoliberal, que integra la agenda de los ejecutivos estadounidenses, en competencia electoralista.

RESUMEN HISTÓRICO

Al abordar el incremento de las caravanas de inmigrantes en Centroamérica sería oportuno recordar que el ser humano es un migrante per se y sus aptitudes mutantes y móviles generaron la extensión, diversificación e interrelación entre costumbres, culturas, historia, etnias, religiones y economía en nuestro planeta.

Gracias a la voluntad migratoria del *homo sapiens*, del hombre de Neardental, de los nómadas asiáticos, de los bereberes en el norte africano, de los mayas en México y Centroamérica, de los caribes y taínos en el Caribe, de los incas y aimaras en América del Sur, nuestra especie se ha nutrido y vigorizado, trasmutando desde África austral hasta la Patagonia (Carrillo Ramírez, 2016).

Correspondería justipreciar un derecho, enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y refrendado entre los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que abogaron por la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

También convendría recordar lo establecido por el derecho consuetudinario como son el derecho a:

- permanecer en el lugar de nacimiento
- trasladarse en busca de nuevos horizontes
- ser acogido y
- regresar a su lugar de origen

Sin embargo, un aspecto controversial sobre las corrientes y dimensiones del actual movimiento migratorio es definir a los migrantes y sus variables, que tienden a homologarse, sin conferirle las escalas de derechos diferenciados decididos por los polos de poder, las instituciones y las organizaciones internacionales. El problema migratorio centroamericano responde a variables comunes, contrapuestas a los intereses del actual gobierno estadounidense.

No todos los migrantes se reubican por causas idénticas ni propósitos semejantes. *El migrante* se traslada por voluntad propia en busca de horizontes económico-sociales o ambientales más ventajosos; *el desplazado* huye de condiciones extremadamente adversas o es forzado a trasladarse; *el refugiado* solicita y recibe amparo del país receptor o de una organización internacional; *el asilado* sería protegido por un Estado (en América Latina) y es denominado *refugiado* entre los europeos. El *apátrida* resulta de una u otra categoría, pero carece de ciudadanía o la ha perdido, ocupando la escala inferior de todos los viajeros.

En el actual decenio se arraiga la tendencia a cuestionar, ilegalizar, demonizar, rechazar y deportar a los migrantes, cuyo detonante responde primordialmente (según la región emisora), a factores económicos, sociales, ambientales, ecológicos, sanitarios, políticos y militares, entre otros. Con esos antecedentes, cualquier medida migratoria que se adopte debe respetar principios elementales del comportamiento hacia los humanos y, no en último lugar, hacerse en el marco de los derechos humanos (Díaz Barrado, 2009: 20).

La oleada migratoria centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos resulta de la agudización de la herencia colonial y neocolonial, que exacerbó las desigualdades entre el Norte y el Sur, instauró el neoliberalismo, prodigó el hambre, la pobreza extrema, la inseguridad, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad, los efectos nocivos del cambio climático, el incremento de la violencia (incluidos el paramilitarismo, el narcotráfico, la trata y el tráfico de seres humanos, de armas y órganos, entre otros), la proliferación y prolongación de los conflictos.

La génesis de la migración centroamericana resulta de factores semejantes, pero también diversos, porque ningún país es idéntico a otro, aunque la explotación y la práctica transnacionales o la violencia constituyan sus principales motivaciones. Hoy afrontamos una problemática

que escapa a la voluntad de los científicos, porque para detener y mitigar el flujo migratorio habría que resolver primero sus causas generadoras y para ello se precisa cambiar el sistema distributivo de la riqueza, empoderar a todos los miembros de la sociedad y que los países industrializados aporten el mínimo comprometido con las Naciones Unidas para dedicar el 0,7% de su PIB, destinado al desarrollo proporcional y sustentable de los pueblos subdesarrollados.

Las medidas adoptadas contra las caravanas migratorias centroamericanas, aunque inferiores en cifras a las que arriban a Europa, se asemejan, en cambio, a algunos métodos de la contención europea contra los desplazados e inmigrantes provenientes de África y Medio Oriente. El común denominador es acusarlos de ilegalidad por el principal país receptor (Estados Unidos), mientras se incrementan la reclusión y la deportación, con mayor empleo del uso de la fuerza y de la militarización fronteriza y la separación entre padres e hijos, acto repudiado por las organizaciones y la comunidad internacionales.

La panorámica expuesta a continuación siempre estará desactualizada, tanto debido a la dinámica migratoria y de desplazados, como por la dificultad de precisar matemáticamente los flujos, las pérdidas de seres humanos o el control de las fronteras terrestres y marítimas, que constituyen los principales corredores humanos.

Al investigar sobre las características de su movilidad, se aprecia que, en el recorrido desde África y Medio Oriente hacia Europa, preponderan los desplazados sobre los migrantes, mientras que en el trayecto Centroamérica-México- Estados Unidos hay más migrantes que desplazados. El más reciente informe de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) sobre el incremento mundial migratorio en 2017 plantea que este aumentó en un 51% hacia Europa; 19% hacia el Medio Oriente y el norte de África, 17% en África Subsahariana, 31% en Asia y el 12% en el continente americano (OIM, 2018).

Según la OIM hubo 244 millones de migrantes en 2015 (3,3% de la población mundial), en su mayoría desplazados por conflictos civiles y transnacionales, con el 52% de hombres y el 48% mujeres (entre 20 y 64 años) y el 72% en edad laboral.

Adicional a las categorías antes expuestas, resaltan las cifras reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que añade 22,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo (17,2 protegidos y 5,3 de ellos en el Medio Oriente), correspondiendo el 51% a menores de 18 años de la población total de refugiados reportados (ACNUR/UNHCR, 2017).

El año 2017 se caracterizó por la continuación de múltiples crisis de desplazamiento y el surgimiento de otras. Por ello la población mundial de desplazados forzosos aumentó a 68,5 millones de personas, frente a los 65,6 de 2016.

Los nuevos desplazamientos significativos tuvieron lugar en la República Democrática del Congo y Myanmar, mientras continuaba el causado por el conflicto sirio. Otros desplazamientos importantes han ocurrido en Burundi, Irak, Sudán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen.

De la cifra reportada, 25,4 millones fueron refugiados, de ellos más de la mitad menores de 18 años de edad y 10 millones de apátridas, lo que significó que cada dos segundos durante el período reportado, una persona se había visto obligada a desplazarse, como resultado de los conflictos y la persecución. También en los últimos diez años se produjo un crecimiento sustancial de la población mundial de desplazados forzosos. Mientras en 2007, la cifra ascendía a 42,7 millones de personas, en el decenio se incrementó en 50%.

En esa fecha ACNUR reportaba que, de un total de 173 800 menores de edad durante el quinquenio, 45 500 de ellos viajaban no acompañados, solicitando asilo individualmente en 67 países, a los que se añadieron 138 700 niños registrados por operaciones de búsqueda de la citada oficina, lo que significaba que el 52% eran menores de 18

años, para más de la mitad de la población refugiada en 2017.

Las causas más frecuentes por regiones corresponden a:

- África: migración interna y externa, provocada por la desertificación, los conflictos, el terrorismo, los efectos del cambio climático y las pandemias.

- Asia: aumento de la migración interregional (40 millones de personas extracontinentales), motivado por el cambio de la pirámide demográfica, la disminución de la natalidad y el flujo circular de estudiantes; desde China (una de las principales receptoras de divisas por remesas); las redes de tráfico humano; los conflictos de larga duración; los efectos del cambio climático; la migración transitoria; el terrorismo y la intensificación de la violencia sectaria.

- Medio Oriente: Incremento, duración y letalidad de los conflictos armados y del genocidio practicados por grupos terroristas islamistas, mercenarios, coaliciones participantes en las guerras y la expansión israelita en Palestina, Líbano, Libia y Siria.

- En América Latina y Caribe. En 2015 (25 millones de migrantes residían en América del Norte). México constituye el segundo país de origen (12,5 millones de migrantes), es el mayor corredor del continente y un sugerente lugar de destino, debido a una mejoría comparativa con la región respecto a la situación económica y el aumento del nivel educacional. Le siguieron en calidad de países emisores: Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras (imitados a distancia por Brasil, Perú y Jamaica), todos hacia Estados Unidos, que desde 1970 es el principal Estado receptor mundial con 48 millones de migrantes residentes y el 78% del total centroamericano. Además, se intensificó la migración intrarregional en Suramérica, debido al aumento salarial, que también atrajo a inmigrantes procedentes de España, Italia y Portugal.

A pesar de la imprecisión de los registros estadísticos sobre las muertes y desapariciones de los

migrantes, una cifra tentativa ofrecida por la AC-NUR arrojó en 2016:

- 390 en la frontera con Estados Unidos
- 180 en América Central
- 105 en el Caribe
- 5 143 en el Mediterráneo;
- 61 en la Unión Europea
- 114 en Europa central
- 235 en Medio Oriente
- 161 Australia y
- 250 en Asia

RESUMEN SOBRE LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA

La historia migratoria centroamericana hacia Estados Unidos abarca décadas, pero se ha exacerbado particularmente desde 2018, etapa caracterizada por mayor inseguridad económico-social y catástrofes derivadas del cambio climático y de epidemias, como Covid-19.

Los países que conforman el Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) representan el 86% de todos los que buscan acomodo y refugio en la “tierra prometida” de nuestro continente. En 2017, los inmigrantes centroamericanos formaban parte del 8% del total de los 44,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos, cuyo flujo migratorio se desglosa como sigue:

- México. 12,1 millones
- El Salvador. 1,2 millones
- Guatemala. 880,000
- Honduras. 530,000

Resulta evidente, que los efectos del cambio climático han afectado con una sequía que dura un decenio, las plantaciones de productos imprescindibles para el consumo por los pobres centroamericanos, particularmente en el denominado “corredor seco”, que precisamente abarca Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y multiplica las tasas de desnutrición, miseria y desempleo. Se añaden los efectos de las tormentas y huracanes que han sacudido a Centroamérica en 2020.

Un informe firmado por el subdirector general del departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Kostas Stamoulis enfatiza que la migración irregular de los últimos meses es una consecuencia directa de la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas, la erosión del tejido social y la falta de oportunidades económicas en las aldeas y territorios rurales de esos países. (Stamoulis, 2019).

A partir de 2011 se constató una mayor presencia de niños que viajaban solos y de familias inmigrantes, contra los cuales la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza efectúa arrestos de más del 58% de los infantes, triplicados hasta junio de 2019 (alrededor de 363 000 inmigrantes)

Cerca de una tercera parte de los inmigrantes centroamericanos han alcanzado la ciudadanía estadounidense, fundamentalmente a través de canales de reunificación familiar, habiendo sido de los mayores beneficiarios de DACA.¹ Sin embargo, con la “demonización” de los inmigrantes, desatada por el presidente saliente estadounidense en 2018 se les acusa de narcotraficantes y pandilleros y de competir por empleos y salarios de los norteamericanos más pobres (Trump, 2018).

El politólogo costarricense, Abelardo Morales Gamboa expone que las migraciones forman parte de un continuo regional entre desplazamientos por razones económicas, políticas o sociales, no siempre como una decisión individual y voluntaria, sino bajo distintos patrones de dominación política, de explotación económica, de violencia social o de calamidades ambientales, que han relegado a los grupos sociales tradicionalmente excluidos a peores condiciones de desigualdad (Morales Gamboa, 2013).

En 2017 fueron presentadas a Estados Unidos, 1,7 millones de nuevas solicitudes de asilo, que,

¹DACA: Programa para los inmigrantes arribados siendo menores de edad. (Ver acápite sobre Estados Unidos).

con 331 700 peticiones aceptadas, se mantuvo como el país mayor receptor, seguido mundialmente por Alemania, Italia y Turquía.² ACNUR reportó el aumento de refugiados y solicitantes de asilo procedentes del norte de Centroamérica, fundamentalmente en México y Estados Unidos (47% mujeres y 20% infantes). Sin embargo, esas cifras fueron sobrepasadas por las provenientes de África Central, el Cuerno Africano, África del Sur y Occidental. En nuestro continente Colombia fue el principal país fuente de desplazados internos, provocado fundamentalmente por la prolongación de la violencia y las redes del narcotráfico.

La fragilidad del mencionado acuerdo se evidencia con el recrudecimiento de la cruzada contra los solicitantes de asilo provenientes, fundamentalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que, junto a Costa Rica, Belice y Panamá, firmaron el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, con vista a atender las necesidades de migrantes y anfitriones en materia de seguridad, salud, medios de vida y educación, según estipula el Pacto Mundial acordado por la ONU (Goodman y Moynihan, 2019).

La otra arista de la migración centroamericana y caribeña es el envío de remesas por quienes han logrado establecerse en Estados Unidos, lo que también condiciona la política de los países con familiares beneficiarios. En 2018 las remesas se incrementaron en 10%, con 88 000 millones de dólares. México fue el primer receptor de remesas (para un aumento del 11%), seguido por Guatemala (+13%), República Dominicana y Honduras (+10%) (BBC, 2019) según cifras difundidas por el Banco Mundial (Anexo 6).

Aunque existe un común denominador en la migración centroamericana, sería Necesario precisar algunas particularidades. Por ejemplo, en El Salvador, la violencia ejercida por pandillas que matan, violan, extorsionan y acosan a la población, instigan

a un desplazamiento en busca de seguridad. Según la ACNUR, en 2018, alrededor de 46 800 salvadoreños solicitaron asilo en otros países y al menos 71 500 fueron desplazados internos. La presidencia declaró procurar que su país sea un lugar más seguro y por ello decidió firmar el documento citado *upra*. Los presidentes mexicano y salvadoreño han establecido también un acuerdo bilateral, que busca mejorar las condiciones de los migrantes.

En Guatemala la situación humanitaria exhibe mayores vulnerabilidades, debido a una nefasta herencia del período dictatorial, la proliferación de los denominados maras y la insostenibilidad económica del país (Segura, 2019). De 17 millones de habitantes, más de 3 millones viven en pobreza extrema, debido al marcado deterioro de las condiciones de vida entre 2006 y 2014 y cerca de 12 millones (67% de la población) sufren carencias que vulneran su bienestar (PNUD, 2018).

Estados Unidos aseguró con Guatemala la condición de “tercer país seguro”, luego de amenazar a ese gobierno con la prohibición de viajar a Estados Unidos y de aplicar impuestos y aranceles a los productos guatemaltecos exportados. El documento no fue ratificado parlamentariamente y es rechazado por asociaciones como Amnistía Internacional, cuya delegación regional opina que el acuerdo viola el artículo 52 de la Convención de Viena, al ser nulo al adoptarse bajo el ejercicio de amenazas.

En Honduras, a semejanza del resto centroamericano, concurren varios factores detonantes del éxodo: la pobreza alcanza al 68% de la población; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo representa el 59%; las pandillas (maras) recrudecen su acción y han convertido al país en uno de los más violentos, con la tasa más alta de homicidios (43 por cada 100 000 habitantes); el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos se precariza y los costos de energía y agua se multiplican (Sousa).

²Con Italia y Turquía la Unión Europea acordó “paquetes” de aporte financiero, a cambio de que esos países recibieran a los deportados indeseables, en calidad de receptores en tránsito hacia terceros países. Grecia (en menor escala) y Libia también son utilizados con esos fines.

Se añaden las crisis motivadas por el cambio climático, agravadas en 2019, como la sequía, los incendios forestales, las plagas en los bosques y en cultivos agrícolas; los daños al medio ambiente y las enfermedades derivadas, con la consiguiente afectación de los derechos humanos. Un factor omitido por los grandes medios, es también la persecución y los asesinatos cometidos contra dirigentes sociales del país, desde el golpe de estado en 2009. México ofreció 20 000 empleos a los inmigrantes hondureños, ubicados en la producción cafetalera.

En cambio, el flujo migratorio nicaragüense no responde a iguales causas de índole económico-social, ya que el país avanzó en sus ritmos de crecimiento y asistencia social a la población; sino que se ha incrementado desde 2018, como resultado de la inestabilidad artificial creada mediante actos de calle para provocar un cambio de régimen en el país, auspiciado desde el extranjero. Una de las metas de la administración estadounidense (plasmada en su más reciente Estrategia de Seguridad Nacional y voceada por sus principales dirigentes), es precisamente derrocar al gobierno sandinista por cualquier medio, incluidas las acciones militares y el cerco económico. La mayoría de los solicitantes de asilo y migrantes se dirige hacia Costa Rica.

Panamá reporta primordialmente el arribo de migrantes y solicitantes de asilo, pero no su propia emigración. Su condición de país fronterizo con Costa Rica y Colombia la sitúan como tránsito favorito, oscilante entre 2 y 3 mil personas albergadas, distribuidas en Chiriquí y Darién (Ifobae, 2019). Entre enero y mayo de 2018 habían entrado a Panamá más de 11 103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños (SENAFRON, 2000). Pero el problema más preocupante para las autoridades del país es la explotación humana, por bandas traficantes de migrantes, precisamente cruzando la frontera selvática de Darién, incluido un laboratorio en la capital, donde se confeccionan

documentos falsos para los viajeros (Cubadebate, 2019/01/03).

MÉXICO COMO EMISOR Y RECEPTOR TRANSITORIO DE LA MIGRACIÓN

La migración en México podría considerarse atípica, si se parte de sus manifestaciones: a) una constante migración hacia Estados Unidos (presenta la mayor cifra de trabajadores ilegales, sub-asalariados e indocumentados latinoamericanos) y b) constituye el corredor de los centroamericanos hacia Estados Unidos.

La diáspora más numerosa en Estados Unidos es la mexicana, que se calcula en alrededor de 11,5 millones de personas, mientras que le siguen los restantes latinoamericanos (unos 9,5 millones). Cifras tentativas señalan que la colectividad mexicana representa el 27,7% del total inmigrante (Muñoz Bravo, 2018)

La problemática migratoria mexicana es analizada por varios politólogos de ese país, como resultado de problemas acumulados por la inestabilidad económico-social, la degradación y corrupción de sucesivos gobiernos, la inseguridad ciudadana, la concurrencia de factores externos, el desequilibrio poblacional y regional, la impunidad criminal de cárteles y agencias (entre otros factores).

Entre los analistas se halla el Profesor Mario Ruiz Sotelo, quien atribuye parte de los problemas migratorios a “las regresiones, desde el último decenio del siglo pasado de la política exterior solidaria del país con perseguidos políticos; al despliegue del Plan Mérida (que fue un retroceso para la concesión de asilo); a los compromisos con Estados Unidos mediante el TELECAN, que frenó y militarizó las fronteras contra los ‘transmigrantes’³ y la discriminación estructural de los emigrantes mexicanos hacia el Norte, sujetos a la extorsión, la violación femenina e infantil y a mayor vulnerabilidad ante el crimen organizado”(Ruiz Sotelo, 2016).

³Transmigrante: de paso por un territorio, para llegar a otro.

A su vez, el experto de OIM, Lelio Mármora, considera que la lógica de seguridad y la crisis financiera de 2018 fueron caldo de cultivo para generar, por políticos y grupos de presión, una percepción negativa de los migrantes, incluso xenofóbica y, particularmente en contra de los indocumentados, a quienes se les ubicó como amenaza latente (Mármora, 2018).

En 2019 la presidencia mexicana propuso un programa denominado “Sembrando vida” para mejorar las condiciones de vida y educación de los jóvenes, con la finalidad de reducir su emigración y garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos a los integrantes de las nuevas caravanas que transiten hacia Estados Unidos, respetando su libertad de movimiento y promoviendo que el gobierno estadounidense concilie opciones con los gobiernos de los países mayores emisores centroamericanos.

El acuerdo migratorio suscrito entre México y Estados Unidos en junio de 2019 aproximó algunas posiciones de ambas partes, pero persistieron las divergencias sustanciales en el enfoque de ambos gobiernos para mitigar los problemas incrementados por la afluencia centroamericana. Al inicio de las conversaciones el presidente estadounidense pretendió que México costeara la construcción del muro.

El acuerdo estableció un tope de deportados solicitantes de asilo de 100 diarios por tres puntos fronterizos y la posibilidad de permanecer hasta 180 días en el territorio mexicano en calidad de turistas. Pero entre junio y agosto se incrementó el flujo migratorio y el presidente estadounidense amenazó al gobierno mexicano con elevarle los aranceles a sus productos, si no detenía el tránsito.

En agosto de 2019 empeoró la situación, debido a la ocurrencia de crímenes de odio en El Paso, donde perdieron la vida migrantes, a manos del cártel de los Zetas,⁴ unido a las acciones

de autoridades estadounidenses que denigran a mujeres, incrementan la trata femenina e infantil, separan a los hijos de sus padres, aplican un régimen penitenciario inhumano a los albergados y ponen en peligro la vida de infantes.

El gobierno mexicano rechazó al inicio la presencia de fuerzas armadas estadounidenses, solicitando asesoría a organizaciones internacionales para evitar fricciones o conflictos con su vecino y plantea proseguir la búsqueda de soluciones a la problemática de más de medio millón de personas que han transitado en 2019 por su territorio, de los cuales 10 mil esperan asilo en territorio mexicano, una solución diferente de la planteada por Washington de utilizar a México como un tercer país seguro. A partir de las presiones arancelarias, México ha desplegado quince mil guardias en la frontera.

Política migratoria de los Estados Unidos de América

La política estadounidense hacia la migración, en sentido general ha atravesado por sincopadas etapas receptivas, pero su rasgo más distintivo en el presente siglo es el restrictivo y excluyente. Desde la independencia de las 13 colonias en 1776 se evidenció una tendencia a criminalizar a grupos indeseables (étnicos o religiosos, con mayor énfasis desde 2001).⁵

Al ser el territorio estadounidense el más ambicionado por los migrantes centroamericanos y los mexicanos en su conjunto, resulta atinado resumir su comportamiento ante el tema de estudio.

No obstante, la renovación demográfica de ese país depende, en gran medida de los inmigrantes y su descendencia, siendo los latinoamericanos los más jóvenes arribados a su territorio, con superior tasa de nacimientos (72,1 por cada mil mujeres). Es paradójico, que a pesar de hallarse Estados Unidos entre los 10 primeros países por desarrollo humano, es muy limitado el presupuesto destinado a los

⁴Que recuerda, a menor escala, la masacre de San Fernando, en Tamaulipas (se calcularon entre 72 y 279 cuerpos, ejecutados por el cártel narcotraficante y de tratantes femeninos de los Zetas en 2010).

⁵Explosión de las Torres Gemelas de Nueva York, 11 de septiembre de 2001.

servicios sociales, justicia y salud para inmigrantes y, mucho más, para indocumentados.

Un estudioso sobre la materia, Tomás Milton Muñoz Bravo, extrae conclusiones sobre la criminalización de las migraciones, su politización y securitización. En tal sentido señala: “la criminalización de la migración se ha convertido en una constante durante tres lustros e incluso, durante la administración de Barack Obama. Estados Unidos se aprovecha de la mano de obra barata para costear áreas como la agricultura, los servicios y la construcción” (Muñoz Bravo, 2018).

Al abordar la situación actual sobre los problemas que origina y provoca la migración centroamericana, sería prudente registrar que la radicalización de las medidas prohibitorias o de rechazo adoptadas por el principal país receptor mundial no son novedosas, aunque hayan experimentado una transformación, según las diversas épocas.

A pesar de que Estados Unidos es una nación multiétnica y se ha conformado a partir de un constante flujo migratorio que sustituyó como mano de obra barata a las diezmadas tribus autóctonas, la normativa adoptada para impedirlo proviene desde el siglo XVIII. A continuación un resumen de sus normas más conocidas:

En 1798, la primera de ellas, procuró frenar la influencia político-social de los migrantes europeos, desde la ocurrencia de la Revolución Francesa.

En 1921 se promulgó la primera ley migratoria integral para limitar la cantidad y distribución por cuotas, según áreas y países de procedencia.

En 1952, durante el auge del macartismo, la Ley migratoria y de ciudadanía se promulgó para combatir el pensamiento de presuntos comunistas, estadounidenses y extranjeros.

En 1965 la Ley Hart-Celber finalizó el sistema de cuotas establecido en 1921.

En 1986 la llamada Immigration Reform and Control Act (IRCA) o Ley Simpson-Rodino amnistió a 3 millones de trabajadores indocumentados (de ellos 2 millones de mexicanos) e inició las sanciones a los empleadores.

Desde 1991 se implementó la aplicación de la justicia penal y la calificación de nuevos delitos relacionados con la migración en Arizona, Carolina del Sur, Nevada y Oklahoma.

En 2001 los estados federales mayores receptores introdujeron iniciativas promotoras de algunos derechos para los inmigrantes en California, Nueva York, Illinois y Texas.

En 2006 el Senado, a propuesta del presidente George W. Bush, adoptó la ley Secure Fence Act, para la construcción de 1 100 km de barreras físicas vigiladas en la frontera con México.

En 2012 el presidente Barack Obama adoptó la Acción ejecutiva diferida para los llegados durante la infancia (DACA), los denominados Dreamers⁶ (unos 700 000 jóvenes indocumentados, arribados antes de cumplir los 16 años de edad, con permiso especial). Fue suspendida en 2017 (The White House, 2012).

Entre 2009 y 2013 las iniciativas de Obama fracasaron y retrocedió en sus iniciativas, para alcanzar la cifra de 1 545 894 deportaciones, semejante a las aplicadas durante el gobierno de George W. Bush durante ocho años (1 620 000).

En 2014 se aprueba una segunda acción ejecutiva, denominada Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA).⁷

A partir de 2017 se intensifican las medidas coercitivas: 15 000 nuevos empleados en la patrulla fronteriza (CBP) y la agencia de control migratorio

⁶Dreamers: soñadores. Los requisitos para ser beneficiario del DACA son: ser menor de 31 años en 2012; haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años; ser residente continuo desde 2012; estudiar en la escuela, haberse graduado o haber servido en guardia costera o fuerzas armadas y no haber sido sancionado por delito grave o amenaza a la seguridad nacional o pública.

⁷DAPA: por sus siglas en inglés

(ICE) promovieron no retener a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes clandestinos.

En 2018 los ciudadanos de 20 países fueron demonizados, por ser considerados amenazas de terrorismo o provenir de nacionalidades, etnias, proyección política o religiones rechazadas. Estos son: Camboya, Cuba, Chad, China, Eritrea, Guinea, Hong Kong, Irak, Irán, Laos, Libia, Marruecos, Myanmar, Siria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, Venezuela, Vietnam y Yemen.

2018-2019 la decisión presidencial estadounidense para erigir un muro blindado en la frontera con México costó, en su primera fase, la parálisis presupuestaria del gobierno, traducido en un cierre parcial de la administración. Ante la negativa del Senado a otorgar fondos ascendentes a 5,700 millones de dólares, la presidencia propuso otorgar un permiso temporal para los *dreamers* y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los refugiados extranjeros. Un posterior planteamiento reclamó el otorgamiento de 8,600 millones de dólares con tal propósito (*BBC Mundo-Univisión*, 2017).

En 2019 y 2020 las contradicciones internas de la administración estadounidense han girado en torno a las medidas relacionadas con la inmigración y, en medio de la campaña reelectoral del presidente Donald Trump, pretenden beneficiar su imagen hacia el *establishment* y los electores blancos, pero augura el rechazo de parte del electorado de origen hispano y musulmán.

La remilitarización de la frontera, la aceleración constructiva del muro —con presupuesto suplementario— y la más reciente decisión de la oficina de inmigración y extranjería de no autorizar el acceso a los aspirantes supuestamente afiliados a un partido comunista, se suman a las crecientes regulaciones que proscriben la acogida a los migrantes.

Las más recientes medidas antiinmigrantes estadounidenses preocupan a la ACNUR. Por ejemplo: respecto a las nuevas condiciones para el asilo, porque “la medida restringe excesivamente el derecho a

solicitarlo y pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y huyen de sus países por la violencia o la persecución, considerando la medida severa y que no es la mejor forma de avanzar” (ACNUR/Dreifuss, 2019).

Entre otras disposiciones, se suman la modificación del programa de visados EB-5, que facilitaba la residencia permanente para inversionistas (Cubadebate, 2019/07/23), el inicio de restricciones de los servicios educativos y recreativos y la asistencia legal para los niños migrantes que permanecen en refugios gubernamentales (reportados alrededor de 13 200, internados en 100 albergues), con oposición de organizaciones humanitarias (Cubadebate, 2019/06/05); así como el nombramiento de un nuevo jefe del Servicio de Migración, que “aplique una política migratoria fuerte, sólida y justa” (Cubadebate, 2019/05/05).

Las cuestionables medidas antiinmigrantes se ejemplifican con detenciones en Texas de 168 inmigrantes irregulares procedentes de Centroamérica, Cuba y Venezuela (Cubadebate, 2019/06/06), un aumento del 32% de las detenciones en el mes de mayo, en comparación con abril (144 278 detenidos y 11 391 declarados inadmisibles); la propuesta al gobierno de modificar el protocolo de detención en las fronteras, con vista a garantizar la seguridad de los menores, después del escándalo provocado por la muerte de varios infantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza (CBP); la redada en Misisipi a 680 inmigrantes y el inicio de 6 848 investigaciones en 2018 para el 300% de incremento en comparación con el año precedente.

Más recientemente, la puesta en vigor de la normativa SB 168 antiinmigrante en el estado de la Florida, prohíbe las llamadas ciudades santuario que se oponían a cooperar con las autoridades federales durante el proceso para deportar a extranjeros indocumentados y mantenerlos en las cárceles para deportar a los detenidos, a veces por simples infracciones (Cubadebate, 2019/07/01).

La campaña electoral sirve de marco para la búsqueda de votos por algunos candidatos, como

el demócrata Joseph Biden, quien promete un giro en la política migratoria, que incluiría legalizar a los denominados *dreamers*, proporcionar facilidades para la concesión de la ciudadanía a unos 11 millones de personas y dar la bienvenida a quienes solicitan asilo, determinando previamente sus motivos. El nuevo presidente demócrata ha planteado entre sus prioridades durante los primeros cien días, procurar soluciones al problema migratorio.

CONCEPTOS, TEORÍA Y DERECHO

El derecho, como expresión de la voluntad de la clase dominante o de organismos internacionales preponderantes, ha proliferado los marcos conceptuales, las definiciones, los pactos, las convenciones, los tratados y otras normas jurídicas, con la finalidad de regular, directa o indirectamente, el comportamiento a seguir, relacionado con la migración.

Las tendencias fundamentales para el rechazo, la deportación y las sanciones contra los migrantes, transitan desde lo planteado por los polos de poder en el sentido de que los problemas sociales de la migración “amenazan su seguridad”, lo que constituye un pretexto para militarizarse más contra el “peligro migratorio”. Aducen, además, que los migrantes pueden desestabilizar la integración doméstica, amenazar el orden público; acoger a presuntos vinculados con el terrorismo; provocar una aversión social al no asimilar costumbres foráneas de religiones, etnias ni culturas diferentes y una preocupación económica ante el desplazamiento laboral por personas no calificadas.

Tanto en América, como en la Unión Europea, donde se hallan los principales países receptores de migrantes y desplazados, renacen corrientes fascistas discriminatorias de las personas no autóctonas, que complejizan el tratamiento a los foráneos.

Lo más visible en los mayores países receptores es que, a partir de la exacerbación de los desplazamientos y las migraciones, se incrementa la tendencia a calificarlos como culpables de un de-

lito, a penalizar la ayuda humanitaria al migrante, a reprimir o multar el trabajo indocumentado —tanto al empleador como al empleado— y a radicalizar las sanciones o impedir el arribo de inmigrantes procedentes de países específicos.

Más que la teoría y los conceptos, sería oportuno reflejar la trascendencia de la legislación internacional adoptada desde el siglo XX, que puede reconocerse como un empeño por “humanizar” la situación migratoria, pero que padece de dos defectos: su carácter no vinculante y la incapacidad (dependiente de la voluntad política de las partes) para resolver las causas que detonan la migración como un problema global.

Resultaría infinito relatar las principales inobservancias o transgresiones de las normas inherentes a los derechos humanos y a la migración existentes, por lo que seleccionamos planteamientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del preámbulo de la Carta ONU, de los estatutos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de las Convenciones de los derechos del niño y contra toda discriminación de la Mujer. A modo de alerta, importantes países receptores están pendientes de suscribirlos. (Anexo 1)

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible hasta el año 2030, aprobado por las Naciones Unidas plantean entre sus 17 propósitos dignificar la migración como una reserva de potencialidades y entendimiento entre los pueblos. En tanto el documento más reciente que intenta normalizar la situación es el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular, acordado en 2018 (ONU, 2018) Entre sus 23 objetivos resaltan:

Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular; abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración; salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos; prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en la migración internacional; utilizar la detención como último

recurso y buscar alternativas; empoderar a los migrantes para su plena inclusión social; crear condiciones necesarias para que migrantes y diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible; promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales.

El citado Pacto está plagado de buenas intenciones. Su resultado efectivo dependerá —entre otros factores— de la voluntad política, las condiciones económico sociales, medidas efectivas para la adaptación al cambio climático, la disminución de las amenazas de violencia y conflictos en nuestro continente (no solo en Centroamérica), del aporte pendiente del 0,7% de los países más industrializados para contribuir al desarrollo a los pueblos menos favorecidos, de la comprensión y el cese de actitudes y medidas discriminatorias contra migrantes y desplazados y de que fructifique una mayor propensión a la paz y el cese de la amenaza y del uso de la fuerza.

IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN CENTROAMERICANA

Para quienes migran o se desplazan desde América Central, el Dorado estadounidense les mitigaría las carencias, les facilitaría emplearse eventual o clandestinamente, pero al costo de su desarraigo sociocultural y de riesgos familiares en los que pierde la identidad y arriesga la familia.

Para el principal Estado receptor del mundo, los inmigrantes y desplazados son individuos ilegales, por lo tanto, objeto del rechazo, porque transgreden sus fronteras y la seguridad nacional, compiten en el mercado laboral e introducen hábitos y culturas ajenos.

Los impactos más visibles en la actualidad consisten en:

- Contravención de principios de humanidad, solidaridad e igualdad de derechos.
- Fragmentación y disfunción familiares.
- Desarraigo, incertidumbre, inestabilidad, rechazo, discriminación y xenofobia.

▪ Insalubridad en campamentos de detención o en albergues.

▪ Incremento de la trata y del tráfico humanos.

▪ Retroceso hacia la esclavitud sexual y económica.

▪ Muerte.

▪ Desempleo geométrico.

▪ Abandono del hábitat.

▪ Asimilación discriminatoria a nuevas costumbres.

▪ Desestructuración de bienes patrimoniales e históricos.

▪ Omisión de principios refrendados por el Derecho Internacional Humanitario, como la no devolución hacia lugares donde corren peligro.

▪ Sanciones penales por migrar o por acogerlos.

CONSIDERACIONES FINALES

▪ La afluencia migratoria centroamericana es inferior en cifras que la oleada africana y mesoriental hacia Europa, pero presenta los rasgos del desarraigo, el rechazo, la discriminación, la xenofobia, la violencia y las sanciones contra migrantes y desplazados, elementos que contradicen principios del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, refrendados por una parte importante de la comunidad internacional.

▪ El problema migratorio requiere ser analizado en su contextualidad, justicia y equidad, mediante la prioridad a las causas que lo originan y no mediante la punición a quienes viajan para huir de sus problemas.

▪ Eliminar las medidas y acciones xenófobas, depende de factores culturales, voluntad política y utilización de prácticas comprometidas para evitar los enfrentamientos y la aplicación de medidas coercitivas militarizadas, que conducen a situaciones violatorias de los derechos humanos.

▪ Migrar no constituye un delito, sino un derecho establecido. Por tales motivos, el migrante y el desplazado no deben ser juzgados como ilegales, sino como viajeros irregulares.

▪La virulencia en sucesivas declaraciones de la presidencia estadounidense contra la inmigración, insiste sobre el peligro atribuido a los centroamericanos indeseados contra la seguridad, las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero en realidad incrementa la xenofobia y el racismo, instigando algunos crímenes individuales o lo que podríamos denominar terrorismo doméstico estadounidense.

▪La campaña electoral de 2016 en Estados Unidos utilizó como tema central la inmigración. Durante la campaña para la reelección en 2020, el candidato republicano arguye el peligro migratorio,

incrementa los fondos para su ambicioso muro de contención, provoca una crisis en el Departamento de Seguridad Interna de su país y radicaliza las medidas represivas contra las familias de los extranjeros indeseados, luego de haber obtenido escasos frutos de las medidas restrictivas contra los musulmanes, centrándose contra México y Centroamérica.

▪Como parte de la citada campaña, un cambio del ejecutivo podría inclinar la balanza hacia un eventual cambio de la política migratoria estadounidense, que mitigue la crisis actual proveniente de Centroamérica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACNUR/UNHCR (2017): acnur/unhcr.org. Tendencias globales.

ACNUR/Daniel Dreifuss (2019): julio.

BBC News (2019): Londres, 9 de abril.

BBC Mundo (2017): "Gobierno de Estados Unidos anuncia el fin de DACA, el programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes". "Trump anuncia el final de DACA y urge al Congreso a buscar una solución legislativa" 7 de septiembre.

Carrillo Ramírez, Leyla (2015): "Causas y efectos de la inmigración indeseada en la Unión Europea", *Revista Cubana de Ciencias Sociales*, No.45, Editorial: filosofía.cu. La Habana, p.13.

Carrillo Ramírez, Leyla (2016): "Unjust Migratory Policy in the European Union" *Verdict* Vol. 22 Number 4, october, P.33. New York.

Cubadebate (2019): http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/01/03/desmantelan-en-panama-banda-de-traffic-de-migrantes-que-trasladaba-cubanos/#.XC9e9_L4G1s

Cubadebate (2019): <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/07/23/eeuu-modificara-programa-de-visados-eb-5-y-facilitador-de-residencia-permanente/#.XThlVfL4Hcc>

Cubadebate (2019): http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/05/eeuu-planea-eliminar-servicios-educativos-y-asistencia-legal-a-ninos-migrantes/#.XPkmf_L4Hcc

Cubadebate (2019): <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/05/05/presidente-de-ee-uu-anuncia-a-mark-morgan-como-jefe-del-servicio-de-inmigracion/#.XNAo0vL4Hcc>

Cubadebate (2019): <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/06/registran-cifra-record-de-inmigrantes-en-ee-uu-en-mayo/#.XPkm3PL4Hcc>

Cubadebate (2019): http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/07/01/entra-en-vigor-estricta-ley-antiinmigrante-en-florida/#.XRtQ7_L4Hcc

Díaz Barrado, Cástor Miguel (2009): *Las Migraciones internacionales en el Mediterráneo y la Unión Europea*, Editorial Huygens. Tres Culturas, Universidad Complutense de Madrid.

Goodman Amy y Denis Moynihan (2019): *Democracy Now*, 12 de abril.

Infobae (2019): <https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/02/panama-informo-que-2-000-migrantes-que-llegaron-al-pais-en-su-transito-hacia-el-norte-del-continente-permanecen-en-albergues/>

Mármora, Lelio (2018): *Las políticas de migraciones internacionales*. OIM (Organismo de Migraciones Internacionales), Paidós, Buenos Aires, pp. 70-76.

Morales Gamboa, Abelardo (2013): *Centroamérica: los territorios de la migración y la exclusión en el nuevo siglo*. CLACSO. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1ro. de octubre, San José, Costa Rica, en <http://revistafal.com>.

- Muñoz Bravo, Tomás Milton (2018): “La criminalización de las migraciones internacionales contemporáneas y los riesgos para el desarrollo humano: el caso de Estados Unidos de América”, *Revista de Política Internacional* 6, UNAM, Ediciones Lirio, México DF, pp. 129-132.
- OIM (2018): Oficina Internacional para las Migraciones. Informe sobre los migrantes en el mundo, www.oim.int/es
- ONU (2018): Resolución 73/151, aprobada por la Asamblea General de la ONU. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tercera Comisión A/73/38.3
- ONU (1966) resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General: Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, 16 de diciembre de 1966. 2200 A (XXI). Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General.
- PNUD (2018): Informe Nacional de Desarrollo Humano, en <http://www.pnud.Informe.uno.doc>
- Ruiz Sotelo, Mario (2018): “Migración y neoliberalismo en México: el holocausto de la solidaridad”, *Revista de Política Internacional* 6, Temas de análisis, UNAM, México.
- Segura, Luis Gonzalo (2019): “Trump empuja a Guatemala a la catástrofe humanitaria y al conflicto internacional”, 1ro. de agosto.
- SENAFRON (2000): Datos del Servicio Nacional de Fronteras.
- Sousa, Florencia de: Tesis de posgrado en Periodismo de Investigación, Universidad del Salvador, en <https://www.perfil.com/noticias/internacional/que-es-la-crisis-migratoria.phtml>
- Stamoulis, Kostas (2019): Atlas sobre la situación socio-económica en América Latina, junio, en www.fao.org
- The White House (2012): “Remarks by the President on Immigration”, 15 de junio.
- Trump, Donald (2018): Discurso a la nación, The President, en www.whitehouse.usa.
- Unión Europea (2000): “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2000/C 364/01
- Unión Europea (2018): <http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180615STO05927/normas-sobre-el-asilo-de-la-UE-reforma-del-reglamento-de-dublin>
- Univision (2017): “Remarks by the President on Immigration”, 7 de septiembre. The White House, 15 de junio de 2012.

ANEXO I

1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos: “en caso de persecución toda persona tiene derecho al buen asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

1949. IV Convenio y Protocolo II de Ginebra. “Proteger a personas civiles y víctimas de los conflictos, a las desplazadas y a los refugiados, que deben recibir apoyo internacional”.

1957. Convención de los Refugiados, artículo 31: “los Estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de la entrada o presencia ilegales de los refugiados, que llegando del territorio donde su vida o libertad estuvieran amenazados”... (ONU, 2018).

1966. Resolución 2200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos. “Compromiso a asegurar a los hombres y mujeres igual título a gozar de todos los derechos sociales y culturales enunciados, a un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor; el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley” (ONU, 1966).

1997. Convención de Dublin sobre la responsabilidad estatal para aplicar el derecho de asilo. Determina el reenvío a un tercer Estado por países europeos.

2000. Carta Europea de DDHH. Particularmente en su Artículo 18 (Derecho de Asilo) establece que “se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo del 31 enero de 1967 sobre el

Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”. Artículo 19 (sobre Protección en caso de devolución, expulsión y extradición): 1- “Se prohíben las expulsiones colectivas. 2- “Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra grave riesgo de ser sometido a pena de muerte, a tortura o a otras penas o a tratos inhumanos o degradantes” (Unión Europea, 2000).

2008. Directiva Retorno del Parlamento Europeo. Introduce la presunción de terrorismo de un migrante, añadido al Plan para el Mediterráneo, adoptado entre Francia, España e Italia, destinado a reducir la migración.

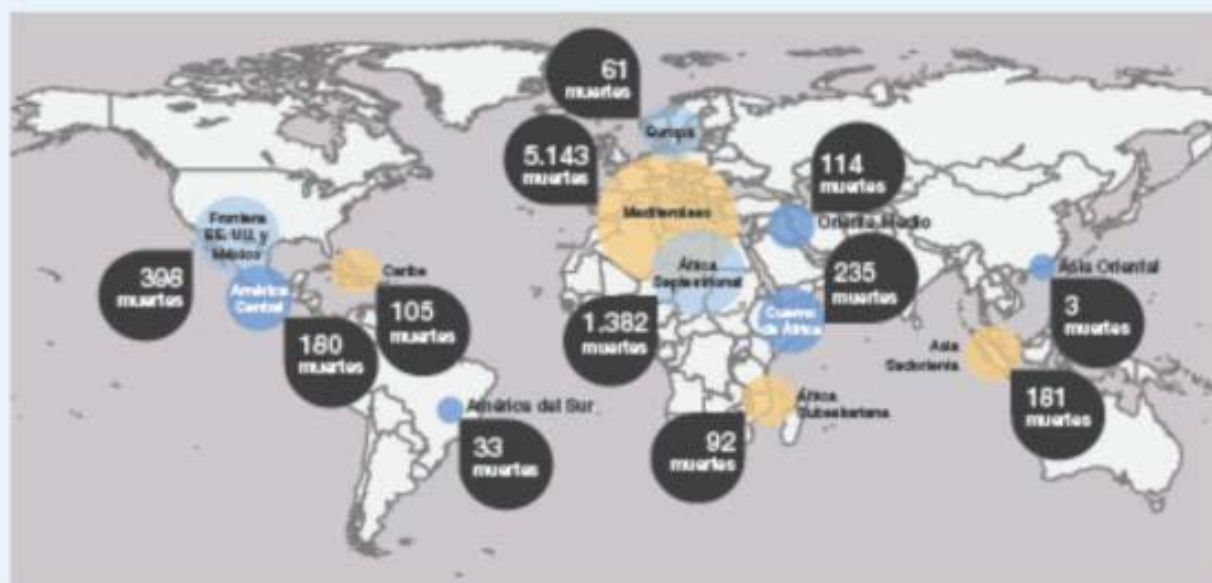
2008. Pacto de la Unión Europea para Migración y Asilo. Organiza la inmigración legal, tomando en cuenta las prioridades, necesidades y capacidades de recepción determinadas por los Estados miembros y fomenta los retornos voluntarios a los países de origen o de tránsito, mejora los controles en fronteras, establece el marco europeo para asilo y crea colaboración global con países no miembros de la UE. Incorpora a partir de la fecha, el otorgamiento de paquetes en euros, a cambio de cobijar o devolver por su territorio a los deportados por la UE.

2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 2016-2030. Plantea la urgencia de empoderar a las personas vulnerables, entre las que incluyen a los refugiados, desplazados internos y migrantes y reconoce “la positiva contribución de estos al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, como una realidad pluridimensional que exige respuestas coherentes e integrales”.

2017. El Parlamento Europeo propuso modernizar el documento de Dublin, con las siguientes medidas: 1) el país al que llega por 1ª vez un solicitante de asilo, no tiene que ser el que procese la solicitud; 2) los solicitantes con un “vínculo genuino” con un país deben ser trasladados y los que no lo tengan, ser distribuidos de manera equitativa entre los demás países de la UE; 3) reforzar las medidas de seguridad, registradas las solicitudes de asilo y contrastar con las bases de datos de la UE y 4) fortalecer las disposiciones sobre menores y acelerar los procesos de reunificación familiar (Unión Europea, 2018).

ANEXO 2

Muertes y desapariciones de migrantes registradas en todo el mundo, 2016



Fuente: OIM, s. f. l.

Nota: Las cifras se refieren a muertes ocurridas durante el proceso de migración. Los números reflejan únicamente los casos de que la OIM ha tenido conocimiento. Un número desconocido de muertes ha quedado sin registrar, de modo que los datos deben considerarse estimaciones mínimas. Se contabilizan tanto los cuerpos hallados como los migrantes desaparecidos que se han dado por muertos. Las denominaciones y las fronteras indicadas en este mapa no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la OIM.

ANEXO 3 Remesas en América Latina US\$ millones

País	2017	2018	Aumento
Colombia	5 531	6 411	15,90 %
Guatemala	8 449	9 573	13,30 %
Uruguay	98	110	11,70 %
México	32 271	35 659	10,50 %
Rep. Dominicana	6 178	6 789	9,90 %
Honduras	4 323	4 746	9,80 %
Haití	2 722	2 986	9,70 %
Argentina	450	493	9,70 %
Brasil	2 699	2 934	8,70 %
Ecuador	2 849	3 086	8,30 %
El Salvador	5 054	5 458	8,00 %
Nicaragua	1 395	1 505	7,90 %
Perú	3 051	3 250	6,50 %
Venezuela	279	297	6,48 %
Chile	45	46	2,82 %
Panamá	533	538	0,90 %
Bolivia	1 305	1 284	-1,60 %
Costa Rica	564	528	-6,30 %
Paraguay	704	573	-18,57 %

FUENTE: Banco Mundial, 2018.

ANEXO 4 Países de origen de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, 2017

Región y País	Número de inmigrantes	Porcentaje (%)
Centroamérica (total)	3,527,000	100.0
El Salvador	1,402,000	39.7
Guatemala	959,000	27.2
Honduras	655,000	18.6
Nicaragua	263,000	7.5
Panamá	107,000	3.0
Costa Rica	83,000	2.4
Belize	49,000	1.4
Otros	10,000	0.3

FUENTE: Tabulación de datos de Migration Policy Institute (MPI) con cifras de la Encuesta de Comunidades Estadounidenses (ACS) de la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 2017.



Ideología fascista, sistema político y cultura en los Estados Unidos: el espacio y los límites

Fascist Ideology, Political System, and Culture in the United States: The Space and the Limits

DR. C. JORGE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Sociólogo y politólogo. Profesor e Investigador Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) y Presidente de la Cátedra “Nuestra América”, Universidad de La Habana
Número ORCID: 0000-0001-7264-6984

RESUMEN:

El ensayo reflexiona sobre las características y potencialidades de la ideología fascista en la sociedad norteamericana. Su propósito es otear el horizonte, a la luz de algunas consideraciones teóricas y de abreviadas referencias históricas. A partir de la coyuntura de las elecciones de 2020, se indaga en las manifestaciones retrospectivas y recientes de una tendencia que ha adquirido cuerpo en el tejido de la formación social capitalista en los Estados Unidos y en particular, en el marco de la decadencia en la cultura política que acompaña allí al imperialismo contemporáneo. Con la intención de contribuir a las interpretaciones de la viabilidad de los procesos ideológicos en ese país se exponen las notas que siguen, con un formato más ensayístico que investigativo.

Palabras clave: fascismo, ideología, cultura, sistema político, capitalismo

Abstract:

The essay reflects on the characteristics and potentialities of fascist ideology in American society. Its purpose is to scan the horizon, in the light of some theoretical considerations and brief historical references. Starting from the juncture of the 2020 elections, it enquires the retrospective and recent manifestations of a trend that has acquired a body in the fabric of the capitalist social formation in the United States and in particular, in the framework of the decline in the political culture that there it accompanies contemporary imperialism. With the intention of contributing to the interpretations of the viability of the ideological processes in that country, the following notes are exposed, with a more essayistic than investigative format.

Key words: fascism, ideology, culture, political system, capitalism

INTRODUCCIÓN

Con cierta intermitencia, el tema del fascismo y sus expresiones en la vida política y cultural de los Estados Unidos ha sido objeto de las ciencias sociales, sobre todo cuando, en circunstancias de crisis objetivas o a causa de percepciones subjetivas de peligro a la identidad o a determinados intereses del país, como los concernientes a la seguridad interna o la cultura nacional, se afirman prácticas que trascienden comportamientos individuales, se extienden en la sociedad civil con manifestaciones violentas de intolerancia racial, étnica o religiosa. Asumidas por determinados gobiernos de turno en contextos como los aludidos, tales acciones han sido provocadas por la exaltación fanática de algún tipo de supremacismo a través de movimientos u organizaciones sociales que consideran amenazados los valores o el modo de vida, predisponen el estado de ánimo de la población, que siente la necesidad de defenderse, afectando la seguridad ciudadana y el orden público, al ganar espacios en la vida cotidiana, en la dinámica de los partidos y los medios de comunicación. Quizás los mejores o más conocidos ejemplos de ello sean el clima sociopolítico afianzado con el macartismo a mediados del siglo pasado luego, de la Segunda Guerra Mundial, cuando en los años de 1950, durante la Guerra Fría clásica, se generalizó un anticomunismo desbordado, con la persecución a todo lo que se valorara como cercano a ideas políticas de izquierda; la situación creada por la llamada Revolución Conservadora, al reeditarse una lucha contra “el imperio del mal”, como se calificara al presunto enemigo comunista en la “nueva” Guerra Fría, en la década de 1980; o el período que se articuló a inicios del siglo actual, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ante el terrorismo interno, que evocó reacciones similares alentadas por un nacionalismo chauvinista, patrioter, que profundizó en el decenio de 2000 la represión a niveles inusitados. En este último escenario floreció el síndrome fascista con rasgos más inquietantes, según se evidenció con medidas como las conducentes al

arresto de quienes, por simple sospecha, se catalogaran como terroristas, en ausencia de pruebas, incluido su envío a cárceles secretas o a remedos de campos de concentración, donde el empleo de la tortura se estableció como práctica legítima para “proteger” a los Estados Unidos.

Pero las expresiones ideológicas, y en ocasiones, político-institucionales con signos similares han tenido presencia anterior en la historia norteamericana, y también posterior, según lo muestran los acontecimientos que se despliegan en la segunda mitad del decenio de 2010, asociados a los cuatro resultados electorales más recientes. Así, primero en los casos de 2008 y 2012, a causa del triunfo y reelección, respectivamente, de Barack Obama, un presidente de piel negra, que despertó fuertes sentimientos de racismo y nativismo, se produce el reavivamiento de viejas conductas colectivas, a través de los existentes grupos de odio: neonazis, “cabezas rapadas” (*skinheads*), los del Movimiento Vigilante, las Milicias, las Naciones Arias, el Movimiento de Identidad Cristiana, entre otros, que hasta entonces tenían un bajo perfil, a los que se añadió el *Tea Party*, haciendo gala de no menos extremismo derechista. Después, tiene lugar el resurgimiento de algunos de ellos en los comicios siguientes. En los de 2016, alentados por la victoria de Donald Trump, y en los de 2020, ante el fracaso, al no consumarse su reelección. En esos contextos adquirió un auge renovado el activismo de organizaciones como las mencionadas, al sentir el amparo de un presidente que les cobijaba, cuatro años atrás, y que después procuran defenderle y defenderse, ante una derrota electoral (González Delgado, 2018). Justamente, a partir de estos dos últimos procesos, el desarrollo de ideas y prácticas de connotación fascista en la sociedad norteamericana atrae de nuevo la atención de las miradas académicas. Ello se refuerza a la luz de los resultados oficiales, en medio de no poca incertidumbre, que junto al predominio popular y del Colegio Electoral a favor de Joseph Biden, como candidato demócrata, dejaron ver una notable

tendencia ideológica conservadora, palpable en el respaldo con más de 70 millones de votos a favor de Trump, seguido por una beligerante adhesión a su figura, dentro y fuera de las filas republicanas, mediante movilizaciones públicas que se suman a su denodado empeño en aferrarse a presidencia.

Lo expuesto proyecta la silueta de una ideología fascista, con espacio en la cultura, con límites en el sistema político, definido dentro de los cánones de la democracia liberal representativa, lo cual impide su viabilidad institucional (Hernández Martínez, 2018). De ahí que el presente ensayo reflexiona, al comenzar el tercer decenio del siglo en curso, sobre las características y potencialidades de esa ideología. Su propósito es otear el horizonte, a la luz de algunas consideraciones teóricas y de abreviadas referencias históricas, que toman como referencia el contexto de las elecciones de 2020, pero sólo como motivación analítica. No se trata de un estudio sobre esa coyuntura. A partir de ella, se indaga en las manifestaciones retrospectivas y recientes de una tendencia que ha adquirido cuerpo en el tejido de la formación social capitalista en los Estados Unidos y en particular, en el marco de la decadencia en la cultura política que acompaña allí al imperialismo contemporáneo. Con la intención de contribuir a las interpretaciones de los procesos ideológicos allí, se exponen las notas que siguen, con un formato más ensayístico que investigativo. La exposición incluye una aproximación conceptual a la ideología fascista, recorre sus principales expresiones históricas en la sociedad estadounidense y establece un contraste entre lo que se ha conocido como la “era Reagan” y la “era Trump”, dadas sus proximidades, mirando hacia la inserción de esa cosmovisión en el territorio cultural de una acentuada decadencia imperialista, que confirma la apreciación leninista de que en el campo superestructural, el imperialismo se caracteriza por el viraje de la democracia a la reacción, en toda la línea (Lenin, 1973 y 1996). En ambos casos, sin desconocer diferencias, es común el histrionismo y abuso

de una retórica discursiva saturada de hostilidad contra la imagen de enemigos a neutralizar, a fin de garantizar que los Estados Unidos recuperen su grandeza.

LA IDEOLOGÍA FASCISTA Y LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA: EL ESPACIO Y EL LÍMITE

Ante todo, convendría puntualizar el marco conceptual que justifica la referencia al fascismo, como fenómeno político y como expresión ideológica, dado que al revisar la literatura, se advierte que con frecuencia, se utiliza el término de manera indiscriminada y banal. A partir de esta precisión es posible comprender su presencia en las condiciones histórico-concretas de los Estados Unidos, de su cultura y sistema político.

Como fenómeno político, el fascismo se define como opción del capitalismo en las condiciones históricas que se viven en Europa en el contexto de la profunda crisis o recesión mundial, la Gran Depresión de los años de 1930, cuya configuración acabada tiene lugar a finales de ese decenio, pero incubándose desde el precedente, hasta su plasmación en las estructuras tradicionales del Estado burgués, cuando transita en Alemania e Italia su régimen político prevaleciente —basado en el esquema de la democracia liberal— hacia el del llamado Estado de excepción. Marcado por la centralización autoritaria y represiva que impone la clase dominante a la sociedad en su conjunto, al sentirse acorralada, el fascismo conlleva la perentoria liquidación de la institucionalidad democrático-liberal, imponiendo los mitos de la salvación nacional, la legitimidad del uso de la fuerza, apoyándose en la burocracia, las fuerzas armadas y la propaganda, sumando a los sectores populares con la demagogia populista, neutralizando la movilización clasista obrera y de otros sectores explotados, a través de la manipulación ejercida por un líder carismático. Por tanto, el fascismo se resume en la aparición del Estado fascista, con proyecciones que de manera convencional, se consideran como de extrema derecha o de derecha

radical, en la medida en que por su beligerancia trascienden en el espectro político las posturas calificadas como de derecha. Atilio Borón ha señalado, de modo conciso, que el fascismo “requiere una completa reorganización del Estado, sólo posible en la medida en que las instituciones políticas y jurídicas de la democracia liberal sean abandonadas: las libertades burguesas deben ser pisoteadas, los partidos políticos suprimidos, los sindicatos arrasados, el Parlamento clausurado y la educación aherrojada al comité de propaganda del régimen. En suma, la burguesía transforma la ‘ilegalidad’ de la democracia liberal en la nueva ‘legalidad’ del Estado de excepción. El fascismo ha sido, juntamente con el bonapartismo y la dictadura militar, una de las formas ‘clásicas’ del Estado capitalista de excepción” (Borón, 2003:42).

Para Jorge Dimitrov, por fascismo se entiende, esencialmente, “la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero” (Dimitrov, 1953: 106). Es decir, implica el poder de esos elementos y la imposición dictatorial, al suprimir a la oposición, de su política sobre los otros sectores de la clase dominante y la sociedad en su conjunto, con lo cual se establece un régimen político diferente, en el Estado capitalista, al de la democracia liberal representativa, como modelo que le sostiene.

Junto a esas miradas, que focalizan adecuadamente la dimensión político-institucional del fascismo, se registran aquellas que enfatizan su connotación ideológica —a las cuales se adscribe este ensayo—, como las de Kevin Passmore, Ernesto Laclau, Robert Paxton y Umberto Eco, resaltando su irracionalismo, capacidad de construcción de percepciones de amenaza y de infundir temor, a través de sentimientos conspirativos, con una impronta populista, que fomenta el desprecio a los débiles y al otro, exacerba la identidad, propicia el nacionalismo chauvinista, la xenofobia, se apega a la tradición, rechaza la modernidad y condena la discrepancia (Passmore, 2014; Laclau, 1977; Paxton, 2017). La caracterización de Umberto Eco

es, probablemente, la más completa y funcional en tal sentido, al enumerar catorce propiedades generales de la ideología fascista, precisando que no es posible organizarlos en un sistema coherente, pero subrayando que bastaría con que uno de ellos esté presente para que el fascismo se coagule a su alrededor (Eco, 1991).

Así, coincidiendo con este criterio, tanto si se atiende a su connotación como fenómeno político, o cual corriente ideológica, el fascismo se identifica con expresiones de derecha radical o de extrema derecha. Precisadas las referencias conceptuales de partida, procede situar el asunto en las condiciones específicas de la sociedad norteamericana, relacionándole con el sistema político y la cultura. Desde el punto de vista de su personificación estatal, queda claro que el fascismo no ha existido en los Estados Unidos, y que incluso, no sea factible que se conforme en el corto o mediano plazo una experiencia fascista, entendida a partir de una conversión de ese modelo en el de un Estado de excepción, que suprima los atributos de la democracia burguesa convencional, que cristalice en una nueva articulación formal en el sistema político, centralizada y totalitaria, de estructuras estatales, eliminando el sufragio, los partidos, la libertades de reunión, de prensa, de asociación y de adscripción religiosa, la rama legislativa y concentrando el poder en la ejecutiva, bajo un mandato corporativo militar. Ahí radican los límites de una corporeidad estatal fascista. Desde el otro punto de vista, el que le concibe como ideología, es posible afirmar, en cambio, que existen antecedentes que reflejan espacios en la cultura y en ciertos casos, también manifestaciones organizativas en la sociedad civil, que les han servido de caja de resonancia. Las condiciones propiciadoras de esas reacciones se definen, en todos los casos, a partir de la existencia de crisis, más o menos, agudas, que deterioran sustancialmente el nivel de vida de la población, crean inseguridad generalizada, ponen en entredicho la grandeza del sistema político-económico, capitalista, de los Estados Unidos,

estremeciendo la imagen de infalibilidad de este y cuestionando las bases del excepcionalismo norteamericano. Es decir, cuando las percepciones pesimistas de los círculos más conservadores se apoderan de la opinión pública y en general, imponen visiones desoladoras en la cultura nacional que infunden el temor y la angustia, mediante su influencia en los aparatos ideológicos del Estado, como ha sucedido en distintos momentos de recesión económica o crisis política, es que cuaja el ambiente ideológico de fortaleza sitiada, como fértil terreno para las manifestaciones más violentas de la extrema derecha, o derecha radical, y para la viabilidad de una plataforma de ideas, eventualmente acompañadas de prácticas, de inspiración fascista.

La historia norteamericana no ha carecido de esas manifestaciones. Expresiones como el movimiento antimasón de fines del siglo XVIII y principios del XIX; los *Know Nothing* y los *Native American* que florecieron entre 1830 y 1840; el primer *Ku Klux Klan*, de la época de la reconstrucción, posterior a la Guerra Civil, que se opuso drásticamente a la igualdad social y política del negro; o el segundo *Ku Klux Klan*, que adquirió notoriedad durante la década de 1920, enfrentando, incluso de modo violento, a católicos, negros y judíos, defendiendo la supremacía blanca y rechazando la vinculación estadounidense con el exterior, ambos constituyeron antecedentes importantes de tempranas expresiones de derecha radical dentro de los Estados Unidos.

A pesar de que esas organizaciones promovieron movimientos de cierta masividad, sus demandas carecían de consideraciones más globales, que presentaran soluciones contundentes que apuntaran hacia algún tipo de reestructuración del Estado norteamericano de acuerdo con su propia concepción del mundo o motivando la de otros segmentos sociales. Básicamente, se habían limitado a detectar blancos de ataque muy específicos (negros, católicos, inmigrantes, judíos), sobre los cuales descargaban su odio y expresaban su descontento ante la situación económica, política y

social prevaleciente en sus respectivos momentos históricos.

Esas características, que nacían básicamente de la naturaleza intrínseca de dichas organizaciones de derecha radical o de extrema derecha, cambian sustancialmente cuando, bajo las condiciones de angustia y desesperación que impuso la crisis económica de los años de 1930, surgieron expresiones como *Union for Social Justice*, encabezada por el reverendo Charles E. Coughlin, que impulsaron una propuesta eminentemente fascista como una alternativa viable para superar la difícil situación que experimentaban la nación. En esa etapa encontraron eco en la sociedad estadounidense las ideas fascistas de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, que junto al quehacer de Francisco Franco, se extendieron en Europa, trascendieron las fronteras del Viejo Mundo, alcanzaron una dimensión internacional y llegaron al continente americano. Algunos historiadores llamaron a ese período “la época de oro del fascismo norteamericano”, cuando la efervescencia de dicha corriente de pensamiento impulsó la creación de alrededor de ochocientas organizaciones diferentes, y cuando revistas y otras publicaciones periódicas de corte autoritario se difundieron a lo largo y ancho del territorio nacional (Nolte, 1967, y Woolf, 1970).

Durante ese lapso, el fascismo en los Estados Unidos se manifestó en lo fundamental de dos formas. La primera fue mediante grupos con actividad política y propagandística, como *The American Patriots*, *The German American Bund*, *The Knights of White Camellia*, *The Silver Shirts*. La segunda forma estuvo representada por los pensadores o intelectuales que nutrieron con un esquema teórico a tales expresiones, entre los cuales se destacaron Seward Collins, Ezra Pound y Lawrence Dennis (González Maass, 1997 y Velasco, 1983). Bajo esas dos modalidades, que se complementaban, el fascismo norteamericano se constituyó en un movimiento significativo que rechazó por igual al liberalismo y al socialismo, ofreciendo a cambio un modelo de organización

alternativo para solucionar la crisis, que cuestionó al régimen político y amenazó con revertir el sistema existente, radicalizando la ideología en el país hacia la extrema derecha o derecha radical (Vestermarck, 1975). En ese contexto, se apreciaron intentos por mezclar los principios fascistas europeos, principalmente los del nacionalsocialismo alemán, con la tradición liberal norteamericana y la coyuntura de la crisis de 1930, adoptándose el lema que revitaliza Trump, *America First*, que no es de su cosecha original. En su conjunto, el mosaico de tendencias ideológicas y agrupaciones sociopolíticas citadas se verá frustrado ante la pujanza del proyecto dirigido por el presidente Roosevelt, que articulando el programa del *New Deal* en torno a la política económica keynesiana, con el apoyo de una coalición integrada por el partido demócrata, los movimientos sociales de las minorías negra y latina, los jóvenes, mujeres y sindicatos, propicia la credibilidad del modelo de la democracia liberal representativa aportado por los Padres Fundadores de la nación, y descoloca la alternativa reaccionaria, de índole fascista, promovida por Coughlin y los grupos mencionados, que optaban por una opción fascista.

Con posterioridad, se advierte el reavivamiento de manifestaciones autoritarias, después de concluida la Segunda Guerra Mundial, que muestran la existencia de rasgos psicosociales en los Estados Unidos que reflejaban a cierta cercanía a la mentalidad fascista, lo cual fue estudiado por el sociólogo alemán Theodor Adorno (exponente del pensamiento crítico que maduró en la llamada escuela neomarxista de Frankfurt), aunque situaba el problema a nivel del individuo, toda vez que consideraba que esas ideas respondían a personalidades “fascistas”, entendidas como psicopatologías individuales, perdiendo de vista los condicionamientos histórico-sociales, relativos a las crisis del capitalismo norteamericano y a la búsqueda de salidas (Adorno, 1950). En ese mismo entorno, una acuciosa investigación histórica del intelectual británico Cedric Belfrage desmitificaba el

pluralismo de la cultura política en ese país en los años finales de 1940 y durante los de 1950, identificando lo que calificó como métodos de control del pensamiento, que articulaban una atmósfera de verdadera represión. Así, Belfrage revela cómo los actores políticos de la época del macartismo, son ejemplares “protagonistas de una inquisición”, es decir, “personas en el poder con intención de retenerlo, que identifican los mejores intereses de la nación con los suyos”, que manipulan el estado de ánimo y el clima sociopolítico interno (Belfrage, 1972: 11-12).

A raíz de la impronta presidencial de George W. Bush en la década de 2000, se ubican nuevas reflexiones acerca de las acciones generadas por ese gobierno, entendidas como expresiones fascistas, que como parte de lo que se conoció como la Doctrina Bush, ofreció cobertura a una política interna y exterior justificada a partir de la Ley Patriótica y del enfrentamiento al terrorismo, que sería la nueva construcción de la amenaza a la cultura y la seguridad de la nación, luego de desaparecido el comunismo como enemigo principal. Tanto en el plano ideológico, palpable en concepciones novedosas como las del “Estado Fallido” y el “Cambio de Régimen”, como en el de la práctica gubernamental, ganó presencia una apelación sobresaliente a la violencia, de presencia constante en el discurso movilizador que con justificaciones religiosas y geopolíticas recrearon el clima de paranoia en la cultura política y la vida cotidiana. Numerosos estudios retomaron las preguntas relacionadas con el nuevo ascenso de un pensamiento fascista, como los de Gore Vidal, Noam Chomsky Howard Zinn y Michael Moore, entre otros, al constatar la reiteración con que las fuerzas de extrema derecha o derecha radical que se movían en el Partido Republicano, en la literatura académica y la gran prensa estadounidense, durante el mencionado decenio. Esa situación, sin embargo, perdería peso al quedar atrás los ocho años de la doble Administración de W. Bush, creándose el espejismo de que el extremismo con-

servador legitimado ante la prolongada etapa de crisis, desaparecía de la escena cultural y política, al simbolizar Obama en la primera mitad de la década de 2010 la recuperación del optimismo, la confianza y la racionalidad. En realidad, durante sus dos períodos de gobierno, Obama fue objeto de profundas embestidas nativistas y populistas, fascistas, dirigidas desde movimientos como los del *Tea Party*, los *Birthers*, la *National Rifle Association*, el *Ku-Klux-Klan*, varias organizaciones religiosas, de la derecha evangélica y medios de comunicación conservadores, como *Fox*, entre otros, que cuestionaban su condición de estadounidense y le denigraban por el color de su piel (Hernández Martínez, 2020).

A partir de la segunda mitad de ese decenio, adquiere de nuevo vigencia el intento intelectual por explicar lo que está sucediendo en la cultura política norteamericana, en la llamada “era Trump”, dada la envergadura del nacionalismo chauvinista, el racismo, la xenofobia, el supremacismo blanco y cristiano, palpables tanto en la retórica discursiva presidencial como en la ejecutoria correspondiente que caracterizan a Trump desde 2016. (Russell Mead, 2017). Entre los principales trabajos que dedican atención crítica a ello y que benefician el presente análisis se encuentran los de los sociólogos William I. Robinson y Jaime Preciado Coronado (Robinson, 2016 y Preciado Coronado, 2017).

En resumen, si bien el fascismo es un recurso en tiempos de crisis política en la sociedad capitalista en general, y en el caso de los Estados Unidos la profundización de una crisis de tal naturaleza propicia hoy, como ayer, ciertas condiciones para su redefinición en el plano ideológico, dados los antecedentes y componentes de supremacía racial, étnica y religiosa, elitismo y tradición violenta en la cultura, existen límites político-jurídicos que impiden su institucionalización como régimen político. Ese proceso contradictorio se halla en pleno despliegue. Es decir, está en marcha la configuración de un ideario con componentes fascistas que amplía el espacio de las concepciones conservadoras y

de derecha radical en la cultura política norteamericana, recreando con la “era Trump” el contexto de la “era Reagan”, en la cual se registró un proceso análogo, bajo condicionamientos históricos que restringen su alcance al nivel del sistema político, que sigue (y seguirá) definido por el régimen político demoliberal representativo. ¿Quién puede imaginar a la sociedad estadounidense abandonando la simbología de sus valores tradicionales, en la que se suprima la libertad de expresión, reunión y asociación, con una Constitución y un Congreso anulados, sin procesos electorales, con toque de queda y un patrón social totalitario, con un único poder concentrado en la rama ejecutiva, un Estado militarizado y unos medios de comunicación centralizados con un mismo y absolutista mensaje?

Con la llamada Revolución Conservadora se prometió “un nuevo amanecer”, hablando el presidente Reagan de “hacer grande a los Estados Unidos de nuevo” (*Make America Great Again*). Así, en los años de 1980 se presentó una alternativa de naturaleza ideológica fascista, con una lectura basada en una óptica de extrema derecha o de derecha radical, que enfrentaba la tradición política liberal, intentando superar la herencia rooseveltiana, nutriéndose, según lo explica Jürgen Habermas, de insumos en la sociedad civil y la conciencia colectiva, con lo cual las contradicciones culturales adquirirían la connotación de dilemas políticos (Habermas, 1983). Los elementos que pueden asumirse como indicativos de una orientación fascista, no se integran en una cosmovisión totalmente coherente, orgánica ni en una práctica política acabada, dadas las razones históricas apuntadas, que dificultan el florecimiento en la sociedad estadounidense de opciones extremas, como la socialista o la fascista, que quiebren o sobrepasen los límites establecidos por el modelo establecido: el de la tradición política de la democracia liberal representativa.

A pesar de su caprichosa y accidentada gestión presidencial, de la pérdida de simpatizantes y de algunos soportes estatales con tradición republicana, Trump logró preservar en 2020 buena

parte de las bases electorales de 2016 —sobre todo en población blanca masculina adulta, con bajo nivel de instrucción, evangélica, de áreas rurales, de clase media y obrera, así como de segmentos de la oligarquía financiera y corporativa, vinculada a bienes raíces, construcción, energía y al complejo militar-industrial—, cuya lealtad fue visible tanto en la filas partidistas como en el conjunto de la sociedad civil, al apoyar su escandalosa e inédita conducta orientada a no abandonar su sitio en el gobierno, mediante acaloradas acusaciones de fraude y otras artimañas legales, sin presentar las evidencias requeridas. El predominio de posiciones republicanas en el Senado y en la rama judicial se suma a un cuadro político-ideológico en el que la correlación de fuerzas conservadoras mantiene significación, pudiendo hablarse, hasta cierto punto, de una suerte de “trumpismo”, aún y cuando Trump no fuese reelecto.

La beligerancia de su retórica discursiva, siendo aún presidente y la militancia de sus simpatizantes durante el período inmediato que siguió a los comicios, a través de un amplio abanico de organizaciones y grupos de extrema derecha, algunos armados —que abrazan con exacerbación consignas y agendas de un nacionalismo extremista, discriminatorio, antidemocrático, arbitrario e irracional, escudado en concepciones de supremacía racial y cristiana, apelando a la violencia y a la demonización del adversario—, puede considerarse una expresión ideológica fascista, cuya perdurabilidad en la cultura norteamericana no puede descartarse.

TEORÍA E HISTORIA, PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El empleo del calificativo fascista a diferentes momentos y gobiernos en los Estados Unidos, así como la preocupación por un peligro de esa naturaleza en la actualidad, conlleva más preguntas que respuestas, estimula interpretaciones y mueve la polémica.

¿Fue fascista la Administración Reagan?; ¿Ha sido fascista la de Trump? ¿Existe un proceso de

fascistización en la sociedad norteamericana? Se requiere de una serie de precisiones conceptuales al enfrentar estas interrogantes.

1) Las formas de ascenso al poder (democráticas o inconstitucionales), el nivel y apariencia de la represión que ejerzan estos grupos, la existencia de un partido único con agenda fascista o la hegemonización política dentro de un sistema pluripartidista, dependerán de la situación interna y externa histórico-concreta del país en cuestión, pero ello no altera el hecho de que el sector más reaccionario y aventurero de la burguesía, al decir de Dimitrov, puede llegar a monopolizar el poder efectivo (gubernamental y social) y ejercerlo, neutralizando a la oposición por vía democrática o represiva. Por lo tanto, cada fascismo diferirá uno de otro, de país a país y de una época a otra. Es conveniente recordar el modo pacífico y relativamente constitucional del ascenso nazi al poder, en Alemania, así como el modo en que progresivamente, y no de súbito, neutralizó primero y suprimió después la oposición política.

2) Las corrientes fascistas contemporáneas difieren en su forma de las europeas clásicas (Alemania, España, Italia) y de aquellas que se implantaron en América Latina (Brasil, Argentina, Chile), que adoptaron determinadas formas históricas, las de las dictaduras militares. El fascismo actual no sólo no se caracteriza por esos rasgos, mucho menos en una fase preparatoria o incipiente, como pudiera ser la de un probable auge o expansión en la sociedad norteamericana, sino que incluso procura, en general, evitar semejanzas formales con dichas expresiones.

3) En cada país donde exista una corriente fascista, esta tiene diversos orígenes, composición, soportes clasistas y cuotas de poder, por lo que no conforma un movimiento homogéneo, sino que incluso pueden existir importantes contradicciones en su seno. En el caso de los Estados Unidos, existen varias fuentes y corrientes fundamentales de orientación fascista, algunas de las cuales ya se examinaron. Lo integran ciertos sectores del

gran capital transnacional; otros de menor poder financiero, en estrecha vinculación y dependencia de la producción de armamentos y con capitales invertidos esencialmente (aunque no exclusivamente) dentro del territorio nacional; grupúsculos racistas y de autoidentificación fascista, más bien en su sentido tradicional (como el Partido Nazi, el Ku-Klux-Klan y la *John Birch Society*). Cada uno de ellos tiene una visión distinta de su ascenso al poder, así como del modo de emplearlo. Los dos primeros tienden a la americanización de su fascismo, la tercera vertiente se proyecta con una conducta que se mueve en el límite de lo admitido en la cultura estadounidense, dada su beligerancia, lo que la aísla socialmente y dificulta su peligro potencial. Entre esos sectores existen vínculos políticos y financieros en distintos niveles o gradaciones.

4) La “dictadura” de los elementos más reaccionarios, chovinistas y aventureros del gran capital, siguiendo de nuevo lo planteado por Dimitrov, no tiene que ser inevitablemente atroz en lo interno. Tratará, sí, de ser eficaz. Su grado de brutalidad dependerá de la necesidad que tenga de acudir a tales procedimientos. Por otra parte, las formas represivas responderán al marco nacional e histórico donde se establecen largas condenas y silla eléctrica. No se requiere del horno crematorio. A la vez, los medios de difusión masiva, las escuelas y otros aparatos ideológicos del Estado, cuya capacidad manipuladora acompaña habitualmente a las prácticas fascistas, hacen que se reduzca la necesidad de medidas represivas desde el punto de vista físico e incluso, político.

5) El fascismo no arriba “de pronto” al poder. Aún si históricamente ha recurrido al golpe de Estado cuando lo ha necesitado o pensado que lo ha necesitado, en otros casos, como el de Alemania, ha ascendido a través del proceso electoral. En uno y otro caso, el fascismo pasó por una fase preparatoria de transición antes de su llegada al poder y en las primeras etapas después de alcanzarlo. Sólo después que se siente dueño consolidado de las riendas efectivas (económicas, sociales,

políticas, culturales) del poder es que se quita la máscara y pasa a la fase abiertamente fascista.

6) En el caso de los países capitalistas más industrializados, el fascismo requiere una base social de masas significativa, si bien no necesariamente mayoritaria. En este sentido, es útil la precisión de Robert Paxton, quién sostiene que los cimientos del fascismo se encuentran en un conjunto de pasiones movilizadoras, más que en una doctrina elaborada, ante una sensación de crisis abrumadora, más allá del alcance de cualquier solución tradicional, por lo que se acude entonces a cualquier acción, sin límites legales o morales, contra quienes se perciben como enemigos, tanto internos como externos, encontrando eco en las masas populares (Paxton, 2017).

A comienzos de 1980, el politólogo norteamericano Bertram Gross, preocupado por el presente y el futuro de los Estados Unidos, alertaba sobre el advenimiento allí de un “fascismo amistoso”, tomando nota del fenómeno de persistencia de algunas de sus expresiones mundiales, y de las tradiciones de autoritarismo, violencia y discriminación inherentes a la cultura política norteamericana, cuya reactivación se advertía. Según Gross, ponderando la crisis norteamericana de la segunda mitad del decenio de 1970, “el fascismo vendría a los Estados Unidos con una cara amigable: no con juicios como los de Nuremberg, o con doctrinas de superioridad racial, sin prohibir formalmente los partidos políticos, abolir la Constitución o eliminar las tres ramas del gobierno, pero con el mismo fervor nacionalista, leyes arbitrarias y dictatoriales y con violentas conquistas militares” (Gross, 1980: 11).

Como fenómeno sociohistórico, el fascismo conlleva una serie de rasgos que tipifican un régimen político específico, viable dentro de los marcos del Estado burgués, que se plasma de manera concreta según el momento y la nación en que emerja y se establezca. Sus modalidades institucionales varían en consonancia con las características del capital financiero, la estructura de

clases, la naturaleza de la crisis que se enfrente, el entorno sociopolítico y la cultura nacional del país de que se trate. Atendiendo a lo planteado, esa no es, como ya se ha señalado, la situación en los Estados Unidos. En este caso, lo que se ha ido instituyendo es una especie de matriz ideológica reaccionaria al interior de la sociedad norteamericana, en la que se entrelazan diversas tendencias —coincidentes en unos puntos, y en otros, complementarias—, que comparten un ideario de expansionismo, intolerancia, autoritarismo, superioridad y segregación sobre criterios raciales, étnicos y religiosos, que justifica una amplia gama de acciones violentas, entre las cuales se encuentran el genocidio, la exclusión, marginación, discriminación y terrorismo interno, que a la vez son características del fascismo y están implantados en el tejido de la cultura política norteamericana, respondiendo a intereses de las fracciones burguesas más chovinistas, militaristas y agresivas de la oligarquía financiera estadounidense, representadas en distintos momentos en círculos gubernamentales.

Según William I. Robinson, “el sistema estadounidense y los grupos dominantes se encuentran en una crisis de hegemonía y legitimidad, y el racismo y la búsqueda de chivos expiatorios son un elemento central para desafiar esta crisis. Al mismo tiempo, sectores significativos de la clase obrera blanca estadounidense vienen experimentando una desestabilización de sus condiciones laborales y de vida cada vez mayor, una movilidad hacia abajo, precarización, inseguridad e incertidumbre muy grandes. Este sector tuvo históricamente ciertos privilegios gracias a vivir en el considerado primer mundo y por privilegios étnico-raciales respecto de negros, latinos, etcétera. Van perdiendo ese privilegio a pasos agigantados frente a la globalización capitalista. Ahora el racismo y el discurso racista desde arriba canalizan a ese sector hacia una conciencia racista y neofascista” (...); el discurso abiertamente fascista y neofascista de Trump, que ha logrado legitimar y

desatar los movimientos ultra-racistas y fascistas en la sociedad civil estadounidense (...). La crisis en espiral del capitalismo global ha llegado a una encrucijada. O bien hay una reforma radical del sistema (si no su derrocamiento) o habrá un giro brusco hacia el fascismo del siglo XXI. El fracaso del reformismo de elite y la falta de voluntad de la elite transnacional para desafiar la depredación y rapacidad del capitalismo global han abierto el camino para una respuesta de extrema derecha a la crisis. El trumpismo es la variante estadounidense del ascenso de una derecha neofascista frente a la crisis en todo el mundo” (Robinson, 2016: 2).

Por su parte, Jaime Preciado Coronado coloca un análisis que retoma a Sheldon Wolin, coincidiendo en algunos aspectos con la mirada de Robinson (Wolin, 2008 y Preciado Coronado, 2017). Señala que “la democracia en los Estados Unidos no ha llegado a consolidarse, pues a comienzos del siglo XXI parece estar controlada por un totalitarismo invertido que es ejercido por un superpoder. No se trata de una calca actualizada del fascismo como régimen político, pues la ficción democrática actual simula las distancias con el nazismo u otras formas de fascismo en la historia mundial reciente, sino que se instaura un régimen social que impone su agenda pública desde el autoritarismo moral, la idea de superioridad racial, el totalitarismo del mercado, y desde relaciones sociales que capturan e intentan legitimarlo en el espacio sociopolítico” (Preciado Coronado, 2017: 70). En este ensayo se comparten ambas ideas, que han sido reproducidas en extenso atendiendo a su significación.

DE LA ERA REAGAN A LA ERA TRUMP

La rearticulación del consenso que tiene lugar en la actualidad se asemeja a la que se desplegó en los años de 1980, bajo la Revolución Conservadora. De ahí que, como recurso analítico que pretende destacar el parentesco entre ambos procesos, se acuda al cotejo, al puntualizar los aspectos fundamentales.

a) La fracción burguesa más chovinista, agresiva y aventurera del gran capital estadounidense se logró hegemonizar en 1980 el poder ejecutivo (y en buena medida, el legislativo y el judicial), sacando partido al estado de frustración y sentimientos nacionales heridos que dejó como saldo la crisis general de los Estados Unidos durante la década precedente. Sin embargo, su base política era una coalición de centro-derecha, liderada por la extrema derecha, pero que procuró ajustarse al consenso global de la clase dominante, situado en posiciones de centro-derecha. En oposición a la fracción burguesa del viejo *establishment* que dominó la política norteamericana hasta entonces, esa fracción burguesa emergente estaba integrada principalmente por capitalistas relativamente poco transnacionalizados, proteccionistas o endogámicos, en sentido figurado, que dependían en gran medida de la carrera armamentista y que constituían una parte importante del llamado complejo militar industrial. Su aspiración era desplazar al viejo *establishment* (la otra fracción más poderosa y transnacionalizada de la burguesía desde el punto de vista financiero) del poder económico, político y social en los Estados Unidos, sustituyéndola por otra fracción burguesa hegemónica. Para ello pusieron en juego un conjunto de políticas que mientras respetaron los límites del consenso global de la clase dominante, vitalizaron una dinámica que arrastró hacia la derecha la agenda política nacional norteamericana. Con Trump se reeditó una experiencia similar.

b) La derecha radical, movimiento político social que lideró el esfuerzo electoral y prevaleció hoy en los medios gubernamentales, calificado en 1980 como “nueva” derecha, era entonces una de las corrientes de orientación fascista sobresalientes en los Estados Unidos. Su eficacia estaba dada por la coyuntura histórica que vivió y que supo explotar, creando alianzas con la “vieja” o tradicional derecha y con la corriente neoconservadora, consiguiendo en términos estratégicos desplazar al antiguo *establishment* elitista transnacionalizado

por sobre los escollos tácticos inmediatos. Así, aquél sector, apoyado en una retórica populista demagógica, fue capaz de sumar a amplios sectores (incluyendo clase media y trabajadora) a su cruzada *antiestablishment*, con lo cual se convirtió en la corriente fascistizante viable en el contexto norteamericano. De cierta manera, una situación así se recrea con Trump, cuarenta años más tarde, al hacer gala de nacionalismo, proteccionismo o endogamia, en el sentido planteado.

c) El objetivo estratégico de la fracción burguesa a la que se ha venido aludiendo y del movimiento de la derecha radical promovido por ella ha sido desplazar de sus posiciones hegemónicas al “viejo” *establishment*. En ese sentido, tales círculos burgueses consideran hoy al tiempo presente, como lo hicieron ayer, como un tiempo de transición, limitando su avance en cuestiones específicas, haciendo determinadas concesiones al dicho *establishment*, debilitado, más no agonizante, intentando avanzar todo lo posible, de modo tal que perdurasen sus huellas y se entorpeciera el camino ulterior, si se seguía una ruta diferente. En los años de 1980, aunque Reagan prolongó su doble mandato en el gobierno de George H. Bush, siguiendo esa estrategia, no pudo a comienzos del siguiente decenio proseguir el avance aludido, al tropezar con las fuerzas renovadas del antiguo *establishment*, que impidieron la reelección de H. Bush, al rearticularse con William Clinton. Pareciera que un contexto como aquél es el que se definió en 2020, provocando la no reelección de Trump.

d) Probablemente, la aspiración de los sectores que respaldaban a Trump haya sido coincidente con la de los que impulsaron a Reagan, en el sentido de que no se trataba de que completase ese proceso hasta sus últimas consecuencias, a menos que dispusiera de un segundo período de gobierno, sino de avanzarlo hasta un punto en que se dificultase su reversión.

La Administración Trump ha marcado hasta el presente, como lo hizo ayer la de Reagan, el ascenso a las posiciones clave del poder político nor-

teamericano de los representantes de la fracción burguesa más chovinista, agresiva y aventurera del capitalismo monopolista, del imperialismo en los Estados Unidos. Y, a la vez, de la corriente de orientación fascista más peligrosa, dada su habilidad y relativa viabilidad, entre las existentes que hallan espacio en el medio político y cultural norteamericano.

Trump no ha sido, por tanto, una presidencia más, ni siquiera “la más reaccionaria” en los primeros decenios de este siglo, sino un fenómeno ideológico y sociopolítico cualitativamente diferente en el país, aunque no totalmente nuevo, que responde a los efectos acumulados desde los años de Reagan, reeditando y dando continuidad al intento de desarrollar una fase de transición encaminada a rechazizar gradualmente la sociedad, que a su vez abre la puerta en varios campos de los Estados Unidos a la posibilidad fascista en la cultura política.

El ascenso de Reagan al poder reflejaba más que todo la profundización de la tendencia a la rechazización de la elite dominante en su conjunto como reacción ante la inmanejabilidad de la crisis que se venía produciendo desde la época de Carter, que se expresa de modo latente cuando no manifiesto hasta el presente, pero que nunca ha desaparecido del todo. El voto que favoreció a Reagan en 1980 y el que llevó a Trump a la presidencia en 2016 no reflejan tanto una rechazización intrínseca de las masas como su frustración, plasmada en un voto de castigo, ante la incapacidad de los gobiernos demócratas que les precedieron para hacer coincidir la retórica populista de ambos gobernantes republicanos con una mejoría de la crisis económica interna. En lo que al proceso de ideologización masiva se refiere, se ha empleado una técnica del fascismo clásico: la de presentar la crisis como resultado de la incapacidad del viejo *establishment* y el fracaso de sus políticas, volcar el sentimiento *antiestablishment* originado en la década de 1960 hacia una tendencia conservadora, presentando a la crisis como una crisis de

liderazgo del viejo establishment y no del sistema, por lo que su desplazamiento del poder y la instauración de un nuevo orden social podría devolver la fe en el sistema a las masas, afectadas psicológicamente por la crisis. La fórmula ideológica es semejante, por tanto —no idéntica— a la del fascismo clásico de los años de 1920 y 1930: transformar en tendencia derechista el sentimiento *antiestablishment* que venía moviendo a las masas hacia posiciones de centro izquierda o liberales, cercanas al liberalismo tradicional de la democracia representativa establecida.

REFLEXIONES FINALES

¿Necesita el capitalismo estadounidense del fascismo? La necesidad de recurrir al fascismo cae en el terreno subjetivo. No se trata de si objetivamente el sistema en los Estados Unidos está necesitado de él, sino de si la elite de extrema derecha o una fracción decisiva dentro de ella perciben la necesidad de un cambio dramático en el sistema. A mediados de la década de 1970, la mayor parte de la elite no percibía la necesidad de un cambio significativo. Después de atravesar la nación la crisis a finales de dicho decenio, la situación sería otra. La opción que se fraguó en aquel período, y que se plasmó al finalizar la década en la propuesta profundamente conservadora que hizo suya Reagan poseía rasgos ideológicos de corte fascista. De alguna manera, aquella situación se reitera después, con Trump. A partir de 2016, persistiendo incluso en 2020, más allá de la derrota de Trump, pareciera que perdurara la percepción, en buena parte de la sociedad, de que se requieren esos cambios.

El historiador argentino Pablo Pozzi formula una pregunta y esboza una respuesta, cuya profundidad analítica hace pertinente reproducir, en extenso, sus palabras, que las hace suyas el presente ensayo: “¿Son o no fascistas los Estados Unidos? El término en sí mismo no es importante excepto por su simbolismo político e ideológico. Debería quedar claro que muchas de las definiciones aceptadas de fascismo se acer-

can bastante a la realidad norteamericana actual; particularmente aquellas que enfatizan el control del Estado por parte de una plutocracia u oligarquía financiera. La definición en sí misma apunta sobre todo a la inexistencia de un sistema democrático, o sea a un sistema político donde la voluntad de la mayoría debería guiar el accionar del Estado. Por otra parte, también debería quedar en claro que si bien el caso norteamericano reproduce características en apariencia cercanas al fascismo (por ejemplo el uso del racismo como política de Estado, la militarización de la sociedad a través de las fuerzas policiales, la existencia de campos de concentración para opositores políticos y la suspensión del Estado de derecho sin apelación incluyendo la posibilidad de desaparición de personas), muchas de estas también pueden ser propias de dictaduras o de regímenes autoritarios. La principal defensa de aquellos que rechazan la caracterización de fascista tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos hay elecciones regularmente y que no hay una política oficial antisemita. Ambos razonamientos son falsos. Hitler y Mussolini no solo llegaron al poder por vía electoral, sino que mantuvieron el sistema bajo sus regímenes e inclusive retuvieron un apoyo mayoritario de la opinión pública hasta el fin. Y el racismo fascista

no sólo incluyó a judíos sino también a gitanos, homosexuales, y sobre todo a comunistas” (Pozzi, 2015: 37).

La década de 2020 que comienza, la tercera del siglo XXI, comprende dos contiendas electorales, en 2024 y 2028, en las que se enfrentarán opciones ideológicas dentro del marco bipartidista establecido por el sistema político norteamericano, pero con expresiones acusadas al interior de las filas demócratas y republicanas, y fuera de ellas, a lo largo y ancho del espectro ideológico que atraviesa a la sociedad civil y a la cultura, conformando zonas de consenso y conflicto. De alguna manera, ello transcurrirá al calor de una crisis multidimensional inconclusa, signada por las contradicciones que conlleva un régimen político afincado en la democracia liberal representativa, que limita la institucionalización del fascismo, junto a un entorno cultural al que no le resultan ajena, extraña y mucho menos, novedosa, la ideología fascista, de corte totalitario, antidemocrático, con fuertes acentos conservadores y de extrema derecha, opuestos al ideario fundacional de la nación. No hay dudas de que en el horizonte político-cultural en los Estados Unidos se registrarán tales tendencias contrapuestas. Será necesario regresar a este análisis al comenzar el decenio de 2030.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adorno, T. W. et al (1950): *The Authoritarian Personality*, Harper & Row, New York.
- Belfrage, Cedric (1972): *La inquisición democrática en Estados Unidos*, Editorial Siglo XXI, México.
- Borón, A. (2003): *El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires.
- Dimitrov, Jorge (1953): “Acerca de las medidas de lucha contra el fascismo y los sindicatos amarillos”, en *Obras Completas*, Editorial del PCB.
- Eco, Umberto (1991): “El fascismo eterno”, en *Cinco escritos morales*, FCE, México.
- González Delgado, D. (2018): “Combustible para el odio”, en *Granma*, 8 de marzo, <http://www.granma.cu/mundo/2018-03-08/trump-combustible-para-el-odio>
- González Maass, P. G. (1997): *Terrorismo en Estados Unidos: un problema de seguridad nacional*, ITAM, México.
- Gross, Bertram (1980): *Friendly Fascism. The New face of Power in America*. South End Press, Boston.
- Habermas, Jürgen (1983): “La ruptura entre cultura y sociedad. Sobre la crítica de la cultura de los neoconservadores en EE.UU”, en *Nueva Sociedad*, No. 69, Caracas, noviembre-diciembre.

- Hernández Martínez, J. (2018): “Rearticulación del consenso y cultura política en los estados unidos (Reflexiones e hipótesis sobre la Era Trump)”, en Casandra Castorena, Leandro Morgenfeld y Marco A. Gandásegui (Coordinadores), *Estados Unidos contra el Mundo. Trump y la nueva geopolítica*, CLACSO-Siglo XXI Editores, México.
- Hernández Martínez, J. (2020): “El populismo en los Estados Unidos: historia y contemporaneidad”, en *Huellas de Estados Unidos*, Cátedra de Historia de Estados Unidos, No. 19, Octubre, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Laclau, E. (1977): *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*, Siglo XXI, Madrid.
- Lenin, V.I. (1973): “Sobre la caricatura del marxismo y el “economicismo imperialista”, en *Obras escogidas en doce tomos*, tomo VI, Editorial Progreso, Moscú, pp.28-50.
- Lenin, V. I. (1996): *El imperialismo y la escisión del socialismo*, Editorial Progreso, Moscú.
- Nolte, E. (1967): *El fascismo en su época*, Editorial Península, 1967.
- Passmore, K. (2014): *Fascism: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford.
- Paxton, R. (2017): *The Anatomy of Fascism*, Vintage, New York.
- Pozzi, P. (2015): ¿Del absolutismo capitalista al fascismo?: ¿cuál es la naturaleza del sistema político norteamericano actual?”, en *Huellas de Estados Unidos*, Cátedra de Historia de Estados Unidos, No. 9, Octubre, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Preciado Coronado, Jaime (2017): “Entre el desacuerdo y el fascismo societal invertido. Elecciones e imaginario democrático en Estados Unidos”, en Marco A. Gandásegui, hijo y Jaime A. Preciado Coronado, *Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo*, Universidad de Guadalajara.
- Robinson, William I. (2016): “Trump y el fascismo del siglo XXI”, en *La Jornada*, UNAM, México, domingo 4 de diciembre, <http://www.jornada.unam.mx/2016/12/04/opinion/026a1mun>
- Russell Mead, Walter (2017): The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order, en *Foreign Affairs*, January 20th.
- Velasco, J. (1983): “El reverend Charles E. Couhlin y el ascenso del fascismo norteamericano durante la década de los treinta”, en *Cuadernos Semestrales*, No. 14, CIDE, México.
- Vestermark, S. D. (1975): *Extremist Groups in the U.S.*, International Association of Chiefs of Police, Gaithersburg.
- Wolin, Sheldon S. (2008): *Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido*, Katz Editores, Buenos Aires.
- Woolf, S. J. (1970): *El fascismo europeo*, Editorial Grijalbo, México.



Crisis del trabajo y formación del sujeto político progresista

Job crisis and formation of the progressive political subject

POR NILS CASTRO

Cientista social, educador, político y periodista panameño

INTRODUCCIÓN

Estamos al comienzo de una sucesión de rupturas, disyuntivas y cambios cuyo desenlace va a depender de las fuerzas en disputa. La pandemia aceleró, y ahora sus consecuencias agravan, la crisis general —económica, ambiental, política, cultural y moral—, que ya emergía antes del Covid 19. Su incidencia sobre los diferentes grupos afectados expande, a su vez, un enjambre de reclamos sociales que ya palpitaban. Las protestas masivas en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Honduras, Puerto Rico e incluso Estados Unidos estaban en ascenso cuando las cuarentenas vinieran a refrenarlas... temporalmente.

Cuando la humanidad pueda controlar la pandemia la situación habrá evolucionado, sin que esto haya resuelto las demás causas de enojo, que siguen sumándose. Muchos patrimonios se habrán perdido. La concentración del gran capital habrá crecido —los tiburones han devorado más sardinas— y las empresas menos fuertes habrán cambiado de dueño, o desaparecido. Millones de cesantes dejarán de recuperar sus empleos, reemplazados por las innovaciones que la tercera y cuarta revoluciones tecnológicas aportan a la racionalización de puestos de trabajo.

El riesgo de que a la postre esto sea lo que defina la “nueva normalidad” está por dirimirse.

La etapa histórica a la que estamos entrando exige cambios, que los diversos grupos sociales conciben de distintas y hasta opuestas maneras, según sus respectivos intereses y aspiraciones.

El aprovechamiento de los nuevos recursos productivos, así como la satisfacción de mayores y complejas necesidades sociales, encuentran más obstáculos que canales de solución en la institucionalidad, las leyes y las prácticas políticas vigentes. Solo los más conservadores, atados a caducas técnicas y métodos, se aferran a las reglas del reciente pasado.

La nueva constelación de demandas no tiene soluciones dentro del embudo dejado por 30 años de hegemonía neoliberal, que instrumentaron el achicamiento del Estado, la privatización y desnacionalización desenfrenadas de los recursos públicos, manipulación del mercado, corrupción de las relaciones entre el gobierno y los negocios privados y la descapitalización material, intelectual y moral de los países subdesarrollados. Lo que en poco tiempo devastó la legitimidad y eficacia del sistema político, de los parlamentos y de la justicia. No es posible salir de tal sumidero reeditando las mismas recetas, ni los anteriores medios y procedimientos, ni siquiera en versión “mejorada”.

LA CRISIS DEL TRABAJO

Al discutir las consecuencias de la pandemia es habitual aludir a la situación de “la clase trabajadora”. Esta hace años ya confrontaba el incremento de la cesantía, el subempleo, el trabajo precario y el “autoempleo”. La creciente privatización de las economías y la concentración del gran capital recrudecieron la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos, la vulnerabilidad de esa clase

social y la multitud de los marginados que aún podían satisfacer sus necesidades básicas.

Quienes no tienen más medio de vida que la posibilidad de ofrecer su capacidad de trabajo han arribado a una situación extrema. El 30 de junio de 2020 la CEPAL actualizó el impacto del Covid-19 e informó que “la economía mundial experimentará su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuirá en el 90% los países, en un proceso sincrónico sin precedentes” (Gambina, 2000). Según la OIT, el 81% de la fuerza de trabajo mundial es la que ahora más padece el cierre total o parcial de las actividades económicas. Se perdieron 305 millones de empleos formales en el segundo trimestre de este año, y de los 2 000 millones que subsisten en la economía informal, al menos 1 600 millones pueden quedar sin nada, tras una reducción del 60% de sus ingresos en el primer mes de la pandemia (Yagnova, 2000).

Eso empezó mucho antes de la pandemia. Con el auge del neoliberalismo, muchas empresas abandonaron la producción de bienes para optar por mayor lucro en los negocios financieros. Además, desde la tercera y cuarta revoluciones tecnológicas, el gran capital acomete reestructuraciones que sus empresas más influyentes promueven, para ahorrar costos, reponer su tasa de ganancias y acumular excedentes. Modifican así las condiciones del mercado, a lo cual los demás actores —económicos y políticos— tienen que readecuarse. Esto envuelve al mercado laboral, ya que esos cambios redefinen la calificación y reducen la cantidad de los trabajadores que las compañías emplean, dejando fuera a los demás.

Entre los primeros afectados por ello están las organizaciones sindicales, que con esto no solo pierden afiliados, sino peso social y político. Aunque las causas de malestar y protesta sociales crecen, en América Latina las grandes confederaciones sindicales —salvo pocas excepciones y momentos— ya no representan ni encabezan a las mayorías populares. Las grandes movilizaciones de protesta que en varios países detonaron en los meses anteriores a la pandemia, expresaban a

multitudes autoconvocadas, social y culturalmente plurales, sin organización formal duradera. Representaron a la variopinta muchedumbre que los latinoamericanos llamamos “la gente”, de la cual la mayor parte de los sindicatos son parte relevante sin ser sus portaestandartes.

Pasados esquematismos ideológicos, traídos de ultramar, dejaron en nuestra América nociones que seguido no se adecuan —verbal ni conceptualmente— a las realidades de sus pueblos. En la práctica, la que llamamos clase obrera, o clase trabajadora, en América Latina abarca una diversidad sectores laborales afines pero diferentes. En las áreas urbanas ese conjunto se desagrega entre el empleo precario, los trabajadores por cuenta propia, los subcontratistas, los trabajos tercerizados, y la creciente suma de los trabajadores excluidos o cesantes, además de quienes conservan empleos formales, más proclives a formar sindicatos, cuando la ley no se los prohíbe.

Aparte de la cifra de parados, en el conglomerado laboral conviven trabajadores independientes, empleados del comercio y administrativos, pequeñas empresas, talleres artesanales, micro-negocios sostenidos por el dueño y su familia, comerciantes callejeros y empleadas domésticas. Como también trabajadores de la enseñanza pública y privada, así como los profesionales y técnicos independientes, dotados de conocimientos y hasta de medios de trabajo especializados —con frecuencia hostigados por interminables deudas e incertidumbres—, de donde han surgido no pocos líderes y asesores políticos. Además, aquellos que tienen el privilegio de servir a empresas de tecnología avanzada (Barrera Moreno, 2000).

En pocas palabras, hace falta estudiar y proponer otras tantas formas de organización, en el contexto de las respectivas culturas políticas y circunstancias nacionales.

A la par, con referencia al país rural, llamamos campesinos a cuantos viven en el campo, pero que en la vida concreta son precaristas o minifundistas, trabajadores sin tierra, trabajadores

estacionarios, pequeños y medianos productores, latifundistas que explotan peones o empresas nacionales y compañías transnacionales que explotan a obreros agrícolas. En este campo, sobresalen experiencias tan aleccionadoras como las ligas campesinas y el Movimiento de los Sin Tierra, en Brasil.

Además, esa polifacética realidad del trabajo debe comprenderse dentro de la naturaleza plural, —generalmente más conocida— de la heterogénea vida etno-cultural, socioeconómica y pluri regional de los países latinoamericanos. Vida hace siglos sometida a varias modalidades de un complejo régimen de discriminaciones y exclusiones, relativas al nivel de ingresos, la región de origen, los rasgos étnicos, sexo, edad y creencias de las personas, que les abren o cierran su acceso a status, empleos y oportunidades.

MÁS ALLÁ DEL NÚMERO DE SIGLAS

Los efectos de la pandemia y la cuarentena ahora expanden la crisis general —económica, social, política y étnica— que, al incidir sobre el enjambre de reclamos de las diversas fracciones sociales, agita a un tropel de luchas dispersas. Enseguida que las restricciones impuestas por el problema sanitario se retraigan, las indignaciones y reclamos sociales volverán a salir a las calles, en espera de un factor o iniciativa que contribuya a darles organización continua. Por su parte, los intereses plutocráticos consolidan ventajas. La crisis, al avanzar, polariza: los grandes consorcios acopian y concentran capitales, mientras los actores menos fuertes quiebran, la masa trabajadora empuja y las capas medias ven cercarse el abismo.

Dentro de la lógica de la crisis, cuando esta pandemia termine muchos patrimonios se habrán perdido y muchos pequeños y medianos negocios

habrán cerrado para siempre. No obstante, aunque los grupos más castigados son mayoritarios, tienen menor presencia real ante los órganos del poder. Esta desventaja agrava su subordinación a la clase, las entidades y la cultura dominantes. Tanto más cuando la crisis también viene de la corrupción de las relaciones entre el gobierno y los negocios privados. Como asimismo de la pérdida de representatividad del sistema político y de sus partidos (incluso algunos de izquierda, trancados en pretéritos prejuicios ideológicos y caducas formas de organización y comunicación). Y, además, en el descrédito de los Parlamentos y el extravío de su legitimidad. Todo lo cual concreta una *cerrazón* del sistema, que ya no asume las nuevas situaciones, ni las necesidades y demandas de la población mayoritaria.¹

No cabe tolerar que semejante situación continúe. Pero no se trata solo de prever lo que sucederá, sino de discutir qué toca hacer, para darle fuerza y sentido. No es posible cambiar esta realidad sin un proceso, e impulsarlo exige las necesarias formas de incorporación y movilización de más contingentes sociales. Esto es, requiere constituir identidades sociopolíticas incluyentes, capaces de incorporar a nuevos participantes.

Al estudiar los grandes movimientos nacional-populares latinoamericanos de los años 30 y 40 del siglo pasado, Ernesto Laclau llegó a la conclusión de que, frente la cerrazón política de su época, esos movimientos habían logrado asumir las motivaciones, la visión y el liderazgo idóneos para equiparar y juntar la diversidad de reclamos y expectativas de una multiplicidad de colectividades descontentas. Esto es, habían generado un discurso capaz de aglutinar las indignaciones y demandas —de diferentes orígenes, carácter y localización— de

¹Un ejemplo: cuando el gobierno acepta adoptar medidas antipáticas, convoca a los líderes de los gremios empresariales y de las centrales sindicales, para “mediar” en un acuerdo entre las partes. El gran capital acude como un solo hombre, mientras los sindicalistas, tan fraccionados como siempre, asisten a nombre de los trabajadores que aún tienen salario. La muchedumbre de los hombres y mujeres que carecen de trabajo fijo y subsisten como se pueda no tiene quien la represente ni santo que la defienda. Pero los medios noticiosos anuncian que las medidas se aceptaron por consenso.

la clase media, de los barrios y tugurios, los pueblos rurales, los pequeños comerciantes y los productores artesanales, junto a las reivindicaciones tanto de los obreros como de los carentes de trabajo.

A la opción histórica de juntar esa alianza de reivindicaciones insatisfechas, y conjugarlas para formar un sujeto nacional afirmativo de su propia identidad y opuesto al poder oligárquico, Laclau la denominó *populismo*. Noción encaminada, a su vez, a la progresiva producción de un bloque histórico y una *contracultura* de las clases inconformes —como ya Antonio Gramsci lo había anticipado— capaz de confrontar la hegemonía de las creencias y el sentido común establecidos, y de erigirse críticamente como su antagonista en la confrontación entre las razones de “nosotros” el pueblo y las de “ellos” la elite, así como abanderar una identidad liberadora de la nación frente al imperialismo.

Esta comprensión gramsciana, a la vez que confirmadora de la condición nacional y latinoamericana de dicho populismo es, como corriente transgeneracional, un precedente inmediato del cardenismo nacionalrevolucionario mexicano de los años 40, del *movimientismo* boliviano y la revolución guatemalteca de los años 50, y del torrijismo panameño de los 70, así como del progresismo de comienzos del siglo XXI (aunque probablemente ni Hugo Chávez, Lula ni Evo Morales hayan leído a Laclau).

En los tiempos hoy acelerados por la pandemia, esa alianza de inconformidades, reclamos y reivindicaciones añade otros factores: mayor complejidad y apremio sociales, menor protagonismo de las centrales obreras, creciente presión del proletariado informal, y alta capacidad de “la gente” para comunicarse entre sí y autoconvocarse, incluso sin ser parte de agrupaciones constituidas. Como, además, nuevas formas de organización, más horizontales, concebidas no solo en función

de donde los obreros trabajan —si hay trabajo—, sino también en las comunidades donde el pobre-tariado² y su prole cohabitan con sus semejantes.³

Aliar un conglomerado de los reclamos, reivindicaciones y expectativas de plurales sectores populares es bastante más que signar un acuerdo entre cierto número de organizaciones políticas. Como dice Manuel Cabieses, “Si para construir una alternativa de izquierda solo se necesitara fundar un partido, ya se sabría. Pero llevamos años insistiendo en ese método, sin resultados”. En Chile, añade, hay más de 40 partidos y decenas de grupos de izquierda que producen abundante propaganda en las redes sociales; respetable esfuerzo que se diluye en la tempestad tecnológica y cultural de la época (Punto Final, 2020).

Poco suma incrementar la cantidad de siglas a la sopa de letras si la masa movilizadora y el número de votantes no crecen significativamente. Antes bien, como lo resume uno de los talentos de mayor mérito en el asunto, Joao Pedro Stedile —líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)—, lo que se necesita es “una nueva alianza de clases en torno de un proyecto de país” (Portal 360).

EL CARÁCTER DEL PROYECTO

En la América actual, la cultura y la opinión de izquierda ocupan un campo mucho más espacioso y plural que el de los partidos de izquierda. No obstante, la estructuración de una alianza policlásista como la señalada no define por sí sola el carácter del proyecto y de las acciones que ese conglomerado puede compartir. Cada país es un mundo, como asimismo cada coyuntura histórica lo es. En su respectivo contexto, el desarrollo patriótico-popular, progresista y potencialmente revolucionario de esa alianza será alimentado, principalmente, por la visión estratégica, la

²Según la acertada expresión de Frey Betto, coincidente con aquella con la cual José Martí identificó a los mismos como “los pobres de la tierra”, con quienes deseó su suerte echar.

³Vale anotar que ese fue, asimismo, el ámbito socio-territorial donde el general Omar Torrijos llamó a constituir los núcleos de militantes, donde combinar la discusión de los temas nacionales con los asuntos de interés local.

inspiración y el liderazgo de sus actores más influyentes, en tanto estos sepan orientar ese conglomerado y animar la cooperación entre sus participantes.

Pero, si bien un impulso populista puede propiciar la unidad inicial de ese conglomerado, no determinará de por sí su orientación política ni su posibilidad de persistir hasta completar la totalidad de sus objetivos. Por su constitución híbrida, esa alianza normalmente mantendrá contradicciones latentes y, a la vez, por su sentido transformador provocará la reacción de las fuerzas del *statu quo*. La alianza no evoluciona en un espacio reservado, sino en una sociedad nacional donde el Poder está en disputa y en la que, en cada escenario y coyuntura, ella debe sobrepasar a la clase o grupo dominante. Su propia lucha modifica las realidades donde actúa, lo cual demanda periódicas actualizaciones tanto de sus arreglos internos como de su actuación y discurso políticos.

Mantener contradicciones internas no es una tara ni impedimento. Todos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad contienen contradicciones, que son resortes internos de su dinámica de acciones y readaptaciones. Lo que importa es que los motivos de unión y el talento de sus líderes contribuyan a canalizar esa dinámica dentro de un curso de complementación, empuje y desarrollo.

Aunque la clase dominante es un sector minoritario, ella defiende sus intereses y privilegios con grandes recursos económicos, institucionales, ideológicos, mediáticos y represivos, y cuenta con poderosos respaldos transnacionales. Y en la medida que ella pueda, se valdrá de las coyunturas de la confrontación para ampliar y consolidar sus ventajas. Por consiguiente, para todos los sectores progresistas involucrados, siempre será decisiva su aptitud para promover y nutrir la contracultura popular, para invalidar los mitos, miedos y sumisiones que la elite dominante infunde en las clases que explota. A todo lo largo del proceso, hay que hacer de las experiencias de la contienda

una fuente continua de formación político-cultural de nuestra gente, y trabajar en “la revolución de las conciencias”, como dice Andrés López Obrador (2020).

Por otra parte, nunca debe perderse de vista que la derecha y sus patrocinadores también estudian y prevén sus alternativas. También la extrema derecha sabe aprovechar oportunidades populistas, adelantándose a captar los resentimientos sociales y redirigirlos contra las opciones de izquierda. En el pasado, mediante el fascismo italiano y el nazismo alemán —que se adelantaron a los socialistas de aquel entonces— Hoy por hoy, lo mismo a través de la “nueva” derecha francesa, o el neofascismo brasileño, entre varios otros ejemplos.

Como dice Antonio Scurati, autor de una trilogía sobre Benito Mussolini, ese fue el caso del pequeño empresario o el empleado público, pequeños burgueses que no son violentos, cuando temieron que una revolución socialista les arrebatase lo que tenían. Entonces se sintieron fascinados con la violencia del fascismo y la desearon para darle una pronta solución a sus problemas. A lo Scurati añade que eso parece repetirse ahora, cuando ante la incertidumbre de la crisis algunos sienten que la ultra derecha puede imponer una rápida solución a sus inquietudes (Attanasio, 2020).

ÁVATARES LATINOAMERICANOS

El sentido político de las alianzas pluriclasistas ha sido un tema frecuente a lo largo de la historia latinoamericana. Para ser breves, aquí apenas lo resumiremos en tres o cuatro experiencias. Aunque la investigación de Ernesto Laclau se centró principalmente en los casos del *getulismo* brasileño y en particular del *peronismo* argentino y su potencial progresista, la misma época también produjo otro ejemplo de significativa influencia subregional con el *cardenismo*, la más nítida expresión del nacionalismo revolucionario mexicano.

Cuando, en 1934, el general Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de México, ya la Revolución

había eliminado al régimen precedente, neutralizado el poderío de la clase terrateniente, y recién derrotado a la cruenta contrarrevolución *cristera*. Pero el nuevo rumbo del proceso aún estaba por dirimirse entre los diversos caudillos regionales y tendencias políticas. Tras expulsar del país al ex presidente Plutarco Elías Calles —cabeza de la opción autoritaria—, Cárdenas reorganizó al Partido Nacional Revolucionario (PNR) remplazándolo por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), concebido como una federación de los partidos revolucionarios locales y regionales, a la cual le amplió la base social convocando a las centrales obreras a asumirlo como su organización política.

Cárdenas desarrolló el derecho laboral, tanto el obrero como el de los trabajadores del campo. Inspiró la fundación de la Central de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y le dio enérgico impulso a la reforma agraria, con énfasis en la formación de cooperativas. Acompañó esa iniciativa con el fortalecimiento de la educación popular industrial y la cobertura del sistema de educación rural.

A la par, zanjó de cuajo las constantes amenazas y regateos de las empresas petroleras —mayormente británicas—, decretando su nacionalización, así como la de los ferrocarriles. Además, emprendió grandes inversiones en infraestructura, mayormente de comunicaciones y transportes. Es decir, le dio base sociopolítica a una estrategia de desarrollo mediante sustitución de importaciones y fomento de la industria nacional privada liderada por grandes empresas estatales.

Cárdenas dio consistente apoyo solidario a la República Española e hizo de México el refugio de los luchadores progresistas y revolucionarios del Latinoamérica y del mundo. A su vez, el cardenismo tuvo largo impacto en la región mesoamericana, desde Centroamérica hasta los países andinos. Entre otras repercusiones, inspiró las ideas de Augusto César Sandino, le dio base al proyecto Aprista original, así como objetivos a la Revolución boliviana y a la Revolución guatemalteca, y la política

cardenista de desarrollo influyó la estrategia desarrollista originaria del proyecto de la Cepal.

No obstante, concluido el mandato de Cárdenas, la política de ampliación y robustecimiento de una burguesía y una clase obrera industriales, tomaría otro derrotero. El PRM cardenista sería remplazado por el PRI. Acaparar el Poder y complacer al gran capital prevaleció sobre la justicia y el desarrollo sociales; se entronizó la cooptación del aparato sindical y una creciente corrupción en las relaciones entre los gobernantes y los negocios privados. Degradación que en los años 80 se expandiría al descartar la estrategia desarrollista, entronizar las políticas neoliberales. Se privatizó creciente parte del patrimonio nacional, se ahondó la corrupción y degeneraron las prácticas políticas y económicas hasta los extremos que actualmente se denuncian.

En el Cono Sur latinoamericano

Las actuaciones de Getulio Vargas, en Brasil, y las de Juan Domingo Perón, en Argentina, tuvieron lugar más allá del área de resonancia de la experiencia cardenista. En ambos casos, en países grandes, naturalmente ricos, donde el poder político hacía mucho era monopolizado por sendos regímenes de la oligarquía terrateniente, conservadora y centralista.

Brasil

Getulio Vargas, con experiencia como parlamentario y como gobernador de Río Grande do Sul, accedió al poder en 1930 como presidente provisional cuando un golpe de la cúpula militar depuso al régimen tradicional. Los objetivos de Getulio enseguida se evidenciaron, al empezar por crear el ministerio de Trabajo, Industrias y Comercio, y el de Educación y Salud, dictar una ley de sindicalización y, en 1934, promulgar una nueva Constitución.

La atmósfera de la época se evidencia en que desde los primeros años 30 ya crecía el movimiento Integralista —fascista simpatizante de Mussolini y Hitler—, así como el Comunista, ligado a la estrategia estalinista de Comintern de esos años.

En 1935 ocurrió la “intentona comunista”, y en el 38 los integralistas también intentaron un putsch. Con lo cual Getulio, a su vez, desde 1937 decretó el estado de sitio, y poco después efectuó un golpe sin resistencia, que promulgó el Estado Novo —al que algunos cronistas le atribuyen cierta connotación fascista—, a la cabeza del cual Getulio siguió en el poder hasta 1945.

El nuevo régimen adoptó una política de nacionalismo económico e impulsó la industrialización; creó el Consejo Nacional del Petróleo (que después se convertiría en la Petrobrás), la Compañía Siderúrgica Nacional, el gigante minero Vale do Río Doce, la Compañía Hidroeléctrica el río San Francisco y la Fábrica Nacional de Motores. Paralelamente, desarrolló la legislación laboral y, por otro lado, profesionalizó las fuerzas armadas como una institución sujeta únicamente al Ejecutivo federal.

Al crecer la participación estadounidense en la segunda Guerra Mundial, Getulio tuvo un acercamiento con Franklin Delano Roosevelt y accedió a cooperar con Estados Unidos, cesando la ambigüedad de la política *getulista* de neutralidad en el conflicto. Aceptó la instalación de una base aeronaval norteamericana en la nordestina Natal, el punto estratégico de América más próximo a África y Europa meridional. Además, creó la Fuerza Expedicionaria brasileña, que participaría en la ofensiva de los aliados en Italia. No obstante, al concluir la guerra, con el auge mundial de las demandas de democratización, ante el riesgo de que Estado Novo fuese rebasado por el movimiento popular, Getulio —que ya previa reformas políticas y nuevas elecciones— fue depuesto por un golpe militar en 1945.

Getulio Vargas volvió al gobierno, por elección democrática, en 1950. Pero en la cúspide los momentos más dramáticos de su vida, en 1954 quedó

frente a una vasta ofensiva de la nueva derecha oligárquica y proestadunidense —armada ahora de poderosos medios de comunicación—, dirigida a desnacionalizar las grandes empresas estatales, especialmente Petrobrás. En vísperas de que las turbas movidas por la reacción arrollasen el gobierno, Getulio escribió su célebre Cartatestamento al pueblo brasileño, llamándolo a defender el patrimonio nacional, y se suicidó en Palacio. Ese gesto salvó a Petrobrás y todo lo que ella representaba.⁴

Argentina

Aunque Juan Domingo Perón y Getulio Vargas no alcanzaron a tratarse personalmente, sus notorias coincidencias políticas ocasionaron copioso intercambio de correspondencia.

El general Perón participó en la revuelta que en 1943 le puso fin a la llamada “década infame”, tras lo cual estableció una alianza con las agrupaciones sindicales de izquierda y se hizo cargo, en rápida sucesión, del Departamento de Trabajo y de la Secretaría de Trabajo y Previsión del nuevo gobierno. Desde allí apoyó al movimiento obrero haciendo efectiva la legislación laboral, impulsó los convenios colectivos, el Estatuto del Peón de Campo, los tribunales del trabajo, y extendió el derecho de jubilación a los empleados del comercio.

Ello le dio el apoyo de la mayor parte de los sindicatos, así como la hostilidad de las cúpulas empresariales y del embajador de Estados Unidos, Spruille Braden, quienes en 1945 desataron una ofensiva en su contra. Esta culminó en un golpe palaciego que obligó a Perón a renunciar y ordenó arrestarlo, lo que, a su vez, desató una movilización obrera que reclamó y obtuvo su libertad. El siguiente año Perón ganó las elecciones, unió a los partidos que lo apoyaron en un Partido Único de la Revolución, que luego sería el Partido Peronista.

⁴Solo algo más de 40 años después, bajo el triunfalismo inicial de la ofensiva neoliberal, para felicidad de las transnacionales, el sector estatal de las empresas brasileñas empezó a ser privatizado por el “socialdemócrata” presidente Fernando Enrique Cardoso, quien así abjuró de su pasado estructuralista y cepalista. Pero Petrobrás continúa siendo una empresa pública, al menos hasta ahora.

Tras la reforma constitucional de 1949, fue reelecto en 1951 en las primeras elecciones universales, en las que por primera vez participaron las mujeres. Su joven esposa, la actriz Eva Duarte, conocida como *Evita* Perón, se convirtió en una popular dirigente social por su liderazgo en la lucha por los derechos de las mujeres y de los discriminados trabajadores oriundos de las provincias del norte argentino, sus “cabecitas negras”. Perón, más allá de ampliar el respaldo oficial a los sectores más postergados —los “descamisados”— implementó una política nacionalista de desarrollo orientada a la industrialización, con énfasis primario en los sectores textil, siderúrgico, militar, del transporte y del comercio exterior.

En la política exterior, ante la Guerra Fría mantuvo la que llamó “tercera posición”, equidistante entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Pero 1952 sería un año aciago. Falleció *Evita*, tras larga lucha contra el cáncer. Perón incurrió en un innecesario enfrentamiento con la Iglesia, que hasta entonces lo había apoyado. Además, enfrentó un rápido aumento de la violencia entre grupos peronistas y antiperonistas, y una gran campaña antiperonista de los mayores medios de comunicación. Tras un fuerte choque con las bandas opositoras, que remató en el cruento bombardeo de la Plaza de Mayo, Perón fue derrocado en 1955 por un golpe militar, instaurándose una dictadura de derecha que derogó la constitución y las leyes laborales que esta incluía.

Perón se exilió en la España franquista. Poco después en Argentina surgió un movimiento de resistencia peronista, integrado por grupos obreros, juveniles, barriales, religiosos, y guerrilleros, que aglutinó a la izquierda peronista, reclamando el regreso de Perón y convocar elecciones libres y sin proscritos. Finalmente, Perón pudo volver y radicarse en el país dieciocho años más tarde, en 1973. Su multitudinario arribo dio ocasión a la ominosa masacre de Ezeiza, en la zona aeroportuaria, cuando la facción “ortodoxa” de la derecha peronista ametralló a sus copartidarios de izquierda.

Ese mismo año hubo elecciones. Con Perón proscrito, su candidato fue Héctor Cámpora, líder de la resistencia peronista, quien las ganó sin dificultad. Cámpora ejerció el cargo apenas 49 días —lo que se conoció como el Tercer Peronismo o la “primavera camporista”—, durante los cuales gestionó un Pacto Social entre los empresarios y los sindicatos, anunció una estrategia industrializadora e inició una política internacional tercermundista. Acto seguido, renunció para convocar a unas elecciones sin proscritos, que Perón ganó abrumadoramente, llevando como vicepresidenta a su segunda esposa, Isabel, bailarina de cabaret que, ya viejo, él conoció en el exilio.

Pero este último y achacoso Perón se dejó llevar y traer por sector “ortodoxo”, algunos de cuyos cabecillas ya habían creado la funesta Triple A —Alianza Anticomunista Argentina—, concebida para perseguir y asesinar a los militantes calificados de “izquierda”, lo que daría inicio a una ola de homicidios y desapariciones, incluso dentro del peronismo. Perón falleció el siguiente año, 1974, y el gobierno quedó a cargo de su incompetente viuda. La polarización peronista se extremó; Cámpora sobrevivió a un atentado y se refugió en México, Isabel fue echada por un golpe militar y se instauró una dictadura de inspiración neoliberal, que sin demora generalizó la aplicación los métodos iniciados por la Triple A.

En las experiencias reseñadas, se evidencia que el sentido político nacional-afirmativo, desarrollista y progresista de tales populismos los hizo fuertes en tanto sus líderes sostuvieron su coherencia interna dentro de un cauce que motivaba y mantenía el apoyo popular. Pero que, si debilitado el liderazgo principal, una de las partes de la alianza hace prevalecer sus fines y discurso sobre las expectativas de las demás, tiende desmovilizar al conglomerado, a que otros integrantes lo abandonen. O que de la escisión se pase al enfrentamiento.

¿QUIÉN ES “EL PUEBLO”?

¿De qué se integra dicho “apoyo popular? Interpretarlo exige percibir, en cada sociedad nacional y

modos de lucha, a quiénes consideramos “pueblo”, y lo que en cada circunstancia explica su disposición, solidez y persistencia. Discernir qué participantes sustancian el conglomerado de reclamos y reivindicaciones al se apela como el sujeto político capaz de surtir las fuerzas y las capacidades necesarias y suficientes para cambiar la realidad, que es *su propia* realidad.

Una respuesta de notable alcance concreto, como proyecto por el cual luchar juntos y como llamamiento masivo, fue la que el joven Fidel Castro plasmó en 1953 en *La historia me absolverá*, unos 30 años antes de las primeras publicaciones de Ernesto Laclau.

Esa proclama, más que el alegato del principal acusado ante el tribunal que lo juzgaba tras la derrota del asalto al cuartel Moncada, apuntó hacia el siguiente futuro, al urgir al pueblo cubano —a su vanguardia martiana— a rebelarse contra el odioso estado de cosas. Ahí Fidel reconoce ese complejo sujeto político y lo convoca a protagonizar las siguientes etapas del proceso nacional cubano, y dice:

“Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los seiscientos mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente [...]; a los quinientos mil obreros del campo que habitan en los bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar [...]; a los cuatrocientos mil obreros industriales y braceros [...], cuyas conquistas les están arrebatando, cuyas viviendas son las infernales habitaciones de las cuarterías, cuyos salarios pasan de las manos del patrón a las del garrotero, cuyo futuro es la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba; a los cien mil agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya [...], que no pueden amarla, ni [...] plantar un cedro o un naranjo porque ignoran el día que vendrá [...] la guardia rural a decirles que tienen que irse; a los treinta mil maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor de

las futuras generaciones y que tan mal se les trata y se les paga; a los veinte mil pequeños comerciantes abrumados de deudas, arruinados por la crisis y rematados por una plaga de funcionarios filibusteros y venales; a los diez mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, etcétera, que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida, cerradas todas las puertas, sordas al clamor y a la súplica. ¡Ése es el pueblo, cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas; no le íbamos a decir: “Te vamos a dar”, sino: “¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad!” (Castro)

Probablemente muchos “politólogos” recuerdan ese texto como huella literaria de un fallido intento, sin advertir hasta qué punto su argumentación proyecta un arco que va de aquel populismo —antecesor de posteriores afanes de liberación nacional— al recién pasado y los venideros resurgimientos del progresismo latinoamericano. Con su examen de la complejidad social, de las actuales cerrazones y de sus alternativas, *La historia me absolverá* concreta un abordaje del sujeto político, de su estructuración y de su potencial nacional-afirmativo, descolonizador y revolucionario, que sigue vigente. En medio de las interrogantes y las perspectivas de la actual crisis de la economía, la política y el trabajo, es necesario volverla a discutir, tanto en su contexto originario como en el actual.

CONSIDERACIONES FINALES

Obviamente, lo ocurrido Cuba rebasa el ámbito de la reflexión de Laclau. En la Isla, para garantizar la permanencia de la extrema explotación laboral implantado por las corporaciones estadounidenses y de la oligarquía isleña, dejó de ser suficiente la corrupción mafiosa de la democracia formal. Ante la amenaza del movimiento ciudadano por el adcentamiento del país, para ese

fin se apeló a instaurar en 1952 una dictadura de extrema dureza, con el beneplácito del gobierno norteamericano. La posibilidad de cambiar ese estado de cosas por medios cívicos quedó drásticamente eliminada.

A partir de ese momento el desarrollo de la cultura política de gran parte la sociedad cubana saltó del civilismo democrático a una silenciosa anuencia a la rebelión, lo que la mayoría de los políticos profesionales y dirigentes de la izquierda adscrita a la III Internacional no percibieran.⁵ Pero el asalto al Moncada fue un despertador político masivo. En poco tiempo, la plural alianza social representada por “los muchachos del 26” aceleró la formación política común, tensionada por el esfuerzo colectivo de eliminar la dictadura neocolonial y sus secuelas, con la guerrilla en las montañas y la clandestinidad urbana. Esfuerzo que durante las peripecias de la lucha evoluciona y se recompone, en tanto mantengan sentido y constancia los objetivos compartidos que realimentan su unidad.

El fracaso de la huelga de abril de 1958 —propuesta por el ala urbana más moderada, para deponer la dictadura en compañía de parte de los políticos tradicionales— fortaleció el liderazgo del Comandante en Jefe guerrillero. Y, acto seguido, la derrota de la subsiguiente ofensiva militar de la tiranía contra la Sierra confirmó el protagonismo político del Ejército Rebelde. Al derrumbarse la tiranía, la sagacidad fidelista y el impulso del proceso no solo desintegraron enseguida al ejército oficial y las organizaciones sicarias, sino que asimismo desmantelaron los corruptos órganos del Estado, la

política truhana, la prensa venal y al núcleo de la cultura neocolonial. Mientras quienes se oponían a emprender un proceso revolucionario corrieron a Miami, la naturaleza patriótica y progresista de ese impulso cuajó en el entusiasmo de los sectores populares.

Porque, en sus diferentes tipos y formas, la lucha, si es consecuente, enseña, hermana y decanta.

En el caso cubano, la victoria fue producto de un esfuerzo armado de liberación nacional sostenido por un movimiento de multicolor base social. La indecencia del régimen realzó al factor moral como motivo y aglutinador de la insurgencia. La corrupción del sistema político y la violenta cerrazón de la dictadura eliminaron cualquier otra posibilidad. No obstante, donde no impera un régimen que impide otras opciones, diferentes formas de lucha contracultural, sociomovilizada y política son factibles y productivas. Tanto Getulio y Perón en los años 50, como los líderes progresistas de inicios de este siglo, lo demostraron, y sus sucesores ahora lo revalidan.

Lo que no desdice, sino confirma que, en esos como en los demás países latinoamericanos, es indispensable aliar la coparticipación de diversas fuerzas sociales y modos de lucha para hacer factibles los cambios y el futuro necesarios. Y que ninguna conquista ni etapa agota el proceso, pues cada avance motiva al siguiente. La renovación del impulso realimenta su vitalidad. Como, al contrario, acomodarse al poder como *modus vivendi* y toda pausa que venga de hacer concesiones desmoraliza, desmoviliza y anticipa su desintegración.

⁵Para los jóvenes de entonces —la llamada Generación del Centenario de José Martí— nietos de los mambises que pelearon la guerra de independencia e hijos de la generación que protagonizó la revolución antidictatorial de 1933, la rebelión no era una idea exótica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Attanasio, Angelo (2020): “Mussolini es el arquetipo de líderes populistas como Bolsonaro, Trump y Salvini”, entrevista a Antonio Scurati en *BBC Mundo*, el 4 de septiembre.
- Barrera Moreno, Manuel (2020): “Sector informal de la economía: ¿Nuevo sector social para la reestructuración de Chile?”, en *Alai*, 18 de julio.
- Castro, Fidel: *La historia me absolverá*, en <http://www.radiorebelde.cu/26-julio-rebelde/lahistoriameabsolvera.html>
- Gambina, Julio C. (2020): “Proyecciones preocupantes de la CEPAL”, en *Alai*, 27 de julio.
- López Obrador, Andrés (2020): Discurso al presentar el Segundo Informe de Gobierno, el 1ro. de septiembre.
- Portal 360: *Cursivas de NC*. “Em defesa da vida do povo, mudar o governo!” Brasília, en <https://www.poder360.com.br>.
- Punto Final (2020): “Encrucijada de la Izquierda: ¿otro partido o millones de votos?”, 17 de agosto.
- Yagnova, Simona Violetta (2020): “Los desafíos del mundo del trabajo”, en *Alai*, 24 de julio.

cuadernos de

nuestra américa

NO.1 SEGUNDO SEMESTRE 2020



CIPI

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE POLÍTICA INTERNACIONAL